

Pablo Mamani Ramírez

Microgobiernos barriales

Levantamiento y resistencia de la ciudad de El Alto

(Octubre de 2003 y noviembre de 2019)



Microgobiernos barriales

Levantamiento y resistencia de la ciudad de El Alto

Pablo Mamani Ramírez

Microgobiernos barriales

Levantamiento y resistencia de la ciudad de El Alto

(octubre de 2003 y noviembre de 2019)

Pablo Mamani Ramírez

Microgobiernos barriales.

Levantamiento y resistencia de la ciudad de El Alto

(octubre de 2003 y noviembre de 2019)

Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia)

Av. Hernando Siles 5998, esq. calle 14, Obrajes

Tel: (591 2) 275 0005

<https://bolivia.fes.de/>

La Paz, Bolivia

Coordinación editorial: José Luis Exeni Rodríguez

Edición: Patricia Montes R.

Diagramación: Marco Alberto Guerra Medrano

Apoyo coordinación: Camila Pemintel Cano

Foto portada: José Luis Quintana

© Pablo Mamani Ramírez

© Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia)

Depósito Legal: 4-1-2136-2023

ISBN: 978-9917-625-46-9

Producción: Plural editores

300 ejemplares

La Paz, mayo de 2023

Impreso en el Estado Plurinacional de Bolivia

Las opiniones contenidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Este libro se publica bajo licencia de Creative Commons:

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Esta licencia permite a otros descargar y compartir esta obra con otros siempre y cuando se atribuya la autoría y fuente de manera adecuada. No se permite, sin embargo, cambiar de forma alguna los contenidos ni crear obras derivadas o hacer un uso comercial.



Índice

Presentación	9
Sobre la presente publicación.....	11
A modo de introducción.....	15
Mecanismos de autoorganización	15
Referencia teórico-conceptual	22
Enfoque metodológico	26

PRIMERA PARTE

1. Historia indígena y estructura de organización barrial	31
1.1. Historia de las luchas indígenas	31
1.2. Migración y urbanización.....	35
1.3. El Alto como ciudad	38
1.4. Alteños en las movilizaciones de 2000-2001	40
2. Levantamiento indígena-popular: articulación interbarrial ..	47
2.1. Paro indefinido: 15 y 16 de septiembre	47
2.2. Anulación de los formularios Maya y Paya	49
2.3. Paro indefinido del 8 de octubre.....	52
2.4. Ventilla y represión militar	54
2.5. Militarización de la ciudad de El Alto.....	57
2.6. Articulación interbarrial y masacre del 12 y 13 de octubre	59
2.7. Escena y memoria: Villa Ingenio	65

3.	Los microgobiernos barriales.....	69
3.1.	Organización barrial.....	69
3.2.	Articulación cuasi militar de acciones colectivas: “cuarteles barriales”	73
3.3.	Organización por grupos o estrategias.....	77
3.4.	Especificidad de los microgobiernos barriales.....	82
3.5.	Sentidos de identidad urbana	86
3.6.	La especificidad de los actores.....	88
3.7.	En multitudes: toma directa de las calles y avenidas.....	91
4.	Acción de las organizaciones vecinales y la CSUTCB.....	93
4.1.	La actuación de la FEJUVE y la COR.....	93
4.2.	La participación de Felipe Quispe, el Mallku, y de la CSUTCB.....	99
5.	Poder barrial y caída de Sánchez de Lozada.....	103
5.1.	Miles más llegan del campo.....	103
5.2.	Ingresar al Palacio de Gobierno y la zona sur de La Paz.....	105
5.3.	Se quiebra el gobierno.....	108
5.4.	Júbilo en los barrios y en la Ceja de El Alto	112
5.5.	“Igual El Alto está dispuesto a levantarse”.....	114

SEGUNDA PARTE

6.	Consideraciones metodológicas y técnicas	119
7.	Problemática insoluble y crisis societal. Luchas y memorias de la lucha.....	123
7.1.	Un país irresuelto	123
7.2.	Sociedades neocoloniales y sociedades alternas.....	125
8.	Confusión, resistencia y reunificación. El Alto ante el golpe de Estado blando-duro.....	127
8.1.	Momentos y contexto entre el golpe de Estado y la lucha social	127
8.2.	¿Qué es un golpe de Estado blando-duro?	128
8.3.	Atenta observación y confusión.....	129
8.4.	Entre dos lados y un Nosotros	130
8.5.	¿En las provincias y en el Oriente?	137

9. Masacre, barrios, racismo y subjetividades	143
9.1. Vuelven las muertes: masacre de Senkata	143
9.2. Racismo y mentalidades confusas	150
9.3. El tiempo real y la <i>wiphala</i> en movimiento	153
9.4. Gobiernos barriales	157
9.5. Memorias en voces y subjetividades.....	160
9.6. ¿Un nuevo tiempo?.....	163
9.7. De la confusión a la rearticulación	165
10. Comparación de microgobiernos barriales y sus formas políticas entre 2003 y 2019.....	167
10.1. <i>Wiphalas</i> y el tipo de lucha entre 2003 y 2019	167
10.2. Gobiernos barriales de 2003 y 2019.....	174
10.3. La política y el “Estado”	181
10.4. Similitudes y diferencias en la unidad reconstituida y en el símbolo	189
10.5. 14 de agosto de 2020 y 17 de octubre de 2003	194
Conclusiones.....	201
¿Qué elementos podemos tomar en cuenta para caracterizar a 2003?	201
¿Qué características se puede observar en 2019?.....	206
Bibliografía	209

Presentación

En octubre de 2003, durante la llamada “guerra del gas”, la ciudad de El Alto tuvo centralidad y protagonismo en la movilización social que derivó en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa acción colectiva se produjo a partir de una amplia y compleja densidad organizativa territorial en cada distrito y zona. Es lo que el autor de este libro, Pablo Mamani, denomina “microgobiernos barriales”, articulados desde una identidad aymara y popular.

El estudio sobre la constitución y desempeño de ese conjunto autoconvocado de pequeños gobiernos territoriales en la coyuntura crítica del año 2003 se publicó dos años después. Desde entonces ha sido un libro de referencia en el debate sobre las estrategias de acción colectiva, en especial en lo que Mamani denomina “levantamiento/resistencia indígena y popular de la ciudad de El Alto”. Son estrategias contestatarias que expresan relaciones de conflicto con el Estado y los gobiernos dominantes.

Esa acción colectiva de los microgobiernos barriales tuvo otro momento decisivo en la controvertida coyuntura crítica del año 2019. A diferencia de la movilización alteña de 2003, desarrollada con carácter de levantamiento social (ofensivo) contra la pretensión de venta de gas por Chile –luego asumida como demanda de nacionalización de los hidrocarburos–, en la coyuntura crítica de 2019, tras la renuncia del expresidente Morales, las luchas desde las juntas vecinales alteñas tienen una lógica más bien de resistencia social, en defensa de la *wiphala* y por la autoafirmación de su identidad.

¿Cómo se produjo el renacimiento de los microgobiernos barriales en El Alto en el contexto del gobierno transitorio de Añez y la masacre de Senkata? ¿Con qué características? ¿Qué se mantiene y qué ha cambiado respecto a la crisis de 2003? En esa temporalidad comparativa radica la novedad y la relevancia de este libro, compuesto por tres partes. En la primera se reedita, en una versión revisada, el estudio del año 2003. En la segunda parte, en tanto, se aborda el mismo fenómeno de “autogobierno territorial” y sus formas políticas en otro momento crítico, 16 años después. Y luego se hace un fecundo ejercicio de comparación.

Para la Fundación Friedrich Ebert (FES) es un gusto haber alentado y acompañado este nuevo y robusto trabajo del sociólogo, docente e investigador Pablo Mamani, que ahora presentamos a consideración de las y los lectores. Continuamos así una valiosa colaboración iniciada el año 2020 con la publicación de un libro colectivo coordinado por Mamani: *Wiphalas, luchas y la nueva nación. Relatos, análisis y memorias de octubre-noviembre de 2019 desde El Alto, Cochabamba y Santa Cruz*.

Estamos seguros de que este renovado estudio sobre los rebeldes microgobiernos barriales de El Alto será de ineludible referencia para el análisis y debate en torno a dos momentos críticos, 2003 y 2019, de “la lucha política, social y étnica en Bolivia”. Será fundamental también para la comprensión de la territorialización de la acción colectiva en El Alto, la política de barrios, la disputa de símbolos y el conflicto con el Estado. Y contribuirá sin duda a la reflexión sobre lo que el autor plantea como “gestación de un nuevo sentido y sentimiento de la nación boliviana” desde las luchas indígenas y populares.

Desde la FES, queda en sus manos este nuevo insumo para la necesaria deliberación pública y plural en democracia.

Jan Souverein
Director FES Bolivia

Mayo de 2023

Sobre la presente publicación

Desde su publicación en 2005, la primera parte de este libro, titulada *Microgobiernos barriales. El levantamiento de la ciudad de El Alto* (octubre 2003), ha sido parte del debate y la lectura por diferentes sectores sociales para tratar de entender la dinámica sociopolítica de la ciudad de El Alto. Esta es una ciudad dinámica que hoy cuenta, según nuestras estimaciones, con aproximadamente un millón 200 mil habitantes, aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyectó una población de 1.109.048 habitantes para 2021.

El libro fue reimpresso en Bolivia en 2010 por la editorial La Mirada Salvaje, junto a *El Rugir de las Multitudes* (libro publicado en 2004). También fue parte de una publicación de NoPatria en Chile en 2020.

La presente edición contiene dos partes. En la primera se reedita el texto de 2005 con algunas mejoras y actualizaciones, pero manteniendo su estructura. En la segunda parte, inédita, se aborda el nacimiento de lo que podemos llamar un nuevo espíritu de la nación a partir de la lucha social por el poder político, los símbolos y la masacre de noviembre de 2019, en el contexto de la caída del gobierno de Evo Morales y García Linera, por las violentas movilizaciones de comités cívicos y policías.

En 2019 se produjeron movilizaciones sociales de clases medias y elites bolivianas, dirigidas por los comités cívicos departamentales y, específicamente en Santa Cruz, por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de este departamento. A ello se sumó un motín policial y el pedido del Alto Mando militar para que Evo Morales renunciara a la presidencia del Estado Plurinacional. El gobierno interino de Jeanine Añez cometió una nueva masacre en Senkata, ciudad de El Alto, el 19

de noviembre, y en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre. Toda esta situación de malestar venía arrastrándose desde 2016, cuando el gobierno de Evo Morales no acató el referéndum que él mismo convocó para cambiar la Constitución Política del Estado y permitir la re-reelección presidencial y vicepresidencial.

De modo que esta nueva publicación reúne dos momentos históricos en un solo libro. Creemos que resulta interesante, e incluso provocador en el sentido académico, sostener que 2019 se vincula con 2003, cuando nace un nuevo sentido de pertenencia a la nación desde la propia especificidad histórica del mundo aymaraquechua, que se extiende al resto del país.

Además, en la segunda parte se describe cómo ocurrieron los hechos en 2019 y se compara los gobiernos barriales de 2003 y 2019 en la ciudad de El Alto. En el primer caso, con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, y el segundo, con la caída del gobierno de Evo Morales en 2019.

Así, la ciudad de El Alto confirma su importancia: el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cayó por la lucha de esta ciudad —y por la consistente y clara organización de los cientos de sus barrios—, así como de las provincias de la región andina, constituidas por aymaraquechuas. En 2019 El Alto defendió la *wiphala* (símbolo indígena y aymara quemado el 10 de noviembre en Cochabamba y en La Paz por el movimiento cívico opositor al gobierno del MAS) y rechazó el derrocamiento de Morales. Son dos momentos importantes para entender a los gobiernos barriales y compararlos en sus similares acciones colectivas-individuales y en sus diferencias con 16 años de distancia.

El Alto es una ciudad de fuerte identidad política y cultural aymara y popular. Este hecho la ha convertido, tanto en 2003 como en 2019, en epicentro de importantes acciones colectivas-individuales. Al primero (2003) lo hemos llamado levantamiento social y al segundo (2019), resistencia ante el golpe de Estado blando-duro del movimiento cívico y de la oligarquía boliviana.

En ambos momentos, según esta tesis, se ha fundado técnica y políticamente la estructura territorial de las juntas vecinales, su sistema de autoridades vecinales y sus interrelaciones con el mundo rural circundante. Son estrategias de visibilización e invisibilización para hacer frente al gobierno de turno en 2003 y para defender la *wiphala* en 2019.

El Alto se funda gracias a su pujante actividad económica y a sus densas relaciones sociales. Se mueve en base a un complejo sistema de comercio interciudad y a su interrelación con las áreas rurales de La Paz,

Oruro y Potosí y con la Amazonía de Beni y Pando, e internacionalmente, con Perú y Chile. Como la segunda ciudad más poblada del país (por detrás de Santa Cruz de la Sierra) y por tener una expansión territorial muy acelerada (tal como su crecimiento demográfico), es un referente de las nuevas dinámicas sociales y económicas de Bolivia. Su población está constituida por quienes migraron a ella, por quienes nacieron allí y por quienes la han construido y continúan haciéndolo.

En este contexto se generaron entre 2003 y 2019 los mencionados microgobiernos barriales como verdaderos sistemas de autogobierno territorial, compuestos por una población históricamente rebelde en abierta y firme disputa con el Estado, al que se describe (con fundamentos) como racista, colonial y oligárquico. Esto último, particularmente en 2003 y luego en 2019.

Evo Morales y García Linera, pese a ser El Alto el bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS), dejaron a esta ciudad casi en el abandono. Esto llama la atención, pues junto con el Chapare y los sectores periurbanos de la ciudad de Cochabamba, salieron a defender su gobierno y lo indígena-popular frente a la violenta arremetida de los viejos grupos de poder. La novedad es que, debido a este hecho, nació este nuevo espíritu de la nación boliviana bajo otros horizontes y sentidos de lo social. El país clandestino aquí se hace visible social e históricamente, pero hecho multitud. Existen otros sentidos de la historia y del poder, hay antagonismos frente la clásica idea de la nación boliviana como república. En esa nueva realidad, al parecer, los viejos marcos de interpretación de la nación ya no son útiles. Se requiere otros marcos de análisis e interpretación de la historia contemporánea de Bolivia.

Esperamos que esta nueva edición ampliada de *Microgobiernos barriales* continúe siendo parte del debate social y académico, y que nos ayude a entender las complejas y conflictivas dinámicas sociopolíticas de El Alto y de la Bolivia del siglo XXI.

Pablo Mamani Ramírez

El Alto, marzo de 2023



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

A modo de introducción

*Vámonos, tía; vámonos, tío. Vámonos al campo, abí haremos
nuestra ciudad, empecemos desde cero, haremos nuestro país
con nuestro pueblo, nadie nos molestará... porque abí está
nuestra gente aplaudiendo nuestra lucha y dándonos la mano.
Esperándonos con p'isqi, con chuiño y charke en su atado.*

*Que lloran nuestros muertos junto con nosotros, que aplauden
nuestra historia, que nos recuerdan, que nos valoran. Haremos
nuestro propio país, tía, tío, porque éste ya no es nuestro lugar
tío, tía, y al mismo tiempo es más nuestro todavía. Pero no nos
quieren, nos quieren muertos, tío, tía... ¡no tía, no corras, no
vayas, tía, no vayas, tío!*

¡No merecen tus ruegos, tía! ¡No merecen ni tu cansancio, tío!

*¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tía! ¡Héroes de Senkata, de Sacaba,
compañeros de Yapacaní, de Montero... hermanos, hermanas:
no los merecen!... Pero a pesar de eso, sé que seguirán luchando,
porque son fuertes.*

¡Este país es muy pequeño para gente tan grande!

Reyna Suñagua, “Senkata, no te merecen”,
en Macusaya y otros, 2009.

Mecanismos de autoorganización

En el año 2000 surge en Bolivia un aglutinado (pero, al mismo tiempo, fragmentado) conjunto de movimientos sociales indígenas (o indios) definidos desde lo local y lo regional. Desde esa condición geográfica y

social, estos movimientos han configurado nuevas relaciones de poder. Se han convertido en referentes directos y en detonantes para el cuestionamiento del modelo neoliberal.

Paralelamente, se ha desatado en el país un panorama complejo de conflictos étnicos y sociales entre los grupos de poder blanco-mestizo y los pueblos indígenas de autorreferencia propia. Estas pugnas se definen tanto a nivel de las relaciones sociales cotidianas como en los momentos extraordinarios surgidos por levantamientos y movilizaciones sociales. La manifestación clara de esto son las relaciones conflictivas que se presentan entre Estado o gobierno-élites locales y regionales y los aymaraquechuas, guaraníes y mojeños. Denominaremos a este fenómeno la territorialización del conflicto Estado-indígenas en distintos espacios geográficos de Bolivia (Mamani Ramírez, 2004b).

Los diferentes espacios sociales y territoriales se han convertido en espacios-territorios endebles y frágiles para la legitimidad y autoridad del Estado y sus funcionarios. Son constantes los actos contestatarios desde lo local y regional a las lógicas del Estado o gobierno republicano. Prevalecen formas de organización social y territorial (como el *ayni*, los turnos y la relación cara a cara para el ejercicio del poder) como elementos ordenadores de la sociedad. Al mismo tiempo, sin embargo, los aymaraquechuas o indígenas que habitan esos territorios sufren diferentes procesos de violencia, ya que han aumentado las acciones agresivas y abusivas contra ellos por parte de las elites locales terratenientes y los funcionarios gubernamentales (policías y militares).

Hay varios ejemplos de las acciones contestatarias mencionadas, como el serio cuestionamiento (e incluso destrucción o, en su caso, cerco) de los indígenas o “campesinos” a los espacios físicos del poder del Estado, como las subprefecturas, las alcaldías y los comandos policiales. Este fenómeno se ha manifestado radicalmente en Achakachi, Sorata, Chapare y Kurawara de Karangas, entre otros lugares. En el segundo caso, se intensifican variadas acciones de parte de las mencionadas elites locales y regionales contra los indígenas, a quienes consideran como los “bloqueadores del país” y representantes del atraso.

Lo ocurrido entre el 8 y el 17 de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto y en las laderas de La Paz es parte de este proceso de territorialización del conflicto étnico entre elites económicas y políticas y las poblaciones indígenas urbanas y rurales de Bolivia. Para mayor precisión, se puede sostener que durante los trágicos días del conflicto o del levantamiento general de la ciudad de El Alto y el Altiplano-valle de La Paz,

se tejieron profundas fronteras étnicas entre los barrios alteños-áreas rurales y las poblaciones de la zona sur de La Paz, a las que los aymaras llaman *q'aras*. En ese contexto, las relaciones de conflicto étnico y social han recrudecido profundamente.

En este marco, se plantea como objetivo de estudio la constitución de los microgobiernos barriales en dos casos de levantamiento/resistencia indígena y popular de la ciudad de El Alto. Esto es importante porque se ha articulado un conjunto complejo y unificado de pequeños gobiernos territoriales en cada distrito y zona (o barrio) para movilizar estrategias de acción colectiva e identidades urbanas aymaras y populares con las que se ingresa en abiertas relaciones de conflicto con el Estado o el gobierno y con los grupos dominantes blanco-mestizos de Bolivia. Para entender con mayor detalle esta situación, es importante adentrarse en la historia y en la actualidad de El Alto.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE, 2002) el 81,29 por ciento la población alteña se identifica como indígena. De este porcentaje, el 74 por ciento se considera aymara, como reflejo de su propia historia e identidad. Esta última referencia, la identidad, es parte de la historia de la lucha social y política de los pueblos indígenas en Bolivia: primero durante la Colonia y después en la República. En 1781 Tupak Katari y Bartolina Sisa habían construido los “cuarteles indígenas” donde actualmente está la ciudad de El Alto, para cercar La Paz (Del Valle de Siles, 1990). En 1899, en la llamada Guerra Federal, El Alto se convirtió en el referente de una “muralla humana” para cerrar el paso a las tropas constitucionalistas de Fernández Alonso (Condarco, 1982). Finalmente, en la Revolución Nacional de 1952 nuevamente El Alto fue un escenario político en el que se consolidó la revolución (Fernández, 1993). En resumen, hay una larga memoria histórica de luchas sociales indígenas (o aymaras) en la actual ciudad de El Alto.

Por otra parte, El Alto es uno de los centros urbanos más poblados del país. En 2002 tenía 649.958 habitantes (INE, 2002), lo que corresponde al 28 por ciento del total de la población del departamento de La Paz. Se podría suponer que el número de alteños es mucho mayor porque el día del Censo varias familias viajaron a sus comunidades y ayllus para registrarse allí.

Es la población de El Alto la que sufre pobreza, un problema estructural en Bolivia. La pobreza urbana en el departamento de La Paz afecta al 50,9 por ciento de los habitantes, y un gran porcentaje de esta pobreza se concentra en El Alto, por ser una ciudad de reciente creación. Las

necesidades básicas, como el acceso al agua¹, a la salud, la educación, la vivienda, la electricidad y otras, no son satisfechas en esta ciudad. Pese a este hecho, la ciudad de El Alto es parte de un espacio rico en experiencias de organización social, que de uno u otro modo se han convertido en factores determinantes en las relaciones sociales a nivel de la vida urbana cotidiana y en momentos extraordinarios. Estas experiencias se materializan en organizaciones como las juntas vecinales, los gremios, asociaciones de pequeñas empresas, grupos deportivos, culturales, etcétera.

Nuestro objeto de estudio son las formas de organización barrial o las estructuras de organización barrial convertidas en microgobiernos locales que se manifiestan en las juntas vecinales (aproximadamente 500 para 2003, con nueve distritos municipales²).

El Alto es un espacio-urbano complejo y a la vez dinámico, por su larga relación con la historia de luchas sociales y el manejo de sus espacios territoriales (como se dijo arriba). La ciudad está organizada entre el norte y el sur, que es una relación territorial como *aran-urin* (en aymara: arriba-abajo) que se aplica en los ayllus (sistema de organización antiquísima del mundo andino). Es una relación de complementariedad y de rivalidad de opuestos.

Para mostrar tal relevancia, referida a la constitución de microgobiernos barriales, el presente trabajo plantea que este fenómeno se define en un amplio proceso de producción de la vida social urbana indígena-popular que tiene relación con las propias estructuras internas de organización zonal, las experiencias de vida cotidiana y los sistemas de interrelacionamiento interbarrial. Así, los microgobiernos se construyen en un largo proceso de interrelación interna (dentro de la ciudad) y de relaciones externas (con las provincias), de donde provienen mayoritariamente los alteños. Se ha tejido un conjunto de actos, identidades, estrategias y sentidos en el manejo y uso del espacio social urbano y su relación con las áreas rurales (similares o moldeadas a las comunidades y ayllus del mundo andino). De este modo, la ciudad de El Alto es producto de una esforzada construcción social e histórica de un grupo de hombres y mujeres que han tejido complejas relaciones interfamiliares, regionales, colectivas, de trabajo y organizativas, definidas además por la ya mencionada carencia de servicios.

1 El 13 de enero de 2005, por el sensible tema del no acceso al agua, se expulsó al consorcio internacional Aguas del Illimani luego de una nueva y radical movilización que precedió a un paro indefinido declarado por la FEJUVE de El Alto.

2 Para 2019 existen aproximadamente 1.200 juntas vecinales y 14 distritos.

En base a este fundamento, se produjeron interarticulaciones socio-políticas, definidas aquí como los microgobiernos barriales, distribuidos en la densa geografía urbana de la ciudad. Los microgobiernos barriales se convierten en espacios del poder político porque en ellos se articulan multitudes movilizadas que activan los recursos de organización territorial y cultural, radicalmente puestos en práctica en las barricadas. En 2003, miles de mujeres y hombres formaron en pocos días comunidades emotivas y estratégicas, en principio, para exigir la anulación de los formularios Maya y Paya (Uno y Dos en aymara, propuestos por el alcalde José Luis Paredes, exmilitante del MIR, para el reordenamiento de los datos municipales), y después, para pedir que no se exportara el gas boliviano por puertos chilenos hacia México y Estados Unidos. Este proceso terminó con la exigencia de renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, antecedida por una brutal represión militar los días 12 y 13 de octubre³.

El levantamiento se inició el día miércoles 8 de octubre⁴. Al paro indefinido, que exigía la no venta de gas por Chile, se suma posteriormente el pedido de la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la oposición al ingreso de Bolivia al ALCA (tratado comercial con Estados Unidos). Estas demandas derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de la nacionalización de los hidrocarburos.

Es importante hacer notar que el levantamiento social, indígena o aymara y popular de octubre se movió en un amplio contexto sociogeográfico, ya que en el Altiplano-valles del norte de La Paz se mantuvieron durante un mes los bloqueos carreteros, que terminaron con la masacre de Warisata-Sorata. La movilización de la ciudad de El Alto fue parte (y catalizador) del levantamiento general de la región del Altiplano-valles del norte de La Paz, que tuvo un efecto “territorializante” del conflicto en otros departamentos del país. Así, las relaciones cotidianas, barriales y rurales se convirtieron en centros de poder del levantamiento indígena urbano-rural, mediados por la capacidad de generación de micropoderes difusos, cuasi microbianos e intermitentes de movilización social. Muestra de ello son las marchas, los bloqueos, la toma pacífica de las avenidas y plazas y el posterior enfrentamiento con las fuerzas del Estado o el gobierno.

3 Este fenómeno se volvió a observar en 2019, aunque con algunas variantes importantes, como veremos en la segunda parte de este libro.

4 El punto principal, en principio, son los formularios Maya y Paya y el paro de 24 horas del día 2 de octubre de 2003 en protesta por la masacre de Warisata (occurrida el 20 de septiembre en la región de Omasuyus).

Con estos antecedentes, es importante dar una mirada específica a las estructuras cotidianas de la vida social y a sus interrelaciones con los momentos políticos extraordinarios. En efecto, en octubre de 2003 estas prácticas habituales se convirtieron en estructuras de acción colectiva-individual con gran capacidad para colapsar dos ciudades y derribar a un gobierno que se hacía cada día más autoritario. Fueron fundamentales el rol y la función que cumplieron las organizaciones barriales, las juntas de vecinos, los grupos de vigilia, gremialistas, estudiantes universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), trabajadores fabriles y profesionales. Así, mediante estas relaciones interinstitucionales e interbarriales se logró establecer un poder alterno al constituido.

El gobierno y el propio Estado desaparecieron de la ciudad de El Alto durante los días del levantamiento social. En respuesta, se levantaron símbolos subalternos, como la *wiphala* (aunque en poca cantidad), el orgullo de saber hablar aymara y las prácticas de la religiosidad andina, además de una densa distribución de parentescos definidos bajo las lógicas de acción de los ayllus y las comunidades rurales. Cada uno de estos elementos se transformó en fuerza de acción colectiva para tomar la ciudad y construir cientos de barricadas que terminaron reforzando los sentidos de identidad indígena urbana y solidaridad rural-urbana. Este fue un hecho inédito en la historia de la joven ciudad de El Alto. Por primera vez en los 40 años que llevaba su proceso de urbanización, El Alto y sus habitantes se convirtieron de pronto en un poder multitudinario, alterno al gobierno y al Estado.

La gestación de mecanismos de autoorganización territorial barrial amenazó seriamente con la toma física y política de los espacios de reproducción de los administradores del poder del Estado: la zona sur de La Paz y el Palacio de Gobierno. De este modo se empezó a tejer una nueva configuración sociopolítica –desde sentidos de identidad indígena urbana y aymaraquechua– fundada en las organizaciones barriales o en lo que acá llamamos microgobiernos barriales. Un sentimiento de autoafirmación propia sobre la construcción urbana indígena de la ciudad recorrió barrio por barrio, zona por zona y distrito por distrito⁵. Por eso, después de las masacres del domingo 12 y lunes 13, con más de 60 muertos, El Alto se moviliza de manera gigantesca hacia La Paz, ya que

5 El Alto es una ciudad construida por sus vecinos. Aportaron (y aportan) mano de obra y capital económico para la edificación de sus calles, avenidas, mercados, canchas de fútbol, etc.

se había hecho intolerable la presencia de las fuerzas militares en los espacios construidos por los propios vecinos: calles, plazas y avenidas.

Para entender mejor el tema es importante preguntarse: ¿qué son los microgobiernos barriales y cómo se construyen? ¿Cómo se articulan las organizaciones barriales para constituirse en microgobiernos? ¿Qué tipo de estrategias se tejen y cómo se construyen las barricadas? ¿De qué manera las identidades indígenas urbanas, aymaras o populares se convierten en factores de movilización social (o en lo que la teoría de los movimientos sociales llama procesos enmarcadores)?

La hipótesis que plantea este trabajo es que los microgobiernos barriales fueron el factor y sostén del levantamiento de la ciudad de El Alto, desatando profundos sentidos de organización interbarrial para dar pie a una autoafirmación de identidad urbana aymara o indígena en tanto fuerza de articulación de las estrategias de acción colectiva. Estos microgobiernos barriales, a su vez, se han convertido en espacios de deliberación, de decisiones colectivas y profundización de sentidos de las identidades interbarriales indígena-populares capaces de paralizar la ciudad con barricadas. El control de cada uno de los espacios-territorios terminó con la territorialización del conflicto Estado-indígenas en El Alto y en el Altiplano y los valles del departamento de La Paz.

En este sentido, acotamos los objetivos de la investigación a estudiar: la constitución y articulación territorial de los microgobiernos barriales en el levantamiento de la ciudad de El Alto en octubre de 2003 y el análisis de las formas de organización colectiva y su articulación interbarrial como uno de los momentos fundamentales para la movilización social. Al mismo tiempo, el trabajo se ha planteado como objetivo el estudio de las estrategias de acción colectivas, mecanismo que ha podido inmovilizar la ciudad de El Alto, lo que termina influyendo directamente sobre la ciudad de La Paz y el resto del país. Se han estudiado los sentidos de identidad o procesos enmarcadores o identitarios de lo urbano-indígena como referentes de actuación colectiva (de un Nosotros) con la escenificación de símbolos como la *wiphala* y las autoafirmaciones propias de los indígenas, así como el hecho de provenir de las provincias.

Previamente, es importante responder al problema de cómo definir estas estructuras de acción colectiva y los sentidos que han producido. Y bajo qué enfoque analítico o teórico es posible interpretar este fenómeno. Entendemos la teoría como factor de clarificación de las acciones colectivas-individuales (o instrumentos de análisis), para luego describir el curso de los hechos colectivos y las acciones del Estado

boliviano. Y luego a la inversa: las acciones colectivas son pensadas como procesos de construcción de los conocimientos teóricos, a la vez que prácticas concretas.

Referencia teórico-conceptual

El estudio de los movimientos sociales tiene un recorrido interesante en Europa o Estados Unidos, que aquí leemos desde nuestro lugar histórico y según nuestro contexto. Es decir, enmarcamos el significado de los conceptos en nuestra realidad para, de ese modo, hacer un ejercicio crítico de la teoría.

En un primer momento, los movimientos sociales se analizaron desde la perspectiva de la psicología de masas. Esta, al carecer de elementos de acción consciente, fue sustituida por un abordaje desde el enfoque de la movilización de recursos. Finalmente, y a la par de este último, se desarrolla el análisis de las identidades o procesos enmarcadores (McAdam y otros, 1999), dado que en ello se crean sentidos y significados de la lucha o del levantamiento social.

Aquí, el levantamiento de la ciudad de El Alto como un movimiento social es abordado desde la perspectiva del paradigma de las identidades (culturales) y de las estrategias o los recursos. Este abordaje del problema tiene el siguiente sustento: no se pueden obviar los elementos culturales identitarios, dado que ellos dan sentido a las acciones colectivas de los movimientos sociales, además de un amplio margen de imágenes y sentidos de acción social. Tampoco es posible dejar de analizar la movilización de recursos como estrategias de movilización, de objetivos y de medios que la gente mide y hace. Desde esta perspectiva, planteamos que los movimientos sociales indígenas se dan en Bolivia: i) desde su constitución interna y ii) por los factores externos. El primer punto se refiere a que los movimientos indígenas se fundamentan en las propias estructuras de organización social, liderazgos, estrategias de acción colectivas y sentidos de identidad “propios”, que hacen que el movimiento social tenga fuerza, legitimidad y capacidad para construir objetivos comunes. Es lo que llamamos “fuerzas internas”, que se manifiestan en los tejidos sociales, culturales e identitarios o étnicos dentro de un contexto de factores externos, o lo que Sidney Tarrow (1994) llama “la creación de oportunidades políticas”.

Se entiende que el conflicto se puede manifestar dentro de las élites dominantes o de un gobierno mediante las divisiones de los partidos

políticos gobernantes, tal como se produjo en octubre de 2003. Este es el contexto externo que rodea a los movimientos sociales, que de una u otra manera favorecen e incentivan la articulación de acciones colectivas internas. En Bolivia estos factores están dados en la reforma estructural neoliberal, en los grados de corrupción y de discriminación étnica hacia el mundo indígena y los sectores populares.

Efectivamente, esto es lo que ocurrió en El Alto. En octubre, diversos barrios y gremios de trabajadores reprodujeron profusas relaciones de parentesco y relaciones interbarriales (sentidos de pertenencia dentro de la ciudad, los microgobiernos barriales). Se movieron las estructuras internas de forma autónoma para ampliar y legitimar las acciones colectivas urbanas y rurales. Y, por otro lado, se crearon oportunidades políticas favorables que incentivaron la movilización social porque, para la población, el gobierno de entonces había decidido exportar el gas por puertos chilenos. Otro hecho importante fue el pedido de modificación de la Ley de Hidrocarburos y, finalmente, la renuncia del presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre cometida el 12 y 13 de octubre, que además produce fracturas en su coalición y materializa las oportunidades de acción colectiva.

Es en este marco en el que hay que poner atención a lo que plantea Alberto Melucci respecto a los movimientos sociales. Desde la teoría de la acción colectiva, este autor plantea que los movimientos sociales están atravesados por significados e identidades. Afirma que las teorías cognoscitivas y constructivistas “de la acción humana nos ayudan a considerar los fenómenos colectivos como procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones” (Melucci, 1994: 156). Aquí las acciones colectivas en los movimientos sociales vienen cargadas de profundos sentidos o significados. Sin ese elemento, la acción social carecería de sentido.

La identidad es un factor aglutinador de la movilización porque en ella el actor elabora “expectativas, posibilidades y los límites de su acción. La identidad implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. Este proceso de ‘construcción’ de un sistema de acción lo llamo *identidad colectiva*” (Melucci, 1994: 172). Esto quiere decir que la identidad da sentido y cuerpo a los movimientos sociales o, más propiamente, a los movimientos indígenas, porque permite a los actores definirse a sí mismos, diferenciarse e identificar a los otros grupos para, sobre esa base, plantear y legitimar las demandas sociales.

Para reforzar esta perspectiva, los estudios de América Latina sobre los movimientos sociales –como el de Arturo Escobar y otros

(2001)– tienen su propio aporte. Se definen desde la especificidad de los estudios culturales y desde lo político. Al hacer dichos autores un balance de los aportes de los movimientos sociales en América Latina, lo primero que notan es que lo cultural atraviesa y fortalece los movimientos sociales. Esto porque los miembros de los movimientos sociales, en cuanto actores culturales y políticos, se unifican y mueven sus estructuras identitarias. Este hecho se ha podido observar en los actos de simbolización en la ciudad de El Alto cuando se expuso la *wiphala* indígena, el sombrero, la pollera y los *awayus* multicolores como parte de esta referencia identitaria.

Para estos autores, “la cultura involucra un proceso colectivo e incesante de producción de significados que moldea la experiencia social y configura las relaciones sociales” (Escobar y otros, 2001: 19). Se desata una lucha por definir sentidos de identidad, porque “a menudo [hay] luchas dispersas por significados y representaciones” (*op. cit.*: 23) [el resaltado es nuestro]. Es un referente importante, junto a la movilización de recursos de acción, discurso, estrategias y tácticas. Por lo tanto, la cultura es un medio para que el observador externo comprenda a los actores y para que los propios actores se comprendan a sí mismos, aunque no siempre estén conscientes de su lucha cultural.

Al establecerse estos sentidos de identidad, los movimientos sociales construyen, tejen redes y relaciones interpersonales: “las prácticas culturales y las redes interpersonales de la vida cotidiana mantienen a los movimientos sociales a lo largo de las idas y venidas de la movilización e infunden nuevos significados culturales a las prácticas políticas y a la acción colectiva” (Escobar y otros, 2001: 36). Es decir que en los movimientos sociales la identidad desde lo cultural es parte fundamental de su articulación sociológica y política. Las acciones de movilización de recursos, junto a las de las identidades, tienen de este modo su propio espacio de teorización en los movimientos sociales. Esto, porque las identidades crean sentidos de acción y estrategias: las identidades, al mismo tiempo que se nutren como elementos identitarios, producen los recursos instrumentales o acciones estratégicas. Para Sidney Tarrow (1994), Charles Tilly (1997, 2000) y Marc Steinberg (1999), los movimientos sociales tienen fuerza en la medida en que movilizan los recursos discursivos e instrumentales. Lo que supone que todo movimiento se mueve en base a ciertos recursos definidos o, como hacen notar los autores, que los actores del movimiento deben tener ciertas habilidades de saber/hacer; es decir, de movilizar los repertorios discursivos e instrumentales, producto de una acumulación colectiva. Aquí en El Alto hay experiencia y

memoria de acciones colectivas ejercitadas con anterioridad. A esto se le denomina repertorios de acción colectiva.

Para Tarrow, un repertorio, al mismo tiempo que un concepto estructural, es un concepto cultural. “Las ‘acciones establecidas’ de Tilly no son solo lo que hace la gente cuando entra en conflicto con otros; es lo que *sabe hacer* y lo que los otros esperan que haga” (Tarrow, 1994: 66). Aquí los repertorios no son simples medios, sino también sentidos. Pero, ante todo, los repertorios son “un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado” (Tilly, citado en Auyero, 2003: 45).

En esa relación de conflicto mediado por la movilización de estrategias e identidades se produce lo que Marc Steinberg denomina demandas sociales. Los grupos confrontados producen demandas (Steinberg 1999: 202). Así, en la confrontación –o en lo que Tilly llama acciones contenciosas (Tilly 2000)– se producen los repertorios y los sentidos de acción colectiva. Los movimientos sociales y sus actores producen discursos, estrategias, identidades y símbolos como fuentes de acción colectiva, y a la inversa, las acciones colectivas producen también estrategias, sentidos de identidad y discursos. Sin la producción de estos significados y acciones no podemos entender el levantamiento indígena urbano-rural de la ciudad de El Alto en Bolivia porque aquellos son fuente de las acciones colectivas.

¿Y qué son las acciones colectivas? El estudioso de las acciones colectivas desde la historia de los movimientos sociales es Charles Tilly. Según Tilly, las acciones colectivas son episodios en los que no todos los días un conjunto de actores actúan de igual manera. “En este sentido acotado, la acción colectiva se parece a lo que otros analistas llaman protesta, rebelión o disturbio. Difiere de otras acciones colectivas en que es discontinua y contenciosa: no está construida sobre rutinas diarias” (Tilly, 2000:10). Esto es lo que se da en escenarios extraordinarios de la sociedad. Por ello las acciones colectivas son el tramado de hechos y prácticas de confrontación o contienda, como han sido los bloqueos de las avenidas y calles, la toma de plazas, la construcción de barricadas y los enfrentamientos con las fuerzas del Estado o el gobierno. No son un hecho rutinario o cotidiano, sino que pertenecen a los momentos extraordinarios de la vida social. Pero, desde nuestro punto de reflexión, también tienen mucho que ver con, o se fundamentan en, las prácticas cotidianas de la vida social. Por ejemplo, las interrelaciones sociales y los sistemas de organización de la vida cotidiana en barrios también han dado pie a lo extraordinario.

Los microgobiernos barriales distribuidos en la extensa geografía urbana de El Alto son producto de estas relaciones contenciosas y de una acción colectiva beligerante. Esta articulación como microgobiernos barriales se entiende como pequeños gobiernos territoriales desparramados en la ciudad que de pronto se convierten en el centro de las discusiones y decisiones colectivas, tanto para bloquear las calles y avenidas como para intensificar y legitimar el levantamiento de la ciudad. Desde este lugar social se han decidido las vigiliadas durante las noches y los turnos para marchar a la Ceja de El Alto o bajar a la hoyada de La Paz; además, en algunos casos se encargaron de la alimentación, del entierro de los fallecidos, del cuidado de heridos y del control de la gente que llega al barrio.

Es propiamente un espacio de (auto)gobierno porque toda acción pasa por la decisión colectiva de los barrios, compuestos por vecinos que son también trabajadores, estudiantes, comerciantes, profesionales, etc. Por este hecho, se rearticulan sentidos de organización barrial colectiva mediada por las relaciones cara a cara, que se mantienen con mucha fuerza dentro de los barrios porque sus miembros (en cuanto ciudadanos de barrio) están obligados a prestar servicios (tales como asumir cargos en la junta de vecinos).

De esta manera, en el levantamiento indígena-popular urbano de la ciudad de El Alto hay un profuso sentido de producción de repertorios y estrategias de acción colectiva para generar los microgobiernos barriales. Podríamos decir, recurriendo a Marc W. Steinberg (1999: 229), que durante los días de confrontación se produce el “rugir de la multitud” que traspasa fácilmente las fronteras del poder y recrea las identidades culturales indígenas y populares. Hay un bullicio ensordecedor de la multitud que termina con el derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Enfoque metodológico

El tema de los microgobiernos barriales en el levantamiento de la ciudad de El Alto se ha abordado desde la perspectiva metodológica cualitativa. Se han aplicado las técnicas de historia oral definidas en los testimonios recopilados por el Taller Vertical A de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), entre mayo y noviembre de 2004, en la ciudad de El Alto.

El estudio se ha realizado en tres grandes sectores de la ciudad: i) el sector de Senkata y Santiago II y su área de influencia, porque aquí se

inician las violentas represiones militares y policiales y las articulaciones interbarriales; ii) el Cruce Villa Adela y el sector de Radio San Gabriel, por ser el centro entre la zona norte y sur de El Alto y porque aquí los *mallkus* y *jilaqatas* (liderados por Felipe Quispe, de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB) llevaron adelante su emblemática huelga de hambre; y, iii) Río Seco y Villa Ingenio, por ser las zonas más castigadas por la represión militar y porque sus microgobiernos barriales presentaron profundas articulaciones. Para dicha recopilación de información se han diseñado diferentes guías de entrevistas: para los exdirigentes, para las vecinas y vecinos y para los familiares de los heridos o fallecidos. Estas entrevistas, transcritas en su totalidad, son la base documental del trabajo.

En una segunda etapa se ha acudido al método de seminarios-memoria, como una forma de testimonio oral, con la exposición libre y voluntaria de los actores (autoridades vecinales o presidentes de las juntas vecinales y vecinos de base) ante un conjunto de personas, en un auditorio previamente preparado. Su gran importancia consiste en que amplió la información previamente obtenida, además de que se precisaron muchos otros detalles. Las experiencias de lucha y organización fueron ampliamente expuestas y discutidas en este espacio, como una forma de corroborar lo recopilado en las entrevistas; al mismo tiempo, constituyeron nuevas fuentes de información.

Ambos procedimientos se acompañaron con la revisión de algunos periódicos –como *El Alteoño*, *La Prensa*, *La Razón* y *El Diario*–, para contextualizar los días y los actos del gobierno y de los militares, aunque en los medios de prensa escrita no se hizo referencia específica a la organización de los barrios anteriormente nombrada. Estos medios han tratado el conjunto de los acontecimientos como episodios dramáticos, por lo que se dio la necesidad de (auto)reconstruir los hechos ocurridos y las formas de organización interbarrial; de ahí su importancia. También se recogió información grabada por ciertas radioemisoras, algunas clandestinas y otras legales, que durante aquellos días trasmitían de forma continuada sin parcializarse con el gobierno, como lo hicieron otros medios, particularmente algunos canales de televisión.

Luego se hizo una revisión crítica de la información acopiada para construir el soporte del trabajo. Es el referente concreto del trabajo de campo, que al final se ha convertido en el fundamento del análisis y descripción que se ofrece. Este trabajo de campo ha sido llevado adelante por sectores como Senkata-Santiago II, Cruce Villa Adela y Río Seco-Villa Ingenio, como se señaló anteriormente. Trabajar esta información por

sectores nos ha permitido tener presentes las particularidades de cada uno, para luego reunirlos en una sola unidad. La finalidad es diferenciar y/o, al mismo tiempo, encontrar similitudes en la constitución de los microgobiernos barriales y las estrategias de acción colectiva. Finalmente, se ha acudido a la propia observación y participación del responsable de esta investigación y de los estudiantes del Taller Vertical A de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), gestión 2004. Varios estudiantes del curso, como actores y observadores del levantamiento, han escrito sus propios testimonios. El hecho tiene mucha importancia debido a que muchos estudiantes viven en El Alto y han observado o participado del levantamiento. Y para 2019 volvimos a observar estos lugares desde dentro, para comparar o ver detalles novedosos.

PRIMERA PARTE



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

Historia indígena y estructura de organización barrial

1.1. Historia de las luchas indígenas

El actual espacio social y territorial de la ciudad de El Alto es parte importante de la historia de las luchas indígenas en Bolivia. Tiene una ubicación geoestratégica porque es una especie de puerta de entrada (o salida) hacia el Altiplano norte y el Altiplano sur. Desde El Alto se va hacia a los Yungas y a la región tropical de La Paz tropical, y hasta Beni y Pando. Está sobre una elevación de 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En 1781 Julián Apaza Nina, más conocido como Tupak Katari (águila y serpiente luminosa), su esposa Bartolina Sisa, su hermana Gregoria Apaza, un conjunto de *jilaqatas* (autoridades político-territoriales de los ayllus) y una gran cantidad de comunidades y ayllus provenientes de las regiones o *suyus* de Omasuyu, Pacajaqi y Los Yungas, habían convertido a El Alto en un territorio levantado contra la administración española. Esta movilización fue parte de un gigantesco levantamiento indígena en la región andina (actual Bolivia y Perú), con vinculaciones con Tomás Katari (y sus hermanos Nicolás y Dámaso) en Chayanta (Norte de Potosí) y José Gabriel Condorkanki, más conocido como Tupak Amaru II, en el actual Perú.

En 1780 Tomás Katari, *kuraka* (autoridad política y territorial) de los ayllus de Chayanta), inicia este levantamiento general indígena. Viaja al Virreinato de Buenos Aires en 1779 a plantear el reconocimiento de su autoridad como *kuraka* originario y a exigir que no se incrementaran los impuestos que recaudaban los españoles. Ante la imposibilidad de conseguir

sus demandas por la vía jurídica, inicia el levantamiento con la muerte del corregidor de Chayanta, Joaquín Alos (Robins, 1998). En el actual Perú, pocos meses después de este hecho, se produce un levantamiento similar liderado por José Gabriel Condorkanki (cacique de Tungasuka), con la muerte del corregidor Antonio de Arriaga. Aunque algunos estudiosos de estos levantamientos sostienen que no hubo una coordinación previa, queda claro que hay un nuevo ambiente de lucha indígena en toda la región andina. Por eso se habla de un levantamiento panandino.

A un año de estos acontecimientos, en el territorio aymara de La Paz, Tupak Katari inicia su propio levantamiento. Desde los primeros días de febrero de 1781 se denuncian acciones sospechosas en la región de Ayo Ayo (lugar de nacimiento de Julián Apaza). Pocos meses después, el levantamiento se expande territorialmente hacia uno de los centros de la administración española: La Paz. Exactamente el 13 de marzo de este año se producen las primeras escaramuzas en la Ceja de El Alto –lugar que Katari llamó “el alto de las batallas” (Del Valle de Siles, 1990)– entre los indígenas levantados y las tropas de españoles que resguardan la ciudad de La Paz. Este es un lugar estratégico porque desde aquí se puede controlar la hoyada y los valles de Río Abajo y el Altiplano norte y sur. En la Ceja se construye uno de los “cuarteles indígenas”, con la misión de no dejar salir ni entrar ni personas ni productos agropecuarios. Se construyen capillas y centros de ceremonia para legitimar y sustentar el objetivo de expulsar a los españoles. Poco después Katari y sus mandos medios, con esa visión estratégica en el manejo de la geografía, construyen otro cuartel en la actual zona de Pampajasi, al este de la ciudad. Bajo este sistema de organización (como sector *alasäya*-arriba: El Alto, y como *mäsaya*-abajo: Pampajasi) y ubicación estratégica, se cerca la ciudad de La Paz en dos oportunidades. La primera dura entre marzo y julio y la segunda entre agosto y octubre de 1781. En realidad, el levantamiento indígena duró un año y ocho meses. La guerra se había extendido hacia los valles del sur de La Paz y el Altiplano y los valles de Omasuyus.

El cerco fue básicamente alimenticio y militar. No ingresaba ningún producto agrícola o pecuario a la ciudad. Esta estaba rodeada por una multitud de mujeres y hombres dispuestos a expulsar a los españoles mediante la hambruna (Del Valle de Siles, 1990). Este levantamiento crece después de la revuelta protagonizada por los ayllus de Chayanta, Norte de Potosí, y se expande en todas direcciones. Participan en la organización de los ayllus miles y miles de mujeres y hombres que llegan a tomar contacto incluso (y pese a sus disputas) con el ejército de los Amaros del Bajo Perú. El proyecto era un autogobierno indígena en toda

esta gran área, aunque no quedaba claro cómo habría de concretarse en un sentido más amplio o en un nuevo Estado

El contacto logrado con el ejército de Tupak Amaru en 1781 se da en la propia Ceja de El Alto, en el actual sector Ballivián (Del Valle de Siles, 1990), donde se ubica otro de los importantes cuarteles indígenas. En resumen, La Paz está rodeada por dos ejércitos indígenas en tres frentes. Pese a su situación favorable, los indígenas no logran el triunfo porque de manera “oportuna” llega el ejército auxiliar español. Sin embargo, el 5 de agosto, bajo el mando de Andrés Tupak Amaru (amarista) y Gregoria Apaza (tupakatarista), Sorata pasa a manos de las fuerzas indígenas; perecen miles de españoles. Mientras tanto, Achakachi, Laja, Ayo Ayo y otras poblaciones se habían convertido en los centros de agitación. Es decir que la actual ciudad de El Alto, los valles y el Altiplano de La Paz se habían convertido en territorios ingobernables para los españoles. El Alto era un lugar estratégico, un centro organizativo político-militar de aquella insurrección indígena, tal como lo fue el levantamiento general de octubre de 2003.

Transcurridos 118 años de este acontecimiento histórico, nuevamente El Alto se convierte en el fortín de resistencia ante el posible ingreso de las fuerzas constitucionales de Fernández Alonso, como parte de la llamada guerra federal por la capitalía de la República. Durante este año se produce el choque de tres fuerzas: los liberales, de La Paz, los conservadores, de Chuquisaca, y los indígenas. El Alto, tal como en 1781, era la puerta de salida y de entrada de las tropas liberales del coronel José Manuel Pando. Inicialmente las fuerzas indígenas actúan en el Altiplanovalle central de Bolivia junto a las del coronel Pando contra las fuerzas militares venidas de Chuquisaca. Los indígenas, después de observar que Pando, el caudillo de La Paz, no iba a cumplir con su compromiso de atender sus derechos sobre la tierra, se separan para organizar sus propias fuerzas. El líder indiscutible de este levantamiento es Pablo Zárate, el “temible” Willka, quien organiza sus fuerzas de acuerdo a sus propias condiciones y a la experiencia histórica en el extenso Altiplano central de Aroma y la provincia de Sica Sica (estancia Imilla Imilla), de donde es originario, junto con los ayllus del Altiplano norte de La Paz y de los valles de Inquisivi.

Según Ramiro Condarco (1982), estudioso de este levantamiento, Zárate Willka y el conjunto de otros Willkas –Manuel Mita Willka (el 2° Willka), Feliciano Willka (el 3° Willka) y Pío Willka–, junto a Juan Lero, Feliciano Ramírez y Mauricio Gómez, organizan y derrotan en varias oportunidades a las fuerzas del presidente Fernández Alonso y a

las de los propios liberales⁶. Los casos más sonados son la masacre de los soldados federales en Ayo Ayo y la masacre de Mohoza contra las propias tropas de los liberales (el escuadrón Pando). Zárate Willka y sus tropas libran vibrantes batallas en las pampas de Aroma, extendiendo su accionar hasta las tierras de Cochabamba y el Norte de Potosí. El 12 de abril, por ejemplo, después del triunfo del Segundo Crucero, se proclama en Peñas (Oruro) un nuevo gobierno indígena, que emite tres “decretos” de inmediato cumplimiento: i) la destrucción, incendio y saqueo de las propiedades rústicas de particulares; ii) el juzgamiento de todas aquellas personas conocidas por su parcialidad con los adversarios de la población indígena; y, iii) la eliminación y exterminio de blancos y mestizos. Estos decretos de gobierno indígena son parte de propósitos largamente esperados, que buscan:

1) Restitución de las tierras de origen, 2) La guerra de exterminio contra las minorías dominantes, 3) La constitución de un gobierno indígena, 4) El desconocimiento de las autoridades revolucionarias (pandistas) y 5) El reconocimiento de la autoridad de Zárate Willka como jefe supremo de la rebelión indígena (Condarco 1982: 383-385).

De no ser por las fuerzas indígenas que pelean en las pampas de Aroma y Oruro y en las cercanías de El Alto, utilizando técnicas de guerra extendida y ocultando productos y hostigando al enemigo permanentemente, La Paz hubiera sido tomada por los constitucionalistas de Sucre. Estas batallas se libran en Viacha y el actual Senkata, en las mismas puertas de La Paz. De esa manera, El Alto (en aymara “Altupata”) se había convertido en un lugar estratégico y vital para controlar La Paz en aquella guerra civil.

Nuevamente en 1952 El Alto se convierte en el referente del triunfo y legitimador de la llamada Revolución Nacional. Según Fernández (1993), “se convierte en el escenario político para confirmar el triunfo de la Revolución Nacional”. Aunque El Alto no era una ciudad, como lo es ahora, ya era un espacio que resguardaba y controlaba el movimiento de tropas militares venidas de las minas y de la propia Fuerza Aérea instalada en la zona. Octubre de 2003 y mayo-junio de 2005 vuelven a confirmar este hecho. Es uno de los lugares que mejor resume este largo recorrido de la lucha social en la Colonia y en la República.

6 Los actores fundamentales de este histórico gobierno indígena son Juan Lero, Ascencio Fuentes, Feliciano Mamani, Evaristo Guaricallo y Manuel Flores (Condarco, 1982).

1.2. Migración y urbanización

El territorio de El Alto se ha ido convirtiendo poco a poco en una gran ciudad, con el asentamiento de una importante población migrante. También es paso obligado para acceder a La Paz y a los Yungas y la región amazónica. Aproximadamente desde 1930 empiezan a construirse pequeñas casas dispersas en un medio donde todavía predominaban las comunidades rurales. En los años cuarenta estas construcciones se incrementan, comenzando a aglutinar pequeñas agrupaciones de casas que darán lugar a los futuros barrios. A fines del siglo XIX, el centro aglutinador fueron las fábricas textiles Forno y Statex y la estación de trenes.

La relación de Fernández (1993) es interesante. Según este autor, en 1938 hay 25 habitantes (aunque no queda muy clara su referencia). Para 1950 (12 años después), la población alcanza 11.000 habitantes. En 1960 este crecimiento se consolida con una población de 30.000 personas, que en 1964 es de 45.000 personas. En 1976 ya son 95.455 habitantes y en 1988, 307.403 habitantes, con un crecimiento espectacular que ha incrementado la población en más de 211.946 personas. Para 1992 la población total es de 405.942, y para el año 2000 hay, según este mismo autor, 1.043.316 habitantes. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 contabiliza 649.958 habitantes en El Alto (INE, 2002).

Como es evidente, hay un fenómeno poblacional que se patentiza en el incremento espectacular de los barrios. Particularmente en los 12 años entre 1976 y 1988, la población se incrementó en 211.946 personas. Este es un hecho particularmente importante porque también crecen las necesidades básicas, como los servicios de agua, de luz, de vivienda y de fuentes de trabajo. En principio, las calles y avenidas eran de tierra. Los microbuses, bastante destartados, viajaban a las villas por calles polvorientas. Sin duda, la ciudad de El Alto ha sido construida en parte por sus esforzados habitantes. Según Sandóval y Sostres (1988: 36), “El Alto se ha convertido en ciudad a fuerza de su crecimiento demográfico y expansión territorial”.

Con sus barrios consolidados como centros de la vida política-social, por la Ley 651, de 26 de septiembre de 1988, obtiene el rango de ciudad; El Alto dejará de ser una de las tantas villas de La Paz. Es una ciudad con profundos problemas sociales. Las calles son polvorientas, hay pobreza, a los sectores geográficamente marginales no llega electricidad, no hay

fuentes de trabajo, y una gran mayoría de sus habitantes laboran en La Paz. Por ello se la ha denominado “ciudad dormitorio”.

La gente piensa que “es mejor vivir en la ciudad”, aunque esto no ha sido necesariamente positivo para todos. También es evidente que a muchas familias e individuos migrar a la ciudad, y a El Alto particularmente, les ha producido réditos sociales y económicos. Instalaron tiendas de abarrotes y grandes ferias, como la de la 16 de Julio, la de la 12 de Octubre, la de la 12 Villa Dolores y otras más pequeñas. Vivir en una urbe nueva es difícil, pero también ventajoso, pues quienes no pudieron obtener bienes y propiedades en sus lugares de origen, los obtuvieron en la ciudad, aunque con un sacrificio muy elevado. Además, la causa de este proceso de migración rural-urbano (pero también rural-rural) es la pobreza en el área rural. Bajo esta dinámica, El Alto crece en base a dos fuerzas fundamentales que es necesario resaltar: la migración rural-urbana y el empuje de sus propios habitantes.

En el primer caso, durante las décadas de 1980 y 1990 el campo sufre una severa crisis de sequía y pobreza. No hay producción agrícola y los animales mueren. Los gobiernos de turno no brindan una adecuada atención para paliar este problema. Los recursos económicos generalmente se distribuyen en las ciudades “más importantes”. El campo (o las áreas rurales) sufren un abandono que es histórico. Ante este hecho, miles de mujeres y hombres deciden migrar a las ciudades (El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz) y a las zonas de colonización (Caranavi, Alto Beni y otras zonas en el norte de La Paz o en otros departamentos).

El segundo caso se refiere, fundamentalmente, a un empeño incesante de los nuevos habitantes de la ciudad para organizar sus barrios, con la construcción de calles, avenidas, plazas y canchas deportivas a cargo de las primeras juntas de vecinos. Es importante resaltar este hecho porque a través del aporte de mano de obra propia y cuotas mensuales (o extraordinarias) se reúnen recursos para construir las primeras escuelas, las canchas deportivas y las instalaciones de agua y luz. De este proceso de lucha cotidiana surge un sentimiento de autonomía y empieza una lucha por su independencia municipal frente a la ciudad de La Paz.

Las juntas vecinales empiezan a manifestarse y movilizarse desde los años cincuenta, pero la lucha se hace efectiva solo 30 años más tarde. En este periodo El Alto tiene seis importantes e históricas villas: Villa Dolores, 12 de Octubre y Bolívar A y B, ubicadas en el sector sur de la ciudad; en el norte, las villas 16 de Julio, Ballivián y

Alto Lima. También en este periodo en la ciudad se construyen o se amplían recintos militares, como el de la Fuerza Aérea, el aeropuerto internacional, la estación de trenes y las oficinas de la Aduana Nacional. Estos terrenos pertenecían originalmente a las comunidades aymaras de Charapaki, Yunguyo, Qullpani, Kupilupaka, San Felipe de Siq'i y Jichhu Sirka (Quispe, 2004).

Con el paso de los años se crean nuevas urbanizaciones, que se extienden hacia el sur, el oeste y el norte de la ciudad. En esas condiciones, la Ceja se había convertido en el centro de las actividades administrativas y comerciales. Sin embargo, esta fue una expansión un tanto desordenada y sin un plan general de urbanización. Los barrios simplemente nacieron bajo el influjo de las necesidades vitales y el empuje organizativo de sus habitantes. Y la ciudad continúa creciendo sin una planificación adecuada.

En ese marco, los alteños obtienen finalmente su propia autonomía y empieza la construcción de una de las ciudades más importante de Bolivia. Sin embargo, dicha construcción se basa en la ocupación de tierra de comunidades (como se hizo notar arriba) y de haciendas⁷. Hay que recordar que el territorio de El Alto correspondía a varias comunidades o ayllus y a haciendas.

Al fenómeno de la migración rural-urbana se ha sumado también la llegada de población de “rebalse” de la hoyada (La Paz). No tenemos información exacta sobre cuánta población proviene de esta ciudad, aunque sería interesante conocerlo. Es una población importante que empieza a mezclarse con las nuevas juntas vecinales o crea otros barrios, como las viviendas de los militares, los maestros y los mineros. Otro hecho importante a resaltar en este proceso es el surgimiento de los liderazgos barriales, especialmente de las juntas vecinales (que de un tiempo a esta parte parecían no tener mucha importancia), de los sindicatos de trabajadores, las asociaciones de comerciantes de carne, los sindicatos de transportistas, de profesionales y un largo etcétera. Las villas (como se llamaba a los barrios desde la visión de la ciudad de La Paz) se extienden desde La Ceja, Ballivián, Bolívar A y 16 de Julio hasta las inmediaciones del aeropuerto internacional y Ciudad Satélite, conformando un espacio urbano complejo, dinámico y también conflictivo, que en ese entonces constituía la cuarta ciudad más importante de Bolivia, por detrás de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

7 Los hacendados que tenían sus tierras en esta parte son: Julio Téllez, Jorge Rodríguez Balanza, Adrián Castillo Nava, Raúl Jordán Velasco, Francisco Loza y la familia Zalles.

1.3. El Alto como ciudad

En 1985 se crea la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz, con El Alto como capital. La presión social y las necesidades vitales hicieron que el Estado y el gobierno central reconocieran a El Alto como la cuarta sección municipal. Se consolida entonces el desafío de construir una nueva ciudad y dar (o crear) nuevos servicios y vida social. Se hace realidad en ese momento la ansiada autonomía municipal de El Alto frente a la ciudad de La Paz. El texto de la creación de la ciudad dice: “ARTICULO PRIMERO: Créase la Cuarta Sección de la Provincia Murillo, con su capital El Alto de La Paz, del departamento de La Paz” (Ley de 4ta. Sección).

El Alto es un municipio con un importante número de población. Esto ha hecho que sus necesidades sean también más intensas y complejas. La iluminación, la seguridad, el asfaltado de sus calles y avenidas, agua potable, alcantarillado, postas sanitarias, escuelas, canchas de fútbol, etc., son demandas de vital importancia para sus habitantes. Estos –de distintas condiciones y con diferentes lógicas de organización (comunidades o ayllus rurales, mineros o fabriles)– empiezan a unirse y reunirse. En esas circunstancias, las juntas vecinales empiezan a convertirse en verdaderos gobiernos locales o territoriales porque administran y recogen las demandas sociales de sus vecinos, organizan la estructura de sus calles y avenidas y plantean sus demandas ante instancias estatales, como el municipio. Así pues, las juntas vecinales se convierten en espacios públicos para las decisiones colectivas en lo que se refiere a la construcción de obras y para hacer una nueva vida social urbana. Rosario Anze (1995: 34) manifiesta al respecto: “Se convierten [las juntas vecinales] en verdaderos gobiernos barriales, aunque no de manera permanente y lineal, sino de acuerdo a las situaciones que atraviesan las zonas y a la calidad y efectividad de los dirigentes”.

Así se empieza a estructurar un conjunto de actividades propias de una nueva ciudad bajo las lógicas de la organización indígena, minera y la población de rebalse de La Paz. Unos y otros se ponen en movimiento y surgen varios sistemas de ayuda mutua (*ayni*), sistemas de vigilancia, control y aporte de mano de obra o de dinero orientados a la construcción de obras. Se empiezan a mover varios mecanismos de acción colectiva que hacen que todos se sientan parte de una misma realidad social.

Empieza una nueva lucha social/barrial. Inicialmente, la gente piensa que el rango de ciudad traerá inmediatamente la mejora de servicios a El Alto (industrias, institutos superiores y calles asfaltadas), pero la realidad

es otra. Entonces crece el desafío de construir plenamente la ciudad, lo que provoca que aumente un sentimiento de desarrollo y bienestar para la nueva población. Así lo muestra una mesa redonda organizada durante esos años, donde uno de los participantes manifiesta con mucha claridad este hecho:

Los alteños deben recuperar la conciencia y tradición ancestral de nuestro pueblo para alcanzar autenticidad y personalidad propia; la ciudad de El Alto debe construir su propia base económica a través del desarrollo de la industria, artesanía y otras actividades productivas [...] los recursos económicos y financieros generados por El Alto deben beneficiar íntegramente a esa ciudad; recomendar la adopción de medidas que eviten que los recursos alteños salgan de su jurisdicción. Postular la recuperación de los recursos adeudados por la ciudad de La Paz (Mesa redonda “El Alto ciudad del futuro”, en *Presencia*, 18/03/88, citado por Sandóval y Sostres, 1989).

La cita muestra claramente un sentimiento de autonomía plena y un futuro de desarrollo industrial en la ciudad, que en cierto modo se ha cumplido, pero que todavía tiene muchas más necesidades que resolver. El Alto sigue siendo una ciudad de calles de tierra, avenidas sin asfalto, condiciones de vida ínfimas, sin fuentes estables de trabajo y grados importantes de delincuencia y discriminación étnica.

El mencionado estudio de Sandóval y Sostres (1988) divide la ciudad en tres grandes zonas para entender mejor su nueva estructura. Una es el sector norte, con barrios como Ballivián, Río Seco, Villa Ingenio, etc. A este sector llegan fundamentalmente los migrantes de las provincias del Altiplano o de los valles del norte de La Paz, como Omasuyus, Los Andes, Camacho, Larecaja, Manco Kapaj, y los mineros de estas regiones.

La otra zona es el Centro, donde se ubica el aeropuerto internacional, la Ceja de El Alto, Villa Dolores y otros. Este se ha convertido en una especie del casco viejo de la ciudad de El Alto. La tercera zona es la zona sur: Senkata, Santiago II, Kenko, Ventilla y muchos otros barrios ubicados a lo largo del camino a Oruro. Aquí ha llegado población fundamentalmente de las provincias del Altiplano sur y central, como Aroma, Villarroel, Pacajes, Sajama (Oruro), Loayza y los mineros provenientes de las minas del sur de Bolivia. Bajo esas condiciones, la ciudad de El Alto es un espacio de gran ajetreo comercial, industrial, deportivo, cultural, político, sindical y académico/intelectual (esto último reafirmado con la creación el 5 de septiembre de 2000 de la Universidad Pública de El Alto, la UPEA, aunque todavía sin autonomía).

En ese contexto, se han creado profundas relaciones interbarriales o sociales que son los fundamentos de la vida social, económica y cultural, que ha establecido varias formas de existencia social urbana propias de una ciudad dinámica, pero a la vez compleja, como es el espacio urbano. A nivel de los barrios, que son lo que interesa en este trabajo, se establecen profundas relaciones entre las 500 juntas vecinales que tiene aproximadamente El Alto en ese momento. Los vecinos están ahora organizados en nueve distritos, dos de ellos rurales y siete urbanos. En este marco, los alteños se han convertido en potentes actores sociales y políticos. Son (y han sido) protagonistas de varias movilizaciones sociales. En el último tiempo se registran los gigantescos levantamientos de octubre de 2003 y junio de 2005 (y, como veremos en la segunda parte del libro, el de 2019), que consideramos indígenas-populares. Al mismo tiempo, es espacio de pequeñas movilizaciones propias de cada sector, como los gremialistas, los transportistas, el magisterio y, en el último tiempo, los universitarios de la UPEA.

1.4. Alteños en las movilizaciones de 2000-2001

Aunque, como ya se mencionó, la lucha de los alteños viene desde mucho tiempo atrás, las movilizaciones que van a tener profundas significaciones políticas y sociales contemporáneas empiezan en el año 2000, juntamente con los levantamientos indígenas del Altiplano y valles del norte de La Paz y del Altiplano central de Bolivia.

Desde el año 2000 los alteños protagonizan gigantes movilizaciones sociales y paros cívicos contundentes. Este es un método de lucha eficaz porque ha servido para obtener muchas demandas. Mediante movilizaciones sociales se logró, por ejemplo, arrancar al Parlamento Nacional la ley de creación de la cuarta sección municipal. También mediante este mecanismo de acción colectiva se logró elevar a El Alto al rango de ciudad. En el último tiempo se pudo anular los formularios Maya y Paya de la alcaldía alteña, se obtuvo la autonomía de la UPEA y fue posible la caída del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Estos logros son parte de los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000). Es decir, constituyen un conjunto de métodos y tecnologías de lucha, tales como las huelgas de hambre, los paros cívicos, las marchas de protesta, el bloqueo de vías y avenidas, la toma de las instalaciones del Estado (la alcaldía) y la difusión de diferentes comunicados de prensa e

información interna para las juntas vecinales. Hay una variada producción de estrategias de acción y sistemas de representación social.

En el año 2000 El Alto se sumó al levantamiento de Achakachi y el Chapare, que comenzaron en el mes de abril, hasta convertirse en el centro de la irrupción o insurgencia indígena-popular de Bolivia. Veamos algunos de los hechos más significativos de este fenómeno. El lunes 29 de mayo de 2000 la alcaldía de El Alto (que estaba ubicada en la Ceja) fue saqueada y quemada. Una multitudinaria marcha se congregó en la Ceja para pedir la creación de una universidad para El Alto. Al finalizar la marcha, un grupo asaltó los predios de la Alcaldía. El uso de gases lacrimógenos por los policías contra los manifestantes no bastó para detener este hecho. Incluso los policías fueron arrinconados hacia el final de la Autopista. Esta toma fue calificada por la prensa como una acción vandálica. El periódico *Última Hora* (30/05/00), por ejemplo, titula así una de sus páginas centrales: “Pérdidas superan los 50.000 \$us. Vándalos tomaron y asaltaron la Alcaldía”. Se podría decir que este es uno de los momentos importantes porque a partir de entonces comienza una serie de movilizaciones sociales que, con el pasar de los años, se han irradiado hacia el interior de la ciudad: hacia los barrios, su expresión social. Como “instigadores” de aquel hecho fueron señalados los gremialistas y los vendedores del barrio chino de El Alto. Sin embargo, no se tomó en cuenta en este análisis los niveles de pobreza que sufre la ciudad y el malestar social que crece dentro de cada barrio. Uno de los representantes de las organizaciones sociales afirmaba, ante el hecho narrado y la gasificación policial: “Creo que los alteños descargaron su furia. El alcalde no puede hacer nada a espaldas de los trabajadores alteños” (*Última Hora*, 31/05/00).

Después de los movimientos por la creación de la universidad alteña, las movilizaciones se hicieron más radicales y con evidente intención de luchar hasta obtener sus demandas. Por ejemplo, en 2001 nuevamente la ciudad vivió días muy conflictivos. Los vecinos mostraban una profunda preocupación por la elevación sistemática en la facturación del agua por Aguas del Illimani y de luz por Electropaz. Durante este día muchas mujeres comentaban, al fragor de las movilizaciones: “¿Acaso ellos [Aguas del Illimani] orinan agua para que les paguemos?, el agua viene del cielo, es de la naturaleza”, decían.

Ya el 1 de enero de 2001 Severo Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) de ese entonces, había manifestado su profunda preocupación ante la violenta represión policial. En esta fecha la policía actuó nuevamente de forma violenta contra los

manifestantes. Mamani dijo entonces, con cierta premonición: “si el presidente (Banzer) quiere guerra con El Alto, los pobladores se la daremos” (*Última Hora*, 6/01/01). Incluso el propio presidente de la República, el Gral. Hugo Banzer, había mostrado su profunda preocupación por las permanentes movilizaciones de los alteños, afirmando: “los alteños deben dejar vivir en paz a los paceños”. Aseveró que él trabajaba en Palacio con música de fondo de las protestas sociales de los alteños.

Era evidente el profundo malestar social en esta joven ciudad. Al ver este proceso de socialización de los repertorios de acción colectiva, algunos habíamos hecho notar que en la ciudad de El Alto se estaba gestando un posicionamiento incluso político frente al gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez: “En El Alto esta multitud constituida reclama su inclusión, pero ante la imposibilidad cierta de ello existe la tendencia de constituirse en referencia alterna a los mecanismos del poder constituido” (P. Mamani, *La Razón*, 11/03/01).

Desde estos mecanismos de acción se manejan los símbolos de poder indígena, como la *wiphala* multicolor y multicuadrículada, el poncho, la manta y los sistemas de legitimación social, como los actos rituales para la Pachamama y los Achachilas, además de un conjunto de representaciones sociales que son los referentes de la identidad indígena urbana tanto de gremialistas como de juntas vecinales, trabajadores y varios sectores de estudiantes universitarios, para establecer demandas por mejores o mínimas condiciones de vida, educación, salud y seguridad.

Pese a la división existente entre la FEJUVE de El Alto, la Central Obrera Regional-El Alto (COR) y los gremiales durante los años 2000 y 2001, crecen masivamente las protestas sociales alteñas, llegando a adquirir dimensiones sociales e incluso políticas. La muestra evidente de este proceso, particularmente desde septiembre del año 2000, con los grandes bloqueos carreteros y el cerco a las ciudades por ayllus y comunidades, son las tensas relaciones entre gobierno y vecinos. Aparentemente, durante las movilizaciones de las comunidades del Altiplano y los valles de Omasuyus, Larecaja y Manko Kapaj de La Paz y el Chapare cochabambino, El Alto se muestra indiferente; incluso se sostuvo que los alteños eran ajenos a estas movilizaciones sociales. Lo evidente del hecho, sin embargo, es que hay intensas interrelaciones entre El Alto y las provincias, donde se recrean profundas relaciones emotivas y sentidos de “hermandad” indígena.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre el lunes 2 de octubre de 2000 en la Ceja de El Alto. Por la noche, la Ceja se había convertido en un espacio de “desorden absoluto” porque un grupo de jóvenes apedrearon el peaje

de ingreso a la Autopista. El cruce a Viacha, el Cruce Villa Adela, Río Seco y la Ceja fueron prácticamente tomados y bloqueados por cientos de mujeres y hombres que recurrían a piedras, llantas, latas viejas, etc. Esta acción se dio sin una convocatoria previa de las organizaciones alteñas. La población pedía al gobierno una solución inmediata para reiniciar las clases y dar atención a las demandas de los maestros, que mantenían un paro indefinido desde hacía varias semanas. Así, varios sectores se posesionan abiertamente en contra del gobierno.

Se podría decir que desde estos años se vino gestado un mensaje sociopolítico bastante claro y, a la vez, notorio. El Alto es una ciudad síntesis de lo aymara o indígena-popular. Bajo esas condiciones no era ajena a la indignación comunal de los ayllus movilizados en contra del Estado blanco-mestizo en el área rural. Se había profundizado la segregación racial y la explotación económica de la población mediante la privatización y la transnacionalización de la economía y la política.

Otra de las muestras de este hecho es lo ocurrido el 5 de marzo de 2001 ante la “celebración” del XVI aniversario de la creación de la ciudad. Aquel día la FEJUVE había declarado, a modo de protesta, un paro de la alteñidad. Entonces, la Ceja (lugar públicamente reconocido como espacio de demostración de fuerza de la protesta social) no fue completamente bloqueada, la protesta social o vecinal había bajado a los niveles barriales. Desde los barrios periféricos y centrales de El Alto se realizó la toma directa, por ejemplo, del camino a Viacha y Río Seco, que es otra muestra de un evidente cambio táctico (o estratégico).

Con esto se muestra de forma clara una inicial predisposición de reunificación interbarrial mediante los sistemas de acción colectiva vecinal o indígena-popular. Participan activamente mujeres de pollera y hombres jóvenes y mayores de los diferentes barrios urbanos y rurales. Las mujeres bloquean sentadas en medio de las avenidas, *pixchando* coca y conversando en aymara y en castellano sobre el curso de los acontecimientos. Como se dijo, el Cruce Villa Adela y la Juan Pablo II se habían convertido en espacios de asambleas grupales donde participaban personas de diferentes edades.

Se muestran acciones decididas para hacer escuchar sus demandas, ya que la pobreza y la exclusión de la ciudad de El Alto se habían hecho más evidentes. Incluso hay una clara tendencia a organizarse por zonas y cuadras, como se mostraría efectivamente dos años más tarde, en octubre de 2003. Las acciones colectivas se hacen englobantes para provocar una especie de “desorden organizado” en calles y avenidas. La fuerza de ese hecho consiste en sentarse en plena avenida, que es

una predisposición plena a inmovilizar la ciudad por el tiempo que sea necesario. La bicicleta se había convertido, al igual que en septiembre-octubre en el Altiplano⁸, en un factor de comunicación y movilización social. Utilizando este medio de transporte, muchos recorren la ciudad llevando información de un barrio a otro.

Al observar el gobierno que durante este día no había mayor alteración en la Ceja, manifiesta a través de Jorge Pacheco, ministro de Trabajo y Microempresa, que el paro alteño no fue acatado. También algunos medios de comunicación afirman que el “paro fue a medias”. Una vez más no percibieron que, detrás de ese aparente incumplimiento del paro, estaban gestándose nuevas formas de organización barrial. Así se comentaba la situación: “tenemos que hacernos respetar como alteños”.

Desde El Alto se fue construyendo un nuevo perfil de las acciones colectivas y sus estrategias para profundizar el malestar social. Al parecer, ni los propios dirigentes, con sus pugnas internas, habían leído correctamente el mensaje que venía de los barrios: se estaba construyendo un poder interno o barrial para inmovilizar toda una ciudad. Las causas para esa articulación eran las necesidades sociales, la falta de trabajo y los sentidos de identidad, que tienen su peso específico en la autoorganización barrial.

En aquel año, el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez había incumplido el ofrecimiento de 50 millones de dólares para esta ciudad. Por este hecho y otros factores estructurales, como la discriminación social, El Alto y los ayllus-comunidades rurales se estaban convirtiendo en un espacio de poder alterno al gobierno.

Otro momento importante de acumulación de repertorios de acción colectiva son los días 12 y 13 de febrero de 2003, en el llamado “febrero negro”. En aquellos dramáticos días de la historia de La Paz y El Alto ocurrieron violentos enfrentamientos entre policías y militares, con el saldo de 11 policías y cuatro militares muertos. El escenario de este hecho es el mismo espacio físico del poder estatal y gubernamental: la plaza Murillo, sus alrededores, el interior del Palacio y la ciudad de El Alto. Una multitud había rodeado la plaza Murillo, asaltado la Alcaldía de El Alto (por segunda vez) y las instalaciones de la Coca-Cola para incendiarla y saquearla. La gente argumentaba que el alcalde del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), José Luis Paredes, no había

8 En Kurahuara de Karankas (Oruro) la bicicleta fue uno de los medios de comunicación y control de los bloqueos, tal como en Achica Arriba, Patamanta y Achakachi (Altiplano norte de La Paz).

realizado hasta entonces una buena gestión, lo que había acumulado un importante grado de malestar social. Este es un levantamiento social urbano que termina quemando las oficinas de los partidos gobernantes: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unión Cívica y Solidaridad (UCS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y las oficinas del gobierno (como el Ministerio del Trabajo y la Vicepresidencia de República). El Palacio de Gobierno había sido apedreado por los estudiantes del Colegio Ayacucho, quemando también las fotos del propio presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, y las tiendas comerciales del entorno. Durante este hecho murieron 33 personas.

Estos sucesos podrían señalarse como el inicio de lo que luego sería octubre de ese año en la ciudad de El Alto y La Paz. El factor detonante para lo que sucedió en ese febrero fue el proyecto de Presupuesto General de la Nación (gestión 2003) presentado al Parlamento, con un incremento al impuesto a los salarios y la reducción del 10 por ciento de los gastos del Estado (Paredes, 2003). Pero también confluyeron otros factores, como la corrupción y el nombramiento de un partidario del MNR como Defensor del Pueblo. El periódico *El Diario* hacía notar que la policía se amotinó tal como en abril de 2000.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación, enviado al Congreso Nacional por el presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada (que incluía el impuesto directo al salario de los trabajadores en un 12,5 por ciento, lo que la población calificó como: “el impuestazo”) fue la principal causa para que la Policía Nacional se amotinara (*El Diario*, 13/02/03).

El país vivía un conflicto muy serio, que se podría haber agravado de no haberse retirado el mencionado proyecto del Parlamento. Lo profundamente llamativo del hecho es que el amotinamiento policial del día martes 11 de febrero se juntó con las protestas sociales de El Alto y las provincias. La ciudad de El Alto es parte fundamental de este hecho. La alcaldía de esta ciudad, como adelantamos arriba, fue tomada, destruida y saqueada. Este hecho fue calificado nuevamente por los medios de comunicación como un vandalismo sin límite. “Una turba enardecida ingresó violentamente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto y procedió a saquear todas sus oficinas en horas de la noche” (*El Diario*, 13/02/03). Había un descontrol total en la Ceja de El Alto. En horas de la noche, “las reyertas callejeras aumentaban en la

‘ciudad del futuro’, y los cajeros automáticos de los bancos fueron destruidos” (*El Diario*, 13/02/03). Tal como La Paz, El Alto es una ciudad envuelta en llamas. Es decir, los espacios físicos del poder gubernamental y estatal son incendiados y destruidos.

Ante estos hechos, el gobierno tuvo que dar un paso atrás y dejar sin efecto el mencionado proyecto del presupuesto general de la nación. Sin embargo, la población exige nuevas medidas para solucionar los problemas estructurales que afectan a varios sectores sociales. El hecho más dramático es el enfrenamiento entre las dos instituciones armadas del Estado: la Policía y los militares. El Estado había entrado en una profunda crisis. Como manifiestan García y otros (2003): “que las instituciones armadas del Estado usen las armas para detener las pretensiones autónomas de otras instituciones armadas del Estado, habla de un derrumbe catastrófico del principio de cohesión y unicidad estatal”. El Estado y el gobierno se derrumban. El Estado se muestra como el factor fundamental de imposición de la política neoliberal y la respuesta de la sociedad y los grupos dominados es de total rechazo al hecho. En resumen, febrero es la antesala de octubre.

Levantamiento indígena-popular: articulación interbarrial

2.1. Paro indefinido: 15 y 16 de septiembre

Hay un contexto sociopolítico adverso al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Algunos medios de comunicación publican que el 78 por ciento de los habitantes de las ciudades del eje reprueban la gestión de gobierno (*La Prensa*, 8/09/03). En el Altiplano-valle norte de La Paz los indígenas han empezado sus movilizaciones en contra del proyecto de venta de gas por Chile. En Los Yungas se anuncian nuevos bloqueos, tanto de cocaleros como de “colonizadores”. De este modo, en las ciudades principales del eje hay una gran inquietud sobre el curso de la exportación de gas a Estados Unidos y México. Mientras tanto, en la ciudad de El Alto, desde el lunes 1 de septiembre las organizaciones sociales empiezan a movilizarse en contra de los formularios Maya y Paya, ya mencionados, y también por la autonomía de la UPEA. Los universitarios, como los demás sectores sociales, también exigen que no se venda el gas por Chile.

En esa relación, los formularios Maya y Paya se convierten en los nuevos factores de articulación barrial. Se entiende que mediante estos se modificará el trámite de titulación de la propiedad y el diseño de los planos arquitectónicos para nuevas construcciones. La gran mayoría de los habitantes de El Alto no tienen fuentes de ingresos estables, por lo que cualquier incremento al pago de impuestos a inmuebles, como este, siempre los inquietará. Esto se refleja en el titular de un periódico: “COR y Fejuve salen a marchar contra formularios Maya y Paya”. Mientras se movilizan los alteños, el gobierno municipal (dirigido por José Luis Paredes) expresa su desacuerdo con modificar dichos formularios.

Mientras Fejuve y la COR de El Alto enarbolan la revisión de los formularios Maya y Paya porque consideran que son lesivos a la magra economía de los alteños. El Gobierno Municipal asegura que no cederá ni revisará su vigencia, ya que beneficiará a la ciudadanía (*El Alteño*, 01/09/03).

En este contexto, los días lunes 15 y martes 16 de septiembre tienen particular importancia para la ciudad de El Alto. Durante estos dos días, posteriores a los hechos del 12 y 13 de febrero, se produce una inicial y nueva muestra de articulación interbarrial. En efecto, después de aquel 1 de septiembre, el lunes 15 una multitud se dirige a las nuevas oficinas de la alcaldía ubicadas en la urbanización Calama (cerca del aeropuerto). Dicha multitud expresa su desacuerdo con ambos formularios. Aunque el alcalde José Luis Paredes argumenta que los formularios servirán para organizar mejor su base de datos, la finalidad es recaudar más y en mejores condiciones los impuestos municipales.

Durante estos dos días se ha podido observar un desdoblamiento de tejidos sociales y culturales para inmovilizar a la ciudad [...] [Este] se ha intensificado entre la primera y segunda semana de octubre. Barrio por barrio, zona por zona y distrito por distrito ha recorrido un sentimiento de autoafirmación propia sobre la construcción urbana indígena de esta ciudad (Mamani, 2004: 140).

La medida de los vecinos fue exitosa porque durante los dos días se paraliza la ciudad. No hay actividad comercial, escolar, bancaria ni social. El autotransporte había decidido suspender su actividad por temor a enfrentarse con los vecinos movilizados, por lo que no hay vehículos prestando sus servicios en las calles de la ciudad. Cientos de vecinos salieron a las avenidas, calles y plazas para expresar su desacuerdo con ambos formularios. En algunos sectores se produjeron violentos enfrentamientos con rotura de vidrios. Fue el caso de los motorizados de radiopatrullas policiales 110 en la zona de Tawantinsuyu. En resumen, en todos los sectores hay una paralización total.

Sin embargo, a pesar de la magnitud de la movilización social, y la participación de ocho de los nueve distritos municipales de la ciudad, para la alcaldía el paro “fue un fracaso”. Según Mauricio Cori, ejecutivo de la FEJUVE de entonces, solo Satélite, Villa Dolores y 12 de Octubre no acataron el paro cívico (*La Prensa*, 16/09/03). Los puntos de salida, como San Roque hacia el Altiplano-valle norte de La Paz, Senkata hacia Oruro y cruce hacia Viacha fueron literalmente tomados por los vecinos. Un montón de ladrillos, piedras y latas obstruían el paso de cualquier

motorizado. Cada sector controlaba su lugar (o su jurisdicción), tal como lo habían hecho los aymaras del Altiplano de La Paz en 2000 y 2001: Cruce Villa Adela, el de Río Seco y el de Senkata y Ventilla. Sumando cada uno de estos lugares, tenemos una gran extensión territorial con redes de acciones colectivas capaces de articularse como un solo movimiento social vecinal.

En distintos lugares se observan fogatas, una señal importante para visibilizar la acción de protesta. Allí participan mujeres, hombres e incluso niños. Cada junta vecinal tiene la obligación de portar su insignia o estandarte; mediante esta muestran públicamente su presencia en el lugar del bloqueo o la movilización social. El estandarte lleva un letrero bordado en letras mayúsculas que identifica a la organización o asociación.

Sin duda, así se teje un complejo, pero práctico, sentido de acción colectiva. Parecería que la ciudad está en un gran “feriado”; esto quiere decir que hay una movilización que paraliza la ciudad. La articulación interbarrial tiene la capacidad de definir sentidos y estrategias de acción. Cada zona y distrito se mueve en base a sus organizaciones locales, las juntas vecinales. Desde ese momento, las juntas vecinales se convierten en un referente directo de la movilización social que pide la anulación de los formularios Maya y Paya.

2.2. Anulación de los formularios Maya y Paya

Finalmente, el martes 16 de septiembre, debido a la contundente movilización social y al pedido público de diversos sectores, el alcalde José Luis Paredes anuncia la anulación de los formularios Maya y Paya. Incluso desde algunos sectores se había planteado la renuncia del alcalde Paredes por considerarlo como el gestor de dichos formularios. Paredes responde irónicamente: “tendré que romper un par de formularios en público” (*La Razón*, 17/09/03). Se ha cumplido el objetivo de los vecinos: se oficializa oficialmente el retiro de ambos formularios. Sin embargo, los vecinos seguían bloqueando calles y avenidas en diversos sectores. Se había tomado una decisión: cerciorarse de que ambos formularios sean definitivamente anulados y retirados. Hasta que salió esa noticia. “Y así fue porque desde a las 20:30 un contingente de militares y policías despejó, con gases lacrimógenos, las arterias que estaban obstruidas y detuvo a seis personas” (*La Razón*, 17/09/03).

Este es uno de los importantes triunfos de las movilizaciones sociales de El Alto, que sintetiza la capacidad de aglutinamiento interbarrial y de

organización colectiva. Cientos de vecinos, estudiantes de la UPEA y gremiales reafirman la construcción de la identidad urbana indígena-popular, con su predisposición a poner en movimiento los complejos sistemas de cooperación y solidaridad interbarrial. En el mejor de los sentidos, le habían doblado el brazo al ejecutivo municipal. Aquí se gesta, sin duda, junto con otros hechos, un anticipo de lo que será octubre: es un momento crucial en las relaciones de poder entre el gobierno y las juntas vecinales. Los alteños habían hecho respetar su decisión de anular los cuestionados formularios, imponiendo la decisión colectiva a la del gobierno municipal. Este poder barrial, capaz de colapsar dos ciudades, El Alto y La Paz, es un funesto precedente para el ejercicio del poder municipal.

Constituye un hito importante para el movimiento social urbano de la ciudad de El Alto el contundente paro de 24 horas del día jueves 2 de octubre de 2003, en repudio a la masacre perpetrada el domingo 21 de septiembre en las localidades de Warisata y Sorata. Después de los levantamientos indígenas del Altiplano-valle norte de La Paz en 2000 y 2001 (Mamani, 2012), el gobierno de Sánchez de Lozada no dudó en utilizar la fuerza militar para desbloquear el camino carretero bloqueado hacía 20 días. El resultado fue la muerte de cinco personas: cuatro aymaras y un soldado (Mamani, 2004a), causando una indignación colectiva que se expandió como reguero de pólvora por todo el país. Se podría decir que era el comienzo del dramático final del gobierno de Gonzalo de Sánchez de Lozada. El hecho que más indignación causó fue la muerte la niña Marlene Rojas, que se había asomado a la ventana de su casa de adobe para mirar lo que ocurría a su alrededor cuando, desgraciadamente, fue alcanzada por una bala de arma de guerra. En la ciudad de El Alto este hecho acrecentó los sentimientos antigubernamentales.

La diferencia entre lo rural y lo urbano desapareció y surgió un sentimiento colectivo de pertenencia a una misma realidad social. Las condiciones de las interrelaciones entre lo urbano y rural dadas en las fiestas y en la vida social cotidiana o de los fines de semana se convierten en la referencia colectiva y directa de pertenecer a una misma realidad social e histórica. Y esa relación se hace fundamental porque teje sentidos de “hermandad étnica” entre lo rural y lo urbano. Ambos pertenecen al gran mundo aymara.

Paralelamente, desde hace más de dos semanas, la dirigencia aymara llevaba a cabo una huelga de hambre en Radio San Gabriel. Esta medida había sido asumida en demanda de la liberación de Edwin Huampu, autoridad comunal de la provincia Los Andes, acusado de ser el principal instigador del linchamiento de dos abigeos de ganado en la comunidad

de Cota Cota. Los huelguistas negaban la participación de Huampu, y por ello la huelga de hambre de las autoridades indígenas del departamento de La Paz. A la postre, este fue otro de los hechos que detonaron el levantamiento social de octubre. Dicha huelga estaba encabezada por Felipe Quispe, el Mallku, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Este sector llegó en marcha desde Huarina el 7 de septiembre, junto con un otro grupo proveniente de Caracollo, encabezado este último por Roberto de la Cruz, de la COR de El Alto.

El Alto, una vez más, es un espacio en el que empiezan a concentrarse diferentes movimientos sociales. Cada uno, aunque por separado, ubica a esta ciudad como un espacio estratégico desde donde influir y activar respuestas a sus demandas. En este contexto, adquiere importancia el paro de 24 horas acordado el 29 de septiembre y llevado a cabo el 2 de octubre. Aquel día, tal como el 15 y el 16 de septiembre, se articulan estrategias de acción y movilización barrial. Además, se anuncia que los alteños enviarán productos y ropa a los familiares de los caídos y heridos en Warisata, ubicada en la provincia Omasuyu. Este es uno de los primeros momentos serios de interrelación política entre la ciudad y el campo. De la misma manera, los mercados de la ciudad de El Alto habían decidido recolectar alimentos para enviarlos a dicha localidad. De este modo, los comerciantes de los mercados de la ciudad muestran su abierto apoyo a los warisateños. En síntesis, se aglutinan diversas fuerzas sociales que repudian la masacre ocurrida en el Altiplano-valle norte de La Paz. Por esto, el día 2 de octubre:

El Alto vivió una situación casi semejante al lunes 15 y martes 16 de septiembre [...] Ayer la medida se cumplió en protesta por los hechos de Warisata y en apoyo al movimiento campesino y a las reivindicaciones de la UPEA (*El Alteño*, 03/10/03).

La relación complementaria entre la ciudad y el campo, como ya hemos mencionado, se hace más notoria por este conjunto de acontecimientos. Los habitantes de la ciudad de El Alto y de La Paz muestran su apoyo –como no lo habían hecho desde hacía tiempo– a los indígenas del campo. Se articula aquello que la gente denomina el “llamado de la sangre”, para reconocerse como iguales en las relaciones sociales. Lo que finalmente une a los de la ciudad y el campo son los factores de etnicidad y cultura: ambos son indígenas aymaraquechuas. Unos trabajan la tierra, otros son comerciantes, albañiles, mineros o profesionales.

2.3. Paro indefinido del 8 de octubre

Luego de estos contundentes hechos, el día lunes 6 de octubre, después de cumplir exitosamente el paro del día 2 de octubre, se declara un paro cívico indefinido en toda la ciudad. La medida se anuncia para el miércoles 8 de octubre, sin fecha límite. Según los vecinos, puede durar el tiempo que sea necesario. Y así fue: duró diez días y tal vez pudo haberse extendido por más tiempo. Mauricio Cori, presidente de la FEJUVE alteña en ese entonces, dijo al anunciar el paro: “A partir de las 00.00 de mañana (miércoles 8) la ciudad de El Alto va a paralizar una vez más para que tengamos respuestas favorables a las demandas de la ciudadanía” (*La Razón*, 07/10/03).

Las condiciones sociales y políticas estaban dadas –como muestra lo que había venido sucediendo hasta entonces– para un paro indefinido. Además, cada día aumentaba el cuestionamiento al gobierno central por la designación en el Parlamento del nuevo Defensor del Pueblo, Iván Zegada La Fuente, vinculado con el MNR (quien debió renunciar a su cargo luego de la caída de Sánchez de Lozada). Por otra parte, en Los Yungas se venía realizando con mucha fuerza el bloqueo de caminos, al igual que en el Altiplano y los valles del norte de La Paz, donde ya existía una paralización total de las actividades y los caminos (esto desde hacía más de tres semanas).

El desacuerdo casi generalizado para no vender gas por Chile fue posiblemente el mayor factor de articulación social. Se planteaba la industrialización del gas en territorio boliviano. También se manifestaba que había llegado la hora de hacer respetar a la ciudad. Además, se evidenciaba importantes grados de corrupción estatal-municipal. Todos estos hechos confluyeron en un mismo rumbo. Para la gente, esto se convirtió en el referente de un solo cuerpo social, esta vez politizado. Las medidas fueron coordinadas entre la FEJUVE de El Alto, la COR de El Alto, gremiales, estudiantes y docentes de la UPEA y los maestros rurales. Hacía mucho tiempo que estas organizaciones no se habían unido como entonces; por el contrario, se habían caracterizado por sus profundas divisiones internas y por sus disputas para hegemonizar las luchas sociales o, simplemente, para acceder a las prebendas y beneficios. En este sentido es importante el trabajo de Marco Quisbert (2003), que muestra que la FEJUVE era escenario de una importante clientelización partidaria, particularmente entre sus dirigentes.

La unidad surgió de escuchar el pedido de los barrios para estructurar alianzas interinstitucionales y así defender los intereses de la ciudad.

Como muestra de este hecho, el primer día del paro fue contundente. Hubo una masiva participación de los diversos sectores, fundamentalmente por la ocupación de los territorios barriales desde dentro de los mismos. De pronto la palabra ‘vecino’ connota un grado de cercanía y “hermandad barrial”. Estas relaciones se fundan principalmente en las permanentes interrelaciones familiares que surgen en la cotidianidad social y en los momentos festivos.

La Ceja, la avenida Juan Pablo II, la 6 de Marzo, Río Seco, Ventilla, Senkata y Cruce Villa Adela se muestran como los lugares estratégicos y activos de la movilización vecinal. No hay ninguna actividad comercial, bancaria, laboral, etc. Las calles, avenidas y las plazas están ocupadas por gente a pie o en bicicleta, junto a los masivos grupos de bloqueadores y los que protestan activamente. El titular del periódico *El Alteño* (09/10/03), en clara referencia a este hecho, afirma: “Otro paro cívico contundente. Ciudad intransitable [de] ciudadanos heridos y enfrentados”.

Durante este día se producen los primeros enfrentamientos con la Policía en diferentes partes de la ciudad, dejando algunos heridos por gases y balines de goma e incluso por armas de fuego. La Ceja, junto con la Juan Pablo II y Senkata, son los espacios geográficos donde se llevan a cabo dichos enfrentamientos entre policías y un conglomerado de jóvenes, trabajadores y vecinos. La actuación violenta de las fuerzas del gobierno, en lugar de detener la acción de protesta de las juntas vecinales, la conduce hacia el interior de la ciudad. Cientos de mujeres y hombres empiezan a controlar las calles, avenidas y plazas, tal como se pudo observar en mayo-junio de 2005. Al principio, aparentemente sin mucha importancia. Se llevan a cabo una gran cantidad de reuniones barriales en distintas partes de la ciudad, que al final se convertirán en espacios de las multitudinarias decisiones colectivas. Así, en toda la ciudad tiene lugar un conjunto de actos y barricadas. Aunque durante este día las personas movilizadas llenan las calles y avenidas, hay poco uso de piedras, arena y ladrillos; esto vendrá más tarde.

Pese al acúmulo de experiencia de acción colectiva, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no lo ha comprendido como un hecho importante, y en tono irónico lo catalogó como “insignificante”. Se lo consideró un acto de pequeños “grupos radicales”. En 2005, el presidente Carlos Mesa también había calificado como un acto de minorías la protesta alteña por la nacionalización.

La capacidad de acción y de decisiones autónomas de las juntas vecinales se estaban convirtiendo en factor de articulación sociopolítica. Lo que se temía: la “guerra del gas” había empezado, tal como muchos

sectores y analistas habían anunciado. Se muestra esta insurrección como algo imprevisible para los órganos del poder del Estado. A la movilización alteña y a la de los aymaras del Altiplano-valle norte de La Paz se sumaron también los cooperativistas mineros de Huanuni, que llegan a Ventilla durante aquel día para luego juntarse con las comunidades aymaras y con los vecinos del sector. Después de mucho tiempo, como se adelantó, el factor de clase y etnicidad se había encontrado como un potencial campo de interrelaciones políticas. El momento culminante de este hecho fue la violenta agresión gubernamental a ambos sectores. Lo indígena rural-urbano y lo minero –este último como referente de la clase obrera, aunque se trataba de cooperativistas– sufren en conjunto este primer acto importante de violencia estatal. Por esto se hacen significativas las interrelaciones entre la clase como presencia y discurso y la condición real y práctica de lo indígena. Aunque para muchos esto es un factor secundario, para nosotros es importante considerarlo como uno de los elementos de interrelación social sustancial en octubre.

2.4. Ventilla y represión militar

En la mañana del miércoles 8 de octubre Ventilla se convierte en el escenario de la violenta intervención policial-militar. El gobierno intervino en contra de la marcha y del bloqueo del camino carretero El Alto-Oruro. Dos jóvenes resultan heridos con arma de fuego: Cristina Mamani, de 17 años, y Norberto Condori, de 22, quien, según los medios de comunicación, es estudiante de la UPEA. Las relaciones de conflictividad que venían desarrollándose entre el gobierno y los diferentes barrios se hacen patentes en Ventilla, que de pronto se convierte en el referente de las movilizaciones sociales urbano-rurales. Junto a los mineros y vecinos, fueron violentamente agredidos los comunarios del cerro de Ventilla, Amachuma, Chañocahua, Tuni, Parcopata, Ipaca y Ayma, que habían acudido para hacer cumplir el paro indefinido tanto en la ciudad de El Alto como en las provincias de Omasuyos y Larecaja, del Altiplano norte de La Paz.

Esta agresión es el principio de la masacre y del levantamiento de octubre. Los familiares y personas heridas manifestaron su repudio y consternación ante tal hecho:

Los familiares, con lágrimas en los ojos e indignados por la forma en la que procedieron los efectivos, mostraron las prendas de vestir del joven

baleado, totalmente ensangrentadas y con un gran orificio, a la vez que demandaron “justicia para los pobres”, acusando al gobierno de “asesino” (*El Alteño*, 09/10/03).

Mario Maraza, dirigente de una de las comunidades de este sector, ilustra claramente cómo ocurrieron los hechos en el lugar: “Parecía que estaban jugando tiro al blanco con nosotros, no habíamos ni siquiera empezado los bloqueos, cuando los militares nos rodearon y comenzaron a disparar” (*El Alteño*, 09/10/03).

Se crispan los ánimos de los manifestantes en el lugar y en toda la ciudad de El Alto. En algunos medios de comunicación se habla de la “masacre de Ventilla”. La información sobre estos actos de violencia estatal se esparció en todos los barrios de la ciudad y en las áreas rurales. El primer día de paro indefinido ya tiene un efecto: lo único que logró esta violenta represión fue masificar la protesta social. Desde el principio del conflicto, el gobierno demuestra una actitud inflexible y autoritaria.

La importancia de este lugar para los indígenas es que en las cercanías de Ventilla se ubica un lugar considerado sagrado: la Waraq Achachila o Apachita. Allí acuden permanentemente los alteños y las comunidades aledañas para actos rituales. Durante todo el mes de agosto (y también el resto del año) se realizan allí actos rituales para el bienestar. El gobierno y los militares-policías, al parecer, ignoraban este hecho.

El gobierno argumenta que debía mantener la circulación vehicular y resguardar el orden. Los alteños afirman, por el contrario, que la acción obedece a una reacción al paro cívico indefinido. Al final, este se convierte en confrontación y en uno de los momentos decisivos de las acciones colectivas. De aquí en adelante la acción vecinal se irradia a todos los espacios de la vida social. Se paralizan todas las actividades sociales. Zona por zona y distrito por distrito, la gente se va involucrando en los actos de protesta y levantamiento general de la ciudad. Como nos responde uno de los entrevistados cuando se le pregunta qué había provocado que su barrio ingresara al movimiento:

Los motivos han sido que los militares y policías estaban metiendo bala y gases a nuestros hermanos... esta orden viene desde el gobierno de Sánchez de Lozada, ese ha sido asesino, maleante. Por eso hemos entrado a la lucha para que el pueblo jamás sea vencido (entrevista a un vecino del sector de Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004).

En cada distrito y barrio se siente una indignación colectiva por las acciones violentas, tanto en Ventilla como en diferentes partes de la

ciudad de El Alto. El 10 de octubre la violencia se intensifica; durante este día mueren entre Senkata y Ventilla el minero José Luis Atahuichi y un vecino del sector, Ramiro Vargas. El día anterior habían arribado los cooperativistas mineros de Huanuni para unirse a las movilizaciones de El Alto. El gobierno, tratando de desligarse de estas muertes, acusó a Ramiro Vargas de intentar robar uno de los almacenes del lugar, aunque luego se aclaró que a este le dispararon los soldados al tratar de cruzar la avenida camino a Oruro. De José Luis Atahuichi, se afirmó que él mismo se mató al tratar de manipular una dinamita. Los testigos declararon que, por el contrario, fue muerto por una granada de guerra lanzada por los militares, que le destrozó gran parte del cuerpo. Se agigantaba la violencia en la ciudad, se entrecruzaban los tejidos culturales y sociales, se amplificaban los grados de hermandad y vecindad como factores de movilización social. Así lo manifestó un vecino que participó activamente en las movilizaciones sociales de octubre:

Mi zona empezó bloqueando la avenida o carretera a Oruro. Cuando los mineros y nuestros hermanos campesinos empezaron a llegar, bloqueamos con piedras y maderas, especialmente en el cruce a Ventilla. Empezamos a quemar llantas en medio de la carretera. Nos organizamos por turnos. Unos bloqueaban por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche. Casualmente fuimos todos los vecinos juntos (entrevista a un dirigente del sector de Ventilla, 9 de julio de 2004).

Se articulaban las fuerzas internas de las organizaciones vecinales. De aquí en adelante adquieren mucha más fuerza las acciones interbarriales y las comunidades rurales. Se hace explícita la idea de que si un barrio actúa por separado, no tendrá la potencia necesaria para enfrentar a las fuerzas del gobierno. En ese sentido, son necesarias las relaciones interbarriales fundadas en las experiencias de organización social de los barrios. Esta articulación interbarrial se muestra entonces como una forma efectiva de acción paralizante de la ciudad. La lógica colectiva de la acción social adquiere mayor sentido y profundidad. Bajo estos mecanismos, la ciudad de El Alto se levanta contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La muestra fehaciente del hecho es que la ciudad está totalmente paralizada y tomada por sus habitantes.

Desde esa condición se ha empezado a influir y afectar decididamente sobre la ciudad de La Paz y sobre el país entero. El levantamiento de El Alto resulta ya incontrolable para el gobierno. En la ciudad de La Paz se siente la escasez de combustible; no hay productos agrícolas en

los mercados de abasto; la gente protesta abiertamente por la escasez de productos, como la carne. Como consecuencia lógica de tal hecho, la hoyada también se paraliza poco a poco. El gobierno declara estado de emergencia nacional, orientado particularmente al departamento de La Paz. Argumenta que esta medida es para proteger la seguridad de la población y para resguardar al gobierno democráticamente instituido. Se muestran convencidos de que con esta medida pueden controlar la “seguridad” y el “bienestar” de la población. Esto no fue así; fue una decisión para atacar abiertamente con fuerza militar a una ciudad de más 600 mil habitantes.

2.5. Militarización de la ciudad de El Alto

El día 11 se oficializa la militarización de la ciudad de El Alto bajo cuatro argumentos. Primero: para “proteger” a los vecinos, segundo: para velar por el orden, tercero: para dar “seguridad” a la población, además de garantizar el orden público, y cuarto: para preservar la democracia (*El Alteo*, 12/10/03). El Decreto Supremo 27209 es la referencia directa de este hecho. En efecto, ante la imposibilidad de abastecer de combustible líquido (gasolina, diesel, gas licuado) a la ciudad de La Paz, el gobierno recurre a la violencia militar. Autoriza a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la “buena” distribución de combustibles en todo el país, principalmente en el departamento de La Paz. Esta autorización tiene un efecto inmediato en el radical y evidente incremento de la violencia militar en la ciudad; las calles de El Alto se tiñen de sangre indígena y popular. Durante el estado de emergencia nacional se registraron más de 70 muertos y 400 heridos.

Para un conocimiento cabal de este decreto supremo, lo citamos *in extenso*:

EL CONSEJO DE GABINETE DECRETA:

ARTÍCULO 1. (Emergencia Nacional). Declárase emergencia nacional en todo el territorio de la República, para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población, a través del resguardo de instalaciones de almacenes, asegurar el transporte de combustible por camiones cisternas y otros y la distribución y suministro en estaciones de servicio por el tiempo de hasta noventa días.

ARTÍCULO 2. (Orden expresa). En cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992, se ordena a las Fuerzas

Armadas de la Nación hacerse cargo del transporte de camiones cisternas y otros, resguardar instalaciones de almacenaje, poliductos, estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura destinada a garantizar la normal distribución y suministro de combustible líquido a la población en el departamento de La Paz. A tal efecto el Ministerio de Defensa establecerá los mecanismos necesarios para su ejecución.

ARTÍCULO 3. (Garantías). Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del presente decreto, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano.

El señor ministro de Estado en el Despacho de Defensa Nacional queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de octubre del año dos mil tres (Decreto Supremo No. 27209, 11 de octubre de 2003, firmado por Gonzalo Sánchez de Lozada y todos sus ministros).

El decreto supremo tiene tres ejes de acción fundamentales. El primero se refiere a la declaratoria de la emergencia nacional para la distribución de combustibles y el resguardo de las instalaciones a cargo de las Fuerzas Armadas. El segundo ordena a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la distribución, el transporte del combustible y la seguridad de las instalaciones donde se encuentran estos productos. El tercer componente está relacionado con las garantías que ofrece a quienes resulten afectados como producto del cumplimiento del este decreto.

Este decreto se aplica inmediatamente. El día sábado 11 se realiza otro operativo policial-militar para trasladar gasolina y garrafas de gas hacia la hoyada. Todo el trayecto de Senkata-Ceja y la Autopista es escenario de una dura y violenta represión militar y policial. Se ha disparado indiscriminadamente contra la población que protestaba en la avenida 6 de Marzo y en los barrios aledaños. En este operativo, a la altura de Rosas Pampa, muere el niño Félix Mulliricona. Además, hay una gran cantidad de heridos de distinta gravedad. El hospital Corazón de Jesús del Kenko estaba lleno de heridos. La avenida 6 de Marzo y Santiago II son los lugares más castigados por la violencia militar. Los militares llegaron hasta la plaza El Minero para gasificar y disparar contra los vecinos. Allí también cayeron varios heridos y muertos. La violencia estatal fue indiscriminable, comenzando a disparar directamente contra los manifestantes sin distinguir entre niños, mujeres y ancianos. Se produjo una verdadera masacre. En el norte de la ciudad (zona Ballivián) se repitieron los mismos

actos violentos, con la muerte del vecino Walter Huanca. Este fue herido por una granada de gas en la cabeza, y falleció en el Hospital General; era padre de tres niños (*El Altoño*, 12/10/03). Cientos y miles gritan a una sola voz: “¡Goni asesino!, ¡Goni asesino!”. En el sector Ballivián está asentado el Regimiento Policial No. 5, al que se había rodeado para impedir que saliera a ejercer más violencia en el sector y en la ciudad. Definitivamente, el gobierno actúa bajo la lógica militar.

La indignación colectiva crece incontenible. Muchos se preguntan: “¿Cómo es posible que nos meta bala este gobierno?”. Es algo inaceptable para la población movilizada que reclama la no exportación del gas por Chile y un mayor o mejor desarrollo para la ciudad de El Alto. También se argumenta: “Si ni siquiera tenemos gas nosotros, como para pensar en exportar”. Muchos sienten que su lucha es justa y patriótica, por el rechazo a la venta de gas a los chilenos, que usurparon el Litoral hace más de cien años. A partir de este hecho se amplía y se agiganta definitivamente la articulación interbarrial y el levantamiento total de la ciudad.

2.6. Articulación interbarrial y masacre del 12 y 13 de octubre

En base a este conjunto de hechos hay una profunda articulación interbarrial: de las 500 juntas vecinales que tiene la ciudad de El Alto, después de los días 10 y 11 de octubre se articularon fácilmente 400. Poderosas fuerzas para paralizar la ciudad y coordinar acciones.

Como adelantamos, en Senkata se encuentran los depósitos de los combustibles que alimentan a la ciudad de La Paz. En la tarde del sábado 11 varias cisternas llevan gasolina a esta ciudad a punta de sangre y fuego. Miles de vecinos tratan de detener este traslado. Por la avenida 6 de Marzo se producen duros y sangrientos enfrentamientos. La violencia del 8, 9 y 11 de octubre ha sido ampliamente superada por la violencia estatal, que se hace peligrosamente cotidiana. Uno de los barrios del sector sur de la ciudad, en su propia cronología de los hechos, da cuenta de cómo fueron violentamente reprimidos aquel día.

Por la noche los compañeros realizaron la vigilia en la plaza El Minero y Av. 6 de Marzo para impedir el paso de cisternas y camiones de gas, pese a nuestra presencia los cisternas y camiones pasaron dispersándonos, disparando balas de guerra y balines, causando heridos (Documento de las juntas vecinales, 2003).

Se conoce de la existencia de varios heridos y muertos. Algunos de los muertos son Carmelo Mamani, Vidal Pinto y Efraín Mita, en el sector Senkata. A la altura de la avenida Estructurante, por ejemplo, se ha disparado contra los inofensivos anaqueles de venta del lugar, con el saldo de dos vecinos muertos. Desde ese momento se hace un clamoroso llamado a los paceños a no consumir gasolina manchada con la sangre alteña. Se intensifican los llamados de solidaridad barrial a través de las radioemisoras contra el gobierno. El día más trágico de la masacre contra la ciudad de El Alto es el domingo 12 de octubre. En la mañana se produce la muerte de tres alteños en el sector de Senkata y más tarde son muertos otros tres en el norte de la ciudad.

Veamos con más detalle lo que ocurrió en el sector norte. El regimiento Chúa había decidido ingresar a esta parte de la ciudad por el puente de Río Seco en dirección a los barrios Tawantinsuyo, Villa Ingenio, zona Brasil, Ballivián y Los Andes. Aproximadamente a las 3 de la tarde se produjo una impresionante balacera sobre el puente de Río Seco y después en la propia Villa Ingenio (Unidad Vecinal I). Los militares dispararon indiscriminadamente contra todo aquel que se movía. Así lo cuenta una de las autoridades vecinales del sector norte, en esta narración que transcribimos *in extenso*:

Mi persona ha sido parte de la Comisión del defensa de los recursos naturales del gas [...] nos ha afectado a la zona, Unidad Vecinal 1 y del distrito 5. Este lugar es el más afectado de todas las zonas. Un 12 de octubre nosotros estábamos en llanto y dolor, así también las wawas, las señoras, más que todo estaban traumatadas [...] especialmente nos estaban buscando esas noches. Nos estaban buscando a los dirigentes, más que todo a mi persona. Ya estaban queriendo secuestrar, así ¿no? Entonces por causa de eso mi calle misma pasó el dolor y llanto. Aquí había 27 muertos y 40 heridos, siempre por esta zona. Pero nosotros hemos decidido cívicamente [...] ha sido un allanamiento. Sorpresivamente por las calles que no hemos bloqueado, ni siquiera hemos pensado que iba a pasar por las calles Gualberto Villarroel, Julián Apaza. Pero por ahí han pasado siempre estos militares. Han venido desde abajo con tiroteo inmediatamente en casas [...] en las casas hay huecos, agujeros hasta traspasaron las puertas, destrozando. Incluso las puertas de los dirigentes. Por esto nosotros estábamos bien doloridos esos días, esas noches. Estábamos en un llanto de dolor en la plaza Elizardo Pérez [...] también en la parroquia Redentor. Ahí se han velado más de 14 muertos [...] es el motivo para nosotros, ese es el dolor.

Se ha centralizado en este lugar de Villa Ingenio Unidad Vecinal 1 [...] hemos hecho videos y casetes. Todo eso era lamentable para nosotros.

Cuando recordamos, a lo menos mi persona, hay veces llanto y dolor, no puedo ni voy a poder olvidar. Mis ojos lo han visto siempre... por eso a veces decimos aquellas autoridades, hasta el presidente, aquellos que han subido con nuestra fuerza, se han abanderado de nosotros [...] siempre vamos a recordar en esta zona y siempre lo vamos a hacer en donde que sea cómo ha pasado, cómo ha sucedido el día 12 de octubre. A nosotros nos ha allanado por la extranca. De atrás nos ha allanado, aquí hay mayoría son mineros. Somos del lado de provincia Los Andes, provincia Omasuyus. Más que todo ellos se han parado fuerte [...] Mi persona no tengo miedo, aunque me estén buscando, lo que sea. Si quieren secuestrarme, que me secuestren. Sobre mí habrá millones y millones que hay en esta zona que son exdirigentes [...] (entrevista a uno de los dirigentes de Villa Ingenio, 22 de agosto de 2004).

En el Seminario-memoria realizado en la Unidad Vecinal 1 de Villa Ingenio, nuestro entrevistado cuenta cómo sucedieron los hechos:

Pero hay un dolor que lo hemos recibido. En aquí mismo está uno de nosotros que se llama Villca [...] yo siento el dolor todavía. Cuántos, si este dolor hubiéramos visto como hoy día el año pasado, estábamos en llanto y dolor. Estábamos gritando en este lugar, ahorita estamos sentados, pero en este lugar estábamos llorando, gritando, lagrimeando. Había muertos que estaban aquí extendidos. Aquí tengo una muestra. Aquí está sentado junto con nosotros. Aquí esta nuestro hermano que todavía tiene la herida, inhábil. Ni siquiera ve un lado de su ojo [...] (Exposición de Mallku Qurawas en Seminario-memoria a Un año de la Masacre, Villa Ingenio, 12 de octubre de 2004).

Este vecino de apellido Villca perdió un ojo. Historias como estas se han repetido en varios lugares del territorio de la ciudad de El Alto. Según el relato de otro entrevistado, en el puente de Río Seco cercano a Villa Ingenio, la acción militar fue extremadamente violenta:

Ya [...] los militares estaban [...] disparando. Estaban disparando contra nosotros. La gente, los jóvenes [...] nos tratamos de defendernos con piedras, con petardos, con todo lo que estaba a nuestro alcance. Y tal fue la lucha en este puente del Río Seco. También hubo varios caídos [...]. Justo a mi lado a uno le dieron ahí, o sea un balazo justamente en la parte del estómago. Vi que estaba sangrando y gritando ese muchacho. Era terrible. Justamente en ese momento yo no podía hacer nada, estaba con miedo [...] pero también me acuerdo de que la gente estaba tan, tan enfurecida que arrojaban piedras, hacía todo [...]. Me acuerdo también que una muchacha estaba encabezando, tratando de hacer retroceder a

los militares, tirando piedras, gritando, diciendo: “vengan, vengan no se escapen”, así. La cosa se ha complicado terriblemente. Ellos ya disparaban ya a nosotros directamente, no tenían piedad. También decían que ellos no son militares bolivianos, sino que ellos son chilenos, decía la gente: “militares chilenos están aquí entrando a Bolivia”. Yo pensé en ese momento que ellos son chilenos, ellos estaban disparando contra nosotros, nos estaban matando (entrevista a un vecino del sector norte, 14 de agosto de 2004).

Durante el día 12 de octubre murieron aproximadamente 25 civiles y un soldado, Cigmar García (*La Razón*, 13/10/03). Durante este día no solamente El Alto sufre una masacre; en la ciudad de La Paz se registran otros 25 civiles y una gran cantidad de heridos de distinta consideración (*El Diario*, 14/10/03). Las comunidades de los valles de Río Abajo y las comunidades de Uni, Apaña, Ovejuyo y los barrios populares e indígenas ubicados en la parte sur de La Paz también suman muertos. La zona sur y las comunidades de este sector la habían cercado para hacer escuchar su protesta. En ese intento fueron acribillados sangrientamente por fuerzas militares. Esto logró que el levantamiento indígena-popular se acrecentara. Es una masacre contra una población que simplemente protesta.

La zona sur o los barrios marginales de este sector de la ciudad de La Paz y el centro de la ciudad se convierten en nuevos escenarios de violencia junto a la zona norte de la ciudad de El Alto. En Chaskipampa, Ovejuyo, Cota Cota, Obrajes, Mallasa, Garita de Lima, plaza Equino, San Francisco, Av. 16 de Julio y los alrededores del Palacio de Gobierno se producen nuevos enfrenamientos y una nueva masacre indígena de parte del Estado (Mamani Ramírez, 2004: 147).

El temido cerco a la zona sur de La Paz se había cumplido pese a la masacre perpetrada ese día. En toda esta área viven aymaras urbanos y rurales. La lógica de que “todos unidos podemos vencer” se transmite y se impone dentro y fuera de cada barrio. “Un barrio o junta de vecinos por separado no tiene fuerza para hacer frente las fuerzas del gobierno”, se afirma. Se fortalecen los sentidos de interrelación de los diferentes barrios de la ciudad. En cada distrito, que es la unidad media entre el barrio y la FEJUVE, se organiza una gran cantidad de actos de protesta social. Varios entrevistados dan a conocer este hecho:

Las acciones directamente las hemos tomado mediante nuestros secretarios, o sea dirigentes de zonas. Ellos salían y la gente salía, todos

participaban porque todos sentían el dolor y estaba llevando a toda la gente a tomar las calles y cavar zanjas para no dejar pasar movilidad. Si ellos estaban matando, nosotros los íbamos enfrentar (entrevista a un vecino de sector de Río Seco, 17 de agosto de 2004).

Cada distrito y cada barrio estructuran amplias relaciones de coordinación y de solidaridad urbana y rural. Se reafirman los sentidos de pertenencia territorial porque cada espacio de la ciudad es controlado por estas interrelaciones barriales. Por esto se expande el bullicio de la multitud como un poder alternativo a los sistemas de organización territorial del Estado. A ello se suman las relaciones de parentesco distribuidas en toda la ciudad, porque cada una de las familias está dispersa en ella. La preocupación en sentido de “qué habrá pasado con el tío, la tía, los primos o los hermanos” vale para todos. En algunos casos urge ir a visitar a los parientes que han caído heridos o a la familia de los que murieron. Es el caso de Marco, un joven que salió del sector de Villa Adela hacia Río Seco. Al atardecer no había retornado a su casa ni había llegado donde su pariente: lo mató una de las balas disparadas por el ejército. Casos como este se multiplican. Por ello hay una profunda interunificación de los barrios, como se muestra nuevamente en el siguiente extracto de entrevista:

Nos organizamos por barrios tanto como por manzanos. Porque todos salimos a participar en ese momento. Había mucha gente entre nosotros, conocida y desconocida. Teníamos solo una plaza, pero resulta que toda la avenida Unión al bajar al Kenko, entre la avenida Bolivia y al bajar al Kenko son más de 14 zonas que en esa avenida caben. Pero de toda esa zona todos era como si nos conociéramos, o sea de vecino a vecino íbamos avanzando y la organización se ha visto completa sin necesidad de que los dirigentes o que el presidente de zona esté ahí. Todos han salido a participar porque cuando nosotros bajamos con heridos, ellos daban paso. Decían “ayuda, ayuda” y nos cubrían a los costados, eximiéndose a los que estaban disparando y del otro lado nos cubrían con sus propios cuerpos como barreras para que nosotros podamos pasar al hospital, pero no respetaban ni eso, seguían disparando. Por esa balacera que se daba había una unificación total de todas las zonas. A parte de zonas también había colaboración y unificación de manzanos, o sea zona barrial que se han organizado. Y esa ha sido la organización directa habiendo una participación total de todas las zonas aledañas que estaban más alejadas, hermandad se podría llamar (entrevista a un dirigente de familiares de los fallecidos, 17 de agosto de 2004).

Unos y otros colaboran en auxiliar a los heridos y a los familiares que han sufrido la desgracia de perder a sus seres queridos. De esta manera

se tejen sentidos de identidad barrial dentro de las zonas y relaciones de afecto o hermandad entre las diversas familias, por el peligro que todos corren ante la violencia gubernamental, que se ha hecho cotidiana. Se coordinan acciones y se buscan respaldos mutuos para protegerse de los posibles ingresos de las fuerzas represivas, después de lo ocurrido en Villa Ingenio, Santiago II y Río Seco. Se teje un complejo, pero efectivo, sistema de acción interbarrial. Se coordinan acciones, se intercambia información sobre lo que ocurre en uno u otro distrito. Se escucha las radioemisoras para saber lo que ocurre en toda la ciudad. Es decir, se diseminan sentidos de pertenencia colectiva dentro de los barrios y de la misma ciudad de El Alto.

Mediante esta lógica la gente se siente por lo menos segura sobre lo que ocurre en cada uno de los barrios. También bajo este sistema de acción colectiva se hace un efectivo control de los barrios que no estaban cumpliendo con el paro cívico indefinido. Los barrios que sobre todo el 9 y el 10 de octubre no habían ingresado plenamente al paro son presionados a unirse al levantamiento de la ciudad de El Alto. Parte de esta presión consiste en hacer correr el rumor de que “si un barrio no entra en la lucha se lo va saquear”. Pero después de la masacre del 12 y 13 de octubre, de forma voluntaria todos los barrios son actores activos en el levantamiento de la ciudad de El Alto. Así se difunde el sentido de pertenencia colectiva a los espacios públicos y privados de la ciudad. Se tejen y se amplían extraordinarias formas de acción colectiva, como la de hacer correr el rumor de “que han ingresado soldados chilenos a la ciudad de El Alto”, o que en la ciudad de La Paz se había instalado un gobierno chileno personificado en el propio presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.

En ese contexto, se armaron poderosas redes de acción y sistemas de comunicación en diferentes niveles. Las radioemisoras que trasmitían los acontecimientos en forma directa ayudaron a que esto se agigante. El sistema de Radio Televisión Popular (RTP), la Red Erbol y los canales de televisión 21 y 36 jugaron un rol fundamental. Muchos de estos medios fueron luego amenazados por el gobierno. También entraron en el dial las radioemisoras clandestinas que se habían sumado abiertamente al levantamiento de El Alto, y que luego desaparecieron. Al mismo tiempo, se sumaron los propios sistemas de comunicación interbarrial, como el silbido con pitos o silbatos y los golpes a los postes de luz para informar sobre el peligro o la presencia de las fuerzas militares en el lugar. Este sistema ayudó asimismo a alertar sobre la presencia de delincuentes en las zonas.

De este modo se constituyen lo que aquí llamamos microgobiernos barriales. Cada espacio de la ciudad, a través de sus estructuras de organización barrial, se había convertido en un centro de producción de decisiones colectivas para tejer un poder que inmoviliza a la ciudad y al gobierno. Cada espacio de la urbe fue tomado por las diferentes juntas vecinales y por los Comités de Defensa del Gas. Bajo estos mecanismos de acción colectiva se empezó a corroer el poder gubernamental-estatal; en pocos días el gobierno de Sánchez de Lozada se hizo ilegítimo y detestado. Los argumentos sobre la necesidad de mantener la transitabilidad en la ciudad, la seguridad de la población y el abastecimiento de combustibles se hicieron insoportables. Ninguno de estos argumentos tiene sentido para la población levantada. Por el contrario, se exige la dimisión inmediata del presidente de la República. Debido a este hecho, Villa Ingenio y la plaza Elizardo Pérez se convierten en escenarios particulares de la memoria. Los tomamos para ejemplificar varios casos similares ocurridos en la toda la ciudad.

2.7. Escena y memoria: Villa Ingenio

Villa Ingenio, como se ha mencionado, se había convertido en el centro de la violenta acción militar, pero también es el espacio de organización de las acciones beligerantes realizadas alrededor de la plaza Elizardo Pérez y la parroquia Cristo Redentor. Los vecinos actúan de forma extraordinaria encabezados por sus dirigentes, el acompañamiento del cura Wilson Soria y la estructura de la Iglesia católica para oponerse abiertamente a la intención de vender el gas por Chile. La plaza Elizardo Pérez se ha convertido en el espacio de esta organización barrial. Aquí se llevan a cabo reuniones de emergencia y evaluaciones diarias para posteriormente configurarse como espacio de acciones sociales, antes y después de la masacre. La gente habla en aymara y escenifica actos de ritualización tanto católica como indígena, mediante misas en la iglesia y rituales ancestrales. Bajo ese marco, el liderazgo de la zona es muy notorio.

En principio, se había nombrado una comisión de emergencia para la Defensa del Gas y los recursos naturales, compuesta por el Mallku Qurawas⁹ (el Mallku es la principal autoridad del ayllu y *qurawa* es honda

9 Denominación en aymara del líder encargado de la Comisión en Defensa del Gas y Recursos Naturales, que posteriormente se convierte en el referente de la memoria de los liderazgos indígenas de este sector.

para pelear; en este caso es el presidente del Comité de Defensa del Gas) y un conjunto de mujeres y hombres. Se comenzó a movilizar toda la estructura de acción colectiva basada en la experiencia de organización y trabajo barrial. La masacre del día 12 de octubre no hizo más que legitimar estos mecanismos de organización barrial. Cuando entraron los militares a la zona y a los barrios aledaños, lograron que la gente se organice de mejor manera. Por esto se territorializa el levantamiento de la ciudad entre la región norte y sur de El Alto. La plaza Elizardo Pérez –más adelante llamada plaza Los Héroes del Gas– y la iglesia Cristo Redentor –como el lugar sagrado de la lucha social– se convierten en el centro de las acciones colectivas porque la zona no tiene otros locales o sedes sociales para estas reuniones o para la organización vecinal.

Villa Ingenio no cuenta con infraestructura propia. De esa manera, la iglesia fue escogida como el lugar para las reuniones, relacionando incluso aspectos subjetivos de lo sagrado o divino. Además, se piensa que lugares como la iglesia no pueden ser violados por las fuerzas represivas del Estado (aunque en la realidad no siempre es así). Entonces se articula un conjunto de elementos simbólicos que hacen del lugar uno de los centros de la defensa del gas. Por esto hoy se ha convertido en una plaza histórica, incluso digna de ser objeto de un estudio más detallado y profundo que el que propiamente se hace en este trabajo. Este y el sector norte de la ciudad fueron los espacios físicos de la resistencia e identidad de la zona.

Ambos espacios (y algunas calles adyacentes) quedaron en la memoria de sus habitantes como lugares históricos y sagrados porque vieron morir en ellos a sus seres queridos y porque son estratégicos y centrales. Es como manifiesta el Mallku Q'urawas en conversación en agosto de 2004: “en este lugar hemos sufrido, hemos llorado, había solo un dios que nos cuidaba, por eso hemos marchado y recordado a nuestros seres queridos. Villa Ingenio ha pasado mucho dolor”. Esta afirmación tiene sentido porque en este lugar se realizó la misa de cuerpo presente para los fallecidos.

El documento de la directiva de la Iglesia católica de El Alto confirma este hecho: “la misa del cuerpo presente, programada para realizar en el templo, se tuvo que realizar en la plaza Elizardo Pérez [...]. No esperábamos la presencia de una multitud. Al final calculamos aproximadamente la asistencia de unas 10.000 personas que acompañaron al entierro” (directiva del clero diocesano de El Alto).

La plaza y la iglesia se convierten entonces en los espacios de organización de la lucha social y de luto y dolor colectivo. Muchos familiares

los recuerdan ahora porque en ellos vieron por última vez a sus familiares. También, como ya se ha dicho, es el espacio de participación de mujeres, hombres, jóvenes y niños que al final constituyeron un verdadero cabildo o asamblea barrial para debatir y emitir acalorados y enardecidos discursos para enfrentar al gobierno y sus violentas fuerzas represivas. Además, es un espacio de control de los vecinos sobre gente extraña o simplemente para la gente que viene de otras zonas a unirse al dolor y la lucha. También en estos espacios se han sacado votos resolutivos para intensificar la lucha social en distintos niveles o espacios de la ciudad. Por su parte, es aquí donde también se ha izado la *wiphala* indígena como una forma de señalar que hay todo un levantamiento general de la ciudad. Es el espacio donde revientan petardos y se hace uso de silbatos u otros instrumentos, para magnificar el poder de las acciones colectivas. Por ejemplo, con este mecanismo se había logrado reunir en menos de media hora a una gran cantidad de vecinos para tomar decisiones conjuntas. Sin duda, este es un espacio central para el llanto y el sufrimiento, como también un lugar donde la gente adquiere valor para luchar sin temor a la muerte. Al parecer, la muerte ha significado todo un compromiso y lealtad con el barrio y la ciudad. Según varios entrevistados, por este hecho llegaban comisiones de apoyo de otros barrios trayendo alimentos y ofreciendo solidaridad barrial.

Después de la masacre del día 12 de octubre, los vecinos se reúnen en una gran asamblea en la que participa la mayoría de los habitantes del Distrito 5 y Villa Ingenio. Seguidamente se emiten votos resolutivos para declarar estado de emergencia ante el rumor de un posible “estado de sitio”. Ante ese escenario, la Diócesis de El Alto hace un llamamiento al gobierno y a los sectores en conflicto para deponer actitudes beligerantes:

[...] Pedimos al gobierno nacional que deje la actitud de intolerancia para establecer un diálogo sincero y honesto, escuchando las demandas del pueblo empobrecido que clama solución a los problemas. También exhortamos a los dirigentes de distintas organizaciones sociales a deponer actitudes de intransigencia para buscar soluciones.

La parroquia Cristo Redentor cumplió una función propia de la Iglesia al buscar una salida democrática al conflicto. Pese a esto, el gobierno continuó actuando sin considerarla, ocasionando la muerte de 67 vecinos y causando una gran cantidad de heridos. Lo que más se recuerda aquí es la masacre. Una señora llegó a la parroquia con la noticia de que en la extranca de Río Seco había muertos y personas heridas.

Se había producido en Villa Ingenio una balacera sin precedentes en la historia de estos barrios. La gente corría despavorida en diferentes direcciones para tratar de protegerse ante la actitud agresiva y genocida de las tropas militares. Inmediatamente la parroquia comenzó a recibir cadáveres y heridos.

La gente, sorprendida, se moviliza y llega a la plaza Elizardo Pérez y a la parroquia para brindar ayuda a los heridos y organizar de mejor manera la resistencia. De pronto la sede de la parroquia se convierte en el espacio de velorio y dolor colectivo. Se velan muchos cadáveres juntos y, al mismo tiempo, se trabaja intensamente tratando de curar a los heridos, que llegan en cantidades. La gente se aglomera para averiguar si alguno de sus parientes ha sido herido o está muerto. Se intensifican los gritos de dolor y rabia a todo nivel. La gente grita: “¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!” “¡Goni cabrón, te espera el paredón!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” “¡Que renuncie el presidente asesino!” Se intensifica la protesta y también el incontenible dolor barrial. En ese contexto, la plaza Elizardo Pérez se convierte en el centro de las decisiones formales y de los actos rituales de velorio y dolor. Así se incrementa e intensifica, como ya se señaló, la organización dentro de los barrios, especialmente en Tupak Katari, Tawantinsuyo, Los Andes, Villa Esperanza, Ballivián y 16 de Julio. Se organizan turnos para vigilar y bloquear durante el día y la noche. Ante esta situación, según varios actores, todos se levantaban a las tres de la mañana para organizar piquetes de bloqueo y sistemas de vigilancia interna y externa. De esa manera crecen las barricadas en cada barrio y en los diferentes distritos del sector norte. Se organizan comisiones para establecer contactos con otros barrios, y así intensificar las acciones interbarriales.

Espacios como estos se multiplicaron por todo El Alto. Lo propio ocurre en el sur de la ciudad, dado que el luto y la indignación se convierten en sentido de lucha social en contra de un gobierno que ha perdido todo el control.

Los microgobiernos barriales

3.1. Organización barrial

Ya antes de la violencia militar se inicia un paulatino proceso de constitución de los microgobiernos barriales o gobiernos locales, basados fundamentalmente en aspectos territoriales. Por ello en este momento, convencida de la lucha colectiva, la gente gritaba: “¡Recuperemos nuestro gas!”, “¡El gas no se vende, carajo!”, “¡Goni asesino!”, “¡Goni carnicero!”. Varias acciones se articulan dentro de los barrios, como fuerzas de acción colectiva. Surgen emociones y se exponen pancartas con consignas parecidas a las mencionadas, que pueden entenderse como gritos de guerra que producen sentimientos de “hermandad étnica” o vecinal.

La identidad vecinal fundada en marcos de referencia étnica y solidaridad interbarrial nos ayuda a comprender la singularidad histórica de la construcción de esta comunidad. Los barrios toman las experiencias de organización de su lucha por la autonomía (por ejemplo, frente al municipio de La Paz y la declaración de El Alto como la cuarta ciudad) y las formas de lucha de las áreas rurales (con los bloqueos de caminos y marchas de protestas), así como un conjunto de memorias de acción colectiva que, con el pasar de los días, crece en diferentes niveles y espacios de la sociedad. El gobierno barrial es una organización territorial local y propia.

Cada barrio se muestra como el espacio de interrelación vecinal que profundiza el sentido de la propia experiencia de la vida social. Se buscan equilibrios y sistemas de autocontrol interno para llevar adelante las movilizaciones sociales y, por supuesto, el paro indefinido de

la ciudad. En El Alto se crearon, como ya se mencionó, entramados de organización barrial mediante estrategias de lucha producidas por los mismos vecinos, con la finalidad de impedir el movimiento de los motorizados (como los camiones cisternas que transportan gasolina y gas hacia La Paz) o para enfrentar la violencia estatal y su sistema de amedrentamiento psicológico.

Así, cada barrio se convierte en un espacio estratégico para contrarrestar las acciones violentas o simbólicas de las FF. AA. y de la Policía Nacional. También aquí se decide tender alambre de púas, cavar zanjas en las calles, acopiar piedras y levantar barricadas, que en su conjunto convierten a la ciudad en una “trinchera de guerra”, como afirman varios vecinos. La unidad interbarrial y la unidad vecinal se consolidan en todas las zonas porque la gente entiende que es la única manera de que se escuche su protesta. En varios casos, los vecinos se organizan autónomamente, sin necesidad de líderes. Como expresa uno de los entrevistados: “Nos hemos organizado por barrios para bloquear [...] así hemos podido frenar a los carros y el ingreso de los militares que nos atacaban” (entrevista a un vecino del Cruce Villa Adela, 12 de junio de 2004).

Estos mecanismos de acción son actos fundamentales para cohesionar e interrelacionar a barrios de distintas condiciones sociales. Por ejemplo, según varios vecinos, las estrategias de los diferentes barrios son tomar las calles y avenidas para impedir el paso de los vehículos militares o de cualquier transporte que quiera transitar o transportar alimentos u otros productos hacia la ciudad de La Paz. Para una mejor visualización de las acciones colectivas, las juntas vecinales habían decidido realizar sus asambleas en campo abierto, sobre todo para prever posibles emboscadas por las tropas militares a las sedes sociales. “Los vecinos formaban comisiones a campo abierto que concentraban a todos los barrios de los distritos [...] también nos hemos organizado cada vecino” (entrevista a un vecino del Cruce Villa Adela, 12 de junio de 2004).

Como se evidencia, muchos vecinos vivieron aquí el terror psicológico porque escuchaban los disparos de las ametralladoras cerca de sus barrios o distritos. El barrio y sus calles se convirtieron en un espacio de control y movimiento para preparar una activa resistencia. En ciertos lugares los militares buscaban a los dirigentes o vecinos casa por casa, de barrio en barrio. Otra de las razones para que las juntas vecinales decidieran armarse con dinamita, cavar trincheras y levantar barricadas (de hasta dos metros de altura en el Puente Bolivia, por ejemplo) fue repeler cualquier intento de intervención armada a sus “territorios”: sus barrios. La participación y las estructuras de organización barrial se

convirtieron en un factor de seguridad y acción colectiva territorializada, para proteger los barrios entre sí.

La autoconstrucción política del pueblo se evidencia a través de los gestos de la colectividad barrial, de sus consignas inventadas en las largas marchas al centro de la ciudad de La Paz, de sus angustias intersubjetivadas radiofónicamente ante la amenaza de muerte que se desplaza de la mano de las tanquetas o de la fuerza física de masa que levanta vagones para bloquear la Autopista (Suárez, 2003: 12).

El barrio es, pues, el centro de reunión de un conjunto heterogéneo de actores; se convierte en el espacio de la unicidad de esa heterogeneidad, definida en varios casos sobre la base de la etnicidad y las condiciones de clase social porque sus miembros son, por una parte, obreros, estudiantes, profesionales de nivel medio o universitarios, y por otra, migrantes rurales o de segunda generación nacida en El Alto. Son mujeres y hombres de distintas condiciones sociales y económicas, aunque la gran mayoría tiene ingresos medios hacia abajo (y muy abajo).

Por ello los barrios se yerguen como un espacio de la identidad colectiva, donde se masifica la protesta social y se produce un levantamiento general de la ciudad. En base a estos mecanismos de acción colectiva se articulan, por una parte, voluntades, identidades, estrategias, demandas y sentidos de pertenencia a una misma realidad social; y por otra, la beligerancia colectiva. Los “campesinos”, mineros, gremiales, desocupados, estudiantes, vecinos y distintos sectores involucrados en el levantamiento acumulan fuerzas para revalorizar las propias experiencias de organización para construir una memoria de lucha social. Son acciones multitudinarias de protesta que, además, ponen en movimiento diversos saberes colectivos. Es la acción de una multitud de rostros morenos y curtidos por el trabajo y el sol que se convierte en la base de un poder alternativo al propio sistema dominante. Se juntan múltiples vivencias y experiencias de lucha en la vida social; es el caso del manejo de la geografía urbana, que termina colapsando a dos grandes ciudades (La Paz y El Alto) y deslegitimando al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

De modo que en los barrios se ha revivido la organización comunitaria, o más propiamente, la lógica de los ayllus andinos o la lucha de la experiencia minera; se resocializan los sistemas de reciprocidad y se ponen en práctica los sistemas de *tumpa* (o visita de barrio en barrio).

En cada barrio se llevan a cabo gran cantidad de reuniones o asambleas, que se subdividen en dos importantes momentos:

- i) Las asambleas de emergencia, bajo las circunstancias exigidas por la coyuntura. Por ejemplo, tomar rápidamente la decisión de salir a bloquear una avenida y prepararse para el posible ingreso de las fuerzas represivas al lugar.
- ii) Las reuniones evaluativas, particularmente sobre las acciones que se desarrollaron durante el día o las semanas anteriores. Esto obedece a la necesidad de una evaluación permanente de la marcha de los acontecimientos, así como la información que generan las organizaciones matrices, como la FEJUVE o la COR. Ese mecanismo permite corregir errores y descuidos y controlar la participación de los vecinos. En algunos barrios circula una lista de asistencia; en otros simplemente se constata la presencia y participación activa de sus miembros.

Estas instancias se convierten en actos masivos porque intervienen todos los miembros de los barrios. También pueden ser conflictivas porque hay que poner en movimiento las propias fuerzas internas y sanar los conflictos, aunque ante la nueva situación estos se olvidan y toda la atención se centra en el levantamiento. Pero para que este sea efectivo, se necesita poner en claro todos los hechos que puedan convertirse en un factor de división barrial. De ahí la importancia de las reuniones barriales, que ponen en práctica la relación social cotidiana del cara a cara para tomar decisiones colectivas, formas de acción y organización de la protesta social. Como lo manifiesta uno de nuestros entrevistados:

Mi zona ha ido organizándose mediante los presidentes de la zona, de diferentes zonas. Fueron a tocar casa por casa y la gente salió a la avenida Juan Pablo II (entrevista a un vecino del sector de Río Seco, 14 de agosto de 2004).

La dirigencia vecinal y las mujeres y hombres de base se convierten en actores políticos del levantamiento. Toda decisión pasa por este mecanismo de acción colectiva. También en los barrios se planifican algunos hechos de forma secreta, de los que la mayoría de los vecinos no deben enterarse. Es el caso de la preparación de bombas caseras (o molotov), pues debe evitarse que esta información se filtre en beneficio de los servicios de inteligencia del gobierno. Este mecanismo de acción social está orientado principalmente a los jóvenes, quienes se muestran como los más activos y aguerridos actores del levantamiento social. No olvidemos que la mayoría de los muertos son jóvenes de 25 a 35 años.

En octubre de 2002 El Alto se había convertido en un lugar ingobernable. Cada barrio es una especie de bomba activada que al menor movimiento revienta o explota sin importar incluso el costo de los muertos:

Nos hemos organizado por barrios para bloquear. Así hemos podido frenar a los carros o el ingreso de los militares que nos atacaban. La organización era por barrios y en el sector no era conocida [...] Cada día teníamos que cambiar a otros lados. Teníamos planes muy secretos (entrevista a un vecino del sector del Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004).

Hubo formas de organización móvil, tal como manifiesta el entrevistado; esto solamente se explica por la capacidad de autoorganización barrial. Se habían establecido sistemas de turno para el control y manejo de los espacios de acción social y sus sistemas de defensa. Unos y otros estaban indistintamente sobre las avenidas y calles, pero sobre ellos había una mirada atenta, controlando cómo se movían los miembros de cada zona. Si alguien se accidentaba, inmediatamente el resto de los vecinos acudía en su ayuda. Por ejemplo, cuando el jueves 16 de octubre se bajó a la hoyada, hubo un control estricto de los miembros a modo de cuidarse mutuamente de la acción represiva de los militares y policías. Nosotros estuvimos en esto.

Tres o cuatro días antes se había producido la masacre gubernamental; por esta razón nadie debía separarse de las filas de su barrio o su distrito. También ayuda a saber cómo actúa cada uno de los miembros de la zona. Ahí radicó la fuerza del levantamiento barrial o territorial, que reconstruye sentidos de pertenencia social e identidad colectiva. Hay una profunda articulación de las acciones colectivas y de emotividades alternas a las decisiones del gobierno central.

La suma de todas las estrategias deriva en la consolidación de un poder territorializante y politizado. La pelea es por ocupar y defender estos territorios de la actitud agresiva de las fuerzas del Estado, hecho que se ha intensificado tanto dentro como fuera de la ciudad.

3.2. Articulación cuasi militar de acciones colectivas: “cuarteles barriales”

De forma compleja, se estableció una gran cantidad de estrategias de acción beligerante y disruptiva que finalmente fueron los referentes para un poder alterno al gobierno y al Estado republicano. Puesto que estos

provocaron actos violentos, en los barrios también surgieron inquietantes ideas para constituir, por ejemplo, nuevos “cuarteles barriales” (parecidos a los “cuarteles indígenas” de Omasuyus), para enfrentar al poderío militar del Ejército. A ello se refiere Luis Gómez (2004) cuando habla de los “cuarteles indígenas” ubicados en el sector norte y en otras partes de la ciudad de El Alto, donde miles de hombres y mujeres organizaron estas estructuras “armadas”. Se construyeron trincheras y se ocupa espacios en el terreno para organizar grupos de choque como una única forma de autodefensa:

Arriba estábamos nosotros, los guerreros, abajito los comandantes y más bajo la gente ya organizada; por ejemplo, todos tenían sus grupos y sus tareas. Teníamos nuestro nombre de guerra; por ejemplo yo era el Mallku Qurawas, como las hondas que utilizamos para defendernos (entrevista a uno de los dirigentes de la zona norte de El Alto, en Gómez, 2004: 95).

Así lo muestra una foto en las portadas de *El Alto* y *La Prensa* de fecha 12 de octubre: un grupo de jóvenes con las caras cubiertas o pintadas levantan botellas con gasolina y tapadas con trapos para lanzarlas sobre los caminos y, más específicamente, contra las fuerzas del gobierno. Además, de manera simbólica, se han construido “armas” o “fusiles” con objetos tales como patas de sillas o mesas rotas, como muestra la exposición de fotos sobre octubre realizada en 2004 en la Casa de la Cultura de la ciudad de La Paz. Hay una creatividad social inédita. Los jóvenes habían construido estos “fusiles” para empuñarlos como si fueran armas reales. Además, se levantó una gran cantidad de “Barricadas en trincheras cavadas en cada esquina transversal a la 6 de Marzo, esquinas alambradas, fogatas por doquier, asemejaban a la ciudad a una zona de guerra” (*El Alto*, 12/10/03).

La ciudad de El Alto es un “territorio de guerra” porque cada esquina de las calles y avenidas se convierte en referente directo de las violentas acciones de protesta social y del Estado. La vida se ha convertido en algo inseguro: hay más de 70 muertos y 400 heridos. El recuento sobre el día 12 de octubre que hace el Wilson Soria, de la parroquia Cristo Redentor, y de las propias juntas vecinales del sector norte, particularmente de Villa Ingenio, Unidad Vecinal 1, que transcribimos a continuación, son muy elocuentes al respecto.

Empezaba el drama, una joven que vende salchipapas en una de las esquinas de la Av. Juan José Torres y Luis Espinal, a una cuadra de la parroquia, fue alcanzada por un proyectil en su brazo derecho. La traen a PROSALUD, este centro médico estaba cerrado por la situación que se vivía. Los vecinos

en su desesperación rompen la reja e ingresan al recinto, se encuentra una enfermera, no hay medicamentos, se le hace una curación de emergencia (Pronunciamiento del clero de la diócesis de El Alto).

Los vecinos en su desesperación ingresaron a la fuerza trayendo en frazadas a heridos, moribundos. A uno le faltaba la mitad del cuello, otro tenía el cráneo abierto, otro con el pecho florecido; en ese momento no sabíamos qué hacer, no había acceso para ambulancia ni medicamentos (Acta sobre la Defensa del Gas, Villa Ingenio).

Cientos y miles de mujeres y hombres levantan piedras, palos y otros objetos para denunciar la violenta agresión gubernamental. Desde esos espacios se decide que el gobierno de Sánchez de Lozada debe renunciar a la presidencia de la República. Todo ello hace que se articulen emotividades colectivas como fuerzas de acción social beligerante. Otro de los entrevistados manifiesta su indignación por la agresividad y la masacre que se estaba cometiendo contra toda una ciudad:

Los militares y policías estaban atacando a nuestros hermanos, masacrando sin sentimiento como ser humano, como si ellos no tuvieran alma ni espíritu, matan sin corazón. Por eso hemos decidido participar en Octubre Negro todos en conjunto (entrevista a uno de los vecinos Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004).

Por este conjunto de hechos fue que los vecinos empezaron a cambiar de técnicas y tácticas de lucha. Comenzaron a organizarse de forma casi militar:

En la reunión del Distrito 5, al norte, los dirigentes decidieron cambiar de forma organizativa y comenzaron a reestructurarse militarmente, al estilo aymara. Fue creado un cuartel general de mando para toda la zona y los barrios quedaron en libertad de organizar sus huestes y sus planes de ataque y de defensa. Se establecieron también señales de alarma y códigos de comunicación. Así, en Tupak Katari dividieron la geografía en A y B para patrullar las calles y un tramo de la avenida Juan Pablo II. En Villa Ingenio fueron elegidos los Mallkus para comandar las acciones y comenzó una reunión de planificación para los bloqueos en el puente de Río Seco y la ex tranca del mismo nombre en coordinación con otras organizaciones vecinales (Gómez, 2004: 84-85).

Posiblemente los hechos hayan sido mucho más complejos de lo que hasta este momento hemos descrito. Como menciona Gómez, hay sectores que están organizados en territorios A y B. El territorio A es el

de las trincheras y el territorio B es el del abastecimiento. Para el primer caso se cavó una gran cantidad de zanjas dentro de los barrios y sobre las avenidas y calles principales. En Cruce Villa Adela, por ejemplo, se amontonó una gran cantidad de tierra sobre la avenida, haciendo intran-sitable el lugar. Se prepararon cazabobos, se construyó flechas y otros instrumentos de guerra. Al respecto, uno de los entrevistados narra:

Bastantes días y noches estábamos alertas. Hasta mi puerta ya había todo, todo. Ya han fabricado. Hay jóvenes que son capaces [...] porque han hecho de botellas cazabobos. Después ese gas en botella, después una trampa, flechas para disparar, flechas han hecho. Después han hecho así como disecado de los soldados encima¹⁰. Al puente colectivos viejos han traído. De eso como vivo han disecado, como soldadito agarrado armas como para que no venga los soldados, así (entrevista a uno de los vecinos del sector norte, 22 de agosto de 2004).

El territorio B es el lugar donde se acopia información y alimentos y se toman las decisiones estratégicas o políticas. Es propiamente un lugar político. Aquí se tejen los sistemas de movilización y de futuras acciones. A partir de la organización de los territorios A y B, el día 14 de octubre se comenzó a derrumbar las pasarelas ubicadas sobre la Av. Juan Pablo II y Río Seco. Se volteó cuatro de ellas con la fuerza de los actores o vecinos, posiblemente como la única forma de protegerse ante la acción sangrienta de los militares:

Me acuerdo también que, no sé con qué fuerza, derribaron también las pasarelas de la Juan Pablo II. La gente también puso vidrios, prepararon bombas molotov en gran cantidad para utilizarlas contra los militares (entrevista a un vecino del sector norte, 14 de agosto de 2004).

En las pasarelas había policías y militares apostados para ejercer control sobre la población movilizada contra el poder constituido; desde ellas se podía ver todo. Para tumbarlas se utilizó sogas y alambres que consiguió la gente, halando de uno y otro lado hasta que se derrumbaron. Fue impresionante observar cómo, pese al grosor de sus soportes, se las destruyó a puro golpe. Incluso las instancias de dirigencia, como la FEJUVE y la COR, fueron totalmente rebasadas. Quienes realmente gobernaban en este momento eran los vecinos, organizados en los microgobiernos barriales.

10 Muñecos de trapo o siluetas.

Este fue un hecho sin precedentes en la historia de la joven ciudad. Volvió a repetirse en mayo-junio de 2005. Con el paso de los días la movilización fue creciendo en base a los mencionados mecanismos de organización territorial de primer nivel y segundo nivel. Cada lugar estaba controlado por un conjunto de estrategias y movimientos articulados como micropoderes barriales. La ciudad había sido completamente tomada por su propia población. Era un levantamiento general, en el que ya no tenía cabida escuchar al gobierno de forma tranquila y en silencio, como se hacía antes. Era el poder alterno.

3.3. Organización por grupos o estrategias

¿Cuáles fueron sus estrategias?, ¿quiénes fueron los actores de primera línea y quiénes no?

Ante la agresividad militar, los vecinos decidieron organizarse estratégicamente desde el mismo espacio de los barrios, pero también desde las calles, avenidas y plazas, conformando grupos móviles de distinto tipo: de abastecimiento, de control o de choque. Se elaboraron estrategias y tácticas de acción que tienen como espacio fundamental el barrio, la calle, las plazas, avenidas y los puentes o pasarelas y las elevaciones o cerros:

Nos organizamos por grupos de diez a quince personas, la mayoría fueron hombres por el mismo hecho de que salíamos por las noches [...] La zona nuestra se unió a las marchas y bloqueos por nuestros derechos. Mi zona empezó bloqueando la carretera a Oruro, cuando los mineros empezaron a llegar y nuestros hermanos campesinos. Especialmente el Cruce a Ventilla, bloqueamos con piedras, maderas, empezamos a quemar llantas en medio de la carretera a Oruro, nos organizamos por turnos. Unos bloqueaban por la mañana y por la tarde, y otros por la noche (entrevista a un dirigente de la zona modelo Ventilla, 9 de julio de 2004).

Este desdoblamiento del conglomerado de barrios ahora convertido en grupos de choque es un movimiento estratégico para tener mayor efectividad en el control o manejo de los territorios A y B, como ya se ha mostrado. Estos grupos se dividen las calles, barrios y diferentes espacios de la ciudad:

Nos dividimos por calles, edades, familias. Los hombres llevaban la peor parte porque tenían los turnos más feos, pero las mujeres ayudamos mucho, los jóvenes también, solo que todos temíamos por la vida de nuestros

seres queridos a cada instante. Aunque eran nuevas en el barrio, estas organizaciones han participado muy activamente (entrevista a un vecino de la zona Ventilla, 9 de julio de 2004).

Aunque hay grupos más grandes y otros más reducidos, lo evidente es que actúan organizadamente, bajo la dirección de vecinos con cierta experiencia o con mejores ideas. Cabe aclarar que dichos grupos no estaban estructurados en base a una ideología clasista (aunque había espacio para esta); los conforman actores que se unen bajo formas de ideologización barrial y etnicidad para defender sus vidas y las de sus familiares amenazados por la violencia estatal.

Se organizaron en cantidades grandes contra los militares. El pueblo no tenía ya miedo después de haber escuchado tanta matanza sin piedad; la gente, los vecinos ya no les tenían miedo, ahora querían luchar. Bueno, como dirigente hice muchas reuniones para poder organizarnos bien y asumí con mucha responsabilidad y mucha delicadeza los comentarios que haríamos, porque los dirigentes fuimos amenazados de muerte e incluso fuimos buscados para podernos hacer desaparecer y callar nuestras luchas, también amenazaron a nuestras familias (entrevista a un dirigente de la zona modelo Ventilla, 9 de julio de 2004).

Estos grupos aparecían y desaparecían en diferentes etapas del levantamiento de la ciudad. Pero, al disolverse, se convertían inmediatamente en actores de las multitudes que protestaban en toda la ciudad y en la hoyada. Por eso se movían en grupos, pero también en multitudes, pidiendo la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y oponiéndose a la venta del gas por Chile. Su tarea efectiva en este momento era cumplir y hacer cumplir los turnos y vigili­as en diferentes lugares de la ciudad. Se organizaron turnos, vigili­as y grupos en movimiento. Este control territorial recorre cada cuadra y cada barrio. Convertidos en miles, inundan plazas y avenidas, cada uno con la misión de vigilar, organizar la vida social y ayudar al levantamiento. Es una manera de controlar el barrio y sus alrededores.

Todos participan en este control. En las familias también se establecen turnos para cocinar y para asistir a las actividades del barrio: unos cuidan la casa y otros están en las calles: “hay que cuidar la casa porque los delincuentes siempre están al acecho”. Este sistema de organización es el que ha posibilitado controlar la ciudad. Con la multiplicación de las más de quinientas juntas vecinales fácilmente se creó una extraordinaria multitud de actos de movilización social:

Los militares estaban entrando a las casas sin permiso y hubo la necesidad de dividirnos, de repartirnos por calles [...] estábamos divididos en grupos en las calles [de] 7, 15 y 25. Cada uno tenía la lista de las personas que iban a salir a las vigiliass y sus horarios. Algunas mujeres tenían que traer comida, café para el frío y otros tenían que zanjar sus calles para que no pudieran ingresar los militares. Cada barrio tenía su presidente con distinta manera de organización [...] Lo más importante era la comunicación de lo que ocurría en otros sectores para estar listo a ayudar a las zonas que fueran atacadas o donde hubiera enfrentamientos (entrevista a un vecino del sector sur cercano a Villa Adela, 30 de julio de 2004).

En ciertos lugares se privilegió a los jóvenes, debido a su velocidad y agilidad para correr; en otros, a personas experimentadas. Lo importante era mantener un control riguroso de los espacios de la ciudad y sus calles para evitar el ingreso de los militares. Es lo que ocurrió en Villa Ingenio, donde los militares ingresaron por los lugares no controlados. Todos los vecinos eran responsables de organizar y aportar con su tiempo y voluntad para el cuidado y la seguridad de su lugar, y de la ciudad entera.

Como vecinos nos hemos organizado en esto [...] había un turno, o sea, empezábamos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. El otro grupo entraba a las 2 y salía a las 6 de la mañana. Te despertabas directamente con fogatas. Todos nos organizábamos e íbamos a visitar entre tres personas a la otra zona para ver cómo estaba, preguntábamos si había pasado algo o si había alguna novedad (entrevista a uno de los dirigentes de la Asociación familiares de fallecidos, 17 de agosto de 2004).

Esto permitió controlar el movimiento de gente extraña en los alrededores o dentro de las zonas. En muchos casos se detuvo a jóvenes de otros barrios que estaban de paso. Incluso se les hizo cavar zanjas para que demostraran que estaban con la acción decidida de los barrios. Aunque esto provocó cierto malestar entre quienes se vieron obligados a trabajar, ayudó a averiguar el nombre de los transeúntes, su lugar de procedencia y su destino. Al trabajar entraron en confianza, y al despedirse quienes los obligaron a trabajar se disculpan, y se desean suerte unos a otros. Además, se aprovecha para establecer códigos de comunicación ante un posible ingreso de las fuerzas militares a sus barrios. Esto sucede sobre todo a la altura de Senkata. El siguiente testimonio es elocuente:

Esa noche, por las obligaciones de la junta de vecinos y por voluntad propia, salí al sector de la extranca. Con los vecinos hacíamos fogata y

éramos aproximadamente unos 300 y la mayoría eran varones jóvenes. Lo novedoso de esa noche fue que un militar de inteligencia, vestido de civil, había estado participando junto a nosotros y él escuchaba todo lo que planificábamos, pero de eso nadie se enteró porque hasta sus cortes [de cabello] eran normales, como un civil, pero yo me percaté y miré bien la cara y era sargento del Regimiento Ingavi. Me acerqué y le dije: “te vas de este lugar o le digo a la gente”; el militar se fue (memoria de octubre de uno de los estudiantes del taller).

Este fue un mecanismo social (o barrial) muy eficaz para mantener el control territorial y social de cada lugar. Otro de los entrevistados manifiesta:

Los vecinos nos organizamos por cuadras, por manzanas, por comités momentáneos, por días. En fin, por turnos. Tenemos que contrarrestar bien organizados o momentáneamente organizados, pero en sí nadie debería saber [...] Ningún desconocido tenía que pasar (entrevista a uno de los vecinos del sector de Senkata, 24 de agosto de 2004).

Hay un control estricto sobre quienes se mueven de un lugar a otro. En algunos casos los transeúntes llevaban documentos de acreditación para movilizarse de una zona a otra. De otro modo, corren el riesgo de ser confundidos con agentes del gobierno. El caso de un militar infiltrado en una de las reuniones zonales de Senkata, como cuenta el testimonio de uno de los jóvenes, es un hecho real. O el de aquel policía que fue retenido en el Cruce Villa Adela y luego liberado por las gestiones de los curas. Otra entrevista explicita estos mecanismos de organización y de acción colectiva establecida:

El día miércoles 8 de octubre, las acciones se van coordinando de acuerdo a como iban avanzando los acontecimientos. Las juntas vecinales se reúnan todos los días. Hemos estado haciendo asambleas de coordinación y evaluación desde que amanecía: a las 8 o 9 hacíamos asambleas de información y evaluación. La coordinación ha sido permanente por las calles. Nuestra organización tiene un estrato después de lo que es el directorio del concejo de delegados de calles. La zona cuenta con más de 20.000 habitantes y tiene más de 30 calles, y por calle, 3 o 4 delegados. Luego de la asamblea viene el consejo de delegados. Tratábamos de que la gente mayor participe en las fogatas y las barricadas, y mayormente en las avenidas, donde se quemaba llantas para reunirse y, al mismo tiempo, avisar al enemigo que estábamos listos para enfrentarlo (entrevista al presidente de la zona Santiago II, 19 de agosto de 2004).

El comentario del presidente de la zona Santiago II muestra que esta zona estaba bien organizada porque tenía delegados por cada calle. Cuando los militares actúan violentamente, estos grupos y sistemas de turnos y vigiliias aumentan dentro y fuera de los barrios:

En el momento cuando ya ha habido unos cinco muertos, hemos empezado a movilizarnos, ya no queríamos saber nada de los partidos políticos [...] con la organización casi todos han salido voluntariamente, nadie estaba obligado [Luego de los muertos] todos han salido voluntariamente, entre nosotros charlábamos, hacemos o no, todos estaban dispuestos en hacer apoyo a la lucha (entrevista a un vecino de la zona Santiago II, 19 de agosto de 2004).

De esta forma se construyeron varios sistemas de comunicación. Estos grupos, por su parte, se encargaban de informar, organizar documentos y difundir todos los sucesos a los vecinos, para una mejor comunicación. En este sentido fue muy importante la presencia de los medios de comunicación.

Nosotros solo teníamos amplificación para informar, pero hemos contado con la presencia de la prensa, no solo nacional sino extranjera. Los acontecimientos de Santiago II los hemos visto por televisión, en un reportaje de periodistas alemanes, en plena batalla. Por si acaso, ha ocurrido esto justamente cuando estaba entrando el ejército (entrevista al presidente de la zona Santiago II, 19 de agosto de 2004).

Bajo este mecanismo de acción colectiva definitivamente se legitima y se consolida el levantamiento en toda la ciudad de El Alto. “El tipo de estrategias que elegimos fueron las piedras, troncos, llantas, palos, alambres y todo con lo que estuvo a nuestro alcance” (entrevista a un dirigente de la zona modelo Ventilla, 9 de julio de 2004). La indignación se hace efectiva:

Es una forma de frenar a los militares para que no sigan avanzando o matando a nuestra gente. De alguna forma teníamos que defendernos. Todos los medios posibles para defendernos hemos empleado (entrevista a un vecino de la zona Santiago II, 19 de agosto de 2004).

Se organizan por calles para realizar primeramente el bloqueo de la avenida 6 de Marzo en la carretera. Se hacen barricadas para bloquear el paso del Ejército que se trasladaba a Senkata, hacia Patacamaya o viniendo a reforzar aquí. Ese ha sido uno de los cometidos, pero como se van sucediendo los acontecimientos, se van haciendo también barricadas y

excavaciones en todas las calles; no se ha tomado una decisión de exigir o multar a los vecinos; de forma espontánea mujeres, hombres y niños salieron a hacer las excavaciones. En las noches salían a hacer fogatas, a vigilar, a controlar. La población estaba totalmente unida sin necesidad de tomar acuerdos que realmente obliguen (entrevista al presidente de la zona Santiago II, 19 de agosto de 2004).

En síntesis, los grupos y sus mecanismos de acción dispersa se consolidaron como centros de territorialización del levantamiento de la ciudad de El Alto y de los barrios marginales de la zona sur de la ciudad de La Paz, como veremos más adelante. Este hecho dio paso a la constitución específica de los microgobiernos barriales.

3.4. Especificidad de los microgobiernos barriales

Los sistemas de acción por turnos, las relaciones interbarriales, la constitución de efímeros “cuarteles barriales” y la paralización total de la ciudad tienen un efecto y un sentido porque legitiman o constituyen estos pequeños gobiernos barriales en toda la ciudad de El Alto. La importancia de estos (micro)gobiernos es que aquí se deciden de manera masiva las acciones colectivas mediadas por las asambleas de emergencia y de evaluación, como el control de los recursos alimenticios y sanitarios. Se convierten en lugares de decisión multitudinaria y de legitimación de las acciones de control del territorio. Ahí surgen las decisiones políticas y de tipo militar de los vecinos, para autogobernarse por sí mismos y contrarrestar el poderío militar del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada.

De esta manera se organizan las vigiliadas y las multitudinarias marchas que bajan de El Alto hacia la hoyada exigiendo la renuncia del presidente de la República. Una muestra de esto fueron los días 13, 15, 16 y 17 de octubre. Sin lo señalado, el levantamiento de la ciudad de El Alto no hubiera tenido fuerza ni articulación externa e interna. De una manera natural, entonces, se producen profundos sentidos de acción e interrelaciones barriales, distritales y familiares. En esa relación, la FEJUVE, la COR y la dirigencia de los gremiales ya no estaban autorizadas para reunirse con el gobierno. Lo que los dirigentes hicieron fue acatar y cumplir con los mecanismos de acción y decisión colectiva de los barrios y/o vecinos. La FEJUVE de El Alto ya no mandaba bajo esas condiciones; eran los propios barrios, mediante sus sistemas de acción y organización interna y externa, los que decidían los caminos a seguir.

La legitimidad que debe tener un gobierno-Estado deja de existir por el sencillo hecho de que la gente deja de tenerlo como un referente de orden y decisiones públicas. La presencia del gobierno se hace de testable, y los mensajes de “paz” del “Estado productor de las relaciones étnicas dominantes colapsa para dar lugar a sistemas de autoorganización local y barrial” (Mamani, 2004a: 31). Por ejemplo, las tiendas de abasto solamente estaban autorizadas para vender sus productos en determinadas horas del día o durante un tiempo limitado. Si vendían durante todo el día o de forma oculta, intervenían automática e inmediatamente las juntas vecinales, como ocurrió en Santiago II, un barrio minero. La lógica de esta autoorganización busca que los alimentos alcancen para todos por igual. “No tiene que faltar para nadie”, se decía. De este modo, se controló la venta de medicamentos expendidos por las farmacias y la atención de urgencias. Paralelamente, se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas en estas zonas. Todas estas acciones estuvieron regidas por los Comités de Defensa del Gas. Las siguientes entrevistas son una muestra elocuente de este hecho:

En esos días se ha convertido en un pequeño gobierno, [como] estamos relatándole: como hemos hecho cerrar todos los negocios, hemos sacado ordenanzas para que se atienda a la gente solamente para horas. Que no se expendan bebidas alcohólicas; que la gente esté realmente unida, que los centros de venta, las farmacias también, atiendan a la gente. Por todo aquello, yo creo que en ese momento sí se da un gobierno en la zona. Había que cuidar a la gente mayor y a los niños. Y yo creo que ha sido un gobierno de repente revolucionario, en ese momento, ¿no? No solamente se debió a la dirección de las juntas vecinales. El directorio no hacía todo, sino que la gente misma exigía que hagamos las reuniones y nosotros cumplíamos con lo planificado; porque ahí se sacaban las conclusiones, se sacaban determinaciones y finalmente evaluábamos qué habíamos hecho. Entonces sabíamos cambiar de sistema. La gente se reunía y venía a sacarnos de aquí y nos llevaba aquí a la plaza [...]. El día de las marchas había cantidad de gente abajo, pero al mismo tiempo se quedaban algunos para resguardar la zona (entrevista a uno de los presidentes de las juntas vecinales de sector sur de la ciudad de El Alto, 19 de agosto, 2004).

Todos los días a las 9 de la mañana en Santiago II hacíamos nuestra evaluación de lo que había ocurrido días antes, una asamblea en la plaza del Minero, creo que teníamos nuestro propio gobierno; habíamos prohibido que las tiendas, las casas de juego, cantinas, los comerciantes callejeros hagan sus ventas y decidimos que cierren sus tiendas (testimonio de José Montesinos, Seminario-memoria “A un año de la Masacre”, 24 de agosto de 2004).

El gobierno barrial es un hecho vital para sostener el levantamiento de la ciudad. Aquí se controlaba a la gente y se organizaban los sistemas de alimentación y seguridad de los miembros. También bajo este mecanismo se cuidaba a los niños y a las personas mayores. De la misma manera, se organizaba las reuniones y se controlaba para evitar posibles infiltrados tanto del Ejército como de la Policía y se realizaban los turnos y vigias. Se establecieron centros de decisión en pequeño, como uno de los mecanismos eficaces para hacer frente a las macrodecisiones del gobierno. “En cada espacio se han estructurado profusas autoorganizaciones locales y barriales que se mueven como cuerpos políticos alternos al orden dominante” (Mamani Ramírez, 2004b: 30).

Ellos vendían, luego se recogían. Cada zona se ha organizado. Tenía el abastecimiento, tenía que haber para todos; un abarrote, digamos, a todos tenía que llegar, o sea abastecer, se han organizado (entrevista a un vecino del sector de Río Seco, 27 de junio de 2004).

Así se intensifican las complejas comunidades emotivas. La gente se siente parte de una misma realidad. Incluso desaparecen los conflictos internos existentes dentro de las zonas o entre barrios vecinos; ahora se muestra una sola unidad interbarrial absoluta. Muchos de los entrevistados afirman que se han unido a la lucha porque los militares “estaban matando a nuestros hermanos”.

Es evidente que en algunas zonas este mecanismo de autogobierno barrial no ha hecho carne como en otras. Para muchos este solo fue un hecho natural que obedecía a la costumbre de cada barrio para decidir los asuntos internos o externos, a diferencia de otros sectores, donde se ha tomado conciencia de que se era parte de un autogobierno barrial o de pequeños gobiernos; es el caso de Santiago II (sector sur) y demás barrios del sector norte. Los vecinos han tomado conciencia de ser parte de un autogobierno barrial o de pequeños gobiernos barriales.

A la pregunta sobre si las juntas vecinales se convirtieron en pequeños gobiernos, las respuestas son:

Sí, se puede decir que han actuado como pequeños gobiernos porque había grupos de personas que lideraban la pelea por el mismo hecho de que los dirigentes eran buscados. Es así que la gente decide agruparse en secreto para seguir luchando sin dejar de apoyar al pueblo boliviano (entrevista a un dirigente del sector de Ventilla, 9 de julio de 2004).

Sí, porque la organización es a través de los mismos vecinos con sus representantes de sectores, su disciplina en la organización y hermandad

entre ellos (entrevista a uno de los vecinos del sector de Río Seco, 27 de junio de 2004).

Mediante este sentido de acción, se estableció el control efectivo de las calles y plazas como un hecho vital para resistir a la agresión estatal e incluso para sobrevivir a la masacre. El control total fue efectivo mediante la vigilancia de los barrios que, ahora, se ejercía mediante los “representantes de cada calle”, particularmente en zonas más grandes, donde los dirigentes también son llamados “delegados de calle”. Este hecho se dio particularmente en uno de los barrios mineros del sector sur de la ciudad, donde cada calle tenía sus propios delegados y cada uno de ellos tenía, a su vez, la absoluta responsabilidad de controlar, alertar e informar a los vecinos de su calle sobre el curso de los acontecimientos. Todos conformaban el “consejo de delegados”, que permitía a los presidentes de las juntas vecinales coordinar las acciones relacionadas con el barrio y su interrelación con otras zonas.

Por esta razón, cuando el gobierno le pidió al cura Jesús Juárez que intercediera con los dirigentes, respondió: “No hay siquiera con quién conversar en El Alto, cada jefe de barrio es un reyezuelo, todos están pidiendo la cabeza de Goni” (*La Prensa*, “Octubre en la memoria”, 17/10/04).

En otros barrios los turnos tienen también la misión de vigilar, controlar sus calles y movilizar a la gente. Cada turno tiene su propio responsable, que coordina toda acción, particularmente durante las noches. En otras zonas es un “comandante” el que tiene la absoluta responsabilidad de dirigir el grupo, particularmente si ingresan las fuerzas represivas a la zona. En la zona norte de El Alto se los llama “jefes de cuadra” (Acta sobre la defensa del gas, Villa Ingenio). Cada jefe de cuadra coordina con otros colaboradores para organizar la vigilia. Asimismo, los jefes de cuadra tienen la misión de alertar, organizar y comandar la acción. Mediante estos mecanismos de acción se ha auxiliado a los heridos y se ha recogido a los muertos. Donde se produjo masacres se procedió a resguardar y ayudar a los familiares afectados. Es el caso de la Unidad Vecinal I de Villa Ingenio: en la parroquia Cristo Redentor se concentraron miles de vecinos de varias zonas, como ya señalamos. Se veló a más de 14 muertos. En el sector sur de la ciudad (Av. 6 de Marzo, extranca de Senkata) también hubo gran cantidad de dolientes reunidos para protestar y exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. El Alto es prácticamente una ciudad minada para impedir el movimiento de las fuerzas represivas. La legitimidad del gobierno está quebrada.

Este es un conjunto de emotividades colectivas profundas sobre las propias estructuras de organización barrial. Fueron vitales los sistemas de autoorganización vecinal porque permitieron un control o autogobierno barrial, cuyo efecto inmediato era el control territorial del espacio público y político. Así, este se yergue como un poder alterno al del gobierno central. El autogobierno barrial paraliza a la ciudad. Bajo estos mecanismos de acción se diluye la moralidad de los grupos dominantes, personificados especialmente por Gonzalo Sánchez de Lozada.

3.5. Sentidos de identidad urbana

Las estrategias de la vida social cotidianas con que convivía la gente se convierten en otro de los factores articuladores para organizar el levantamiento. Estas estrategias cotidianas las han aplicado todos los días durante el proceso de urbanización de la ciudad: construir calles, escuelas, casas, avenidas, postas sanitarias, canchas deportivas, etc. Esta afirmación tiene sentido porque en gran medida la ciudad de El Alto ha sido construida por sus propios habitantes o vecinos. Los recursos gubernamentales (básicamente los municipales) no siempre han llegado a todas las zonas. Ahora, bajo esa experiencia de urbanización se articularon como actores estratégicos a través de sus identidades colectivas fuertemente influidas o establecidas sobre los factores de la relación indígena y popular. Es decir, bajo las lógicas de acción y sentido de organización rotativa, colectiva y territorial.

Los factores culturales indígenas influyentes son la lengua (aymara o quechua), el *ayni* (cooperación mutua), el turno o rotación de servicios, el comer en comunidad (el *apthapi*) y la visita de barrio en barrio y de casa en casa o *tumpa* (visitar o recordarse). Estas experiencias y sentidos culturales son ahora los factores de autoorganización barrial. Se han juntado: i) las estrategias de urbanización aprendidas en la construcción de la ciudad y ii) las experiencias culturales indígenas de trabajar en colectividad (*ayni*), para recrear un profundo sentido del cuerpo social, que permite construir con menos esfuerzo las obras vecinales y, en este caso, levantar barricadas, cavar zanjas o reunir piedras para bloquear calles o avenidas.

R. Anze, al estudiar la experiencia de construcción de identidades en los barrios del sur de El Alto, da cuenta de cómo se organiza la construcción de escuelas:

La preocupación principal es construir y tener una escuela en la zona, ya que el no tenerla supone ir de escuela en escuela en busca de un espacio para educar a los hijos, más aún cuando se trata del primero. Después de la construcción de estas, viene el trámite de legalización; mientras tanto, los padres de familia, preocupados por la educación de sus hijos, inician la actividad escolar aportando sus propios recursos (Anze, 1995: 28).

Las diferentes construcciones, particularmente las públicas, se hicieron en base al trabajo colectivo y a los aportes económicos de los mismos vecinos para comprar el material (bancas, cemento, piedra, etc.). Es decir, hay una previa experiencia de trabajo colectivo que es básicamente bajo la lógica del *ayni*. Es un *ayni* urbano adaptado de los sistemas de ayuda mutua del área rural, de donde proviene una gran parte de la población alteña. Por esto para muchos no era duro cavar zanjas o levantar la gruesa capa asfáltica de la avenida 6 de Marzo (altura de Santiago II).

Claro, ha tenido importancia ese *ayni* que practicamos y que no debemos olvidarnos como aymaras-quechuas. En la lucha de octubre, el *ayni* nos sirvió para ayudarnos unos a otros tanto en la alimentación como en la organización y coordinación de otros lados del barrio. Fue útil el *ayni* en octubre negro (entrevista a un vecino del sector de Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004).

En síntesis, este es un factor que ha ayudado a aglutinar fuerzas y un sentido de cuerpo social para construir las barricadas humanas y de piedras, latas, adobes y botellas sobre las calles y avenidas. Permitió que en pocas horas la ciudad esté completamente bloqueada. Luego de concluido el levantamiento, esta acumulación de material en las calles se mantenía. Las pequeñas montañas de arena y la tierra imposibilitaban moverse incluso a las bicicletas, como sucedió en el Cruce Villa Adela. Allí había una gran cantidad de tierra trasladada por cientos de brazos para inmovilizar la ciudad y fortalecer los sentidos de identidad colectiva.

La gente ayudaba con todo lo que tenía. Muchos no podían aportar en dinero (en principio, porque nadie estaba trabajando), pero esto fue reemplazado con el aporte de mano de obra:

Bueno, la mayoría de las personas ayudaron con todo lo que podía. Unos traían comida, otros refrescos, según el factor económico, porque tampoco trabajamos esos días del paro (entrevista a un dirigente del sector sur de la ciudad, Ventilla, 9 de julio de 2004).

Se recrearon profundos sentidos de identidad colectiva. El pertenecer a un barrio o a una colectividad, ahora en acción multitudinaria, fue un hecho importante para muchos vecinos. Esto garantizaba la seguridad de sus miembros, además de recrear un sentimiento de orgullo de pertenecer a la ciudad. Ser aymara o quechua se convierte en otro de los factores de la profunda articulación sociocultural y política:

Bueno, tendríamos que sentirnos honrados por ser aymaras porque nuestro pueblo cuenta con mucho del idioma nativo [...] Somos un pueblo con mucha riqueza, somos un pueblo pluricultural y multiétnico y no tenemos que avergonzarnos de nuestros antepasados: los aymaras y quechuas (entrevista a vecina del sector sur, Ventilla, 9 de julio de 2004).

El sentirse parte de una misma realidad ha calado hondo en el horizonte de los actos colectivos. La ciudad, pese a que tiene lógicas modernizantes, es un espacio también de mecanismos de identidad o hermandad urbana y rural indígena-popular. Todos ellos se reconocen como parte de una misma realidad social. En muchos lugares la gente compartía o *pixchaba* hoja de coca y, al mismo tiempo, ondeaba las *wiphalas* multicolores y otros símbolos del poder indígena. A un año de la masacre, el 12 de octubre de 2004, se pudo observar en Villa Ingenio, por ejemplo, gran cantidad de casas embanderadas con *wiphalas* con crespón negro. Los símbolos indígenas aparecieron en la ciudad como referente de la etnicidad de la lucha social.

3.6. La especificidad de los actores

¿Quiénes son específicamente los actores que irrumpieron con tanta fuerza en las calles, avenidas y los propios barrios? El concepto “actor” es una generalidad. Es importante visibilizarlos con características específicas. Hay que decir que los actores del levantamiento son: los jóvenes de distinta condición; los mineros de diferentes lugares y condiciones; los indígenas, tanto urbanos como rurales; los comerciantes, también con sus diferencias; los estudiantes de diferentes colegios y universidades; los desocupados, migrantes indígenas y no indígenas, etc. Cada uno, con sus propias especificidades, se convirtió en un factor de movilización, organización y lucha callejera.

La actuación de los jóvenes, como nunca antes, fue de vital importancia, y también los indígenas rurales y urbanos, los exmineros y

mineros cooperativistas. Los primeros actuaron bajo las características propias de la juventud, pero también bajo formas de acción relacionadas con los valores de sus padres o de sus madres, que son habitantes andinos. Bajo esas condiciones, fueron punta de lanza de la articulación interbarrial. Ellos también pertenecen a los sectores reprimidos de la sociedad. No se los toma en cuenta para las políticas públicas, y tampoco se considera sus opiniones, visiones o sentidos de vida social. Durante estos acontecimientos desarrollaron variadas estrategias de comunicación y acción para informar y movilizar a los diferentes niveles o grupos, destacándose particularmente por su decidida y activa participación en las calles. Emplearon tecnologías de información y comunicación, como celulares, receptores de radio y televisión. Reivindicaron su presencia porque siempre fueron considerados menores de edad o incluso como como carentes de estructuras y relaciones sociales o familiares.

Como muestra la siguiente entrevista, su actuación ha sido voluntaria y activa: “Mi participación era voluntaria [...] escuché gritos [...] y muchos fueron a la parte de Río Seco, yo también estuve allí junto con mis compañeros” (entrevista a un joven del sector de Río Seco, octubre de 2004).

También son ellos quienes pusieron piedras, escombros, llantas y participaron en marchas y enfrentamientos. “Los jóvenes fueron capaces de crear estrategias. Con gritos, los jóvenes ponían las piedras para bloquear” (entrevista a un joven, 14 de agosto de 2004). Se sumaron, de forma individual y por grupos, al conjunto de vecinos que tenían bajo su control diferentes espacios de la ciudad. Incluso dieron su vida: la mayoría de muertos y heridos tienen entre 20 y 25 años. Datos del trabajo coordinado por Verónica Auza (2004) muestran que son 13 hombres y mujeres los fallecidos entre 14 y 22 años (un 20 por ciento), mientras que son 50 los heridos entre 15 y 20 años (un 19 por ciento, porcentaje por encima del que presentan otros grupos etarios). Por ello los jóvenes son actores que descuellan en este levantamiento. Ellas y ellos establecieron vínculos sociales para sostener las acciones sobre las calles y avenidas, a partir de que ya se conocían en el barrio, la escuela o el colegio.

Estas redes les permitieron movilizar sus habilidades, capacidades y estrategias. La lucha los juntó como actores fundamentales para reconstruir sus propios tejidos sociales. Muchos también tenían experiencia de “guerra” por haber ido al cuartel (el servicio militar es obligatorio). Estuvieron conscientes de que los recursos naturales les pertenecen, como a todos los ciudadanos bolivianos. Se sintieron individuos útiles

para actuar, tejer redes y dar sentido al levantamiento. Hay una cierta relación entre sus particularidades como jóvenes y la fuerza de sus acciones. Hombres y mujeres pertenecen a la UPEA y a diferentes colegios de la ciudad. Se agruparon entre cinco o seis jóvenes para llevar y traer información de un lugar y otro:

Los jóvenes han sido los más activos, correteaban, iban y hablaban, o sea, eran los más desprendidos y los más lanzados. Existía participación de mayores, que eran los que mandaban, pero junto a los jóvenes. Es decir, ambos fueron actores (entrevista al dirigente de los familiares de los caídos, 17 de octubre de 2004).

También cabe destacar que participaron en la construcción de instrumentos, métodos y técnicas de defensa contra la agresividad de las fuerzas del Estado, a partir de su experiencia en el cuartel, como ya se señaló.

Los mineros o exmineros y los indígenas también fueron actores centrales del levantamiento. Los mineros, por ejemplo, todavía emplean la dinamita y participaron en los enfrentamientos. Por su parte, los aymaras (o indígenas) mantienen sus propias formas de acción y movilización. La movilización de recursos, como tecnologías colectivas y sistemas de turnos y vigias por grupos, son parte vital de este hecho. Particularmente los aymaras urbanos han adquirido experiencia en la construcción de la ciudad y en la relación conflictiva con el Estado y los gobiernos. También tienen sus propios sistemas de comunicación, ya sea oralmente, en lengua aymara, o mediante pututus, y los sistemas de símbolos del poder, como la *wiphala*. Además, tienen un gran manejo de tecnologías para almacenar alimentos deshidratados (*ch'uñu*, haba, quinua, *ch'arki* o pito). Estas técnicas permitieron que muchas familias pudieran alimentarse sin necesidad de traer productos del área rural. En tanto, muchas familias de la zona sur de La Paz, por ejemplo, estaban preocupadas porque sus provisiones se habían acabado.

Otro factor a considerar es la relación de familias extendidas en gran parte de la ciudad. Una familia vive prácticamente en diferentes barrios o distritos. Por ejemplo, unos miembros de un mismo núcleo familiar viven en la 16 de Julio, otros en Villa Adela y los demás en la Ceja. Esta es una especie de tejido familiar que copa diferentes espacios urbanos. Si sumáramos solamente 200 familias y las multiplicamos por cuatro miembros, tendríamos una complejidad de relaciones familiares y de origen provincial o regional en toda la ciudad.

3.7. En multitudes: toma directa de las calles y avenidas

Los espacios privados y los espacios públicos se convirtieron en lugares estratégicos a ser tomados para desde allí construir diferentes grados de poder alterno al gobierno. En uno y en otro lugar se articularon complejas y prácticas formas de acción colectiva. Es una síntesis de la toma directa y estratégica de todos los espacios de la ciudad para inmovilizar al Estado o al gobierno. El primer mecanismo fue controlar o autogobernar el territorio de los barrios; el segundo, tomar todas las arterias o vías públicas de las principales y estratégicas plazas, avenidas y carreteras dentro la ciudad y en las áreas rurales. Así se hizo efectivo el gobierno de la vida social y de las decisiones públicas.

Después de la masacre del 12 y 13 de octubre, se incrementó el cava-do de zanjas en toda la ciudad, y hubo concentraciones y multitudinarias marchas para bajar a La Paz. También el 17 de octubre se lanzó vagones de tren sobre la Autopista. El territorio se hizo intransitable debido a estos extraordinarios mecanismos de acción colectiva.

La capa asfáltica de la avenida 6 de Marzo se levantó en ambos carriles a la altura del puente de la avenida Bolivia, así como los grandes bloques de cemento que separan a ambas vías, a golpe de combo y otros instrumentos de trabajo. También se lo hizo a la altura de Senkata, hasta Ventilla. Con esto se pretendía detener a los camiones cisterna que se dirigían a la hoyada con gasolina y gas licuado.

Se multiplicó la quema de llantas en carreteras y avenidas. De distintas partes de El Alto se elevaba una gran cantidad de humo; parecía una ciudad bombardeada. Estas fueron maneras directas y explícitas de expresar el levantamiento general, que la gente ha llamado el inicio de la “guerra civil”. Cientos y miles gritan: “Goni asesino, Goni vende patria”, “El gas no se vende”, “Guerra civil”, etcétera.

Las estrategias de lucha han sido el bloqueo de las avenidas principales con escombros, piedras, llantas y lo que podíamos pillar ese rato. El segundo paso que hemos tomado ha sido el cierre de todos los comercios y mercados de la zona. Toda la gente que no ha precavido eso ha tenido escasez de productos alimenticios en sus casas. Finalmente, en las noches hemos encendido fogatas para hacer la vigilia por turnos. En mi caso era un grupo de seis personas. Cada seis horas intercalábamos el turno de la vigilia. A veces nos servían matecito o cafecito y muy rara vez algo de comer (entrevista a un vecino de Río Seco, 10 de agosto de 2004).

El territorio alteño está lleno de estrategias y tácticas de lucha. Se ponen en acción las experiencias colectivas y se interrelacionan profundos sentimientos colectivos contra el gobierno y el Estado. La gente entiende que el gobierno ha decidido exportar el gas por puertos chilenos. El histórico enclaustramiento marítimo de Chile a Bolivia se considera un hecho injusto del que, según la gente movilizada, el gobierno se ha vuelto cómplice. Miles de mujeres y hombres gritan en las calles: “Se ha posesionado un gobierno chileno en La Paz”, “Es un ejército chileno el que actúa en las calles, por eso nos están matando”.

La gente se arriesgó al punto de sacrificar su vida para evitar que los capitales transnacionales hicieran uso de los recursos naturales. Este y otros argumentos se convierten en factores de articulación de los barrios y de los nueve distritos de la ciudad. Es el tejido de complejos y profundos sentidos de “hermandad” vecinal o étnica manifestada ahora como un potente y cohesionado movimiento territorial.

Acción de las organizaciones vecinales y la CSUTCB

4.1. La actuación de la FEJUVE y la COR

¿Cuál ha sido el rol de la dirigencia vecinal en este levantamiento de El Alto? ¿Cómo asume el levantamiento de la ciudad? ¿Qué tipo de estrategias utiliza?

Es importante destacar que la actuación de los dirigentes de la FEJUVE¹¹, la COR¹², los gremiales o los líderes barriales de las Juntas

-
- 11 La Federación de Juntas Vecinales data de 1957, cuando se constituye como una Subfederación de Juntas Vecinales. Posteriormente, el 8 de diciembre de 1966, se consolida la Subfederación de Juntas Vecinales de El Alto en representación de 30 zonas; y en 1979, se eleva al cargo de Federación de Juntas Vecinales de El Alto. Después de 30 años de lucha, este poder vecinal se traza nuevos retos y desafíos para recuperar espacios políticos (Fernández R., 1993).
 - 12 La Central Obrera Regional de El Alto data de 1985. La historia concreta aún no se ha escrito. Nació con cinco organizaciones de El Alto y hoy sus asociados son: la Federación de Gremiales, Panificadoras, Trabajadores en Carne, el Consejo Central de Artesanos, la Asociación Trabajadores en Mercado, Gastronómicos, Maestros y Junta de padres de familia. En principio se llamaba CUTAL (Central Única de Trabajadores de El Alto). En 1988, en el congreso de Oruro de la Central Obrera Boliviana, se la reconoce como Central Obrera Regional de El Alto. Juan Meléndrez dice al respecto: “Contamos también con 14 sindicatos que forman parte de la COR y están afiliados a esta institución que fue creada por el impulso de una necesidad de defensa de los trabajadores y que a lo largo del tiempo ha tenido bastantes logros” (entrevista a Juan Meléndrez Pérez, 18 de agosto de 2004). Por su parte, la Federación de Gremiales de El Alto se crea el 4 de marzo de 1971; actualmente la encabeza Braulio Rocha y cuenta con muchas organizaciones y un número elevado de afiliados (Fernández R., 1993).

Vecinales ha sido de mucha importancia, particularmente al inicio del paro cívico indefinido. Después de mucho tiempo la COR, la FEJUVE, los gremiales y la UPEA habían logrado coordinar sus protestas sociales. Antes los caracterizaban sus permanentes disputas y conflictos, por lo que la coordinación interinstitucional se convirtió en un hecho de importancia histórica. Cada una de estas instituciones organizó a sus afiliados para hacer frente a la agresividad del gobierno neoliberal y así crear un gran marco de acción de protesta antigubernamental.

En principio, ¿cómo la FEJUVE articuló y organizó los nueve distritos y las más de 500 juntas vecinales en el levantamiento? ¿Cuál era la relación entre la FEJUVE y los nueve distritos y los barrios? ¿Qué tipo de peligros corrió su dirigencia?

El primer acto fundamental de la FEJUVE fue haberse constituido en referente de la coordinación, tal como la COR, los gremiales y la UPEA. Este hecho fue el factor estructurante y catalizador de las acciones de protesta de toda la ciudad. Se instruyó a las diferentes juntas vecinales y sus presidentes, mediante varios mecanismos de comunicación, cumplir con las demandas: no a la exportación del gas por puertos chilenos, la anulación de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Tributario, así como el no ingreso al ALCA (este conjunto de demandas es la llamada Agenda de Octubre).

Resulta importante explicar la articulación o relación que tiene la FEJUVE con las más de 500 juntas vecinales de la ciudad. En un primer momento, el presidente de la FEJUVE convoca a los presidentes de las diferentes juntas vecinales y miembros de base para tratar un tema (en este caso, la no exportación del gas por puertos chilenos). La convocatoria tiene un plazo de 24 horas o más. Para que esto tenga efecto se difunde un comunicado en las oficinas de FEJUVE y en algunos medios de comunicación. Es importante una difusión a varios niveles para después llegar a un conjunto de acciones concretas. Reunidos los presidentes de las juntas y sus asesores (cuando los hay), hacen una larga y profunda evaluación, bajo un enfoque crítico. Finalmente llegan a una decisión colectiva, que suele ser tomada por consenso o mediante voto. Las decisiones de mayor impacto necesitan un consenso previo. Las decisiones por votación, al no convencer a todos, suelen no tener mayor trascendencia.

Sobre la base de haber participado en dicha reunión y coordinar con la COR y los gremiales, los diferentes presidentes de las juntas vecinales proceden a comunicarla a los vecinos –en algunos casos, mediante altoparlantes en los barrios y, en otros, a través de las reuniones con los diferentes distritos–, para llegar finalmente a la reunión

de los barrios o juntas vecinales. En esta, cada barrio o zona analiza la decisión, particularmente cuando se trata de un hecho de mucha relevancia social. Hay un proceso que es de ida y vuelta entre las tres instancias fundamentales: la FEJUVE, los nueve distritos y las diferentes juntas vecinales locales.

La decisión de ir al paro indefinido en rechazo a la exportación del gas por Chile se convirtió, a la postre, en un hecho histórico. Uno de los exdirigentes manifiesta sobre este hecho:

Nosotros hemos honrado la huelga indefinida, hemos bajado a los distritos, hemos avisado a los presidentes, hemos movilizado a la gente. Pero no salían al cien por ciento, una junta podía sacar veinte, treinta y otra nada, variaba el porcentaje de vecinos. Pero a medida que pasan los días, se va agudizando la movilización porque el gobierno no respondía y arremetía contra el pueblo (entrevista a José Ramos, 18 de junio de 2004).

Fue necesario un proceso. Al principio resultó difícil mover las estructuras de organización de las juntas vecinales. El nuevo contexto social ayudó. La profunda animadversión contra la figura del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su política de defensa de las empresas transnacionales motivó la movilización total de la ciudad. El contexto social estaba marcado por una beligerancia social y estatal en todo el país, particularmente en la gran región andina (Mamani Ramírez, 2004a).

¿Qué tipo de estrategias de movilización se utilizó? Aquí es importante prestar atención a las voces de los actores líderes de octubre (en los anteriores acápite hemos escuchado a los actores vecinales o de los barrios). El representante de los gremiales, al tratar el tema el paro cívico indefinido, sostiene que este tuvo mucha importancia. Era un acto para honrar y respetar la decisión de las organizaciones sociales de El Alto.

Nosotros esos días hemos declarado estado de emergencia, vale recordar. Ha lanzado la primera piedra la FEJUVE, al declarar un paro cívico aquí en El Alto y hemos acatado eso, como también la petición de la Central Obrera Regional de El Alto. Nosotros los gremiales no solamente somos gremiales, también somos parte de la junta de vecinos, también somos de juntas escolares y padres de familia. Ese día no hemos salido como gremiales, hemos salido como junta de vecinos y creo que hemos hecho respetar a nuestra querida Bolivia. Hoy creo que estas tres instituciones están marcadas y han pasado a la historia (entrevista a Braulio Rocha T., 18 de agosto de 2004).

Bajo este contexto, definitivamente la FEJUVE se había convertido en el actor estructurante del levantamiento, además de informar sobre los hechos ocurridos dentro de organizaciones como la COR, gremiales, UPEA y otros. También informaba sobre lo que ocurría entre un distrito y otro. Así difundió comunicados y pequeños volantes para orientar, concientizar y convocar a los actos de protesta social:

La estrategia que adoptamos, al menos a mi parecer, fue la “concientización” por distintos medios de comunicación. Los medios, en un principio, trataron de manejar la comunicación a favor del gobierno, luego la mayoría de las emisoras aymaras ayudaron a informar a favor del pueblo. Uno de los primeros en concienciar fue el amigo Titi Calamani por la radio. Luego se sumaron otras emisoras (entrevista a Valentín Valencia, dirigente de la FEJUVE en ese momento, 9 de julio de 2004).

Sin duda, fue de vital importancia el trabajo de concientización, como el que hizo Titi Calamani¹³. Las radioemisoras identificadas con el mundo indígena, como Pachamama, Red Erbol, Canal 4 de Radio y Televisión Popular (RTP), jugaron un rol fundamental.

La FEJUVE se había convertido en un ente creador de discursos de rebeldía y descontento social en contra del Estado y del gobierno de Sánchez de Lozada. El discurso de la no exportación del gas ni por Chile ni por Perú, sino su industrialización en el territorio boliviano, es el referente de este hecho. En mayo-junio de 2005 (después de casi dos años) se volvió a repetir este discurso, esta vez para exigir la nacionalización de los hidrocarburos.

Con el paso de los días, El Alto se había convertido en un territorio ingobernable para el Estado, debido a todo lo mencionado anteriormente. Mientras esto ocurría, en la ciudad de El Alto se acentuaban los bloqueos carreteros en las rutas Altiplano-valles del norte y del sur de la ciudad de La Paz. También en el Altiplano de la provincia Aroma y Pacajes. Otra de las estrategias fundamentales de la FEJUVE fue la marcha de protesta que bajó de forma multitudinaria hacia La Paz, particularmente después de la masacre del 12 y 13 de octubre. Esta marcha fue un factor que irradió aún más las acciones de protesta; en ella se exponen de forma contundente y concreta las estrategias de acción vecinal: “La FEJUVE

13 Se comentó ampliamente que Titi Calamani fue asesinado después de octubre. Se había convertido en el mejor intérprete de los sentimientos de indignación del mundo aymara. Él, según varios de sus amigos, era un sacerdote de la religión aymara porque difundía la idea de la relación entre el hombre y la naturaleza.

organizó una de sus marchas gigantescas. Una ola humana interminable que nunca se ha visto y creo que nunca más se verá” (entrevista a José Ramos, 18 de junio de 2004). La ciudadanía daba un jubiloso recibimiento a los alteños en dichas marchas:

Cuando bajábamos marchando hacia la hoyada la gente nos invitaba refrescos, nos aplaudía y nos proporcionaban todo tipo de ayuda [...]. Las vigiliadas voluntarias se intensificaban con llamadas por altavoz. Y en el área central (12 de Octubre, Villa Dolores y La Ceja) se aseguraban el contorno de los negocios con alambres de púas ante posibles saqueos (entrevista a un vecino del sector de Villa Dolores, 20 de agosto de 2004).

En este sentido, el discurso de la no exportación del gas y los grados de “hermandad” indígena urbana-rural tienen un efecto importante para contrarrestar el discurso de criminalización hacia la ciudad. Ante esta situación, los dirigentes tuvieron que tomar resguardos para cuidar su integridad física. Muchos de ellos fueron amenazados y tuvieron que dormir en diferentes casas y zonas como mecanismo de autodefensa y articulación dirigencial. Los dirigentes de la FEJUVE y los presidentes de las juntas vecinales se convirtieron en los pilares de organización y articulación de las acciones colectivas. Temían caer presos a manos de los militares o policías y sufrir torturas, como sufrieron varios de los detenidos.

Al igual que la FEJUVE, la COR tuvo una actuación importante. Coordinó sus acciones con la FEJUVE, gremiales y estudiantes de la UPEA. Articuló un conjunto de acciones complejas y radicales de manera conjunta con sus organizaciones asociadas. De esta manera, la participación de la COR fue de vital importancia porque permitió unificar el complejo mundo indígena-popular en una sola dirección: la no exportación del gas por Chile. El 7 de octubre sería un día decisivo. Se daría una especie de resistencia armada.

El 7 de octubre, los mineros marchan en protesta contra la desatención del gobierno y llegan a Ventilla, Senkata. La COR y la FEJUVE hicieron entonces una llamada a la resistencia civil armada y anunciaron que el paro del miércoles “sería jodido” [...] El campo de batalla serían las calles y avenidas de El Alto, la ciudad de los aymaras levantada contra la democracia neoliberal (*La Prensa*, Suplemento especial del 7 de diciembre de 2003).

Los dirigentes se movilizan y apoyan a sus bases encabezando las marchas con estribillos contra el gobierno. Nuevamente la organización

vecinal fue la matriz de la acción colectiva. Si bien era imposible que los dirigentes se reunieran, por el bloqueo y la toma de la ciudad, estos se comunicaban mediante teléfonos celulares y otros sistemas, para consolidar y dar sentido a las acciones reales del potente levantamiento de la ciudad.

La movilización era coordinada [...] todos andaban con una radio, como una forma de comunicarse [...] toda la ciudad de El Alto estaba expectante de lo que iban a decir la FEJUVE y la COR, que expresaban el sentimiento del pueblo (entrevista a uno de los dirigentes de la COR, 16 de agosto de 2004).

Hay una permanente comunicación entre los distintos niveles de organización de la COR. Es importante resaltar que los sistemas de comunicación –ya sea mediante celulares o *ch'askis*, jóvenes que van disimuladamente a comunicar a uno y otro dirigente– generan nuevos mecanismos en este sistema de acción. Así se comunicaban los dirigentes para fortalecer y, al mismo tiempo, cuidar la seguridad física de cada uno de ellos.

Organizadamente con todos sus miembros, como comandantes en diferentes lugares, también nos organizamos con los presidentes de la junta de vecinos y las demás organizaciones matrices que tenían un centro específico (entrevista a Juan Melendres, ejecutivo de la COR, 18 de agosto de 2004).

Mientras muchos dirigentes actuaban desde sus barrios o distritos, otros lo hacían desde la FEJUVE. La actuación de Roberto de la Cruz fue importante: él y un grupo de dirigentes y miembros de base habían comenzado la marcha desde Caracollo, junto con las autoridades comunales de las provincias del Altiplano aymara de La Paz:

No quiero hablar de una lucha organizada por la COR. Para mí ha sido simultánea a la organización de las bases. Más bien nos han rebasado. Mientras los dirigentes habían iniciado la lucha, las bases se han organizado y se han convertido en los verdaderos líderes con las bases sociales: jóvenes, mujeres y hombres han visto que sus hermanos eran asesinados. Estaban muriendo. “La sangre de los indígenas muertos ha llamado a la sangre indígena” (entrevista a Roberto de la Cruz, el 30 de agosto de 2004).

Por su parte, los dirigentes gremiales también participaron mediante sus propias estructuras de organización. Por sectores, por ramas de actividad comercial y por turnos y horarios. Cada una de estas organizaciones

puso en marcha sus propias estrategias de poder y de articulación territorial para lograr un efectivo levantamiento social:

Por sectores, realmente los vendedores salimos para defendernos porque, como vecinos, en las reuniones nos enterábamos que el gobierno está regalando nuestro gas y vendiendo a Chile. De esa manera nos organizamos para decirle que no se venda el gas por Chile (entrevista a un comerciante de la 16 de Julio, el 3 de agosto de 2004).

Tanto la COR como los gremiales y la FEJUVE utilizaron varias tácticas y estrategias de lucha. Se entiende por estrategias a aquel conjunto de procedimientos para alcanzar el objetivo. Una de aquellas estrategias fue la organización por manzanas, cada una con sus respectivos jefes. Estos, como hemos ya señalado, cavaban zanjas, construían barricadas, trasladaban de vagones y fabricaban “armas” contundentes. Para algunos, estos sistemas de organización se parecían a los de los cuarteles militares. Las vigilias se realizaban por grupos y por turnos para estar, como se dice, “ojo al *charki*” o atentos a todo movimiento sospechoso. En cuanto a las estrategias psicológicas, se puede decir que la memoria de Tupak Katari, Bartolina Sisa y Pablo Zárate Willka se habían convertido en referentes de la actual lucha aymara. La presencia de los dirigentes tenía el apoyo moral y político de todos los vecinos y vecinas.

4.2. La participación de Felipe Quispe, el Mallku, y de la CSUTCB

Es importante tomar en cuenta la actuación y el liderazgo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en el levantamiento de El Alto, bajo la figura de Felipe Quispe. Los aymaras del Altiplano y de los valles del norte de La Paz iniciaron su marcha de Huarina hacia la ciudad de El Alto el 6 de septiembre. Es una marcha paralela a la protagonizada por Roberto de la Cruz desde Caracollo. La dirigencia aymara, al llegar a El Alto, inició una huelga de hambre en la Radio San Gabriel, haciendo aún más efectivo el contundente levantamiento de la ciudad. Desde este lugar se gesta un discurso y actos de protesta que concluyen en la lucha interrelacionada con los aymaras urbanos de esta ciudad. Es un momento importante en la interrelación política entre el mundo rural y el mundo urbano. Es el recuento de un mismo mundo: el aymara.

Al pasar los días, la huelga de hambre se agigantaba de manera impresionante. Ante el peligro de la toma de la sede de la huelga de hambre por el gobierno, los vecinos del lugar (Villa Adela y 1ro de Mayo) rodearon Radio San Gabriel para impedirlo. La huelga de hambre se había convertido en un acto emblemático del levantamiento aymara.

Un hecho importante es la declaración del “estado de sitio indígena” en todas las comunidades y ayllus de Bolivia; es algo inédito en la historia contemporánea de la lucha aymara. Los dirigentes expresan los grados de discriminación racial que sufren históricamente los aymaras en Bolivia. Los indios también pueden declarar un estado de sitio dentro de un territorio estatal. Incluso es un gran atrevimiento ante el secante racismo de Estado, porque solamente el Estado tiene la potestad de declarar un estado de sitio en su jurisdicción. Esta declaración afirma en una de sus partes sobresalientes:

Declarar estado de sitio en los pueblos y comunidades campesinas indígenas originarias a nivel nacional, no permitiendo patrullar militares ni policías (Resolución del ampliado de emergencia en huelga de hambre indefinida del Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB. CSUTCB/019/2003).

Felipe Quispe se convierte en actor importante; aunque desde otro ángulo, también Evo Morales, particularmente en el Chapare (Mamani, 2004). Quispe es uno de los referentes del liderazgo indígena para contextualizar la lucha barrial de las juntas vecinales. Con su liderazgo en las provincias de La Paz, pasa a ser una referencia de la lucha social rural y urbana, aunque este hecho no es visibilizado en los medios de comunicación.

De esta manera, aymaras alteños, aymaras rurales y, por supuesto, los mineros, articulan un complejo sistema de sentidos y discursos beligerantes o litigantes para crear y disponer acciones sobre las calles y avenidas y dentro de los barrios. Los barrios son el lugar de transmisión territorializada de los actos multitudinarios de protesta social y de cerco a los espacios del poder blanco-mestizo. La ciudad de La Paz, particularmente la zona sur, era el objetivo central: se trataba de ingresar y tomar de forma física estos territorios, ahora convertidos en archipiélagos blanco-mestizos.

En síntesis, se yergue un conglomerado de actores líderes que mutuamente se interrelacionan para disputarse la dirección de este liderazgo. Por una parte, como se ha mostrado más arriba, está la dirigencia de las juntas vecinales, constituida institucionalmente por la FEJUVE, la COR,

los gremiales y la UPEA; por otra parte, la dirigencia rural aymara (la CSUTCB) en huelga de hambre en Radio San Gabriel. Cada uno por separado, y a ratos interrelacionados, se convierten en referentes de legitimación ideológica del levantamiento de El Alto. Es importante entender que es necesario que exista un referente generador y contenedor de los discursos beligerantes. La gente movilizada deposita una referencia suya para después, desde este lugar, crear un marco de decisión en los microespacios de las interrelaciones barriales como garante y generador de un levantamiento social. Jugaron este rol la dirigencia vecinal, los trabajadores y los aymaras rurales, junto con los sentidos de acción territorializada de las juntas vecinales de la ciudad.



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

Poder barrial y caída de Sánchez de Lozada

5.1. Miles más llegan del campo

Se intensifica el levantamiento indígena-popular en la ciudad de El Alto, en las provincias del departamento de La Paz y en el interior del país. Se anuncia que para el día 16 de octubre llegarán miles de indígenas de las provincias, específicamente de Omasuyus, Aroma y Los Yungas, y los mineros de Huanuni (Oruro). Hay que recordar que en el área rural también hay un levantamiento general. El Altiplano-valles del norte de La Paz lleva un mes de bloqueo de caminos. En la provincia Aroma, luego de la masacre de los mineros de Huanuni en Patacamaya, hay una inquietud creciente. Se anuncia que podrían llegar 14 mil mujeres y hombres de esta provincia. Hay un ambiente totalmente adverso al gobierno. No solo la ciudad de El Alto es actor central de este levantamiento; también lo son las comunidades y ayllus rurales de La Paz y Oruro.

El anuncio de este arribo y su posterior articulación territorial generan un cerco político y casi militar al gobierno y a los barrios más “distinguidos” de la zona sur de La Paz. En esta parte de la ciudad viven las elites gobernantes y económicas. No solo es la presencia masiva de los aymaras del Altiplano y de El Alto, sino también la de los aymaras de los valles de Río Abajo, puesto que el día 13 de octubre ellos también sufrieron una violenta masacre. Sin embargo, el espacio físico más contundente de esta multitudinaria concentración, como hemos demostrado, es la ciudad de El Alto. Por su parte, la clase media de la ciudad de La Paz protagonizó una huelga de hambre, encabezada por Ana María Campero, que incomodó al gobierno del MNR.

Así, en La Paz, durante los días 16 y 17, se concentran miles y miles de mujeres y hombres dispuestos a todo. Las estrategias de organización adquiridas durante el levantamiento se convierten en referentes de un poder real. Vienen cargados de una decisión muy clara: la de sacar a Sánchez de Lozada del gobierno. Unos llegan en movilidades, como los mineros cooperativistas de Huanuni, y otros lo hacen de distintas maneras: a pie, en bicicleta y en otros medios de transporte. Llegan por diferentes caminos secundarios o por “el deshecho” y por las mismas carreteras bloqueadas. Gran parte de La Paz se convierte en territorio controlado por miles de aymaras rurales y urbanos que habitan en cada uno estos espacios geográficos. La sede de gobierno está cercada por estos miles llegados de distintas regiones.

El levantamiento indígena urbano-rural y de los obreros tiene tomados importantes y estratégicos lugares de la ciudad. También del área rural. En el primer caso, se trata de la Ceja de El Alto, los puentes y pasarelas de esta ciudad y la zona sur de La Paz. El levantamiento se ha territorializado dentro de los mismos barrios y provincias, particularmente de La Paz y Oruro. La presencia de los comunarios de Jach’a Karangas de Oruro es una referencia directa de aquello, es señal de un levantamiento general de toda el área del territorio andino. Así se constituyen alianzas interdepartamentales entre La Paz y Oruro, como en los tiempos de Pablo Zárate Willka.

En La Paz uno de los lugares estratégicos es la plaza San Francisco. Aquí se ha hecho pública la masacre y la concentración de miles y miles de hombres y mujeres. Se grita a viva voz: “¡Que renuncie Sánchez de Lozada!”, “¡Goni asesino, Goni carnicero!”, “¡Ahora sí, guerra civil!”, etc. Fácilmente se concentraron cada día más de doscientas mil personas. La muestra más elocuente es que no todos cabían en la plaza. Por falta de espacio, el resto marchaba fuera de la plaza o en sus alrededores. Estos grupos bajaban y subían por las calles Murillo, Figueroa, Sagárnaga y, en el otro extremo, por la Evaristo Valle, la Comercio y los alrededores de la plaza Murillo, donde están el Parlamento y el Palacio de Gobierno.

Para bajar, la gran movilización se concentraba previamente en la Ceja de El Alto. Después de este acto presencial, miles de alteños partían en inmensas columnas. Fue impresionante observar cómo unos bajaban serpenteando por el sector del faro Murillo, otros por Ballivián, el resto por Pasanqueri y por el deshecho que, bajando de La Ceja, comunica con las alturas del colegio Holandés, la avenida Buenos Aires y la Garita de Lima. Todos portando *wiphalas*, hondas, palos, petardos, piedras y dinamita. La multitud se convierte en el referente más directo

del estruendo de voces, como un rugir de las multitudes. Mediante este bullicio la marcha traspasa fácilmente las fronteras del poder dominante. En este contexto, el monopoder gubernamental empieza poco a poco a agrietarse por todo lado. Sus soportes intelectuales y morales no responden. La capacidad de monopolizar a la opinión pública ya no es efectiva. Cualquier acto gubernamental –como la convocatoria al referéndum por departamento y la Asamblea Constituyente– irrita a la población movilizada. Se entiende que ha llegado muy tarde. El gobierno es ilegítimo, y el descontento y el repudio crecen, haciendo insostenible la presencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en el gobierno y en el país. Y así fue. Tuvo que caer como uno de los gobiernos más resistidos de la historia de Bolivia.

Las condiciones de clase y de etnicidad, en este marco, se complementan radicalmente como no se había hecho antes, ya que tanto los obreros como los indígenas se convierten en actores políticos del levantamiento general. Bolivia es un país donde los autoidentificados como indígenas ascienden al 62 por ciento de la población; finalmente, esta referencia estadística ahora se hace política. Las multitudes tienen una definición: son aquellos indios discriminados y explotados históricamente por el sistema de dominación étnica. El país vive uno de los momentos más dramáticos de la última etapa de su historia. Las dominaciones se visualizan como un hecho no democrático y se configuran como dictadura étnica.

5.2. Ingresar al Palacio de Gobierno y la zona sur de La Paz

Por la ocupación social y territorial de las dos ciudades más importantes de la República (La Paz y El Alto), se configura definitivamente un ambiente totalmente adverso e incontrolable para el gobierno. Tanto en la Ceja como en la plaza San Francisco y en los territorios del Altiplano y valles hay una decisión casi tomada: “hay que ingresar al Palacio de Gobierno y a la zona sur de la ciudad de La Paz”. Se configura un hecho político sin precedente en la última etapa de la historia republicana. En diferentes lugares de El Alto esta consigna gana frente a otras posturas conciliadoras pues, pese al levantamiento general de la ciudad, también se dejan escuchar voces conciliadoras, como la de la Iglesia católica.

El cerco demográfico que tiene la ciudad de La Paz es ahora un cerco político. Este cerco significa básicamente la ocupación territorial sobre los barrios de las laderas y la ciudad de El Alto. En estos lugares

viven miles de migrantes de las áreas rurales y sus descendientes (como hemos mostrado en los primeros capítulos de este trabajo). Durante el largo proceso de urbanización de la ciudad de La Paz, se ha levantado este cerco constituido por poblaciones indígenas urbanas empobrecidas, pero también por poblaciones con ingresos medios o altos y exmineros que se han instalado en los barrios de Buenos Aires y Garita de Lima, entre otros. El hecho importante ahora es la forma pacífica y organizada con la que estas poblaciones ocupan La Paz para hacer de ella una de las ciudades latinoamericanas con mayor presencia indígena por sus formas de relación social y valores culturales. El fenómeno también se manifiesta en los grados de dominación de las élites blanco-mestizas de la zona sur. Según el Censo de Población y Vivienda (2001), en la ciudad de La Paz el 62 por ciento de la población se ha autoidentificado como indígena (INE, 2002), dato que nos permite sostener este hecho. De pronto esta ocupación pacífica del territorio se convierte en una ocupación politizada. La presencia cotidiana de estas poblaciones se convierte en un hecho que amenaza directamente a los espacios físicos en los que se reproducen biológicamente los grupos y las fracciones dominantes de La Paz (y de Bolivia).

En el caso de El Alto, no hay que hablar de este cerco demográfico; hay que asumir que hace 50 años que la ciudad está tomada directamente por los aymaras urbanos y los trabajadores. Esta es una toma directa de su tiempo-espacio y una forma de convertirla en un territorio levantado contra el Estado y su gobierno. No se da una transformación del cerco demográfico en cerco político, como sucede en La Paz, porque preexiste una toma concreta de este espacio y tiempo. No hay necesidad de cercar; simplemente se despliega la ocupación del espacio urbano como un hecho político. La constatación más clara de esto se da mediante los mencionados microgobiernos barriales que se mueven en base a un conjunto de sistemas de organización y acción social.

Estos grados de conflictividad crean o reabren profundas fronteras étnicas dentro de estas dos ciudades, particularmente en La Paz. Los grados de intolerancia social o étnica se han hecho cotidianos. Los indígenas urbanos y de las áreas rurales califican y ponen en un rango mayor la categoría de los *q'aras* como referentes directos de la violencia estatal-gubernamental que ahora se ha manifestado. También se asocia a estos con la corrupción y la venta del gas por Chile. La palabra *q'ara* —si bien no se ha publicitado, como ha sucedido con la consigna de la no exportación de gas por Chile— se ha manifestado en baja intensidad o en un discurso algo encubierto. La muestra más evidente del hecho

es que ciertos periodistas no podían subir a El Alto. Se los había calificado de *q'aras* por compartir ciertos rasgos típicos de los gobernantes. Por su parte, en la zona sur a todo transeúnte con ciertos rasgos típicos indígenas se los calificaba de asaltantes y destructores de la propiedad privada. Se los llamaba “marchistas”. La palabra marchista significa para el mundo blanco-mestizo acomodado aquel que destruye la propiedad privada y causa desorden social. En una interesante entrevista se deja notar este hecho. Doña Susana, del barrio de La Florida, y otras personas, manifiestan que ellos y ellas no están acostumbrados a que este tipo de movilizaciones lleguen a la zona sur:

La zona no está acostumbrada a estas situaciones, nos están apuntando (los conflictos) y no podemos permitir que las marchas lleguen a nuestra zona, preferimos pagar a ver el caos en este lugar, incluso en La Florida y todo Obrajes hemos entregado dinero al Distrito Policial para que se resguarde eficientemente este sector. Sabemos que los campesinos de Río Abajo quieren ingresar por aquí a Calacoto y a la zona central, y los de la zona central también quieren eso (*La Prensa*, 12/10/03, citada en Mamani Ramírez, 2004b).

Un empresario de San Miguel también opina sobre esta posibilidad de ingreso de los marchistas a la zona sur: “Serán los dirigentes campesinos los responsables del odio irracional que están generando en contra de gente inocente” (*La Prensa*, 12/10/03). Un habitante del sector de Calacoto afirma: “Quieren venir a saquear a Calacoto, esos marchistas son ladrones que quieren saquear las tiendas o realizar actos vandálicos, eso no lo vamos a permitir, que se vayan a hacer creer a otro lado su pacifismo” (*La Prensa*, 12/10/03).

De manera inédita, las calles y avenidas de esta parte de la ciudad amanecían resguardadas por efectivos militares y policiales. Esto, pese a que los policías (particularmente los de baja graduación) sufren diferentes grados de explotación y discriminación étnica. En este último caso es bastante curioso observar cómo en las esquinas de las calles se instalan puestos de policías muy parecidos a las casuchas para perros pequeños. Las casetas no son mayores a un metro cuadrado. Allí, durante la noche y parte del día, permanecen los policías como fieles guardianes de la acumulación económica y política. Mientras, curiosa y cómicamente, las mascotas duermen dentro de las casas muy bien resguardadas por estos mismos.

Los policías y militares patrullaban calles y avenidas de la zona sur para controlar cualquier desborde, como el que se produjo efectivamente

durante los días 13 y 17 de octubre. En resumen, se desnuda lo que en la vida cotidiana se ve como un hecho normal o, dicho de mejor manera, que no se ve ni crea conciencia: las profundas relaciones de dominación étnica/clase. Se reabren profundas fronteras étnicas. Los indios se hacen intolerables para los blanco-mestizos y viceversa. Unos son calificados de corruptos y los otros, de bloqueadores. Así, la democracia liberal se devela como el referente directo de las dominaciones no democráticas dadas en contra de las poblaciones ahora levantadas. La normalidad se convierte en el referente del desorden: el desorden de la dominación étnica. Se ha puesto de manifiesto públicamente el racismo de Estado. El Estado y su manifestación práctica, como es el gobierno, se muestran como garantes de la dominación étnica y de las relaciones de discriminación racial. El color de la piel y los referentes culturales se manifiestan como los indicadores del conflicto y del desorden reinante. El hecho más contundente que demuestra esto es que se ha cometido una masacre contra una población que tiene solamente como referente su diferencia social y económica en relación con los grupos del poder. Estas poblaciones son pobres y ocupan, en la escala de las relaciones sociales o pirámide de la dominación, el nivel más bajo.

5.3. Se quiebra el gobierno

El día 15 de octubre empieza a quebrarse definitivamente la coalición gobernante compuesta por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Nueva Fuerza Republicana (NFR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Ese día renuncia el ministro de Economía, Jorge Torres. El propio vicepresidente de entonces, Carlos de Mesa Gisbert, había declarado: “Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no”.

La coalición que se había mostrado sólida hasta dos días antes, ahora luce toda su debilidad política. El MIR se retira del gobierno, y también NFR. El día anterior lo habían hecho las Fuerzas Armadas, al expresar su apoyo a la Constitución y a la democracia y no propiamente a la persona del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. A ello se suma el hecho de que el propio regimiento Calama, acantonado en Patacamaya, en una muestra de los desacuerdos entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, deja pasar la columna de mineros cooperativistas que vienen rumbo a El Alto y La Paz.

El viernes 17 comenzó mal para Sánchez de Lozada. No había dormido casi nada la noche anterior y cuando recibió el primer informe del día, se desayunó la noticia de que las Fuerzas Armadas habían “flexibilizado” su posición y permitieron el paso –en Patacamaya– de 58 camiones con miles de mineros y gremialistas que venían a La Paz a forzar su renuncia (Dossier de *La Razón*, 30 de octubre de 2003).

Al mismo tiempo, escasean dramáticamente los alimentos en los mercados de La Paz y El Alto. No hay productos del Altiplano, de los valles del Río Abajo y de las zonas tropicales y subtropicales de Caranavi y Alto Beni. Esto se debe, por un lado, a que los caminos están bloqueados; por otro, a la decisión colectiva de los aymaras del campo de no enviar productos hacia las ciudades. También faltan desde hace varios días las garrafas de gas licuado. Además, en la ciudad de La Paz no hay gasolina para los motorizados, lo que es un factor que paraliza toda actividad comercial y social. Dos ciudades importantes de la República se encuentran totalmente paralizadas con efecto directo en el resto de las ciudades del interior (como Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y la propia Santa Cruz). En cada una de estas ciudades se multiplican los pedidos de inmediata renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia de la República.

Ningún sector movilizado quería negociar la paz con el gobierno. Este había perdido todo respaldo ciudadano, pese al apoyo que recibe de los empresarios y de algunas embajadas. El hecho determinante, y por demás evidente, para este rechazo es que el gobierno había cometido una violenta masacre en El Alto y La Paz. Durante diez días de movilizaciones y paralización de El Alto y cuatro de la ciudad de La Paz murieron más de 67 personas y 400 resultaron heridas. Según el levantamiento de datos y testimonios de la Comisión Pro Justicia y Paz, que alcanzaron a identificar a 40 de los 62 fallecidos (según nuestro dato, 67), se muestra que además hubo 21 personas torturadas y dos personas desaparecidas. Este documento es importante y aclara: “Estos casos no representan el total de las víctimas” (Comisión Pro Justicia y Paz, 2004: 29).

Para cualquier sector movilizado es imposible dialogar con el gobierno. De forma multitudinaria, se ha cerrado el cerco político sobre el gobierno. Así, el jueves 16 empieza definitivamente la caída de Sánchez de Lozada.

En realidad, la salida de Sánchez de Lozada empezó a gestarse poco a poco desde el mediodía del jueves 16, cuando el gobierno recibió la comunicación de la Iglesia –a la que le había pedido una mediación urgente– de

que no había ninguna opción de diálogo porque ninguno de los dirigentes sindicales quería negociar. La sangre de los muertos pesaba más que cualquier pedido eclesial (Dossier de *La Razón*, 30 de octubre de 2003).

Los indígenas urbanos y rurales, junto con los trabajadores mineros y fabriles, tenían físicamente cercada la plaza Murillo, el espacio físico del poder gubernamental (hecho que habría de repetirse también en mayo-junio de 2005). Miles de hombres y mujeres marchan sobre las inmediaciones del centro de poder de manera amenazante. Ocupan y obstruyen el accionar del gobierno. Los socios cogobernantes literalmente han huido ante este dramático hundimiento. No tienen el soporte político, moral e intelectual para sostenerlo y darle legitimidad. Los grupos dominantes y los intelectuales sobre los que se asienta la administración estatal también habían retirado su apoyo al sumarse a las movilizaciones sociales.

Sánchez de Lozada posiblemente sea la persona más resistida en estos momentos en Bolivia. Solo su aparición en los medios televisivos despertaba indignación. El acento (medio) gringo de su castellano también irrita a la población movilizada. El apodo de “gringo Goni” se convierte en una referencia directa a los intereses de los “gringos norteamericanos”. A mediodía de este 17 de noviembre, Sánchez de Lozada, alista en solitario sus maletas y pertenencias personales en la residencia presidencial de San Jorge.

Sánchez de Lozada estaba con el ánimo destruido, se sentía humillado por tener que irse de la presidencia contra lo que dicta la Constitución y, según él, fruto de un complot político bien organizado y financiado en el que participó hasta su vicepresidente, Carlos Mesa. “Ni mis ministros (los del MNR) están aquí, solo ustedes, gracias”, llegó a decir, intentando cambiar la expresión descompuesta de su rostro (Dossier de *La Razón*, 30 de octubre de 2003).

La arrogancia y el acentuado autoritarismo que caracterizan a Sánchez de Lozada han dado paso ahora a actitudes de resignación y humillación. Ha tenido una holgada vida de bienes y servicios personales como político y empresario. Por esto, al parecer, veía en todas partes conspiradores y traidores a su gobierno. La idea de una conspiración en su contra no dejó de tener importancia hasta el último momento de su presidencia, e incluso después de ella. Finalmente, el viernes 17 de octubre se leyó de forma oficial la carta enviada al Congreso, en la que da a conocer su renuncia a la presidencia de la República. Acusa nuevamente

a los sectores movilizados de ser la encarnación de la conspiración y sedición planificada. Dice que:

los peligros que se ciernen sobre la Patria siguen intactos: la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida. Estos peligros se asientan en la circunstancia histórica en que los fundamentos de la democracia han sido puestos en cuestión (Mensaje al H. Congreso Nacional, 17 de octubre de 2003).

Sánchez de Lozada se muestra hasta el final como un hombre soberbio y autoritario. En la carta dirigida al Congreso no reconoce sus propios errores y los actos de desgobierno, tampoco la corrupción y la cada vez mayor pobreza en Bolivia. Los parlamentarios que votaron a favor de la renuncia de Sánchez de Lozada fueron 97, frente a 30 votos en contra. Estos 30 votos correspondieron a los parlamentarios del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). De no haberse aprobado su renuncia en el Congreso, y si Sánchez de Lozada se hubiera quedado dos días más en el poder, se hubiera provocado que la multitud movilizada ingresara al centro y a la zona sur, posiblemente con un alto costo de vidas.

Aproximadamente a las 22 horas, después de escuchar la aceptación de su renuncia en el Congreso, Sánchez de Lozada tomó un vuelo regular del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) rumbo a Miami, junto a sus ministros más cercanos: Carlos Sánchez Berzaín (exministro de Defensa), Yerko Kukoc (exministro de la Presidencia) y Javier Tórrez Goitia (exministro de Salud). Lo interesante (y sorprendente) de esto es que huyeron firmemente convencidos de que todo lo que hicieron fue correcto. Según ellos, no se habían cometido actos sancionables, ni jurídica ni políticamente:

A pesar de que tuvieron que huir de La Paz, ni Gonzalo Sánchez de Lozada ni Carlos Sánchez Berzaín creyeron por un instante que se habían equivocado al manejar la crisis. Se fueron creyendo que habían hecho lo correcto (Dossier de *La Razón*, 30 de octubre de 2003).

A la misma hora, al escuchar la oficialización de la renuncia de Sánchez de Lozada, estalló en la ciudad de El Alto un júbilo indescriptible. Había caído uno de los gobiernos neoliberales constituido por una coalición blanca-mestiza. Es la caída de un gobierno lúcido, que tuvo la capacidad de “convencer” a más de 8 millones de personas sobre las bondades del modelo del libre mercado. Es un hecho histórico. Después de 20 años se derrumba la falacia neoliberal como único sistema viable y posible. Se había impuesto el neoliberalismo como la única posibilidad

real para vivir la vida económica, política y cultural. Así se derrumba una importante cantidad de certezas manifiestas de este proyecto como un hecho teleológico.

5.4. Júbilo en los barrios y en la Ceja de El Alto

Miles y miles de alteños, habitantes de las áreas rurales y de la ciudad de La Paz salieron de sus casas hacia las calles, avenidas y plazas para festejar ruidosamente el hecho. Unos y otros se abrazaban como si se hubiera logrado la propia presidencia de la República. Para la gente, esta renuncia tenía un valor fundamental porque resultaba de un sacrificado levantamiento general que duró una semana y tres días. Se afirma: “Ha valido la pena: ¡cayó Goni!”, y cayó de una manera dramática y humillante, tomando en cuenta que era un gobierno cargado de mucha soberbia y con una alta dosis de autoritarismo. Cuando se les preguntó qué sintieron cuando supieron que Sánchez de Lozada había renunciado, respondieron casi unánimemente:

Mucha alegría, mucha alegría, porque no en vano ha sido tanto esfuerzo, la sangre que hemos derramado, no ha sido en vano. Aunque lo que nosotros hubiéramos querido era agarrarlo para que este maleante pague sus culpas y entre a la cárcel y no quedarnos con una incertidumbre después que ha escapado por un supuesto golpe militar que se estaba hablando en las calles, que los militares iban a entrar antes de que el señor Mesa de presidente (entrevista a un vecino de sector de Río Seco, 10 de agosto de 2004).

No era poco lo que había ocurrido. En Bolivia había caído un hombre poderoso, tanto económica como políticamente. Es por esto que los miles de mujeres y hombres expresan públicamente su alegría y júbilo. Después de 20 años de iniciado el modelo de libre mercado con el Decreto Supremo 21060, del que Sánchez de Lozada fue uno de los gestores, se produjo un poderoso levantamiento general indígena-popular para “terminar” dramáticamente con un ciclo de gobiernos partidarios de la transnacionalización de la economía. Ganó nuevamente un tipo de nacionalismo sobre el librecambismo, una lucha larga en Bolivia. Por esta razón, es importante el reconocimiento que hacen los propios alteños sobre la actuación o movilización de los indígenas aymaras y quechuas de la parte andina de Bolivia. En fin, han ganado los que en el pasado siempre perdían o que eran objeto de la aplicación sistemática de

políticas neoliberales, políticas que acentuaron la pobreza y los grados de discriminación étnica y política. Ante este conjunto de hechos los vecinos manifiestan abiertamente su alegría:

Nosotros estuvimos al pendiente de las noticias. Cuando de pronto escuchamos que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había dejado su carta de renuncia a la presidencia, saltamos de alegría y supimos que el pueblo boliviano había ganado pese a todas las pérdidas humanas que hubo. Festejamos con petardos, con cohetillos, con música y con mucha alegría la caída del presidente [...] Ganó el pueblo aymara, quechua y el pueblo boliviano (entrevista a un dirigente del sector de Ventilla, 9 de julio de 2004).

Se desata, particularmente en la ciudad de El Alto, un mar de emociones casi incontenibles. La gente expresa libremente su alegría, pese a que a las 5 o 6 de la tarde del día 17 en la Ceja aún se escuchan disparos de armas de fuego. Lo que ahora tiene valor político es la dramática caída de un gobierno que tiene en su recorrido varias masacres: la masacre de Warisata y la de Ventilla, en el llamado “febrero negro”, la de la ciudad de El Alto y de las comunidades de Uni y Ovejuyo.

La categoría de vecino o alteño, bajo este contexto, se hace más intensa. Posiblemente de manera mayor o similar a los momentos de articulación de las estructuras de movilización social barrial. Se crea un grado de hermandad significativa entre el conjunto de hombres y mujeres que se abrazan en La Ceja y en la plaza San Francisco. La hermandad significativa quiere decir que no es un simple deseo colectivo, sino que es un hecho singular o extraordinario manifestado en la práctica de la lucha social. Una práctica que construye además sentidos de pertenencia colectiva sobre una misma realidad, como los grados de discriminación sufridos también de forma colectiva. Es decir que no solo una familia o una persona es la que sufre estos grados de discriminación, sino un conjunto de pueblos y poblaciones indígenas y populares. El poder de los microgobiernos barriales se convierte en el referente final que desnuda estas condiciones de explotación y dominación étnica en Bolivia. El abrazarse y desearse mutuamente que “todo vaya bien” es la muestra de estos grados de familiaridad entre el conjunto de los actores del levantamiento social indígena y popular. Así los barrios, durante aquellos días, y también hoy, mantienen su mirada en el accionar del nuevo gobierno, producto de la lucha y el levantamiento social de El Alto, las comunidades y ayllus del Altiplano y los valles de la gran región andina.

El nuevo gobierno se ha mostrado bastante oscilante para llevar adelante el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y aquellos que dispararon contra la población: los militares, aunque finalmente se dio en octubre de 2004 por el Congreso Nacional. Por ello, ante la continuidad de aquel desgobierno, esta vez con Carlos Mesa, en 2005 se da el nuevo levantamiento de El Alto y las provincias aymaras.

5.5. “Igual El Alto está dispuesto a levantarse”

A partir de este conjunto de actos y sentidos de organización interbarrial y articulación territorial, se produjo un nuevo ambiente sociopolítico en Bolivia. Esa tarde del viernes 17 y parte del sábado 18, una gran cantidad de hombres y mujeres se despedían jubilosamente en La Ceja de El Alto, anunciando que si los gobiernos vuelven a desatender sus demandas, “están dispuestos a levantarse en cualquier momento”.

Simplemente, si el gobierno actúa bien, y de acuerdo a las manifestaciones que han ocurrido en octubre, va estar bien. Si no, igual *El Alto está dispuesto para levantarse* en cualquier momento (entrevista a un dirigente del sector de Senkata, el 27 de agosto de 2004) [el resaltado es nuestro].

Se ha logrado que las poblaciones históricamente dominadas se hayan empoderado para hablar de sus propias posibilidades de acción colectiva o de un levantamiento generalizado. El espacio fueron los barrios de la ciudad de El Alto y las comunidades y ayllus de la región andina. Hay un conjunto de repertorios de acción beligerante; por eso la gente afirma que volverá a levantarse para crear nuevamente un nuevo momento sociopolítico. Como dice uno de los dirigentes alteños, “para poner los pechos de muralla” ante las masacres y la violencia estatal (entrevista a Roberto de la Cruz, 30 de agosto de 2004).

La articulación de los microgobiernos barriales posiblemente sea el referente más directo de este hecho. La ciudad fue tomada territorialmente desde estos pequeños gobiernos barriales. Aquí se decidió construir de manera colectiva barricadas y trincheras de lucha. También es un referente la presencia organizada de las comunidades y ayllus de las áreas rurales, por la experiencia y la lucha mostrada en los levantamientos de Omasuyus o el Altiplano-valles del norte de La Paz, los ayllus de Kurahuara de Karangas, el Chapare cochabambino, Los Yungas de La Paz y la ciudad de El Alto.

El gobierno de Carlos Mesa tuvo al frente a un conjunto de actores con mucha potencialidad para irrumpir en el escenario de la política y para hablar y actuar como los referentes de un poder alterno. Actores capaces de articularse para desarticular el poder gubernamental. También capaces de corroer socialmente la legitimidad de un sistema político o económico. Por esto la gente no dejaba de manifestar su predisposición para actuar nuevamente, aunque el Referéndum del 17 de julio muestra aparentemente un quiebre para desviar su accionar por otros rumbos menos dramáticos.

Que nuestros gobernantes sean más flexibles para solucionar nuestros problemas, de nuestros recursos naturales; en consulta siempre primero al pueblo boliviano. Porque de lo contrario se enfrentarán a las garras de la ciudad aymara, corriendo la misma suerte que Gonzalo Sánchez de Lozada, con nuestro lema siempre adelante: “El Alto de pie, nunca de rodillas” (entrevista a un vecino del sector de Río Seco, 27 de junio de 2004).

Como era lógico, los microgobiernos barriales se fueron disolviendo poco a poco cuando la situación política se estabilizó. Así como se constituyeron de manera colectiva, se disolvieron para reconstituirse en barrios o zonas donde continúa la vida social como siempre lo había hecho, sin mayores cambios, convirtiéndose en parte de las relaciones sociales cotidianas. El momento extraordinario ha pasado. Ahora “hay que volver a vivir la vida social y humana” aunque, está claro, sin dejar de constituirse como un espacio-tiempo que contenga la fuerza de las acciones colectivas. Es la misma fuerza que el 17 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, toma las calles para subirse a minibuses y micros e ir a la Ceja o ir a visitar a algún familiar o a los heridos.

SEGUNDA PARTE



Foto: Pablo Mamani Ramírez.

Consideraciones metodológicas y técnicas

En la segunda y tercera parte de esta publicación se ha continuado con la aplicación del método cualitativo, puesto que es más adecuado para el proceso de obtener información –debido a que la sociedad está en movimiento y no es posible matematizar– y de análisis de los datos y sus resultados. Mediante este método se han obtenido distintas percepciones de los hechos en proceso: comentarios sobre diferentes situaciones, el contacto real o fáctico con gente en las calles y en los barrios (obviamente, no en todos ellos, ya que al presente existen aproximadamente 1.200 juntas vecinales en El Alto), a través de conversaciones informales, pero muy enfocadas (tanto dentro como fuera de los barrios) y de escuchas atentas a otras conversaciones (en las calles o algunas plazas); a la vez, se hicieron observaciones abiertas sobre los hechos ocurridos en algunos lugares donde la gente estaba en la lucha. Asimismo, se trabajó con estudiantes que en 2019 cursaban el primer año del turno de la noche de la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), sobre las memorias de quienes escribieron respecto a los hechos de octubre y noviembre desde lo vivido en sus propios lugares. Todo este material se complementó con los datos del estudio realizado en 2021 con el Instituto de Investigaciones Sociales “Pablo Zarate Willka” de la Carrera de Sociología de la UPEA.

Por otro lado, también se obtuvo material mediante los modernos sistemas de comunicación, como WhatsApp (por donde circuló información importante de lo que ocurría en otras partes de la ciudad y del país, pero también *fake news*, que no consideramos en absoluto) y Facebook (por donde circularon noticias más generales y, en varios casos, muy

específicas, complementadas con imágenes fotográficas y videos). Todo ello quedó registrado en archivos digitales, para su mejor ordenamiento y clasificación. Se ha dado seguimiento a noticias y artículos de opinión de los periódicos y boletines *El Deber*, de Santa Cruz, *Los Tiempos* y *Opinión*, de Cochabamba, *Página Siete*, *La Razón*, *El Diario*, Agencia de Noticias Fides (ANF), *El Alto*, Erbol y Bolpress, de La Paz, *El Correo de Sur*, de Sucre, y otros. Este material nos fue útil para tener el contexto sociopolítico y alimentar nuestros datos y análisis, contrastándolos y, a la vez, confirmándolos.

También se hizo seguimiento a la prensa internacional que informaba sobre Bolivia, como *El País*, de España, *La Jornada*, de México, el *Washington Post* y el *New Herald*, de Estados Unidos, e *Infobae* y *Página 12*, de Argentina. Tanto en el caso de los periódicos nacionales como en los del exterior, se hizo seguimiento a sus versiones digitales. El objetivo fue analizar cómo se veían los acontecimientos en el exterior y cómo estos se reflejaban en los medios de comunicación en Bolivia; sobre todo, las voces de las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. A partir de este material pudimos dar el contexto, que es lo que nos interesaba. Asimismo, se recopiló documentos oficiales de organismos internacionales de derechos humanos con noticias sobre la masacre de Senkata, para ampliar y precisar los datos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros.

Luego de las violentas movilizaciones (y en algunos casos, durante su pleno desarrollo), pudimos acceder también a reuniones afuera de El Alto, sobre todo realizadas en la ciudad de La Paz, tanto institucionales como grupales. Todo aquello fue registrado en unos papeles “volátiles” (suelos) al principio, y luego organizados en otros que llamaríamos “cuadernos pasajeros”, y que también podríamos denominar memorias de un estar y un observar. Esta referencia nos resulta importante porque en periódicos y libros no solo leímos el miedo en la mentalidad de las elites y las clases medias altas y medias, sino que pudimos constatar *in situ* dónde estuvieron esas mentalidades. Algunas de ellas, en ciertas facultades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en algunas de sus carreras. En esos espacios todo se mezclaba, o se asociaba con la ciudad de El Alto: el alteño y el masista u “horda”. Dos o tres palabras que se han convertido en sinónimos –alteño igual a masista–, aunque la realidad desmiente ese hecho, como luego se observó en las elecciones subnacionales de 2020.

En la parte técnica e instrumental se pudo usar cámara fotográfica y, en algunos casos, la del celular, para registrar los movimientos, las marchas, las reuniones, las represiones policiales y, en general, la lucha de la gente. Este archivo se centra sobre todo en los sucesos de El Alto. Seguramente nuestra información tiene falencias en algunos detalles, debido a la avalancha de hechos y a las acciones colectivas que se sucedieron de manera muy compleja.

Finalmente, el objetivo es comparar las luchas barriales de la ciudad de El Alto en 2019 con las de octubre de 2003: sus diferencias y similitudes, sobre todo respecto a las formas de pensar y de decir de la gente y a los espacio-tiempos de los microgobiernos barriales. Este método de análisis de las acciones colectivas nos parece muy relevante. Ello nos permitió, entonces, confirmar de alguna manera la forma de organización barrial de la ciudad de El Alto, con sus diferencias y similitudes y sus profundos sentidos de lucha social territorial. En 2019 se observó acciones colectivas más politizadas, en sentido de que la gente se asumió plenamente como parte de una ciudad con identidad y orgullo aymara o alteño; esto, según nuestro análisis, es parte de una nueva subjetividad social frente a la de 2003. En 2019 y 2020 se pudo observar que esta identidad politizada ya no corresponde solamente a pequeños grupos de ideólogos, dirigentes sociales o intelectuales alteños o aymaras, sino a casi toda la ciudad, con excepción de ciertos barrios, como Ciudad Satélite.

En base a los datos recopilados, se pudo reconstruir una visión o sentido de los hechos en dos momentos: i) como confusión ante la vorágine de hechos políticos, pero a la vez moviéndose desde ese mismo lugar como acontecimiento histórico o acto social, y ii) como reproducción de las similitudes dentro de las juntas vecinales, a las que seguimos llamando microgobiernos barriales, debido a su densa y práctica forma de decir y hacer las cosas de la historia de la ciudad.

Espero que la comparación entre la lucha de 2003 y la de 2019 nos brinde detalles que tal vez no se han considerado en otros textos o discursos de tono académico. Pero lo más importante es el relato de los propios actores de la lucha (cuyos nombres completos no siempre figuran, a pedido de ellos), así como nuestro propio análisis, en lenguaje sencillo, dirigido a la propia gente. Con esta intención, primero exponemos el problema del país en general visto desde El Alto, para luego adentrarnos en los hechos de 2019 y, finalmente, establecer la relación entre 2003 y 2019.



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

Problemática insoluble y crisis societal. Luchas y memorias de la lucha

7.1. Un país irresuelto

Bolivia fue fundada hace 175 años por blancos-mestizos, no por indios, y si a ellos no les gusta este país que funden el suyo propio. En Bolivia siempre hemos vivido en permanente desconfianza, antagonismo, antipatía y distanciamiento entre “taras” y “qaras”; que los “taras” hayan llevado la peor parte es culpa de ellos, en la historia siempre hay vencedores y vencidos... *No es extraño que los países con alta proporción de indígenas sean los más atrasados de Latinoamérica y los que no, los más adelantados* (Troncoso, 2000: 10) [El resaltado es nuestro].

¿Por qué se producen tan a menudo hechos como los de 2003 y 2019, tanto en la ciudad de El Alto como en las provincias de La Paz y en varias regiones del país? ¿Es Bolivia un país inconcluso y antiindígena? ¿Cómo conciben a este país sus elites y ciertas clases medias y altas? ¿Es Bolivia realmente un país poscolonial?

Estas preguntas pueden remitirnos a un largo debate político e ideológico, a la vez que académico, porque connotan detalles profundos de un país de mayorías indígenas o aymaraquechuas que, sin embargo, es gobernado por una minoría. Esta es una grieta de nacimiento que define que este país todavía no es un Estado poscolonial. No ha superado sus sistemas de pensamiento elitista, el racismo blanco, sus sistemas de organización territorial tipo europeo y de dominación no legítima de las minorías históricas sobre las mayorías reales, en cuyos territorios viven y a los que explotan. En concreto, Bolivia es un Estado neocolonial

(Mamani Ramírez, 2017) definido por viejas formas de organización, pero bajo nuevos lenguajes y discursos. Por esta razón, de tiempo en tiempo Bolivia se fractura en dos o en tres historias irresolubles para, luego, mirarse desde ellas como una sociedad transliterada y contradicha.

Frente a ese hecho, ¿cómo han actuado los aymaraquechus o indígenas y sectores populares para seguir existiendo como sociedades alternas y en disputa con las sociedades neocoloniales? Este es un detalle importante. Aquí definimos provisoriamente lo aymaraquechua como una nueva totalidad social, con sus propias diversidades internas, dispersos a la vez que articulados a lo largo de todo el país desde sus prácticas culturales propias, junto con el uso de tecnologías modernas y sus sistemas de mercado y economía.

La realidad y la novedad es que estos mundos alternos a los mundos oficiales –pese al actual Estado Plurinacional– se han apropiado de ciertos elementos de la modernidad y de sus tecnologías, para convertirlos en el hilo conductor de un amplio proceso de autoafirmación colectiva-individual a través de su condición de población mayoritaria urbana y rural. Este es un hecho tanto cultural como económico, ya que desde su condición de desventaja han sabido manejar y dar vuelta estratégicamente a las formas de dominación colonial (Mamani Ramírez, 2005a), para adecuarse y ser sociedades contemporáneas. Esos hechos solo pueden ocurrir en culturas vivas y con poblaciones que tienen capacidades propias, como sus saberes estratégicos y tecnológicos. Es una población que se mueve dinámicamente en el mercado interno y que en la última década lo hace activamente en las relaciones políticas y en la disputa por el poder.

Desde esos lugares sociales y económicos, estos mundos alternos han contrarrestado las narrativas liberales y neocoloniales para mostrarse con signos reales de la vida social y dejar de ser signos irreales o abstractos. En este sentido, se puede decir que Bolivia se está moviendo desde adentro de sí misma y proyecta desde aquí una relación con el mundo global que viene de hace tiempo. Y en momentos históricos como el actual, se yergue como el *nuevo espíritu de la nación* (Mamani Ramírez, 2020a). O, más bien, como la nación real. Lo cual es una especie de victoria, a la vez que una paradoja. Es una realidad y, al mismo tiempo, un proyecto.

En ese marco, el indio o aymaraquechua se expande fuera de las fronteras nacionales y viaja hacia el interior subjetivo e intersubjetivo de la nueva nación. Esto no parece ser materia negociable ni objeto comprable. Es un sentimiento multitudinario (aunque en ese momento tiene sus propios archipiélagos y contradicciones internas, como veremos) y un proceso que tiene pagar nuevamente con su propia sangre.

De ese hecho nace una comunidad moral. Tal vez se podría decir que es como Katari-Sisa estudiada desde la historia del siglo XVIII (el levantamiento de 1781), ahora convertido en millones, y también de millones de “willkas” (del líder aymara en la guerra federal de 1899) y “tumpas” (del líder guaraní de 1892) en la del siglo XIX. Lo cual al parecer no entienden ni Evo Morales ni su entorno blanco-mestizo. Tal vez ese entorno, compuesto por criollos, se ha opuesto a la indiada en muchos aspectos, al temerla históricamente, como la han temido sus pares históricos. Ante semejante posibilidad, para los viejos grupos del poder surge como única alternativa aplicar mano militar.

Sin embargo, esta parece ser la victoria de una población que se ha convertido en estratégica, que ejerce cada vez más presencia en el Estado y en el campo político, con todas sus paradojas, mediante sus diversas formas de representación social, pero que, al mismo tiempo, muestra sus problemas y contradicciones.

7.2. Sociedades neocoloniales y sociedades alternas

Bolivia es un país de distintas sociedades e historias contrapuestas que han tratado de ser disminuidas desde las ideologías neocoloniales mediante los discursos de mestizaje o de descolonización. En este proceso se puede identificar las siguientes perspectivas históricas: a) la posibilidad de una sociedad blanca, aplicando la ideología del darwinismo social del siglo XIX, que todavía persiste; b) una sociedad mestiza, bajo la égida de los nuevos grupos de poder del siglo XX, en perspectiva indigenista¹ de derecha o de izquierda; c) una sociedad india o aymaraquechua postulada por el indianismo-katarismo (corriente ideológica y teórica que busca unificar al histórico indianismo y katarismo del siglo XX) con una nueva contrahegemonía en base a la nueva realidad y d) una sociedad multicultural, aunque sin un anclaje real en perspectiva sociológica.

Estos contrastes o desencuentros se expresan actualmente en una dicotomía altamente sensible. Por ello, se vive dos momentos críticos y contrapuestos a su vez. En uno, las clases medias y altas y los grupos de poder blanco-mestizos sienten que pierden paulatinamente los privilegios

1 Se debe aclarar que el indigenismo es una narrativa sobre los indios dada desde la posición de los blancos; por el contrario, el indianismo es una narrativa del mundo desde el propio sujeto indio (Reinaga, 1969). Sugerimos que los hechos de octubre y noviembre de 2019 sean leídos desde esta última perspectiva.

ejercidos por más de 500 años ante la posible construcción de una contra-hegemonía aymaraquechua o indígena-campesina (aunque esto todavía no es real a nivel del Estado o en la perspectiva del MAS); en el otro, desde su topografía cultural y demográfica extensa, los aymaraquechuas, desde sus núcleos duros y elásticos, se presentan cada vez más en la sociedad como el poder mismo. Eso se expresó el 10 de noviembre de 2019 en las calles o el 22 de octubre de ese mismo año, y nuevamente el 18 de octubre de 2020 y el 7 de marzo de 2021. Allí se dio la lucha y se mostró la convicción de ser la referencia de la nueva nación.

Por todo ello, Bolivia es, por un lado, el territorio del gran desencuentro y, por otro, es la parte de la reunificación paralela de los pueblos y sectores sociales aymaraquechuas, guaraníes y otros. Este último acontecimiento se produce para hacerse visibles y presentarse como el nuevo ser nacional en abierta disputa con los que afirman haber “recuperado la democracia” el 10 de noviembre. Con estos referentes es posible decir que surgió la nueva nación en todos los rincones del territorio. ¿Una metáfora o una realidad? Tal vez una metáfora, pero que se observa como una realidad. En ese sentido, la nación clandestina se convierte en miles y miles de *wiphalas* como base sustancial de la nueva conciencia nacional, que puede ser una conciencia distinta de la conciencia neocolonial. En ella se observa una nueva subjetividad social, definida en la tan reclamada conciencia nacional que se diera desde las viejas o nuevas elites, y que ahora se contrae a sí misma. Se reduce a su mínima expresión. Y desde la sociedad alterna surge o se hace visible otro sentido de la nación. Desde nuestro punto de vista, este es el detalle de la nueva lucha social. Aunque es paradójico, porque los gobernantes de ayer y de hoy las contienen e incluso las criminalizan.

Veamos entonces los pormenores de lo ocurrido antes y en el proceso de la violencia estatal de 2019 en la ciudad de El Alto y su nueva reunificación junto al país. Su mayor expresión son los microgobiernos barriales entre 2003 y 2019.

Confusión, resistencia y reunificación. El Alto ante el golpe de Estado blando-duro

8.1. Momentos y contexto entre el golpe de Estado y la lucha social

En primer lugar, se producen dos momentos fundamentales en la joven ciudad de El Alto (INE, 2020)². ¿Cuáles son? La confusión y la división de la gente ante la caída del gobierno del MAS. Luego, sobre esa base, al observar y vivir la violencia y la masacre del nuevo gobierno, se produce de una manera propia, al estilo aymara, una reunificación de la ciudad de El Alto y las provincias.

El objetivo de este acápite es mostrar los relatos de la gente y los hechos ocurridos durante todo este proceso en relación con las juntas vecinales. Nos basamos en dos fuentes fundamentales: nuestra investigación y las memorias realizadas para esta parte por estudiantes de primer año de Sociología de la UPEA en 2020. Los estudiantes del Taller de Investigación 1 de la Carrera de Sociología de la UPEA, turno noche³,

² En 2020, el 54% de los habitantes de esta ciudad eran menores de 30 años.

³ Según el pensum de la Carrera de Sociología, esta materia tiene el objetivo de realizar un trabajo de campo preliminar para aplicar los enfoques metodológicos y técnicos aprendidos en aula. La Memoria escrita por los estudiantes responde a ese objetivo. Tiene sentido haber utilizado la forma de memoria porque en ese tiempo estuvimos en encierro por el Covid-19, y los y las estudiantes, al no poder realizar trabajo de campo, reconstruyeron sus memorias sobre lo vivido, observado y escuchado, ya sea en la familia o entre los vecinos, sobre los acontecimientos de octubre y, fundamentalmente, noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, las provincias e incluso en el interior del país.

escribieron sus memorias sobre lo vivido entre octubre y noviembre de 2019 en trabajos individuales de ocho a 12 páginas. Ahí relatan lo vivido, lo observado y lo escuchado específicamente entre el 10 y el 22 de noviembre de 2019, pero también lo que observaron en el mes anterior en los lugares en que se encontraban. Nosotros nos apoyaremos en los datos que recopilamos y que fueron publicados parcialmente en el artículo “La *wiphala* que nacionalizó la nación” (Mamani Ramírez, 2020b), como parte del libro colectivo del Círculo de Estudios Estratégicos de El Alto auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), y en el artículo “Subjetividades sociales. Ciudad de El Alto y elecciones 2019-2020”, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021).

En principio abordaremos las maneras y los sentidos en que actuó la gente desde las juntas vecinales y las provincias aledañas a esta ciudad. Luego expondremos cómo se vivió y se autoorganizó la ciudad para resistir el golpe de Estado blando-duro y su posterior reunificación social hasta expresarse en el triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) el 18 de octubre de 2020, y luego reexpresarse el 7 de marzo de 2021 en su apoyo a Eva Copa –que no fue elegida por la cúpula de este partido político como candidata a estas elecciones subnacionales– contra el MAS.

¿Cómo se produce la reunificación de la gente? Desde ya, planteamos como hipótesis que esta se produjo a partir de dos factores sustanciales: i) la quema de la *wiphala* el 10 de noviembre (10N en adelante) de 2019 (Mamani Ramírez, 2020b; Kastaya, 2020; Humérez, 2020), que produjo una profunda indignación en la gente que la llevó a acudir nuevamente a las organizaciones sociales territoriales, y ii) la propalación del discurso altamente racista del nuevo gobierno y la masacre de Senkata, además de la estigmatización de la ciudad de El Alto en plena pandemia de Covid-19 desde estos grupos de poder de La Paz y del país. Ambos fueron factores altamente sensibles y definitorios del devenir de la lucha de la ciudad de El Alto y del país.

8.2. ¿Qué es un golpe de Estado blando-duro?

¿Cómo se vivió el golpe de Estado blando-duro el 10N en la ciudad de El Alto y en algunas provincias aledañas? ¿Qué datos existen sobre lo vivido por la gente? ¿Qué tipo de luchas se han producido dentro y fuera de las juntas vecinales de esta ciudad? Y ¿por qué después de la división se logra una reunificación social en El Alto y las provincias? Son algunas preguntas cuyas respuestas desarrollamos en el presente acápite.

El golpe de Estado vivido ha sido un hecho violento, como todos los golpes de Estado. Aunque ese golpe se ha dado en la línea de Gine Sharp (2011)⁴, que catalogamos, junto a varios otros analistas, como blando y duro. ¿Qué es lo blando-duro? En principio se puede decir que es la combinación entre la movilización social (en nuestro caso, de la clase media y alta blanca-mestiza boliviana en las ciudades del eje) y la acción de grupos particulares (paramilitares) que actuaron bajo la permisibilidad de las fuerzas del orden regular del Estado: las Fuerzas Armadas y la Policía. En este sentido, no es un típico golpe de Estado bajo la forma violenta y con abierta participación de los militares, sino que en él intervinieron otros medios y estrategias.

Ya se ha reflexionado y estudiado, entre ellos, en el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002, contra José Manuel Zelaya en Honduras en 2009, y otros (Moreno y Figueroa, 2018). Aquí en Bolivia esa lógica permitió el derrocamiento del gobierno de Evo Morales con el argumento de que este no respetó el referéndum del 21 de febrero de 2016 y del fraude electoral. Efectivamente, el gobierno de Evo-Álvaro no respetó dicho referéndum, en el que la ciudadanía negó la posibilidad de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado referida a la reelección o no del presidente y de otras autoridades electivas. La estrategia discursiva y práctica, sin embargo, fue usar ese hecho para provocar lo que aquí definimos como lo blando-duro.

Entonces lo blando son las protestas sociales como legítimas e intelectualmente defendibles y lo duro es la masacre de Senkata de día 19 de noviembre y la masacre de Sacaba el 15 de noviembre, bajo el D.S. 4078 firmado por Jeanine Áñez y su gabinete. Con ambos sucesos, constatables y reales, se impide que Morales concluya su mandato, que debía concluir el 22 de enero de 2020.

8.3. Atenta observación y confusión

Ahora veamos lo que ocurrió en El Alto y la actuación de la gente. El 20 de octubre de 2019 se desarrollan las elecciones en un ambiente relativamente tranquilo, aunque de abierto rechazo de las clases altas a

4 Politólogo norteamericano que aborda cómo se pueden realizar luchas no violentas tipificando al adversario de dictador y antipueblo y, bajo esos principios, se desemboca en la violencia social para derribar a un régimen. De ahí lo blando-duro.

la participación de Evo Morales y Álvaro García, el binomio del MAS. La Organización de Estados Americanos (OEA) dejó trascender el 8 de noviembre que hubo fraude, y oficializó esta afirmación el domingo 10 (OEA, 2019). Esto fue pábulo para el motín policial en Cochabamba y en otras capitales departamentales. Acto seguido, el 10N el Comando de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del general Williams Kaliman, “sugiere” la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional. Y aproximadamente a las 16:45, desde Chimoré, en el Chapare, Morales renuncia a la presidencia de Bolivia, desatando el júbilo de los llamados “pititas” y la indignación en el mundo aymaraquechua y popular.

En ese contexto se produce la quema de la *wiphala* (símbolo indígena y constitucional), y a continuación el comandante de la Policía Departamental de Santa Cruz, coronel Mercado, muestra públicamente la *wiphala* arrancada de su brazalete; ambos hechos provocan indignación.

En esa situación la biblia entra al viejo Palacio Quemado, en manos de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, y del abogado Eduardo León. Este hecho empeora la reacción del mundo aymaraquechua. Así describe el universitario Secundino Choque, de la UPEA, la indignación de la gente ante la renuncia de Evo Morales:

Pues desde el mirador de la Ballivián escuchamos petardos que provenían de la hoyada [ciudad de La Paz] y mucha gente que gritaba y lloraba diciendo que el presidente ya renunció. Vi que mucha gente se arrodilló al saber la noticia: no todos estaban de acuerdo con la renuncia, consideraban que fue un atentado a la democracia por parte de la gente de Santa Cruz (Segundino Choque, 2020).

Y entonces El Alto, después de una atenta observación de 21 días de protesta de los comités cívicos, entra en acción. ¿Cómo lo hace? ¿Qué ocurre inicial o simultáneamente?

8.4. Entre dos lados y un Nosotros

Nuevamente, como en octubre de 2003, la ciudad de El Alto vive nuevas movilizaciones desde sus propios repertorios de acción colectiva. Como se dijo, en 2019 había una cierta división en la ciudad. Por ejemplo, entre dos FEJUVE: la de los allegados a la alcaldesa Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN), del empresario Samuel Doria Medina, y la de los allegados al MAS. Aunque este no era un factor muy importante antes

de noviembre, pronto pasa a serlo. A ello se suma un cierto desaliento en la ciudad respecto al gobierno del MAS debido a la repostulación del binomio indicado. Sin embargo, en las provincias la lealtad a Morales era casi unánime, pese a las luchas entre ayllistas y sindicalistas, especialmente en los alrededores de la ciudad de El Alto; al respecto, hay un interesante proyecto de tesis en la carrera de Sociología de la UPEA.

Con esos antecedentes se llega a los días del 10 al 22 de noviembre. La confusión vino por el rumor que corría, tanto por vía oral como por redes sociales (como Facebook y WhatsApp), en sentido de que “hay gente que quiere quemar casas particulares”. Esto se basaba en los hechos ya ocurridos en contra de las oficinas de los tribunales electorales de Potosí, Chuquisaca y Oruro y de casas de los dirigentes del MAS y de los opositores en la ciudad de La Paz. Ante esos hechos, la gente se confundió y entró en pánico. El factor psicológico es fundamental para entender lo que viene luego. Lo primero que la gente hace es resguardar sus bienes y los bienes públicos, como las escuelas. Paralelamente, y esto es importante, se inicia el rechazo al golpe de Estado blando-duro.

En las redes sociales circularon, como parte de una estrategia del golpe blando-duro, imágenes y “noticias” falsas, y algunas reales, sobre la quema de fábricas y casas particulares en Potosí y de la propia casa de Evo Morales en la ciudad de Cochabamba. Hubo dos versiones: una que afirmaba que quienes quemaban casas eran gente del MAS y cubanos, con la intención de que la gente saliera a bloquear o contrarrestar el golpe de Estado. La otra versión afirmaba que quienes quemaban las casas eran jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista o de la Resistencia Juvenil Cochala, entre otros. Ambos rumores ahondaron la confusión y la división. Aunque en la ciudad de El Alto esto enfureció a la gente (donde es fundamental observar sociológicamente lo sensible que resulta el tema social), y especialmente a los jóvenes de diferentes tendencias ideológicas o políticas aymaras de la ciudad. A continuación, algunos relatos al respecto.

Compañeros de El Alto decían que les habían cortado el agua y que estaban asaltando comercios y farmacias, prendiendo fuego a casas de sindicalistas, líderes indígenas y partidarios del MAS. Mientras, proliferaban audios y videos descontextualizados sobre enfrentamientos entre ciudadanos (era imposible saber quién era quién) e incendios en grupos de WhatsApp y otras redes sociales. La gente empezó a tener miedo de una revolución violenta. También se da una tensa espera, que aumentó al día siguiente, cuando Jeanine Áñez llega a Palacio Quemado. El dirigente Basilio Huayta admite que hubo bronca al saber que alguien de la derecha asumía el poder (Patty Márquez, en Mamani Ramírez, 2020).

[en] La ciudad, en una de las nuevas urbanizaciones, se escuchaban rumores. Tras reuniones en mi zona, la Mariscal Andrés de Santa Cruz (6-G), que pertenece a Viacha, se decía que iban a soltar a los prisioneros de Chonchocoro porque prácticamente somos sus vecinos, y había más miedo (testimonio de Santos Choquehuanca, en Mamani Ramírez, 2020c).

A partir de las 10 de la noche más o menos encendíamos las fogatas y organizamos grupos de vigilia hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Toda la noche sonaban las sirenas de la junta de vecinos. Así también, en las noches poníamos los basureros en media avenida para que no pasen los vehículos, ya que, como mencioné anteriormente, siempre había vecinos que señalaban que turbas de delincuentes estaban bajando armados. Por otro lado, también nosotros nos encontrábamos armados con palos para defender a nuestras familias (testimonio de Luis Mamani, en Mamani Ramírez, 2020c).

El domingo 10N, en la populosa Feria 16 de Julio, al norte de la ciudad, circularon versiones de que venían saqueadores de la zona sur de La Paz y la gente recogió sus mercancías temprano, a las 3 de la tarde y en medio de la lluvia. En otros lugares de El Alto y en otras ferias, como en el Kenko, al sur, se hizo lo propio. De modo que por la noche del 10N había un ambiente tenso. En ese contexto, la gente empieza a organizarse para defender sus bienes, sus casas y los bienes estatales, en la creencia de que se destruirían las obras de Evo Morales.

Así se gestó la resistencia. Las juntas vecinales se reorganizan para defenderse y, a partir de esto, salir al ataque. Es lo que llamamos la reconstitución de los microgobiernos barriales: “Salían todos, pero absolutamente todos salían a sus calles a defender sus casas juntándose en pequeños grupos [que] cuidaban sus lugares, ya que era de madrugada y el frío azotaba” (testimonio de Modesto Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

Son dos momentos decisivos, pero todavía no contundentes. La gente afirma que “no estamos unidos como en octubre de 2003”.

Prácticamente estaban abatidos con el supuesto fraude, ya que la población se sentía desmoralizada. Por lo que se veía a vecinos confrontados porque no todos estaban de acuerdo con apoyar las movilizaciones. La gente decía que el presidente Evo Morales se merecía lo que le estaba pasando. Muchos se sentían defraudados y decepcionados, ya que decían que Evo se había olvidado de esta ciudad que, en su momento, le dio el hombro para que llegue al poder brindándole el voto de confianza. La gran mayoría decía que “es un indígena y que se sentían identificados”.

Otros argumentaban que “nos ha dado apoyo en la educación y en la lucha contra la discriminación” (testimonio de Mónica Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

En esa primera etapa no había unidad. Por ello, resultaron difíciles las acciones colectivas defensivas o de ataque frente a los delincuentes comunes, frente a los Comités Cívicos o también frente a los “masistas”. Como afirma el estudiante Segundino Choque, “había gente que quería saquearnos y nos organizamos”. La estudiante Mónica Huanto, por su parte, afirma que “todo era confusión”⁵. No hay una lucha efectiva. El 12 de noviembre las Fuerzas Armadas, bajo el mando del nuevo ministro de Defensa Fernando López, salen a las calles con sus tanquetas de guerra que provocan miedo, algunos aplausos y, fundamentalmente, coraje. Entonces ocurren cosas curiosas. En el sector norte de la ciudad circulan por las redes sociales las imágenes de una mujer de pollera subiéndose a esas tanquetas para apoyar su salida a las calles. Cerca del Cuartel Ingavi, al sur, también se observa imágenes en que gente aplaude a los motorizados militares.

En la extranca se concentraba mucha gente por las mañanas, como una especie de ampliado con discursos que exponían todo lo que estaba sucediendo en el país y otros incitando a masificar las manifestaciones. Debemos reconocer que la ciudad de El Alto estaba dividida; eso por lo menos se pudo observar. Desde la Chacaltaya hasta el puente Río Seco los vecinos solo salían a resguardar sus viviendas, y no en apoyo a las protestas de repudio a la renuncia de Evo Morales (testimonio de Modesto Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

10 de noviembre. Al retornar a mi hogar [distrito 5], los vecinos de la zona nos organizamos por calles, con el objetivo de cuidar a la vecindad y nuestros hogares. Sin duda la inestabilidad de la comunicación a través de las redes sociales nos confundió a todos, aunque nos ponía en alerta para prevenir los robos (testimonio de Segundino Choque, en Mamani Ramírez, 2020c).

Pese a todo, comenzó la resistencia con movilizaciones simultáneas en los sectores norte y sur. En puente Río Seco y en Senkata, dos centros neurálgicos de la resistencia alteña, se produjeron acciones de

5 En el contexto de esa violencia, en la Ceja, o más propiamente en el peaje de la autopista, según la testigo universitaria, había grupos que robaban bajo amenaza. Sin duda esto la parte de la violencia individual o simplemente delincuencia.

reorganización social. Se tomaron las calles y avenidas para “hacerse sentir... carajo”. Unos y otros realizaron movimientos con el fin de organizar los barrios, convocar a asambleas y planificar acciones de diferentes niveles y con distintos sentidos.

Pero para mayor consideración, la vecindad de estas zonas estaba a favor del gobierno y otros en contra. Es decir, se presentan conflictos entre vecinos, unos están de acuerdo con los bloqueos y otros no, y hay consecuencias entre hijos, padres, hermanas. O sea, la familia misma está dividida en los hogares de acuerdo a su ideología (testimonio de Ascencio Mamani, en Mamani Ramírez, 2020c).

De esta etapa de confusión se pasa otra de reorganización y lucha, con nuevas directrices. Se observa cómo el gobierno del MAS no había organizado a la gente y, por su parte, la gente se dejó estar. Después del 10N el área rural paceña y también la orureña se movilizan de manera multitudinaria. No se habían producido movimientos similares desde octubre de 2003 o de 2005 ni durante el periodo del gobierno de Evo Morales. La indignación lleva a un movimiento desde la profundidad social, independientemente de las directrices partidarias o dirigenciales.

Las movilizaciones empiezan a articularse y se produce la masacre del 19 de noviembre en Senkata. En efecto, desde las provincias la gente llega en movilizaciones con sus *wiphalas*. Viene decidida a “sacar a la Ññez, la desteñida”, como empiezan a llamar a la nueva presidenta. Los gritos de dolor por las muertes de Senkata son indescriptibles. Esto se convierte en el centro de gravitación que se irradia hacia el interior (las juntas vecinales) y el exterior (el mundo social urbano de El Alto y de otras ciudades). Surgen voces de “unámonos hermanos del campo y de la ciudad”. Se mueve la hermandad cultural y social de manera muy parecida a la de octubre de 2003.

Durante noches enteras hay aflicción y temor, pero a la vez valentía; esta última se apodera de la gente. Tanto los del sector norte como los del sur se radicalizan, se movilizan y toman las calles en abierto desafío a las fuerzas del Estado. Los distritos 4 y 7, del norte, y el distrito 2 y 8, del sur, tienen fuerza social y muestran sus propias capacidades, tal como en 2003. Varios medios de comunicación ayudan a empeorar la situación llamando “terroristas”, “hordas” y “salvajes” a los movilizados alteños o de las provincias aymaras.

También lo hacen en contra del Chapare y de los ayllus de Norte de Potosí o Betanzos (donde un comunario del ayllu fue muerto por fuerzas

regulares del Estado) y de otros lugares. Muchos periodistas y medios los presentan prácticamente como violentos o salvajes. Se da una especie de degradación de la condición humana de los aymaraquechua, con la consecuente estigmatización, porque se usan adjetivos que diferencian entre “nosotros” y los “otros”. Los “otros” son los indios y “nosotros”, los habitantes de las ciudades. Se reviven discursos parecidos a los de 1880-1899 y 1930 (Irurozqui, 1994; 1995) o anteriores a la guerra federal de 1899 (Condarco, 1982)⁶ o a los del periodo del republicanismo de Bautista Saavedra.

Entonces se genera un ambiente de inseguridad pública y privada. El objetivo parece ser separar a la gente para crear desconfianza porque, efectivamente, hay un sentimiento de miedo, de “todos contra todos”. En ciertos lugares nadie sabía quién era quién. Para disminuir esta situación la gente empieza a reorganizar el sistema de control barrial con palos o hierros para perseguir a los desconocidos. Cuando se aclaran los hechos, se produce un nuevo proceso de rearticulación social en base a la organización barrial y al sentido de pertenencia aymara urbana y rural. Y paulatinamente se genera un sentido de Nosotros.

La *wiphala* quemada y la acción de los jóvenes del sector norte el día 11N es vital para lo que viene luego: una multitud con sus *wiphalas* recorre toda la avenida Juan Pablo II al grito de “ahora sí, guerra civil, ahora sí, guerra civil” (Kastaya, 2020; véase video Anred. Org Internacional, 2019). Esto provocó un impacto social y las subjetividades sociales se indignan y se movilizan. Lo que estaba estático o confuso se recompone o se revuelve. En aymara diríamos que es como *pacha tijra*: movimiento del espacio-tiempo, pero fundamentalmente el movimiento de la subjetividad social. La gente no quiere que vuelvan los tiempos oscuros de la dictadura civil o militar. A su vez, la gente habla de que “no quiere un gobierno de los blancos”, aunque el MAS no haya sido un gobierno de los indios.

La *wiphala* tiene su historia, sus diversos colores son representaciones de cada cosa que existe en la naturaleza. Asimismo, la mujer de pollera fue humillada, y esto no es de ahora (testimonio de Mónica Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

También se viralizó la quema de la *wiphala* por policías, la bandera que representa a los pueblos indígenas de los Andes y al Estado Plurinacional de Bolivia (testimonio de Patty Márquez, en Mamani Ramírez, 2020c).

6 En 1899 se produjo el gran levantamiento de Pablo Zarate Willka y sus generales bajo la lógica de la confederación de ayllus.

Los mismos que en el pasado la humillaron ahora habían vuelto a humillarla, [actitud] que viene desde la Colonia. Pese a los cientos de años, aún podemos evidenciar el racismo a flor de piel (testimonio de Modesto Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

Entonces fue ahí que El Alto se pronuncia con su molestia y exige que se coloque nuevamente la *wiphala*, y aclara que esta no es de un partido político. Fue ahí que hubo ese malentendido por parte de los policías; en vez de retornar la bandera a su lugar hicieron todo lo contrario, provocando a la población con el acto de vejar el uniforme al sacar la *wiphala* (Elizabert Renjifo, 2020).

Esas tensiones reorganizan la ciudad de El Alto. Y a quienes tenían apariencia de blancos se los trató casi con violencia.

En la avenida que va al Aeropuerto Internacional de El Alto, cerca de la Unifranz, exactamente en la avenida Evadidos del Paraguay, en la zona Villa Bolívar “A”, donde yo trabajo en el taller de reparación de turboalimentadores, hubo racismo, mucha intolerancia y agresiones hacia las personas de tez blanca y ciudadanos cruceños por parte de la gente afín al partido de gobierno. Parte de este maltrato racial lo recibió una pareja de alumnos de la Unifraz que salía de la mencionada universidad: los golpearon con una madera que tenía un clavo en medio, [al hombre] le abrieron una herida considerable en la palma de la mano y a la muchacha le dieron un golpe en el oído, provocándole un sagrado. Acudimos mis compañeros de trabajo y yo al rescate, haciéndolos ingresar al garaje del taller para que se resguardaran y no pasara a mayores (Franz F. Nina, 2020).

Estas son imágenes que inundan las redes sociales, pero los medios de comunicación se muestran parcializados con la violencia del Estado. Y entonces se crean enormes sentimientos de congoja y de rabia, pero a la vez de un Nosotros. Como dirían los aymaras: “¡Carajo, no estamos unidos!” La gente se envalentona y muchos están dispuesto a morir por la *wiphala* porque consideran que lo ocurrido es inadmisible. Entonces se observa que ya se había instalado el sentido de significación e importancia de la *wiphala*, que ahora parece incendiarse. La significación es darle sentido a un objeto o una relación. Ahí lo sensible es un acto de lucha y de recreación del discurso alterno al nuevo poder instalado en el viejo Palacio Quemado; desde el punto de vista social y político, es un hecho muy importante.

Así renace ese nuevo sentido de Nosotros y los Otros, que más o menos es la lógica argumentativa de la acción y del discurso; solo así

se puede entender ese nuevo momento. A esto lo llamamos una nueva subjetividad social aymaraquechua (Mamani Ramírez, 2020b), aunque hablaremos al respecto en otro trabajo. A partir de esto se crea la resistencia y se produce ese sentido de un Nosotros, pero no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Es decir, hacia “los otros hermanos que están lejos que igual sienten la agresión”. Desde Brasil muchas personas escribían en Facebook su indignación sobre lo ocurrido. Y también desde Santa Cruz los llamados kollas expresaban su sentir. La *wiphala* adquirió un profundo sentido de lo social.

8.5. ¿En las provincias y en el Oriente?

¿Qué pasaba el 10N en las provincias cercanas a El Alto? Se produjo un sentido de unidad, aunque también estaban desorganizados, pues no hubo acciones rápidas de rechazo a la violencia estatal. Pese a ese detalle, el estudiante Merlo cuenta cómo los caminos de la provincia Ingavi (Viacha) y de Omasuyus (sector de Cuyahuani, UNIBOL Aymara) estaban bloqueados, y también los de la provincia Los Andes. Estos bloqueos no permitían el ingreso de alimentos a la ciudad de El Alto, y menos a la ciudad de La Paz, especialmente a su zona sur. No había transporte público e incluso era difícil movilizarse en motocicleta. Según el relato de Merlo, él en persona tuvo que pasar esas dificultades porque los comunarios y comunarias controlaban las carreteras y el flujo de quienes entraban y salían. Por eso la gente tuvo que recorrer largas distancias a pie para cuidar a sus seres queridos en la ciudad y en el área rural. Esto es parte de la nueva emergencia social.

El movimiento de la gente entre la ciudad y el área rural es otro factor de este proceso; es útil para proveerse de alimentos secos y para cuidar sus animales, entre otros. El estudiante Merlo tuvo que movilizarse a pie a ciertos lugares, por ejemplo, a la avenida Buenos Aires (ciudad de La Paz) y a la comunidad Tacagua, ubicada cerca de la localidad de Viacha.

Esto en la Subcentral con algunos ayllus y en la Central Agraria con 21 comunidades en Marka Quentupata. Pero vivo en la comunidad de Tacagua, provincia Ingavi, municipio Viacha, porque mi familia, mis hijos, vivimos en la comunidad de Tacagua donde, por parte de mi esposa, tenemos parcelas de terreno. Con la venta de los productos agropecuarios que ahí generamos mantenemos a nuestra familia (Hilarión Merlo, 2020).

En ese trayecto él pudo observar cómo los policías gasificaban a la gente a la altura del cruce Viacha (El Alto) y en otros lugares. Ya en su comunidad, tuvo que movilizarse entre Viacha y la provincia Aroma, donde es dirigente comunal.

Mencionamos que la gente vivió la sorpresa y la desorientación especialmente entre los días 10 y 20 de noviembre. Pero la quema de la *wiphala* tuvo un efecto bumerán. Más bien, tuvo un efecto explosivo. Tal como en la ciudad de El Alto, en las provincias también se sintieron insultados, humillados y “quemados vivos”. Un hecho que, según varias voces, no era posible soportar porque “quemaba profundamente nuestro ser”. Por ello la *wiphala* se hace multitud. En ese contexto llegan de las provincias buses y camiones llenos de gente enarbolando sus *wiphalas*. Algunos dicen: “no tenemos miedo... carajo”. Y la gente de la ciudad de El Alto los recibe con júbilo. Hay emociones encontradas, que llamamos hermandades. Ahora se sienten reunificados; es la reproducción del sentido del cuerpo social aymara en las áreas urbanas y áreas rurales.

Similares hechos se produjeron en el sector de Río Abajo, al sur de la ciudad de La Paz (Mallasa y Lipari) y en Palca. Aquí el movimiento aymara es fuerte, y tiene la misma dinámica por su intensidad en la lucha social.

Los pobladores de Río Abajo, del municipio de Mecapaca, estaban en estado de emergencia con bloqueo de caminos, específicamente en el lugar llamado Tranca de Lipari. En este punto de bloqueo estaban presentes pobladores de dos municipios: Palca y Mecapaca. Por parte de Palca estaban las comunidades pertenecientes a las centrales agrarias de Kapi, Cayimbaya y Cantonal Cohoni. Estas centrales agrarias estaban conformadas por sus diferentes subcentrales y comunidades, que realizaban el bloqueo de caminos exigiendo la renuncia de la señora Jeanine Áñez. La organización estaba dada por turnos y rotación, y los habitantes salían a la vigilia por turno de cada comunidad. Mi comunidad estaba organizada en cuatro grupos para sostener la vigilia en el bloqueo y cada grupo realizaba vigilia por 48 horas; así, cada uno de los grupos realizaban turno y rotación (testimonio de Nicolás Tarqui, en Mamani Ramírez, 2020c).

Según el universitario Tarqui, el bloqueo era muy fuerte. Las carreteras estaban llenas de tierras, piedras y árboles que no dejaban transitar movi­lidades de transporte público o privado. Había una paralización total, como se observa en las fotos que tomó Tarqui. Había asambleas en los lugares de bloqueo y una interrelación entre las diferentes comunidades

aymaras de este sector. Ya no llegan alimentos hacia la zona sur de la ciudad de La Paz, donde viven los llamados “jailones”, los *q'aras* en aymara. “La consiga del sector Río Abajo e Illimani era desabastecer de verduras y hortalizas a la ciudad de La Paz, con el objeto de dar apoyo al gobierno del MAS (testimonio de William Aliaga en Mamani Ramírez, 2020c).

Se producen tensas relaciones entre unos y otros; las elites y las clases medias altas y medias paceñas protestan hasta producirse varios momentos violentos.

De hecho, se sabe que en Pedregal (en el sur de ciudad de La Paz) tres jóvenes murieron por balas presumiblemente del ejército boliviano. Esto incrementó las tensas relaciones, por ejemplo, entre Chaskipampa y los barrios de la elite de La Paz. Ambos se atacaron mutuamente, de distinta manera. Chaskipampa se consideraba territorio de los indios (comunicación personal un investigador social) y a los otros se los cataloga de *q'aras* o extranjeros. Las tres muertes atizaron esas relaciones tensas; hasta el día de hoy no han sido aclaradas por las autoridades gubernamentales o estatales. Es decir que el conflicto sigue latente, como se observó en el periodo de la pandemia por Covid-19 y en las elecciones del 18 de octubre de 2020.

En los medios se informa de vitrinas rotas de los centros comerciales de calle 21 de Calacoto o de las casas particulares. Y se informa que se había quemado la casa de Waldo Albarracín e impiden que la casa de Carlos Mesa corra la misma suerte. La gente los considera actores del golpe de Estado porque Albarracín es dirigente del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia (CONADE) y Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), que había denunciado un “monumental fraude”. Según varias voces y María Galindo, se habrían reunido en la Universidad Católica Boliviana (UCB) (Galindo, 2020) para definir varios detalles de ese noviembre oscuro.

Escaseaban alimentos en la zona sur de esta ciudad. Inevitablemente, se reactualiza la “frontera étnica” (Guerrero, 1998) por el pavor, el miedo y otro tipo de sentimientos. Según se sabe, las zonas de la elite paceña se sentían amenazadas por la invasión de los “violentos” u “hordas”. Según algunos medios y el gobierno, en Senkata se habría derribado con explosivos los muros perimetrales de las instalaciones de YPFB⁷. Y

7 Se afirma: “Rodearon el lugar, lanzaron piedras y después volaron dos muros con explosivos. Antes, causaron un incendio en el interior. También quemaron vehículos” (*Página Siete*, jueves 21 de noviembre de 2019b).

se habla de ocho actos terroristas en solo diez días (Romero, 2019)⁸. Es un relato de cómo se han vivido esos días en la zona sur de la ciudad de La Paz (Juárez, 2019). Todo ello crispa las relaciones y los discursos de uno y otro lado.

Ya tuvimos el relato del estudiante Tarqui sobre lo sucedido en Río Abajo. Él también observó lo que ocurría en Santiago II, ciudad de El Alto, y en las zonas periurbanas durante este conflicto poselectoral de 2019. Aunque finalmente el 22 de noviembre el gobierno y dirigentes aymaras negociaron, unos, para que se levante el bloqueo y los otros, para que no haya persecución a los dirigentes “campesinos”. El viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría Choque fue parte de ese acuerdo.

Las memorias del universitario Juan Quispe, en San Julián (departamento de Santa Cruz), muestran que allí se vivió otros hechos de violencia. En esa región del oriente de Bolivia, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) había amenazado a los pobladores de esta localidad por haberse opuesto a las movilizaciones convocadas por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz.

Aquí la incertidumbre y la susceptibilidad se apoderaban de los pobladores de San Julián, dado que minuto a minuto se escuchaban los gritos de los autodenominados Unión Juvenil Cruceñista, que vendrían para confrontar a los pobladores de San Julián, donde la mayoría de los habitantes se dedica a la agricultura y pequeños negocios y no estaban de acuerdo con las movilizaciones y paros que declaraban los cívicos de Santa Cruz. Los dueños de los almacenes y tiendas sentían temor de que en cualquier momento lleguen los unionistas para hacer desmanes, tal como lo venían haciendo en otras ciudades del país, quemando casas de los partidarios del MAS.

Las unidades educativas mandaban muy temprano a los alumnos porque temían por las vidas de los niños y las de sus familiares, y la desesperación inundaba al no saber cuándo llegarían los unionistas. Se corrían las voces: “ya están llegando los unionistas, agarren todo lo que tengan en la mano, todo sirve” (testimonio de Juan Quispe en Mamani Ramírez, 2020c).

8 En una nota se afirma que “se registraron al menos ocho actos terroristas por parte de manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que en sus protestas rompieron pasarelas, atentaron contra torres de Mi Teleférico y antenas de energía, entre otros ataques violentos” (Daniela Romero, en *Página Siete*, jueves 21 de noviembre de 2019).

Las relaciones conflictivas en esta región tienen un historial largo. En 2003, en 2007 y 2008, los llamados *kollas* eran reprimidos o violentados por ser del occidente o por llevar una casaca de color azul. Ahora la confrontación se tornaba peligrosa nuevamente, dado que el Comité Cívico Pro-Santa Cruz enarbola su diferencia con los Otros –que son migrantes del occidente del país o migrantes cruceños de las provincias– por su sentido de “blanquitud”.

De este modo, las provincias se movilizan tanto en el occidente como en San Julián. En este contexto, el nuevo gobierno consuma la masacre de Senkata.



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

Masacre, barrios, racismo y subjetividades

9.1. Vuelven las muertes: masacre de Senkata

El día martes del 19 de noviembre, aproximadamente a las 11 de la mañana, se inicia la violencia en Senkata. Policías y militares actúan bajo el amparo del D.S. 4078, emitido por Jeanine Áñez el 14 de noviembre, que exime a los militares de las consecuencias de ser acusados de masacre o muerte de los ciudadanos bolivianos. Las tanquetas de guerra y los caimanes llegan al lugar por la avenida Estructurante y los policías ya estaban en las instalaciones de YPFB. El movimiento motorizado militar está compuesto por alrededor de 40 uniformados o más, equipados con ametralladoras ubicadas encima de la cabina, como se observa en el video documental de Seo.te.bo (Pacto de Unidad de Bolivia, Documental de Senkata, 2020). Según datos del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI, 2020), en el lugar hay 304 soldados. Este hecho no se menciona en los documentos militares (por ejemplo, OGO. Abreviado, 01/19). El contingente militar estaba compuesto por fuerzas especiales de del Regimiento “Tte. German Busch”, traídos vía área desde Cochabamba.

El 15 de noviembre, al día siguiente de emitirse el D.S. 4075, se produce la masacre de Sacaba, Cochabamba, con un saldo de diez muertos y muchos heridos. A continuación, la masacre de Senkata, en El Alto. El terror que provoca el Estado ha vuelto. Entre la masacre de noviembre de 2019 y octubre de 2003 han pasado 16 años, y la historia es casi la misma. Esa mañana no parecía que Senkata tendría un día agitado, y de pronto se produjo mucha violencia estatal. Junto a este hecho, como

parte de la guerra psicológica, circuló por los celulares la idea de que podrían explotar la planta de gas de Senkata.

Antes de la violencia estatal en el lugar había unas 300 a 400 personas, manteniendo un bloqueo sobre la extranca de Senkata. En ese contexto, según la gente, salió de la planta una gran cantidad de camiones cisternas cargados de combustible y se inició la refriega y la violencia. Los movilizados expresaban su rechazo al nuevo gobierno y el Ejército y los policías dispararon armamento letal a mansalva. Aunque, según el gobierno, específicamente el ministro de Defensa del gobierno de Jeanine Áñez, Fernando López, los militares “no han disparado ni una sola bala” (*Página Siete*, 2019b):

Del Ejército no salió ni un solo proyectil [...] Las Fuerzas Armadas tienen como primer deber hoy por hoy entablar el diálogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo, órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico [...]. Hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tienen un carácter de terrorismo de Estado⁹.

Con las tanquetas de guerras y caimanes, sobrevuelan el lugar dos helicópteros e incluso, según algún vecino, un avión de guerra, para observar el movimiento de la gente. Según versiones de quienes estuvieron en el lugar, posiblemente también se haya disparado desde el aire armamento letal y gases lacrimógenos. La gasificación y los disparos de armas de fuego son profusos. Se observa a las mujeres rogar de rodillas para que no les disparen. También se observa a mujeres jóvenes atrapadas en medio de los gases y envueltas con la *wiphala*. Están rodeadas por soldados con armas de fuego y policías. Gritan pidiendo auxilio por los heridos. Una actitud fuerte. Este y otros actos infunden coraje y autoafirmación colectiva. Posteriormente los muertos fueron velados en iglesia San Francisco de Asís de Senkata. La Iglesia católica ahora también muestra sus dos caras. La buena o humanitaria y la cara de las reuniones en la UCB.

La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) confirma este hecho como masacre en el comunicado de prensa del 10 de diciembre de 2019. Es el primer organismo internacional que habla de masacre en sentido de que la muerte de la gente se produjo en

9 La cita se ha recuperado del informe de Amnistía Internacional (23/10/2020). Véase: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2617198148364613&ref=watch_permalink

un mismo espacio-tiempo y con armamento letal. La CIDH sostiene al respecto:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática *las masacres* de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como *masacres* dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas (CIDH, 2020). [El resaltado es nuestro]¹⁰.

Se producen nueve muertes¹¹; meses después fallecen algunos de los heridos y también hay detenidos y torturados. Según el informe del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación, 2020), hasta octubre de 2020 se habían contabilizado oficialmente 51 heridos. En ese contexto, días después se supo que algunos heridos no habrían sido atendidos en los centros médicos, como el Hospital Holandés. Al respecto, el ITEI hace notar que en este hospital un médico de apellido Flores habría denunciado a los heridos a la Policía. Por ello, muchos de los heridos no acudieron a los centros médicos. El ITEI documenta tratos inhumanos contra de los detenidos.

Una madre de 38 años declara. “Un oficial me ha interrogado. Me he puesto a temblar. No he leído mi declaración, he firmado”. Un joven declara: “Uno hizo el movimiento de cargar su fusil. Me ha hecho temblar, me ha hecho lagrimear. Hasta ahora me despierto 4 a 5 cinco veces en la noche” (ITEI, 2020).

La fiscalía había imputado a varias personas¹² bajo la acusación de haber sido parte del derribo con dinamita de los muros de YPFB. Sin embargo, el contexto es el siguiente, aunque existen varias versiones: primero se produce la salida de cisternas de YPFB y la gente reacciona ante ese hecho. Minutos después regresan militares desde la altura del

10 La CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019.

11 Fallecidos en Senkata: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, Joel Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe Ticona, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanaco Aguilar (Amnistía Internacional, 2020).

12 Fiscalía imputa a Elián B.R., Rubén F.L.R., Edgar L. G.C., Iván T.A.CH., Florentino V.F., Teófilo Y.M. L. y Juan J.B.C. La acusación es por terrorismo, por ser presuntos autores de la destrucción y por la caída del muro de YPFB en Senkata.

Regimiento Ingavi; al parecer, son los que han utilizado armas de fuego. Aquí el relato.

Dos lugares de la pared son derribados y también se observó fuego dentro de la planta. Segundos después se escucharon disparos de arma de fuego en la planta de Senkata; ya le habían disparado a uno de ellos. Cuando cayó el primer herido, otros manifestantes fueron a auxiliarlos, pero ya era tarde. El disparo le había llegado en el pecho. La gente, enardecida, entró y prendió fuego al menos a cinco coches y empezaron a caer otros muertos. Ellos vieron que sus seres queridos estaban siendo asesinados y otros no había. Se escuchaban a muchas personas que decían que no aparecían sus seres queridos. En principio se pensaba que habían ocultado los cuerpos de la gente. Y pues, no querían que se les devuelva el cadáver. Entonces la gente se enfureció (testimonio inédito de PM).

Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga la masacre de Senkata y Sacaba, sostuvo el 21 de octubre de 2020: “Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos (Potosí) y tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola” (Fiscalía General del Estado, 2020; *La Razón*, 2020b). En este conflicto habría 833 heridos, 37 fallecidos, incluido los casos de Montero (Santa Cruz), Betanzos (Potosí), Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El Fiscal General de Estado, Juan Lanchipa, después de casi un año de los hechos, denunció que las Fuerzas Armadas no habían entregado su Plan de Operaciones sobre Senkata y Sacaba por considerarlo “secreto militar” (*La Razón*, 2002a). Hoy se sabe que el plan es OGO. Abreviado No. 01/109. Y el diputado Víctor Borda complementó que “se han colectado proyectiles que fueron sometidos a pericias y es necesario realizar la comparación con el armamento utilizado en esa jornada por las FF. AA.”¹³. Borda afirmó no haber podido acceder a esos documentos en ese año¹⁴. Luego, en el Informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2021), de la Organización de Estados Americanos (OEA), se confirmó el uso de armamento militar.

13 “Fiscalía espera que las FF. AA. remitan plan de operaciones ejecutado en los conflictos del 2019 para esclarecer muertes en Senkata, Sacaba y Yapacani”. Véase: <https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/4112-fiscalia-espera-que-las-ffaa-remitan-plan-de-operaciones-ejecutado-en-los-conflictos-del-2019-para-esclarecer-muertes-en-senkata-sacaba-y-yapacani> (22/10/2020).

14 Afirmación difundida mediante la prensa en octubre de 2020.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo expuso otros datos a través de un informe elevado a instancias internacionales y nacionales. Se lee en dicho documento que hubo acciones sistemáticas para someter a la fuerza a ciudadanos civiles desarmados (Defensoría del Pueblo, 2020). Se muestran imágenes inéditas sobre cómo ocurrieron los hechos. Se puede observar que lo ocurrido fue planificado y con intención de eliminar al adversario bajo un mismo patrón de acción y bajo el argumento de garantizar gas, gasolina y GLP para el abastecimiento de la ciudad de La Paz y otros lugares.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por su parte, también presentó públicamente su pronunciamiento y habló de graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de Senkata y Sacaba. Sostiene: “encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata” (OACNUDH, 2020: 6). Amnistía Internacional, por su parte, recomendó al Estado boliviano actuar dentro de los marcos de la Constitución y de los convenios internacionales para no dejar en la impunidad los hechos de Senkata y Sacaba (Amnistía Internacional, 2020).

Frente a estos pronunciamientos, el gobierno de Añez defendió su actuación porque habría habido la intención de explotar los tanques de almacenamiento de combustible del lugar. Y se afirma que los mismos alteños habrían querido hacer volar media ciudad con una explosión gigantesca. Ciertamente, si eso hubiera ocurrido, las consecuencias hubieran sido muy graves, por tratarse de productos altamente inflamables: hubiera abarcado entre 500 y 1.000 metros a la redonda. Ese relato aumentó la zozobra y el pánico, tanto en El Alto como en la ciudad de La Paz.

Sin embargo, según se puede observar en varios videos, no hubo ese intento. Guido Alejo (2019) lo confirma en un artículo bastante esclarecedor. Según Alejo, si hubiera habido esa intención, se hubiera actuado desde la esquina de la calle Vicente Seoane y Av. Arica, que queda cerca de dichos tanques. O incluso desde la Av. Periférica, donde parte del resguardo solo son alambres. El detalle es que desde el lugar donde se derruyeron los muros perimetrales hasta los tanques de almacenamiento hay una distancia de 250 y 450 metros, es decir que quedan bastante lejos (véase el mapa de la vista aérea de Senkata).

Vista aérea de la planta de Senkata



Fuente: Alejo, 2019.

Según el gobierno, y más propiamente el ministro de Defensa, Fernando López, además hay la actuación de terroristas en el lugar: “Hoy ya estamos tratando con terroristas, hoy por hoy las acciones nos están mostrando que la intención [de grupos violentos] en definitiva es dañar al pueblo boliviano, sus instituciones, empresas públicas” (*Correo del Sur*, 2019).

En esas horas circulaban en redes sociales imágenes de un Senkata violentado y se escucha el bullicio de las ambulancias que trasladan a los heridos a los hospitales más cercanos. “Está muriendo nuestra gente”, se afirma. El exministro López insiste en la existencia de sediciosos y de grupos armados, mientras que otros hablan de “hordas”, “salvajes” y “masistas”. Ante ello, como se adelantó arriba, la gente se vuelca definitivamente hacia su gente: “es mi gente”, afirma.

Según los movilizados, lo único que hicieron fue tratar de recuperar los cuerpos heridos que estaban dentro de las instalaciones de YFPB¹⁵. Sin embargo, los testimonios varían entre sí.

15 El bloqueo de la Av. 6 de Marzo impide que el combustible sea enviado a otros lugares de La Paz o El Alto. Entonces intervienen el Ejército y la Policía por el lado de la avenida Estructurante. Es un escenario bastante parecido al de la masacre del 12 y 13 de octubre de 2003. En varios videos recopilados por G. Alejo (publicados el 24 de noviembre de 2019) se observa cómo se produjeron tales hechos.

Los movilizados derruyen parte del muro perimetral cercano a las instalaciones administrativas de la Planta de Senkata con la intención de recuperar los cuerpos de los fallecidos, sin embargo, son reprimidos por los uniformados, quienes hacen uso de armamento militar, gases lacrimógenos desde tierra y aire (helicópteros), causando varios heridos y muertos (Alejo, 2019).

Según los vecinos del lugar en ese hecho, la idea era salvar las vidas de los heridos. Además, hay gente o alteños que incluso han sido heridos o detenidos solo por estar en ese momento de paso por el lugar, y a algunos les llegó una bala. Aunque en redes sociales cierta gente celebraba esos hechos luctuosos.

Pese a ello, la violencia militar-policial ha sido negada casi de manera sistemática en los medios de comunicación. Ante esa realidad, afloró el discurso de tono racista que califica a los alteños de salvajes, hordas, indios, masistas, etc. Tales calificaciones están expuestas en noticias y en redes sociales, donde la acusación del gobierno les da sustento. Incluso, como también en la masacre de Sacaba, se sostuvo que los propios manifestantes les habrían disparado por detrás. Así finalmente se justifica la masacre y se instala la lógica de que, si son criminales, merecen el trato recibido. Y por eso hubo gente que festejó la violencia estatal en Senkata.

El gobierno tuvo una línea discursiva de incriminación. En enero de 2020, por ejemplo, la señora Áñez habla de “los salvajes” en la inauguración del año judicial en la ciudad de Sucre. Ese es un dato a ser considerado. Ante esto, la gente en los barrios reafirma su decisión de no apoyar al gobierno de Áñez, al que considera “racista y criminal”.

Esta masacre ha dejado huérfanos, viudas, heridos y un trauma social. Recordó la masacre de octubre de 2003 en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias, y se convirtió en un nuevo episodio trágico de la historia política boliviana.

En alguna conferencia sostuvimos metafóricamente, en relación a 2003, que los alteños habían puesto sus “pechos de adobe” a las balas. ¿Habría que morir para seguir viviendo como pueblo? ¿Por qué son casi siempre los aymaras quienes tienen que morir para que el país viva y recupere su dignidad? Estas preguntas nos llevan al problema estructural del país, presentado como parte de esta realidad en la primera parte y en las conclusiones.

El periódico *La Razón* (2/12/19) titula: “Imágenes muestran a las FF.AA. con armas letales en Senkata y Sacaba”. Y es un dato que incendia todo sentido de diálogo y atisbo de la democracia.

Hay niños que han quedado huérfanos porque sus madres o padres murieron en estas jornadas luctuosas. Esta es la realidad de la criminalidad del Estado en contra del pueblo aymara o alteño. Este es el contexto de la nueva configuración social y de autoafirmación colectiva-individual como principio de vida y de justicia histórica (que queda inconclusa con el Estado Plurinacional).

9.2. Racismo y mentalidades confusas

En este proceso ciertos grupos envían mensajes o “noticias” a través de redes sociales y en algunos periódicos de La Paz, Santa Cruz y Sucre se “convierte” a los alteños en los Otros radicales. De más está decir que no todos eran masistas. La palabra ‘masista’ ya no es un sustantivo, sino un adjetivo; significa violento, indio, salvaje, horda, etcétera.

Se puede observar aquí la legendaria y singular narrativa que generaliza y convierte a los Otros en no humanos, similar a la de 1899 (véase Condarco, 1982). La narrativa arguediana o de Antelo-Moreno del siglo XIX se expone ahora como una nueva realidad discursiva y política. Al parecer, el tiempo y el espacio se han detenido súbitamente. ¿Por qué las mentes se han ofuscado y ha retornado una mentalidad casi criminal?

Desde el discurso del poder, los alteños y aymaras ya no serían seres humanos; son la naturaleza pura, o la sociedad espuria. ¿Cómo nos enteramos de este tipo de pensamiento? Después de los hechos ocurridos pudimos constatarlos en otras asambleas, en otros eventos de debate en que participamos (radio Metropolitana, 20/03/2020), en las calles y en los espacios de la clase media y media alta. Allí había un imaginario con mucho miedo, sorna y desprecio. Es una narrativa muy distinta a la de El Alto o de las provincias. Los alteños eran vistos como criminales y violentos, como un mundo de oscuridad profunda. Tal vez lo vivido o “aguantado” durante los 14 años del gobierno del MAS aquí se exponía como miedo. Para muestra, en las redes sociales circulaban mensajes como este:

Escuchaba eso en su discurso de El Alto, y gente de la ciudad de La Paz aplaudiendo [...] era satánico amenazando y demostrando su odio radical a los paceños (Wilbuk Will, hablando de Evo).

No estoy a favor ni en contra del señor Camacho, pero estas acciones son lamentables, demasiada ignorancia, odio y resentimiento por nada en su

corazón. Después se llenan la boca diciendo “NO RESPETAN LA POLLE-RA” o “NO RESPETAN LA *WIPHALA*...” (Wendy LuBlaFl, refiriéndose a los alteños).

¿Qué es lo quieren estas “hordas” de “salvajes”, “vándalos” e “ignorantes”? (Pérez, refiriéndose a los alteños).

Los relatos de los periodistas de *Página Siete*, entre ellos el que refiere a la “furia en Río Abajo” (Veliz, 2019), son parte de esto. Sin duda, en la zona sur de La Paz los acontecimientos se vivieron de otro modo. Y para ello tuvo que haber un largo proceso de construcción de una especie de identidad de “ninguno” por el Censo de Población y Vivienda 2012. El ser nadie “ha ideologizado también las bases de identidad de los ninguno” (Loayza, 2018: 29). Es decir, este sector social piensa su “ningunidad” en términos étnicos. Esto se observa claramente en el trabajo de Laguna (2018) sobre los jóvenes del 21F.

De modo que era un tiempo enrarecido. El alteño era una especie de objeto inservible para la vida y la sociedad civilizada. Los historiadores dan a conocer cómo se ha tratado a los aymaras en la guerra federal de 1899 o en el levantamiento de Tupak Katari-Bartolina Sisa en 1781. Aquí se vive algo parecido. “Moralmente el indio es un gran solitario, un esquivo, un desdeñoso [...] Aislado, huraño, taciturno, la presencia del blanco le hace sufrir” había afirmado Arguedas (1982: 57) hace 110 años.

En 2000, otro personaje, el Dr. [sic] Antonio Troncoso, de Potosí, sostuvo que entre “t’aras” y “q’aras” siempre hubo desconfianza y que “si los indios quieren su país, que lo funden”. Nuevamente el culpable (o el problema) es el indio. “No es extraño que los países con alta proporción de indígenas sean los más atrasados de Latinoamérica y los que no, los más adelantados” (Troncoso, en semanario *Pulso* núm. 71, 2000: 10).

Otro contemporáneo de aquellos “ideólogos”, O. Olmedo, había afirmado en 2006 que los aymaras son como la caterva o mazamorra irracional. “El descender y depositar en la hoyada es forjado por la caterva aymara de El Alto [...] La caterva no solo arrastra sus pies lastimosamente por las calles, también lo hace con los estribillos [...] convertido en frases fangosas, grumosas” (Olmedo, 2006: 15 y 17). Es decir, el aymara no había superado su antiguo ser. Su historia refleja desprecio y es ahistórica. Entonces no habría que vivir en la Colonia de 1600 o 1780. Paradójicamente, la Colonia ahora es radicalmente actual. El país había

vuelto a sus tiempos más oscuros; es como la Colonia del siglo XXI. El tiempo se ha detenido en un pasado inmemorial y de tiempo en tiempo parece repetirse. ¿Y las ideologías liberales?

El dato es que esas mentalidades son actuales, de 2019 y 2020. ¿El tiempo no ha transcurrido? Ahí también ocurrió algo: la extrema izquierda y la extrema derecha, al parecer, se habían juntado en un solo discurso. Ciertos trotskistas estaban en contra de los indios, junto con la ultraderecha. ¿Serán de la misma piel y de la misma cuna? Pero hay excepciones, como en todo ámbito y en la lucha social y política.

Aquí encontramos un detalle interesante. Se observa que las mentalidades cultas y “liberales” no son lineales (de progreso y desarrollo, como se repite hasta el cansancio); también tienen sus eternos retornos (aunque sus escritores lo niegan). Es un contexto de un gran develamiento de ciertas subjetividades de lo que es y de lo que era. No es un discurso sutil, sino desnudo y directo, para leerse como lo descarnado de un mundo que vive su propia contradicción. Es un mundo lleno de miedos, de turbulencias, de cegueras visuales y de contradicciones. Los discursos en la televisión o las conferencias, con su lenguaje de modernidad, de democracia, de liberalidad y de sentido de humanidad, se destronan por sí mismos. Aunque, sin duda, no en todos los casos. Entre estos espacios o lugares había (y hay) críticos a quienes también les han marcado las puertas de sus casas. Es otro dato que desvela esas mentalidades y los imaginarios sociales.

¿Mujeres, hombres y el tiempo se confabulan contra sí mismos? Los “blancos” y algunos mestizos se transliteran a sí mismos para dejarse ver como son. La clase alta y la media transitan de lo universal a lo local. “Son tal cual”, como dijo luego un sociólogo aymara. Es el espejo abierto al mundo. Es el sí mismo de sí mismo. Es parte del problema de este país. Son mundos obliterados que difícilmente ven la nueva realidad. Más bien la ven como debe ser: a su gusto, según la ontología colonial. No soportan que los tuteen. No aguantan que los gobiernen los Otros. No simpatizan con Evo por ser indio, aunque tendrían razón al manifestar que su gobierno no fue correcto. Y no lo fue, según afirma la misma gente alteña que se cita arriba.

Lo anterior genera, en consecuencia, que la gente de El Alto se autoafirme en su identidad. Muchos críticos al MAS también han vuelto a mirar al indio o al aymara como algo propio. Hay una lucha de mundos sociales y civilizatorios. Por lo menos, así se lo vive aquí y en el extenso mundo de los Andes y en la parte kolla de la Amazonía.

9.3. El tiempo real y la *wiphala* en movimiento

¿Cómo descifrar las interpretaciones simbólicas de la gente? O ¿por qué la *wiphala* convierte cierta apatía en actividad y en movimiento? ¿Cómo se vive el discurso acusador de los Otros en la ciudad y las provincias? Lo que aquí ocurrió, ciertamente, va más allá de lo que exponemos; es algo trascendental desde el punto de la historia y de los aymaras y aymaraquechuas.

Como se dijo, el domingo 10N mucha gente salió a hacer sus compras y a vender sus productos, aunque ciertamente en un ambiente algo enrarecido. La Feria 16 de Julio se instaló, al igual que muchas otras ferias pequeñas desperdigadas por casi toda la ciudad. Es una ciudad siempre activa, a diferencia de una ciudad burocrática que descansa los domingos.

A las 5 de la tarde más o menos se multiplican los mensajes en los celulares, se escucha en las radios que “hay gente que quiere saquear escuelas” y, paralelamente, se observa en canales de televisión la quema de la *wiphala* en Cochabamba y La Paz. El niño Álvaro, que estuvo observando una marcha en su zona, la Ballivián, exclamó ante esto: “¡Jallalla las mujeres de pollera.” (Suñagua, 2019). Todo esto se multiplicó definitiva y ampliamente. Debido a varios de estos factores regresan las *wiphalas* guerreras (como titulará su libro Inka Chukiwanka (2004).

El ingreso de la biblia al viejo Palacio Quemado a manos del empresario cruceño Luis F. Camacho, de Marco Pumari (del Comité Cívico de Potosí) y del abogado Eduardo León, quienes se arrodillan sobre la tricolor tendida en el suelo, es un dato revelador y, a la vez, un detonante. Al salir, algunos de ellos afirman: “La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno, nunca más volverá la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo al Palacio de Gobierno” (Juárez, 2019). Se vive la otra cara de octubre de 2003 frente a El Alto y su historia. La muchedumbre allí presente celebra la caída del indio con gritos de “tiranos”, “asesinos”, “golpistas”, etc. El lenguaje sofisticado de las élites medias y altas se expresa con propiedad, en su sentido íntimo. El buen lenguaje de salón y de la academia (al estilo boliviano) da lugar al del “populacho” y de la gente común, que se muestran tan cual son.

¿Quiénes quemaron la *wiphala*? El contexto está dado para saberlo. Aunque circulan versiones que indican que fueron infiltrados del MAS. Esto, finalmente, a la gente ya no le interesa. Al parecer, el juicio ya está decidido: “Son los pititas¹⁶, los criollos y sus cómplices”, se sostiene.

16 Así se llama al movimiento de oposición al gobierno de Evo Morales y García Linera, en base a lo afirmado por Morales el 24 de octubre. “Ahora dos, tres

Aquello contrasta con que en días previos Evo Morales, García Linea y alguno que otro ministro aparecen en los medios de comunicación. Este es otro detonante porque para la gente, en sus últimas horas en el poder, Evo aparece “con su propia gente y alguno que otro con ellos”. La gente sentencia: “Ahí está. Los indios fieles hasta la muerte, ¿y los otros?”. Esta afirmación señala una traición a Evo. Casi inmediatamente después se sabrá que Evo está en el Chapare, su propio territorio, temido por los oligarcas y sus familiares. Sobre su renuncia, luego se supo con mayor detalle, a partir del propio libro de Morales, cómo vivió esos días y horas entre la selva y las carreteras porque los mandos militares ya no obedecían a su capitán general (Morales, 2020).

El país aymaraquechua se moviliza, aunque con los contrastes internos producidos por el propio gobierno del MAS: Achakachi, Los Yungas cocalero, la UPEA y los cooperativistas (que fueron duramente reprimidos por el gobierno del MAS) no se pliegan completamente a la lucha.

En ese escenario, la ciudad se “wiphaliza” como nunca antes, primero en redes sociales y luego en todo El Alto. También las laderas de La Paz, como San Pedro, la Portada y otros, izan la *wiphala* (Conversatorio del PNUD, 19/12/2019). Al respecto podemos decir: no es que hemos “tomado mucho mate *de wiphala*”, como había afirmado años atrás la antropóloga inglesa Alison Spedding (según la frase expresada por Danilo Paz Ballivián en 2006 en un Congreso de Sociología en Cochabamba), en referencia a análisis basados en el símbolo multicolor. Desde ese lugar virtual y real, ahora este símbolo constitucional se multiplica.

Aunque en ese proceso ocurren cosas curiosas: quienes tenían *wiphalas* para vender lo hacen a Bs 50, 100 y 150. En pocos días se agotan las *wiphalas*. Ante su falta, la gente acude a papeles de regalo muy parecidos al símbolo. “Ahora no importa”, se dice. Se empiezan a usar telas de fabricación china con muchos cuadrados, parecidas a la *wiphala*, que el MAS había usado a diestra y siniestra. Lo que interesa es tener una *wiphala* o algo parecido. Para algunos significa seguridad para sus casas (por las amenazas); para otros, es una convicción profunda (sentimiento dado y extendido). Es interesante observar cómo casi toda la ciudad se ha “wiphalizado”. Son muy pocas las casas o edificios que no tienen una multicolor flameando, aunque sea pequeña. Usamos la palabra ‘wiphalizar’ en el sentido de un acto de extensión simbólica del símbolo sobre y por dentro de la ciudad.

personas amarrando *pititas*, poniendo llantitas, quieren hacer paro” (Carrillo V., 2019).

Las aproximadamente 1.200 juntas vecinales que tiene la ciudad ahora reeditan lo que para octubre de 2003 hemos llamado microgobiernos barriales. Se refiere a la organización frenética, tanto interna como externa. Se conectan barrio a barrio, aunque ciertamente no en todos los sentidos. Se observa que la vigilancia es mucho más intensa que en octubre de 2003. Todas las calles y avenidas han sido cercadas con alambre de púas y, simultáneamente, toda la ciudad se viste de *wiphala*. Algunos barrios usan *wiphalas* blancas en señal de pacificación, pero el resto, la *wiphala* multicolor.

No solo surgen grupos de vigilancia barrial, sino de acción directa y vigilante. La gente se organiza “para la guerra” (así se lo vive en el ambiente). Todo palo, calamina, piedra y lata es un arma de lucha. Las voluntades se crispan, se mantiene la memoria de octubre de 2003. Se recurre nuevamente a la *pirwa* o refrigerador aymaraquechua: comida seca y en raciones pequeñas, iguales, “y que sea para todos”. Así, literalmente, el barrio es el territorio de resistencia. Nadie se mueve allí si no tiene algún documento que acredite que es conocido y que no es policía o “agente golpista”. La gente empieza a crear la idea y a llamar “asesinos” a los grupos de Camacho que están en la ciudad de La Paz. También circula información de que posibles grupos afines al líder cruceño estén saqueando en Patacamaya, aunque en ese momento no se sabe con exactitud si eso es cierto o no. Al final no lo era. También se dijo que estos grupos habían subido a la Feria 16 de Julio el domingo 10N. Tampoco se sabe si eso es cierto o no. Aunque la gente afirma que “sí hubo gente con rodilleras y cascos merodeando tales lugares”. Tal vez haya sido parte de la guerra psicológica. Todo esto incentiva una mayor acción de lucha.

La ciudad de El Alto, del norte al sur y del sur al norte, es un territorio crispado, en estado de guerra. Noches enteras se queman llantas o lo que sea para las vigiliias en todas las zonas. En varios lugares se ha cuestionado a ciertos dirigentes masistas, y también a los posibles mesistas y “chapetonas” (por Chapetón, el apellido de la alcaldesa de entonces). En este escenario se va dando cuerpo a la idea de golpe de Estado, que al final se impone como realidad: Evo Morales habría sido traicionado por los policías y por algunos miembros del alto mando militar. Tal posibilidad se expande a su interior como un hecho inaceptable, para formar un sentido de Nosotros y los Otros.

Cuando Evo da su última conferencia de prensa desde el Chapare, la gente –incluidos los antimasistas– siente que aquí “cae el indio como yo mismo”. Para ellos es un hecho imperdonable. Tal vez no sea, como

sostienen algunos medios escritos o televisivos, que quienes caen son los masistas; aquí la gente piensa que ellos también caen del poder. Para dar un sentido a este hecho aparecen los rostros de viejos políticos, como Tuto Quiroga, Carlos Mesa (que luego será candidato presidencial en 2020), Samuel Doria Medina y Jorge Ortiz. Es la “gente decente”, como señala Orellana (2016) en su libro. La aparición de estos personajes enrarece más el ambiente. Luego se sabrá (previamente a la caída de Evo-Linera) que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana, como lo señalara en su momento la activista María Galindo (2020).

La gente dice: “si Evo se va, nuestro pueblo pierde”, y esto no es aceptable. No solamente son los masistas los que lamentan este hecho; también ese pueblo que había estado apático semanas y días antes. La indignación se vuelve en contra de los viejos caudillos del poder. Se teme desde ya la venganza de los criollos, y también que la economía del Estado se quiebre. Esto se confirma cuando Doria Medina señala que las “empresas públicas son deficitarias” y que ratifica semanas más tarde al sostener: “ya no [habrá] más empresas públicas de ahora en adelante” (*Opinión*, 2/02/2020).

Bolivia vive dos días de vacío de poder. Hay mucha violencia de uno y otro lado. En El Ato se queman instalaciones policiales. En la zona sur de La Paz se registran tres jóvenes muertos. Chasquipampa y Ovejuyo se consideran espacios de grupos masistas. En ese contexto, en El Alto se reactivan los gobiernos barriales para ser conducidos por las juntas vecinales (como se verá más adelante), buscando resguardar su seguridad interna y externa. Aquí hay una gran capacidad de gestionar el poder en sentido propio y en la autodefensa. La zona sur o la zona de los jailones, como dice la gente, “ya no tiene comida”. En El Alto se cuenta con el refrigerador andino, la *pirwa*; es parte de la memoria cultural y de octubre de 2003.

En el interior de Bolivia, Cochabamba literalmente arde. El Chapare observa atento lo que ocurre en el país y en El Alto. El país está en un estado de cuasi conflagración. Esto, desde ya, parece ser parte de la nueva historia política, pero ahora posiblemente con otro aditamento, que antes apenas era un atisbo: el nuevo sentimiento del país.

Los dirigentes del MAS renuncian a sus cargos. La noche de 12N Jeanine Áñez se proclama nueva presidenta de Bolivia. Se debate si es un hecho constitucional o no, pero, independientemente de ello, asume el gobierno en un contexto de gran beligerancia social y étnica. Esto es un elemento más para el despliegue de diversas fuerzas, en el que una gran parte de la gente toma una postura abierta en contra de los “blancos” y

los viejos señores del poder. Además, Áñez se posesiona sin quórum en el Parlamento y la banda presidencial se la colocan unos militares (Claure, 2019; B. Layme, 2019). Para la gente esto confirma que “su gobierno no es legítimo, es una usurpación”. Para nosotros es parte del golpe de Estado blando-duro. Y la *wiphala* ya no solo es el símbolo del MAS, sino un símbolo de toda la gente aymaraquechua, tanto en las grandes ciudades como en las extensas áreas rurales de los Andes y la Amazonía-Oriente. Este hecho no se ha explicado bien hasta ahora. Nosotros podemos sostener que con todo ello se mostró públicamente la nueva nación. La nación clandestina posiblemente sea ahora una nación real.

9.4. Gobiernos barriales

En este contexto, los barrios se reorganizan nuevamente como el espacio central de toda acción colectiva, desde beligerante hasta definicional. Varios vecinos del sector norte de El Alto expresaban que allí la gente “estaba dispuesta a morir por el Evo y por la *wiphala*”. Los distritos 7, 14, 5 y 4 (camino a Desaguadero y a Achacachi) y los distritos 8, 2 y 10 (camino a Oruro) fueron los grandes epicentros de todo este proceso. Ambos sectores tienen una gran población que carece de servicios y sus calles o avenidas aún son de tierra. En el sur las muertes se producen por la acción violenta de policías y militares (en Senkata). Esto es parte de la politización de la gente y de la ciudad; con ella resurgen los microgobiernos barriales, en nuevas situaciones y con nuevas características de acción y de control territorial. Y se suman componentes que ya estuvieron presentes en octubre de 2003.

¿Cuáles son esas nuevas condiciones o características? En principio la gente afirma: “Si no hubiéramos estado divididos los alteños, no duraba este gobierno ni un día”. Efectivamente, como ya se dijo, al principio la gente no se definía entre la normalización de las actividades o una lucha aún más abierta. En noviembre observamos en las puertas de la UPEA tres asambleas multitudinarias de vecinos de esta parte de la ciudad y de las provincias, todos con *wiphalas*. Por eso la *wiphala* se hace multitud. Algo similar se observó en la extranca de Senkata, donde existe un claro sentido de lo propio. En el primer caso, la dirigencia no ejerció una adecuada dirección. En el segundo, hubo una dirección más compacta hasta el final. Y aparecieron los autoconvocados, con una manera de lucha más propia y estratégica.

Desde estos espacios, con el pasar de los días, la gente se fue volcando a autoafirmarse como alteña que se siente profundamente ofendida. Esto lo pudimos comprobar al caminar, por ejemplo, por la avenida 6 de Marzo. Allí la gente decía: “hierve la sangre aymara”. Es lo que les ocurre a miles de alteños y alteñas. Se alza nuevamente el control vecinal, la vigilancia territorial, las fogatas rotativas, el “ojo con gente desconocida” y, obviamente, la seguridad interna de la zona o del barrio. Todos los vecinos, mujeres y hombres, cumplen sagradamente las vigiliadas por días enteros. Nadie obliga a la gente a salir a la calle, aunque al principio sí fueron presionados. La indignación es la fuerza que ahora los moviliza autónomamente y los convierte, como expresó un joven, “en guerreros aymaras”.

Parece que se reproduce el pensamiento político aymara, pero no como grupos irregulares, como podría pensarse. La lucha alteña es social, colectiva, de acción zigzagueante, formal y visible. Algunas zonas tienen grupos específicos de rondas. Están “armados” con palos y han creado canciones con música marcial. Ejercicio físico con trotes, gritos, contraseñas; nadie que no sea conocido puede pasar por allí. No se pueden mover dentro de una zona o barrio sin identificarse previamente. El control territorial es efectivo. Ciertamente, en alguno de esos momentos nos tocó pasar por barrios aledaños donde la gente estaba a la caza de todo desconocido.

En este contexto, otro grupo de vecinos se dirige a marchar a la Ceja y a la hoyada. Uno de esos momentos es el 21N, fecha en que llevaron los ataúdes de las víctimas de la masacre de Senkata a la plaza San Francisco. Aquí se mostró la furia de la gente y, a la vez, la criminalidad del Estado (para complementar esta información se sugiere ver el archivo fotográfico en anexo). El resto de la gente queda vigilante en la zona. La “defensa de los barrios es vital”; por eso se organizan de un modo extendido social y territorialmente. Vuelven a funcionar los turnos rotativos. Se podría hablar de una tecnología de lucha y de otro poder (Mamani Ramírez, 2013).

Marcan territorios, visibilizan flancos abiertos, analizan la situación política, se reconocen entre sí como alteños o alteñas, ciertas enemistades se resuelven, como había ocurrido también en octubre de 2003. En otras palabras, la gente se reconoce como alteña y aymara; sobre esa base, se crean sentidos de hermanamiento y de asociación de barrios y distritos urbanos y rurales, tal como en octubre de 2003. El control territorial y social estuvo en algunos casos concentrado en pequeños grupos selectos y en otros, por “todo el mundo”. Todos deben ser parte de este momento;

también los muertos, los heridos, los niños que han quedado huérfanos, etc. Los petardos, las latas viejas, los silbatos, el golpeteo a los postes de luz son parte de ese nuevo momento o repertorio de acción y discurso. Tal vez ahora estos microgobiernos funcionan más hacia adentro que hacia afuera. En octubre de 2003, por el contrario, fue más hacia afuera y poco hacia adentro. La acción colectiva-individual, evidentemente, se concentró internamente. Desde ella se crean fronteras externas e internas. Se crean grandes articulaciones desde ese adentro de sí, ya que se mueve en relación con las provincias rurales de La Paz, de Oruro y de otras regiones que llegan a El Alto. En efecto, llegan del área rural miles de campesinos aymaras. Ellos vienen dispuestos a todo. Hay camiones y buses llenos de personas ondeando *wiphalas*. Son recibidos con un unánime: “¡*Jallalla!*, ¡*Jallalla!*” (¡Viva!, ¡Viva!).

Ahora bien, dichos microgobiernos barriales se interiorizan o se adentran hacia sí mismos para desde allí resurgir una y otra vez en manifestaciones de autocritica: “no todos estábamos unidos”. También desde adentro se abren fronteras y mapas de territorios propios y ajenos. Se visibilizan los sentidos de lo propio y de lo otro. Se configuran nuevos sentidos de Nosotros porque en esto nuevamente se hacen visibles los Otros. Así, este adentro es el adentro de lo propio y no el adentro de lo ajeno. Es la constitución de nuevas subjetividades. Se mueven círculos de discursos dados en imágenes, en voces, en gritos, en llamados a la lucha, en movimiento de cuerpos, etcétera.

Pensamos que ese adentro, además, crea un lugar sustancial de adentro-afuera, la frontera. Esto es estar en el lugar propio pero, a la vez, mirar el lugar del otro. Ese mirar del lugar del otro significa imaginar tantas cosas que solo el destino puede definir. Así el adentro-afuera y afuera es una especie de conocimiento propio y conocimiento ajeno, porque también es una forma de conocerse dentro de sí mismo o como mundos propios y conocer los otros mundos. En ciertos lugares, los yatiris pronostican cosas peores; en otros casos, dicen que “esto tendrá corto tiempo”. Algunos afirman “que el tiempo de los *q'aras* ha terminado”. Algo que, seguramente, inquietaría en aquellos otros lugares.

Posiblemente, de este modo los microgobiernos barriales sean el espacio de una nueva politización, no solo en la conciencia étnica sino en una identidad mayor. Nosotros “somos el país”, el ser nacional. Y ese “ser país somos todos” es algo que no tenía un sentido extendido en octubre de 2003. Este sin duda es un dato que nos puede decir que el país “está aquí” y lo demás es un país “extranjero”. Puede que lo extranjero sea un ser-estar sin sentido. Al parecer, ahí se nacionalizó lo propio, eso

que llamamos la nacionalización de la nación, pero a la vez mirando abiertamente al mundo global. Se observa que el alteño y la alteña se piensan como el nuevo sentir de lo nacional; parece que eso es lo que han logrado en ese viaje hacia adentro, para volver inmediatamente hacia afuera convertidos en una fuerza mayor. Sin duda ahora es un nuevo actor, que combina lo nuevo y lo viejo.

Aunque al principio se aplaudió a las tanquetas militares en el sector de Tarapacá y Río Seco, con el pasar de las semanas y meses esta acción del gobierno se convirtió en un aterrador mensaje de muerte, en un terrorismo de Estado que se rechaza. En ese contexto se yerguen nuevos núcleos sólidos de lo propio en una versión diferente a la nación clásica y tradicional o, más bien, diferente a la nación abstracta. Y así se producen memorias y nuevas subjetividades.

9.5. Memorias en voces y subjetividades

Las voces de los actores, hombres y mujeres, se convierten, en ese escenario, en referencia directa de esas nuevas subjetividades sociales. La gente vive en cuerpo propio la violencia verbal y física del Estado y de grupos civiles irregulares. Es la experiencia de un acontecer vivido en lo personal y en lo colectivo. Es un hecho expresado en voces que redefinen el sentido de las relaciones sociales y políticas. Entre el 18 y el 25 de octubre de 2021 se realizó la marcha de víctimas de Senkata (El Alto) y Huayllani (Cochabamba) desde Caracollo a La Paz; fue un hecho importante.

Exponemos, asimismo, algunas entrevistas obtenidas en 2021 por el proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales “Pablo Zarate Willka”, de la carrera de Sociología de la UPEA, que nos hablan de las nuevas subjetividades sociales. Es decir, la exposición de las nuevas subjetividades sociales es importante aquí, aunque ese tema se haya tratado en otro trabajo (Mamani Ramírez, 2022).

Que nosotros somos vandálicos, que nosotros somos los delincuentes, nosotros hemos sido todo para la presidenta [Áñez]. Nos tildaron de todo, nosotros hemos sido entre nosotros, “entre ellos se balearon, entre ellos se dispararon”. Pero la verdad no ha sido así. Ellos nos han masacrado, nos han disparado sin piedad al pueblo humilde, a la gente humilde, a la gente de pollera nos han despreciado. ¿Hasta cuándo, hasta cuando no va haber justicia para nosotros? Esa es la molestia. Por tal motivo, nosotros

hemos acordado marchar y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta conseguir justicia, justicia, porque queremos que entren a la cárcel militares y policías. Cuáles son los que han disparado, eso todo tiene que salir claro, eso es lo que nosotros queremos (entrevista a madre de una enfermera herida el 19 de noviembre en Senkata, El Alto, 25 de octubre de 2021).

La voz de María Tenorio, hermana de Juan Tenorio, muerto en Senkata, es similar a la de la madre de la enfermera herida. Su hermano Juan murió por balas letales aquel fatídico 19 de noviembre. Historias como estas abundan en las familias de El Alto.

Uno de los heridos de Senkata expresa durante la marcha lo que significa la *wiphala*, los hechos vividos y la actual situación en el nuevo contexto sociopolítico del país:

Mira, estamos un poco molestos, dolidos, porque no ha actuado nuestro hermano presidente [Arce Catacora]. Cuando en Santa Cruz nos lo han denigrado nuestra *wiphala*, nos lo han dicho trapo, nos han tratado como trapo a nosotros a los pobres, a los que vienen del campo, a la gente de pollera. Nos identifica la *wiphala*, para nosotros es nuestro símbolo, nuestra identificación, nuestra bandera. Obviamente, como país es rojo, amarillo y verde, pero nuestra *wiphala* es nuestra bandera de todos los indígenas, de todos los pobres hermanos (entrevista a Oscar Severo, 25 de octubre de 2021).

La *wiphala* ha adquirido sentido político y de identidad cultural propio. Es la significación de un Nosotros dentro de la nueva dinámica social de Bolivia. También lo expresa así María Huanca, del sector sur de El Alto, en representación de esas voces casi acalladas.

Yo no soy dirigente, pero como vecinos nos hemos sentido con más fuerza porque en todo lado estaba la *wiphala*. *A veces ni estandarte ya queríamos ver* porque como era de la bandera, entonces hemos dicho: “que sea la *wiphala* porque eso nos representa”; eso decíamos. Algunos también otras cosas nos decían, pero siempre llevábamos en alto ese símbolo y no solo yo, sino todos, hasta los jóvenes; en sus bicicletas sabe estar (entrevista a María Huanca, 16 de septiembre de 2021. [El resaltado es nuestro]).

Un vecino del sector norte de El Alto expresa en lengua aymara lo posible y lo no posible desde el lugar mismo de la lucha social. Habla de que “nos falta lo militar”, aunque si se agravaran los hechos no faltaría. El grito de guerra civil es como posible y no posible. Dice que es para

que la gente tome valor y coraje. Y reconoce que sobre ese tipo de cosas ha ocurrido la Revolución de 1952. Habla en aymara:

Uka arumpija valor tomañatakinaya ¿no? Uka avisasa ch'amañchir arurakiy ¿no? Entonces, janiy nanakaq kunanipksa, kunanipktansa aymaranakaja; armamentunisna ukhaq niyasa defendesiraksnay, niyasa; janiw armamentusaq utjkistuti; solamente q'urawa, qala ukakiqin utjchistuj; después jupanakaq aka militaranakax armantatay fusilanakan ukhamay, revolveranakan ukhamay; jiwasax janiy guerra lurksnati, tal vez 53 jam paschisapana, ¿no? 1953 mä revoluciónaw pasiq, ¿no? Inas ukhamachispana wila wartawiw wali utjasapana (entrevista a Delfin Díaz, 20 de octubre de 2021). [Ese día era para tomar valor. Esa una manera de hablar para dar fuerza. Así nosotros como aymaras no tenemos nada. Si hubiera armamento con eso nos podemos defender. Nosotros peleamos solamente con honda y piedra. Sin embargo, los militares y los policías están armados con fusiles y revólveres. Si hubiera sido como en 52 tal vez hubiera ocurrido una revolución. En ese caso hubiera habido un derramamiento de sangre] (Traducción propia).

La posibilidad de la muerte es real porque ocurrió. Y ese hecho produjo un entramado de sentidos y profundidades que llegan a las definiciones político-sociales. Nuevamente la *wiphala* es un sentido del mundo y de la lucha por el poder y, tal vez lo fundamental, es para denunciar la muerte que causan en nombre de Bolivia. Es, como lo expresa un vecino del sector norte:

Ahora la *wiphala* nos reivindica la unidad, la unidad del pueblo. Es como decir que aquí, así, en nombre de Bolivia, nos matan, ¿no ve? De decir: mira, los bolivianos nos matan así a los originarios, así. Entonces en algún momento, por ejemplo, Felipe Quispe decía nosotros tenemos territorio, patria, nosotros sí tenemos nuestra propia bandera, nosotros tenemos una lengua, ¿no? Así. Entonces la *wiphala* siempre nos va a llevar a una comunidad, a una unidad; no solo somos bolivianos, sino que somos de más allá, nosotros, ¿no? (entrevista a Elías Hilari, 1 de agosto de 2021).

Este conjunto de sentires y sentidos ha producido finalmente ese entramado de pertenencia histórica y de un pueblo que es parte de la historia del país de la que, sin embargo, casi siempre se lo niega. Esto quiere decir que el mundo del poder es un mundo que niega a los habitantes del país porque es neocolonial y con profundos grados de racismo. Esto hace entonces que la gente piense, e incluso actúe, en consecuencia, en un nuevo sentido de lo social y de la vida humana. Por eso sostenemos que se han instalado nuevas subjetividades sociales.

9.6. ¿Un nuevo tiempo?

Una ciudad y sus multitudes. Siguiendo el argumento de este trabajo, se puede decir que El Alto se ha convertido en el epicentro del país, como en octubre de 2003, ahora desde la gravitación de la *wiphala* y de las juntas vecinales, sin negar lo que hace Santa Cruz. En otras palabras: la *wiphala* es el emblema de la nueva nación, en tanto una nueva totalidad emergente y activadora del devenir de un espacio-tiempo. Y el barrio es el territorio de lo propio. Toda una ciudad y el mundo de los Andes reaparece nuevamente. Se hace visible y es parte de un amplio proceso de redefinición del país en su sentido diverso y múltiple. Y Bolivia tiene dentro de sí un nuevo hecho que parece marcar un sentido propio de autoafirmación y, a la vez, su mirada al mundo global. Aunque, ciertamente, esto es complejo.

En otras palabras, El Alto es el sentido de sí mismo y de una realidad que se proyecta más allá de El Alto y del mundo de los Andes. El aymara-quechua o, en nuestro caso, el alteño, se convierte en ese referente que contradice a los más revolucionarios de todos los colores y credos. Esto es así pese a lo que una señora de apellido Murillo dijo en un conversatorio organizado por PNUD (19/12/2019): que esta ciudad es “la republiqueta de El Alto”, en sentido de que se habrían creado aquí “nuevos líderes con una visión no nacional”, sino solo localista. Posiblemente lo que se produjo en esta ciudad no tiene un lenguaje revolucionario, aunque la gente sí tenga claro qué puede decirle al mundo desde sí misma.

En ese contexto, Evo Morales y el MAS parecen no tener conciencia de esa lucha y de ese nuevo sentido de nación que ha nacido en esta ciudad y en casi todo el mundo andino, en comunicación con el oriente boliviano (Mamani Ramírez, 2020b). Esto se lee en las entrevistas presentadas arriba, pese a que Evo ha sido acusado de sedición y de terrorismo por la posible instrucción de dejar sin alimentos a los pobladores de las ciudades. Aunque él lo niega, bajo el argumento de que algunos militares del Alto Mando Militar se insubordinaron un día antes u horas antes de su renuncia (Morales, 2020)¹⁷. Pese a los esfuerzos de diálogo, la confrontación fue activa en el contexto de la postergación de las elecciones del 3 de mayo y de la pandemia de Covid-19.

En ese sentido El Alto, bajo su propia experiencia de espíritu de trabajo y de luchas rebeldes, es un dato real. ¿Qué otros sentidos se

17 Aviones K-8 sobrevolaban sin autorización del capitán general, que es el presidente del Estado. “No, eso ya no depende del presidente...”.

observan en todo ello? Se observa un nuevo sentido de nación, como ampliaremos más adelante. ¿Es una nación dentro de la nación? No, es el nuevo sentido de la nación boliviana en la forma propia, aunque eso no es definitorio. Se podría decir que es una nueva nación como la antítesis de la nación criolla y oligárquica (la nación abstracta). Su mayor encarnación es la *wiphala* y el símbolo de la pollera, con los cuales se hizo multitud adentro y afuera de la ciudad de El Alto y en las laderas de la ciudad de La Paz, hasta ondear en las luchas sociales de Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Francia. La agresión vivida se convirtió en esa especie de nación imaginada (Anderson, 1993). El enojo, como sostiene Gellner (2001), se convirtió en parte de ese nuevo sentimiento para reclamar que cuadre el derecho político con la unidad de sí. Y su demostración es justamente la autoafirmación de “Nosotros Bolivia”. La agresión vivida en la quema de la *wiphala* ha servido para expandirse como sentimiento en miles de corazones aymaras y alteños. Ese es el Nosotros. Luego se conforman nuevas multitudes parecidas a las de 2000-2001 (Mamani Ramírez, 2004), dadas a su vez en formas federadas de acción colectiva (Hylton, 2004) entre barrios y comunidades rurales.

Este sentimiento está dado en su pertenencia a la nación boliviana, pero como nueva nación plural. Aunque también es posible un Kollasuyu propio (una de las partes del antiguo Estado de los Inkas, el Tawantinsuyu).

Una muestra épica de esta afirmación es la invocación de Reyna Suñagua sobre Senkata.

No te merecen, Senkata, no merecen a las tías que lloran a sus muertos. No te merecen, tía, ya no llores por favor, por favor, tía, nos llevaremos a nuestro hermano lejos, al campo. Vámonos al campo, ahí haremos nuestra ciudad, empecemos desde cero, haremos nuestro país con nuestro pueblo [...] (Macusaya y otros, 2020: 82 y 84).

Esta nueva nación plural y de sí parece no ser fácil de entender ni corromper porque es un sentimiento y una emoción de casi de todo un pueblo que ha territorializado su mundo al resto del país. Es una comunidad moral. Parece ser parte de la nueva era. Un espíritu de nación contra el viejo Estado. Esto porque en nuestra historia el Estado se impuso como narrativa última, similar al problema que Chatterjee (2008) plantea para la India poscolonial. El Estado se ha presentado siempre como el todo universal, mientras que lo indio o lo aymaraquechua, como su antítesis y su enemigo interno.

En ese contexto tiene sentido este nuevo espíritu de la nación –como diría Renan (2006) dentro de su propio contexto francés racializador–. Es una voluntad de vivir el país de manera conjunta y en todos los lugares. De hecho, el pasado histórico justifica su presente. Si esto es cierto, parece que no hay poder posible que detenga a esta nueva realidad. A partir de ello, es posible sostener que esta será parte de la nueva lucha política y social en adelante. Se percibe en los barrios que quien quiera extirpar la *wiphala* de la Constitución tendrá que enfrentar el rechazo, pues mujeres y hombres se han levantado como la fuerza de la nación (Floria, 1998). Aquí parecen confluir lo que en los debates teóricos se llamaron la nación cívica y la cultural (De Blas, 1995), porque se da en ambas esferas a la vez. Es decir, en lo político y en lo cultural.

Entonces esto podría continuar como tiempo e historia desde “el otro poder” (Mamani Ramírez, 2013). Un poder alterno al poder constituido. Es poco lo que podríamos decir en este trabajo sobre este punto; solo podríamos hacerlo provisionalmente.

9.7. De la confusión a la rearticulación

Aquí hay todo un ejercicio de ida y vuelta que se da en el debate y también en las dudas que se generan. Como se dijo, se producen dos momentos para la rearticulación: i) la confusión-división que deviene en un Nosotros y ii) la autodignificación, en sentido de la rearticulación social dada en una nueva subjetividad social.

En el primer aspecto hubo esa confusión-división porque la gente se dejó estar y, a la vez, el gobierno del MAS había dividido a las organizaciones sociales, incluidas las juntas vecinales, y expuesto a su propia gente a actos autoritarios. Ambos factores hicieron que la gente y las organizaciones sociales no actuaran decididamente para defender al gobierno del MAS. Sin embargo, está presente un Nosotros como sentido de apropiación del destino del país porque “también somos de Bolivia”, como se dijo. Esto crea y recrea esa nueva subjetividad ante un pasado de autonegación o el de decirse a sí mismo “yo no vivo de la política”. Entonces aquí se observa como político el campo de la vida social.

Esto es importante si tenemos en cuenta que la nueva subjetividad está cargada de un destino de poder. Es decir, “si le va bien al gobierno de Nosotros, nos va a ir bien a todos”, pero no en un sentido utilitarista, sino en el sentido de destino histórico común.

Bajo ese sentido y sentimiento definido, la gente ahora reafirma que “se siente el país mismo”. Una señora dijo en uno de los momentos de lucha social, en el contexto del 14 de agosto en el multitudinario cabildo realizado en la Ceja: “nosotros somos el país”. “El país nos pertenece”: ese es el nuevo sentido de esa subjetividad social. Sin duda, producir esa subjetividad no es nada fácil. En otros términos: es un hecho histórico producir subjetividad social alterna o contra la subjetividad formal o dominante. Y el gobierno de Añez trató de destruir esa peligrosa subjetividad social. Tal vez sea lo correcto desde el punto de vista del poder porque estos grupos sociales no solo han cuestionado, sino incluso retado a pensar el país de un modo más propio. No desde la exterioridad, que es su constitución interna.

Así se puede interpretar que la nueva subjetividad puede ser, o ya es, una disputa contrahegemónica del país criollo o “blanco”. Una realidad que se puede nombrar y que posiblemente tenga sus consecuencias sociales y políticas en el devenir del tiempo y el espacio.

Comparación de microgobiernos barriales y sus formas políticas entre 2003 y 2019

La comparación de dos momentos de articulación de los microgobiernos barriales en la ciudad de El Alto es un esfuerzo para ver los hechos sociopolíticos de 2003 y 2019 desde el mundo aymara hacia Bolivia. Esto, en el sentido de que Bolivia es andina-amazónica-chaqueña, de que es parte de una diversidad geográfica y de que tiene intensas interconexiones con Asia, Europa y con sus vecinos Chile, Perú y Brasil. El propósito es ampliar la información y el conocimiento sobre el funcionamiento de las juntas vecinales en momentos extraordinarios de la sociedad alteña. Nuestro interés, además, es tratar de mostrar ideas sobre nuevas posibilidades democráticas y nuevas formas de pensar el poder y la política.

Así, el capítulo está organizado en tres momentos importantes: i) el tipo de lucha social entre 2003 y 2019; ii) la comparación de los gobiernos barriales entre ambos momentos y iii) el sentido de lo político y lo estatal en esas relaciones, en la perspectiva de mirar específicamente lo político desde lo social. Se sugiere que lo social es político por la manera en cómo se constituye la crítica a las formas y sentidos de la dominación colonial y neocolonial.

10.1. *Wiphalas* y el tipo de lucha entre 2003 y 2019

La *wiphala* como símbolo de diversidad sociopolítica es parte de ese nuevo núcleo. Los siete colores y sus 49 cuadros pasan a convertirse en una filosofía política y cultural. He ahí algunas de las razones de por qué

la gente se ha movilizado profusamente. Veamos comparativamente los momentos constitutivos de 2003 y de 2019.

Previamente es importante decir que, como expusimos arriba, existen una suerte de “dos El Altos”. En 2019 unos quieren la normalización de las actividades y otros exigen salir a las calles para movilizarse en contra del golpe de Estado de los cívicos. En 2003 se produjo algo parecido, aunque con un conjunto de argumentos un tanto diferentes. En ese año pudimos observar enfrentarse a dos grupos en la Ceja: los llamados pepeluchistas (por el alcalde de El Alto de entonces) con grupos de jóvenes y vecinos, los primeros, que argumentaban no querer perjudicar a la ciudad y, otros, bajo la consigna de salir a luchar contra el modelo neoliberal. Aquel también fue un momento definitorio, con la huida del presidente Sánchez de Lozada el del 17 de octubre.

En 2019 un dato importante es la quema de la *wiphala*. Pero, además, el que el 10N algunos policías retiran la *wiphala* del frontis de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz. La primera diferencia es que en 2003 no se usó la *wiphala* de manera multitudinaria, sino en algunos lugares, y por personas o ideólogos específicos ligados al indianismo o al katarismo. Sin embargo, en 2019 el símbolo se hizo multitudes para viajar al interior de la subjetividad de la gente y entonces adquirió profundos sentidos sociales y políticos (entendiendo sentido, en este caso, como aquello que la gente o los actores brindan a un objeto o a las relaciones sociales). La *wiphala* es, más bien, una definición de los sentidos.

Además, en ese hecho hay un detalle: no solo se quema el símbolo, sino que ciertos jefes policiales lo arrancan de sus brazaletes en público, para mostrar su rechazo a un símbolo aprobado por la Constitución. Por ejemplo, en Santa Cruz se observa al comandante departamental de la Policía, Miguel Mercado, quitarlo en público de su uniforme policial.

Ante estos hechos, la ciudad de El Alto y las provincias se indignan. Entonces, grupos de jóvenes, profesionales y vecinos de todas las edades hacen un llamado por Facebook y WhatsApp para que todos cuelguen la *wiphala* en sus casas para mostrar su rechazo a ese acto. La gente no está dispuesta a aceptar que el símbolo de los indios sea nuevamente invisibilizado y quemado. En otras palabras, este hecho se convierte en el proceso que enmarca esos profundos sentidos. Teóricamente, se puede decir que ciertos hechos dan sentido y permiten entender lo que hace o dice la gente.

Es por eso que el 11N por la tarde se observa a cientos de jóvenes correr por la Av. Juan Pablo II gritando: “¡Ahora sí, guerra civil!”. La

quema del símbolo eleva exponencialmente la indignación; a ello se suma la que provoca la masacre del 19 de noviembre en Senkata. Esos hechos producen un enardecimiento de toda la ciudad y del mundo andino o el mundo kolla. Además, Jeanine Áñez había tomado la presidencia la noche del 12 de noviembre sin los procedimientos constitucionales necesarios, bajo el título de “gobierno transitorio”. Y esto tiene consecuencias violentas porque desde ese lugar ordena a las Fuerzas Armadas salir a las calles a “pacificar”, bajo el D.S. 4078. Aquí la palabra pacificar significa calmar a los enardecidos alteños por la fuerza de las armas. Por eso se comete la masacre, que la CIDH (2019) define como un acto dado en un mismo tiempo y espacio con muertes similares o en las mismas circunstancias. Ante este hecho, la gente pide la renuncia de la “auto-proclamada Áñez”. En ese escenario regresan los repertorios de acción colectiva beligerante, tal como en 2003.

Según varios jóvenes, la quema del símbolo es como quemar la subjetividad social alteña. Por eso se entiende que la *wiphala* viaja al interior del nuevo espacio social que se contrapone a la vieja condición social de la oligarquía criolla. Y su forma objetiva es que efectivamente flamea en las casas y los edificios alteños. En términos de análisis sociopolítico, significa que se produce un movimiento hacia adentro de sí mismo, como un retorno a la interioridad de los barrios, para reconocerse y debatir si se lucha juntos o se deja de luchar. Lo cual, finalmente, genera la cohesión del barrio. Esto es necesario para que, a partir de entonces, se mueva hacia afuera. Este retorno hacia sí es un reordenamiento de las relaciones sociales en perspectiva. El detalle es que por dentro hay relaciones quebradas provocadas por la propia gestión del gobierno del MAS, que dividió a las organizaciones sociales y cooptó a sus dirigentes. Esto debe ser resuelto internamente porque es la única manera de reencontrarse y recomponer amistades, entre otras cosas.

Se observa que ese adentro es un espacio de producción de imágenes de la realidad, de circulación de información, de intercambio de noticias, afinamiento de percepciones políticas, estrategias de organización internas y externas, constitución de sistemas de vigilancia, acopio de fotos de asuntos desconocidos, control de calles y plazas, observación y conexión entre barrios, etc. Aquí se nacionaliza el sentido del Nosotros y surge el nuevo espíritu de la nación (Mamani Ramírez, 2020b). Esto, posiblemente, es lo nuevo dentro de este hecho porque se define que los Otros son gente ajena: delincuentes, pititas, militares o policías. Tal vez aquí se evidencia la diferencia con octubre de 2003 cuando, sin duda, las clases medias y altas no eran visibles con tanta claridad como

ahora. Los cívicos o las clases altas blanco-mestizas ahora están abiertamente movilizadas y hablan con encono contra los indios o alteños. Los medios de comunicación (con excepción de algunos) respaldan esas posiciones y los políticos de dichas corrientes se convierten en sus líderes o en sus voceros.

Aunque en ese escenario el día 10N por la mañana la gente, al parecer, había aceptado que Evo Morales renunciara a la presidencia, la quema de la *wiphala* vuelve a posicionarlo como un mejor presidente. Estos son dos momentos confusos y, a la vez, definitorios. Aquí las imágenes juegan un papel catalizador del rechazo al nuevo gobierno. Se observa en los canales de televisión, en conferencia de prensa desde Lauca Ñ, Chapare, el rostro compungido de Morales, provocando un revuelo en esta ciudad y seguramente en otros lugres del país.

Y entonces se reclama el inmediato desagravio a la *wiphala*, cuya quema se considera un “acto criminal”, junto con el sentimiento de que Evo es “uno de nosotros que está siendo botado de la presidencia”. En este contexto, a la vez, se producen varios otros hechos importantes: grupos pequeños salen a golpear las puertas de las casas en casi toda la ciudad de El Alto convocando a la gente para bloquear calles y avenidas; luego aparecen grupos de delincuentes que amenazan con quemar y saquear casas particulares. Se parece a lo que sucedió en 2003, aunque entonces no se hablaba abiertamente de los delincuentes que amenazan las casas. Después de arduos debates internos, la gente se organiza en grupos para bloquear y armarse con todo lo que hubiera: palos, machetes, piedras, silbatos, etc., y, al mismo tiempo, defender sus propiedades ante dichas amenazas. Por lo que (re)aparece la organización cuasimilitar de los barrios de 2003. La gente ronda las zonas en grupos y en turnos, al grito de “aquí nadie entra” o “cuidado ladrón, que te vamos a quemar”.

Se viven días de enorme inquietud. Corren rumores de que unos mil jóvenes venidos de Santa Cruz con Luis F. Camacho son parte de los grupos de saqueo. Cierto o no, días antes constatamos que en la vigilia de la plaza Murillo había gente con acento oriental que no permitía entrar a dicha plaza.

Todo ello provoca una profunda indignación en el mundo aymaraquechua y empieza a llegar mucha gente desde las áreas rurales hacia El Alto para hacer “pagar por el insulto al símbolo patrio”. También en 2003 llegaron de los centros mineros miles y miles de mineros cooperativistas y asalariados, además de comunarios de las distintas provincias. En 2019 esto fue aprovechado por miembros del MAS para marcar una resistencia frente a lo que se dijo que era un golpe de Estado, aunque en

ese momento no se sabía de qué tipo. Luego se aclaró que era un golpe de Estado de tipo blando-duro, como lo definimos aquí.

Vuelven a resurgir los microgobiernos barriales en las más de 1.000 juntas vecinales (de 1.200 que tiene El Alto) y sus 14 distritos. Aquellos autoafirman el sentido de la organización territorial como pequeños gobiernos organizados técnicamente alrededor de las juntas vecinales, tal como en 2003. Los presidentes de las juntas vecinales vuelven a ser cabeza de esos pequeños gobiernos territoriales, sustentados en la comunidad de vecinos de cada zona y de cada barrio.

Mientras que la lucha o el levantamiento social de octubre de 2003 se daba contra el modelo neoliberal que quiso exportar gas boliviano por puertos chilenos hacia Estados Unidos, en 2019 se produce la resistencia al golpe blando-duro y el rechazo a la quema de la *wiphala*. En ese sentido, existen diferencias y también similitudes. Es similar la forma de organizar la lucha desde los barrios y también ciertos círculos de actores estratégicos; la diferencia radica en que en 2003 hubo un levantamiento social, en tanto que ahora se produce una resistencia social.

En 2003 no hubo movilizaciones de los comités cívicos, como en 2019; a lo sumo, una marcha con banderas blancas en La Paz, encabezada por Ana María Romero de Campero, Defensora del Pueblo de entonces, y algunos pequeños movimientos en Santa Cruz para defender al gobierno de Sánchez de Lozada. Fue la antesala de lo que luego se llamó la “media luna”, desde donde circuló la posibilidad de que el oriente se separara de Bolivia, expresada en la denominada “nación cambia”.

En 2019, bajo la idea de fraude, los sectores cívicos están movilizados; en ese escenario se queman las instalaciones del Tribunal Electoral en Sucre y Potosí y se producen ataques a casas particulares de dirigentes políticos del MAS. Los cívicos llaman levantamiento popular a esas movilizaciones.

En ese contexto, el gobierno del MAS estaba derrotado tanto política como moralmente. Y es la *wiphala* quemada la que salva al MAS, dado que se la considera como el símbolo de los pueblos indígenas. Este es un detalle interesante que debería estudiarse en otro lugar. Se podría decir entonces que con este hecho comienza la pelea por la “guerra de equilibrio”, en el sentido de la filosofía de guerra de los ayllus andinos. Y esa forma de pensar hace que finalmente este conjunto de hechos se convierta en una nueva historia política (ver Mamani Ramírez, 2020b; Jichha, 2020).

¿Qué sectores o lugares se movilizan entre 2003 y 2019? Los centros de la lucha, tanto en 2003 como en 2019, son el distrito 8 (Senkata), el 2

(que está alrededor de la avenida 6 de Marzo, camino a Oruro), el 10, y los distritos 7, 14, 3 y 4, a la altura de Río Seco y Villa Ingenio (camino a Desaguadero, frontera con Perú y Achakachi). Son lugares geoestratégicos en términos de tránsito de motorizados y de cierre no solo de la ciudad de El Alto, sino también de la “hoyada”. En este contexto, se pudo observar, pasados tres meses, que la gente se inclinó a favor del régimen derrocado en Senkata y Río Seco y que Evo se convirtió en un mito. La gente piensa que es “nuestra gente y no puede irse”. Otros dicen: “no puede ser; para mí fue el mejor presidente que hemos tenido”. El enojo se expande por el estigma producido sobre El Alto y por los duros días vividos. Nuevamente El Alto se autoafirma desde estos lugares hacia toda la ciudad, como una ciudad rebelde y aymara. Quizá también es importante hacer notar que la forma autoritaria con que gobernó Morales pasa a segundo plano en este contexto y surge nítidamente un sentimiento de identidad con el expresidente, aunque este no haya hecho grandes cosas por El Alto. Además, en 2003 Evo no era ninguna referencia de la lucha alteña y aymara; lo eran Felipe Quispe, El Mallku, y otros líderes, con el discurso de la no venta del gas vía Chile.

De este modo, en 2019 muchos barrios alambraron casi todas sus calles o avenidas para defenderse de los posibles agentes inescrupulosos y gentes “no amigas”. En octubre de 2003 solo lo había hecho Satélite. Ahora era literalmente imposible de entrar o movilizarse al viejo sector alteño, por ejemplo, 12 de Octubre o Bolívar A o B y la 16 de Julio, a los nuevos barrios del Kenko, Puente Vela y otros (del sector sur) y a otros lugares como Río Seco o Lagunas (del sector norte). Es un proceso de reconstrucción del tejido social. El territorio es un lugar socialmente construido para que desde él se proyecte y se haga visible todo lo que parezca sospechoso o ajeno. Luego esto se expande hacia lo exterior, que es una manera de reconocer los otros territorios y los otros mensajes o noticias.

Mientras que en 2003 eran la radio y los canales de televisión piratas o clandestinos los que informaban durante la noche, en 2019 el teléfono celular es el instrumento para mostrar todo tipo de mensajes e imágenes. Alrededor de las fogatas casi todos están atentos a los celulares. Es la “televisión en miniatura” que está en miles de manos. Sin duda, circula mucha información falsa: las *fake-news*. Esta tecnología provoca grados de histeria social que no se observaban en octubre de 2003. Esa misma histeria hace que la gente tome muy en serio los hechos; por ello, la vigilancia aumenta en todos los sentidos. Por ejemplo, circula información sobre la masacre de Senkata, sobre los discursos amenazantes del nuevo gobierno y las gasificaciones en la plaza San Francisco. Los teléfonos

celulares se convirtieron en el vehículo más directo de transmisión de las noticias que provocan mayor indignación, pues llevan a que se imagine cosas peores.

Se teme la venganza de los criollos y pititas. Con ello se despierta el espíritu de lucha y se va convenciendo a los indecisos o contrarios. La gente se da cuenta masivamente de la gravedad de los hechos. Además, nuevamente los muertos son “los nuestros, de los míos, de mi gente”, se sostiene. Las vigiliass se mantienen noches enteras; también las rondas vecinales. En otras palabras, es el revolvimiento del espacio-tiempo. Es la manera de ser y estar en este nuevo momento trágico de la historia boliviana. Se controlan, se expanden y se construyen territorios como espacio físico y territorios sociales construidos y vividos.

Es un lugar de reconfiguración de lo social que se mueve en la subjetividad instalada y, a la vez, se pone en práctica de manera cuasi militarizada. En algunas zonas se observa que la gente se organizó en grupos de autodefensa, ya sea contra los golpistas, los masistas o posibles delincuentes. En efecto, hay gente “armada” con lo que puede. Se gestó (nuevamente) el control del territorio y de los cuerpos, para de este modo instalar un gobierno del barrio. La legitimidad del gobierno blanco (otra vez) estaba en entredicho. Se parece mucho a la forma de lucha de 2003. En aquel año la gente se había movilizado con todo lo que tenía a su disposición: piedras o las diversas formas de vigilancia interna y externa al barrio. Fue más radical en las jornadas de 2005, cuando Carlos Mesa renuncia a la presidencia, porque entonces la gente estaba más preparada con explosivos y bombas molotov a partir de la experiencia de 2003.

Todo esto se dio a pesar de que en este 2019 la gente no estaba unida, como ya se mencionó, ya sea porque el Gobierno Municipal de El Alto estaba vinculado con las pititas o porque el gobierno del MAS dividió a las organizaciones sociales. Este no es un detalle menor: no había una dirección clara de lo que se debía hacer. Las multitudinarias asambleas, como las ocurridas en las puertas de la UPEA en noviembre, fueron infructuosas. Los Yungas no estaba a favor de Evo ni de El Alto. Achakachi dudaba. Los cooperativistas mineros, que habían sido duramente reprimidos por el gobierno de Morales, no participaron y no están a favor del MAS. En El Alto la gente afirmaba: “Si estuviéramos unidos, ni un día nos aguanta la Áñez”. Por eso, muchas veces surgió el grito “¡No estamos unidos, carajo!”. Era un factor negativo en esta nueva era. Pero, finalmente, fue más fuerte el sentido de la autopertenencia a una cultura y a un destino social al que llamamos Nosotros.

De modo que el 17 de octubre de 2003 se vislumbró la posibilidad de un nuevo gobierno de los sectores populares y aymaraquechuas y en noviembre de 2019 se catapultó al gobierno derrocado. En esto último hay algo de ironía, pero es una realidad evidente.

10.2. Gobiernos barriales de 2003 y 2019

El Alto y sus barrios entre dos momentos. Esta ciudad es la segunda más poblada de Bolivia, con aproximadamente 1 millón 200 mil habitantes, mayoritariamente aymaras, pero también de otras regiones del país y del mundo. Los primeros viven una intensa relación entre la ciudad y el campo y una fluida actividad socioeconómica dentro de la ciudad y también en y con la ciudad de La Paz. Los segundos también, y aunque se diferencian en otro tipo de aspectos, son parte de la joven ciudad. Ambos segmentos poblacionales se basan en interrelaciones, multilocalidades (doble o triple residencia) y multiactividades, que desarrollan de acuerdo a su forma de organización territorial, a sus sistemas de paisanaje y a sus redes familiares. Esto se hace visible durante las luchas sociopolíticas, como las de octubre de 2003 y de noviembre de 2019.

Hagamos una comparación detallada de lo que pasa con los barrios en ambos momentos. En octubre de 2003, según nuestra hipótesis, se hizo visible la constitución de los microgobiernos barriales; en noviembre de 2019 nuevamente (re)aparecen los mismos, con algunas diferencias y con similitudes respecto a 2003. Aunque en 2019 hay otras peculiaridades, se mantiene su sustrato básico, que es el autogobierno territorial propio. Este es nuevamente el referente de la lucha social o política del país; es un sistema organizativo territorial urbano básico para El Alto, fundamentalmente en tiempos de lucha social, pero también como un elemento para pensar la ciudad en perspectiva.

La pregunta es: ¿qué diferencias y qué similitudes existen entre 2003 y 2019? En octubre de 2003 se produjo el levantamiento de esta ciudad y de las provincias de La Paz y de otros departamentos de la región de los Andes en contra del proyecto de exportar el gas por Chile a Estados Unidos. Este proyecto fue propiciado por el gobierno del MNR, como se explicó en la primera parte del libro. Se constata que en ese momento se yergue una poderosa forma de organización barrial que hemos denominado microgobiernos barriales, dada su extensión territorial en pequeñas formas de poder social y en su definición en lo

político y en lo cuasimilitar. Estas formas se extendieron por casi toda la ciudad para enfrentar el accionar violento del Estado mediante la masacre (entre el 10 y el 13 de octubre de 2003) y el autoritarismo del régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (bajo el sistema neocolonial y racista del Estado boliviano).

En noviembre de 2019, después de que algunos comités cívicos departamentales, especialmente el de Santa Cruz, y la clase media-alta lideraron la intensa lucha en varias ciudades eje de Bolivia, se produjo un nuevo momento de este autogobierno territorial. La élite cruceña y los viejos grupos de poder acomodados se movilizaron para denunciar el supuesto fraude del MAS en las elecciones del 20 de octubre, lo que terminó con la inesperada renuncia de Evo Morales y de Álvaro García el 10N. Luego del motín policial y de la “sugerencia” de las FF.AA. para que Evo renuncie, Morales y García Linera abandonaron el país el 12 de noviembre para exiliarse en México, cobijados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Nuevamente Bolivia vive una profunda crisis política y social. Es en ese escenario que los microgobiernos barriales reaparecen para hacer frente a la nueva violencia estatal, además de las dramáticas condiciones de vida y la muerte de sus habitantes. Este es un primer hecho visible desde una perspectiva comparada.

Comparación de microgobiernos barriales de 2003 y 2019

2003	2019
Con características más hacia afuera o en ofensiva (levantamiento social)	Con características más hacia adentro o defensiva (resistencia social)
Para los gobiernos del barrio, el Estado desaparece	El Estado está presente, pero igualmente desaparece
Territorios de barrio extendidos	Territorios de barrio extendidos, pero comparativamente más reducidos
Se identifica como agresor central al Estado y a sus grupos de poder criollo	Se identifica como agresor central al Estado y a los delincuentes
Los vecinos se han preparado con todo	Los vecinos se han preparado con todo
Nace un sentimiento de ser alteño y aymara	Nace un sentimiento de ser alteño y aymara, además de un sentido de nueva nación
Atisbo de un nuevo sentido de Estado	Se amplía el sentido de ese nuevo Estado
17 de octubre definitorio	14 de agosto definitorio de 2020
Unidad construida	Unidad reconstruida

Fuente: elaboración propia.

Tal vez la primera característica es que en 2003 esta forma de organización tenía características más de ofensiva (o de ataque) al gobierno de Sánchez de Lozada, aunque también estaba presente la idea de la autodefensa frente a las posibles arremetidas de los militares, como las que efectivamente ocurrieron al norte y al sur de El Alto. Es importante resaltar esta característica porque toda la acción colectiva-individual estuvo organizada por turnos –*muyu*, en lengua aymara– para controlar el territorio con el fin de anular al Estado y así ejercer un control sobre los precios y la venta de alimentos para que nadie especulara ni ocultara. En ese sentido, cuando había marcha hacia La Paz, la mitad de los habitantes de los barrios bajaba y la otra mitad se quedaba en la zona para vigilar y hacer de retaguardia.

En 2003 todas las acciones estaban orientadas a controlar el movimiento del Estado en el territorio propio y a asumir todas las funciones estatales para que exista seguridad y para controlar a posible gente extraña en las zonas (de hecho, habían detenido a algunos policías en el sector de Villa Adela). Se organizan turnos por edad y por cuadras (con sus jefes de cuadra), se cavan zanjas en cada una de las calles y avenidas y se analiza cada situación en asambleas o pequeñas reuniones. Fue todo un conjunto de acciones colectivas-individuales con sentido definido: i) no se “debe vender gas por Chile porque Chile nos ha quitado el mar”; ii) se exige la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (por la masacre, con 67 muertos y más 400 heridos); iii) Asamblea Constituyente y iv) la nacionalización del petróleo, entre otros pedidos. Es la llamada Agenda de Octubre, aunque carezca de un documento específico. El plan de ataque no solo consiste en ir a marchar alrededor de las zonas o a la Ceja, sino en bajar a la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del gobierno del MNR. En esa relación se observó cómo una multitud de hombres y mujeres descendía serpenteante hacia la hoyada, específicamente en dirección al Palacio de Gobierno.

El 21 de noviembre de 2019 se produce un hecho similar cuando se lleva los ataúdes de los fallecidos en la masacre de Senkata a la plaza de San Francisco. Allí fueron duramente gasificados por policías y militares; en las fotos adjuntas se observa tanquetas de guerra militar y otros pertrechos de guerra. En 2003, junto a ellos se movilizaron campesinos aymaras de las provincias de La Paz y mineros cooperativistas llegados de Oruro. En ambos casos, hay un rugir de las multitudes; es la voz expuesta públicamente ante la muerte y la posibilidad de una nueva dictadura.

La segunda característica compartida en ambos momentos es que, bajo estas condiciones, el Estado desaparece y, como señalamos en este

trabajo, surge otro, en una dramática disputa del poder. Por un lado, el ejercicio de la violencia estatal, por el otro, la resistencia social. En ambos se deslegitima al poder estatal desde el gobierno del barrio. En otras palabras, desde los barrios se cataloga al Estado como extranjero, e incluso como invasor. Es decir que es un Estado *q'ara* que no representa a la gente o al mundo aymara. Ese dato habla de momentos de alta politización, de manifiesta diferenciación con los grupos dominantes, específicamente los del Palacio Quemado, los habitantes de la zona sur de la ciudad de La Paz o las elites cruceñas. Algo similar se vive en 2019. El Estado, en tanto agente que monopoliza la fuerza física, no tiene sentido real en los microgobiernos barriales. Quien ahora ejerce el control mediante acciones cohesivas es la propia gente. Por esta razón, las juntas vecinales y los dirigentes connotan otras características, aparecen y desaparecen. Táctica y estratégicamente, se cambia de dirigentes cada 24 horas para que la Policía o el Ejército no los identifique. Es todo un juego de aparecer y desaparecer. Se construye un conjunto de códigos políticos y “militares”, que se definen al milímetro. Entre 2003 y 2019 las formas son similares, pero difieren en lo estratégico. El primero es un levantamiento social y el segundo es una resistencia social al nuevo gobierno.

Una tercera característica es el control del territorio barrial en un espacio reducido –aunque depende de la extensión de cada zona– para que no circule gente desconocida o policías infiltrados. Se producen actos de unificación entre todas las zonas y barrios; para ello es fundamental el control territorial. Por eso decimos que entre 2003 y 2019 se tejen articulaciones horizontales entre distintos barrios y distritos y, a la vez, entre sus dirigentes. Tal vez podemos afirmar que es una especie de confederación de barrios territorialmente interconectados, pero que, al mismo tiempo, son un solo cuerpo en movimiento.

Es la materialidad del control del poder, que hemos llamado “el otro poder”, que se define no solo en sentido horizontal, sino en forma diagonal, que es la perfecta combinación entre lo social y lo político (Mamani Ramírez, 2013). Lo diagonal es algo zigzagueante entre la autoridad real del poder y la participación colectiva de la gente en y dentro de ese poder. Por momentos, este aparece como horizontalidad y en otros, como verticalidad. Funciona en la lógica aymara del *ayra* (haciendo dos cosas a la vez). Ante esto el poder duro del Estado (el Ejército y la Policía) se desubica y no tiene capacidad de lectura de una racionalidad del poder que aquí se produce de modo antiestatal, aunque sea la referencia de otro Estado en ciernes. Este poder es rotativo y colectivo, pero también individual. Cada una de las mujeres y hombres

muestra individualmente sus potencialidades de análisis, estrategia y visión, que confluyen en un estado de solidez organizativa y de acción colectiva. A esto es a lo que llamamos el otro poder. Su existencia es hacer frente al poder gubernamental-estatal instituido como hecho colonial; está definido bajo sus propios principios, que vienen del mundo cultural aymaraquechua. Aquí lo cultural es la forma de significación de los hechos y lenguajes, en tanto marco de referencia de las acciones colectivas como individuales.

En noviembre de 2019 se mantienen esas condiciones, pero la novedad es una acción colectiva-individual hacia adentro de cada zona o barrio. En principio se orienta fundamentalmente a la vigilancia interna y a la seguridad de la zona, ante el rumor o la realidad del saqueo de tiendas, casas, quema de viviendas particulares (especialmente de políticos). Ante esta situación, los microgobiernos barriales se encargan de controlar lo ajeno y de dar sentido a lo propio. Esto no significa que no estaban preparados para el ataque en caso de que el gobierno, con los policías y militares, lo haga o amenace con hacerlo. Hubo acciones de rechazo sistemáticas. Y lo de adentro, en relación con lo de afuera, es a la vez estratégico y táctico. Es un lugar desde donde es posible observar y moverse sigilosamente mientras se es invisible. La invisibilidad, en principio, es ante sí mismo y ante el Estado y sus actores. Pero, a la vez, esa invisibilidad es visibilidad hacia adentro porque la gente debe saber quiénes y cómo mueven ciertos detalles de organización y de la acción de contrainteligencia.

Al principio hubo tanquetas de guerra patrullando algunas avenidas; la gente las miraba expectante a lo que pudieran hacer, aunque otros veían esa presencia con cierto alivio ante posibles saqueos. Al final la presencia militar y policial se convirtió dramáticamente en sinónimo de muerte, especialmente después de la masacre de Senkata el 19 de noviembre. Es un detalle más político que en 2003 porque la gente sabe lo que significa realmente la lucha por el poder. La lógica es, más o menos, “los blancos de la derecha ya no nos van a poder gobernar”. Y la junta de vecinos es la referencia directa de este rechazo.

Esta visión defensiva e interna es un hecho nuevo porque es otra manera de radicalizarse frente a cualquier otra eventualidad militar-policial o simplemente delincencial. La gente se reconoce en sus relaciones y en sus sentidos: en qué cuadra vive, de quién es hijo, es inquilino o no, etcétera. Es un conjunto de sentidos de pertenencia de un Nosotros frente al Otro que puede ser el Estado, el gobierno, los militares o los mismos delincuentes. Ello hace que la gente se mueva en un sentido de

profunda emotividad colectiva de unificación, de reagrupación, de socialización politizada y cuasi-militar, al mismo tiempo. Incluso en ciertos lugares hay santo y seña para moverse dentro del barrio y también para moverse entre zonas.

La cuarta nueva característica de 2019 es una articulación real de diferentes juntas vecinales, bajo la percepción de que el agresor es delincuente (delincuente normal y delincuente político), para definir el sentido de repudio a la quema de la *wiphala* y, a la vez, el control mutuo social y cuasi-militar entre barrios. Todos hicieron un llamado a la solidaridad barrial para su autodefensa y su autoorganización. En el sector sur de El Alto había gente que recorría zona por zona para pedir que se apoyen mutuamente entre todos. En esa relación, a cada grupo o zona se le pasaba números telefónicos y otro tipo de códigos de comunicación, a diferencia de octubre de 2003. En el sector norte, la gente estaba efectivamente dispuesta a morir por Evo y por la *wiphala*, como se nos informó después.

En ese sentido, sostenemos que se produce una profunda politización de la ciudad. Dice Apaza (2020): “La ofensa estaba hecha. Cada quien, con la quema (de la *wiphala*) se sentía que estaba siendo quemado”.

Desde esta nueva condición, y como quinta característica, la gente se preparó con todo. Noches enteras se dialogaba al calor de las fogatas. Al principio la gente tenía diferentes opiniones sobre las razones para estar en las calles. Algunos decían estar ahí en favor del MAS, otros, por la quema de la *wiphala* (independientemente del MAS) y otros para defenderse de los delincuentes. Luego se confluye en el argumento de que: “El Alto es El Alto”. “Que nadie se meta con nosotros porque si queremos tumbar gobiernos, lo hacemos”. En ese relato hay que hacer notar nuevamente que se lamentó “que la ciudad esta vez no estuviera unida” como en octubre de 2003. No había una agenda nacional, como la defensa de los recursos naturales; los temas eran la defensa de la *wiphala*, la dignidad alteña y aymara y el rechazo al nuevo gobierno por el dolor de saber y haber visto morir a hijos o a madres.

Pensamos que de este hecho nació, como sexta característica, un nuevo espíritu de la nación; efectivamente, se produjo un profundo sentimiento de ser parte de este pueblo. Por ello se afirmó que se ha “parado el coche a la choca” (en referencia a la presidenta). Ese espíritu de la nueva nación son nuevas energías telúricas, nueva forma de ser nacional, nuevas fuerzas de voluntad, nuevo sentido de la nación (Mamani Ramírez, 2020b). Estas confluyen finalmente en una comunidad moral en sentido de una voluntad ganada entre todos o todas. A esto

se lo puede llamar el universal concreto (Wallerstein, 2006) frente a un universal abstracto que está ya instalado en la subjetividad colectiva. Es la experiencia de la vida y de la lucha como algo concreto, y no un mero discurso de alguien que se asume intelectual o líder. Lo afirmado es un dato importante.

En este sentido, se produce un profundo sentimiento de pertenencia al pueblo que ahora se expresa como una nueva nación; estéticamente, es la nación plural de los diversos mundos sociales. Se siente el derecho a ser poder y gobierno del Estado y del país. De hecho, ante la amenazadora forma de hablar de los miembros del nuevo gobierno –ya sea en sus declaraciones, que criminalizan a los alteños como “vándalos”, “terroristas” o “violentos”, o en acciones como la masacre–, la gente asumía tales adjetivaciones con enojo, pero a la vez con un sentido de profunda autoafirmación: “no todos somos delincuentes ni terroristas, sino gente de bien y de la nación boliviana”. Se afirmó también que “somos bolivianos, igual que todos y también los caballeros de corbata”. Las acusaciones genéricas y sistemáticas del gobierno y de los medios de comunicación durante esos días les estaban quintando su condición humana y de ciudadanía real y plena. En este punto adquirió más sentido la idea de que el nuevo gobierno era una dictadura real. Algunos sostienen que Áñez es la primera mujer dictadora en la historia del país y de América Latina (Bolpress, 17/11/2019).

En ese contexto, otra característica, la séptima, es que la política ahora es social (aunque siempre lo es). Y ante esa realidad, el nuevo gobierno quiso destruir esa parte social de lo política porque criminalizó a la gente, especialmente a los alteños. Aquí hay una especie de la enajenación de la política por los políticos (los que viven de la política), y entonces aparece la recuperación de la política para la gente. Aunque luego eso tiene sus propias contradicciones.

En los hechos, al parecer los nuevos gobernantes no entendieron en absoluto lo que había ocurrido hace 16 años, cuando en esta ciudad y en las provincias se produjo un gran levantamiento para derrocar al gobierno de Sánchez de Lozada. Recién al ver la reacción de la ciudad de El Alto, el gobierno de Áñez nombra a alteños como ministros o ministras, aunque son evangélicos. Esto corrobora lo expresado anteriormente. Ante esta realidad, Áñez quiere vestirse de aymara. En efecto, el 26 de noviembre la expresidenta se viste de poncho rojo junto a Rafal Quispe (ex dirigente de uno de los dos CONAMAQ existentes en ese momento), cuando este es nombrado nuevo director del Fondo Indígena. Pero las

mujeres no usan poncho, usan manta. Se dijo que, en los hechos, El Alto “le paró el coche” al nuevo gobierno, que vino para arremeter con todo, posiblemente pensando que todos los alteños son masistas y que aquí hay terroristas. Algo sin sentido (o sin sentido de realidad). Por eso la gente dijo “no se metan con El Alto y con los aymaras porque les puede ir mal en su vida política”; “no somos terroristas ni salvajes”. Es importante que la gente primero se arma con argumentos morales para luego enfrentar al enemigo. Es así como se han reconstituido los microgobiernos barriales.

Ahora bien, según nuestro punto de vista, estos microgobiernos son un concepto y una categoría de análisis sociopolítica que muestra la dinámica de la sociedad en lucha y la política de los barrios. Esto es parte de un dato analítico o de lectura posible frente a la pretensión no política de lo social. No en todo espacio-tiempo o en todos los años se produce este tipo de acciones colectivas multitudinarias en las subjetividades sociales, marcadas en la materialidad de los hechos prácticos de saber hacer, de sentir colectivamente y de pensar la política en el sentido propio.

10.3. La política y el “Estado”

En la densa constitución de gobiernos barriales también se puede sospechar el nacimiento de otro Estado, con sus propias dimensiones prácticas, racionalidades y formas de pensar, y con lo social, basado todo ello justamente en dichas juntas vecinales. O, si se quiere, la posibilidad de un nuevo tipo de Estado.

¿Qué características tiene esta posibilidad en tanto nuevo sistema político y de poder? ¿Hay algunas diferencias o similitudes entre 2003 y 2019? Veamos.

En octubre de 2003 se hizo visible un sistema de poder territorializado, basado en la rotación de responsabilidades. Un hecho antitético a la racionalidad liberal y socialista del poder que muchas veces es lineal, caudillista y violenta. En noviembre de 2019 reapareció este mismo hecho, pero con dimensiones diferentes. Son dos momentos históricos sustanciales. En el primer caso, una unidad de la ciudad y, en el segundo, con archipiélagos internos contradictorios. Ahí se puede observar que, pese a esas dos condicionantes, la lógica ha sido la misma: un poder alternativo frente a la formalidad y legitimidad del viejo Estado. Ese no es un detalle menor.

En 2003, durante los diez días que duró el levantamiento de esta ciudad, el Estado boliviano había muerto: su sistema de poder elitista había sido derrotado y su ejército era calificado como invasor chileno. Se erigió el sistema de turnos que consiste en turnarse las responsabilidades entre los miembros de una comunidad barrial para que todos asuman la responsabilidad del gobierno y del poder (*muuyu*). Es el sustrato del poder del barrio que proviene de los ayllus andinos, ahora reinventados en la ciudad de modo multitudinario y territorial.

¿Cómo se produjo este hecho? ¿Cuáles son las condiciones de realidad de la posibilidad de nuevo Estado en sentido del barrio aymara de El Alto?

Al tercer día del paro indefinido de la ciudad de El Alto (11 de octubre de 2003) empezamos a escribir la tesis de los microgobiernos barriales. Los periódicos narraban lo sucedido, pero ni estos ni los intelectuales (que también fueron derrotados) sabían cómo explicar y descifrar lo que estaba ocurriendo detrás del multitudinario levantamiento aymara o alteño. Para la sociología, metodológicamente, la sola descripción no era suficiente. Además de describirla, habría que explicarla.

¿De dónde venía esa fuerza? ¿Cuál es el sustrato de esta acción colectiva-individual radical que tuvo la inmensa capacidad de producir y hacer visible otro sistema de poder?

En 2003 la ciudad de El Alto se había levantado ante la criminalización de la lucha social y para rechazar el colonialismo petrolero y estatal que hacía negocios a espaldas de los ciudadanos de Bolivia. También en contra del racismo imperante en los grupos del poder criollo y del Estado neocolonial (Mamani Ramírez, 2017). El levantamiento de El Alto está en el contexto del gran levantamiento aymara de la región andina y lacustre del departamento de La Paz (Mamani Ramírez, 2004; 2012) y de los ayllus del sur de Bolivia, frente a un régimen cada vez más autoritario y violento. Se hace visible el sistema de la rotación o los turnos (ampliamente descrito en la primera parte del libro) que vienen del pensamiento y práctica del ayllu andino, que se ha diseminado en el plexo de la sociedad urbana y rural. El ayllu (ese conjunto de territorios y cosmovisiones de *aran* y *urin*=arriba y abajo), además de ser referencia geográfica-territorial, es también un tipo de pensamiento social, tal como el tejido de un poncho o un *awayu*; de ahí deriva la forma y el sentido de la *wiphala*. Tiene sus sustentos en hilos que conducen a la práctica y a un tipo de pensamiento social que, según nosotros, se dan en términos políticos del poder otro o poder diagonal.

El pensamiento político del ayllu ahora se presenta de modo diverso y puesto en práctica por los aymaras y alteños junto a otros pueblos del mundo andino. Ese pensamiento político, además de la rotación y del control del territorio, es una cosmovisión política, dada en un horizonte de autogobierno real y social. Aparece el principio de la “guerra de equilibrio” y de la “guerra de aplastamiento”, a que hace referencia Tristán Platt (1989) cuando habla del pensamiento político aymara del Norte de Potosí. Aunque Platt se refiere a la historia de un pensamiento político lejano a la ciudad de El Alto, se lo pudo observar aquí y ahora. O, mejor dicho, presente aquí como un hecho político de multitudes. Por ello afirmamos que se “realiza una gran cantidad de reuniones barriales en distintas partes de la ciudad, que al final se convertirán en espacios de las multitudinarias decisiones colectivas”. Esas decisiones multitudinarias se habían convertido ahora en “guerra urbana”, en el sentido de que se militarizan las relaciones sociales. Todas y todos (incluidos los animales, como señalan los vecinos) declaran la guerra al Estado criollo-mestizo y a su sistema de autoridad vertical e incluso totalitaria. Entre los días 11, 12 y 13 de octubre de 2003, este sentir se expande hacia adentro de los barrios y hacia otros territorios, como Oruro, Potosí, Cochabamba y, por su puesto, a los ayllus y *markas* andinos del sur y centro de Bolivia. Asistimos, por tanto, al nacimiento de este otro sistema de poder que da sustento al levantamiento y a la guerra de los ayllus urbanos mencionados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nace y muere un Estado? Resulta imposible responder aquí a esta pregunta, aunque más arriba hacemos una breve referencia a ella. Aquí describiremos sus formas y sentidos.

El nacimiento del poder de los ayllus urbanos se da en el contexto de la masacre que cometió Sánchez de Lozada. Como se dijo en otros capítulos, se derramó sangre aymara y de los relocalizados mineros. En los barrios de Santiago II, Villa Ingenio, Río Seco, Ballivián y alrededores de la planta de gas de Senkata, las balas del ejército asesinaron a decenas de habitantes. La gente respondió ocupando el espacio físico urbano. Cavó zanjas en calles y avenidas, levantó barricadas y ocupó plazas, para así quitarle todo espacio y movimiento al Estado o al gobierno. La idea era no permitir el ingreso de tanques de guerra y de los soldados que habían osado disparar. Las calles polvorientas y las avenidas sin asfaltar de varios lugares de la ciudad se habían llenado de charcos con la sangre de gente joven –que fueron la mayoría de las víctimas–, pero también de niñas y niños. Igual que en 2019. Aquí el Estado boliviano nuevamente se había bañado de sangre aymara, como lo ha hecho tantas otras veces durante su historia colonial y republicana. En 2003 muchos jóvenes

pelearon con piedras y palos en Río Seco, muy cerca de la UPEA, intentando contener la invasión de este ejército al territorio de los barrios. Similar matanza se vive en Senkata el día 12 de octubre.

En 2019, 16 años después, ocurren las muertes en el mismo lugar. En 2003, una caravana militar tiene la orden de transportar gas domiciliario a la ciudad de La Paz, y deja un reguero de cuerpos tirados en la avenida 6 de Marzo y al norte del sector Ballivián. En la parte sur de El Alto, en la avenida Estructurante, pudimos observar, por ejemplo, cómo un alteño caía herido delante de nosotros. El ejército disparaba ráfagas de ametralladora en cualquier dirección. También lo hacían desde los helicópteros. Y en 2019 también se observa los mismos escenarios. Como dato, en estos lugares es posible encontrar todavía, 16 años después, postes de luz con impactos de bala. Esos impactos de bala no se han borrado; tampoco la memoria de esa masacre. Y la muerte producida ayer u hoy tampoco se ha olvidado.

Ante esta realidad política y militar, las juntas vecinales se convierten en los nuevos gobiernos territoriales con el fin de cuidar la vida de los vecinos o vecinas y no permitir la salida del gas. Más de 400 juntas vecinales en ese entonces (1.200 actualmente) se habían convertido en gobiernos barriales para autogobernarse a través de interrelaciones territoriales de la ciudad insurrecta. En este contexto, la FEJUVE ya no tenía poder de mando sobre los barrios y sus juntas vecinales. En 2003 las juntas vecinales desautorizan a la FEJUVE a hablar en nombre de la ciudad de El Alto. Los poderes barriales se territorializan y se yerguen como otro Estado. Un nuevo Estado que se rige por sus propias normatividades internas y externas. La vida social se gobierna desde sí misma. Todos participan en controlar la seguridad. Funciona una especie de servicio de inteligencia que acopia información de todo lado para luego evaluarla. Cientos y miles de aymaras y mineros se organizan en diferentes niveles dentro de estos territorios para protegerse de las balas del ejército y, finalmente, para derrotar a la dictadura neoliberal. Podían haberse enfrentado a cualquier dictadura. Hoy los autores materiales e intelectuales de aquel hecho no tienen sentencia ni están encarcelados. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín todavía están refugiados en Estados Unidos.

Así, este nuevo sistema de gobiernos urbanos barriales tiene el poder real para erigirse en este otro sistema político. Los turnos, rotaciones, asambleas, la creación de servicios de contrainteligencia y el grito de la multitud (ahora convertida en otro Estado) es la demostración más clara de esta nueva realidad. Esto reafirma la sentencia que señala que en 2003

el Estado boliviano ha muerto. Su legitimidad no existe. Sus autoridades son tildadas de “chilenas”. Se produce el autorreconocimiento de un devenir común propio porque el otro Estado ha sido derrotado política y militarmente. Toda referencia al Estado criollo boliviano había muerto. Las calles abiertas en zanjas en toda la ciudad era otra demostración del nacimiento de ese Estado. Nace otro territorio estatal en base a las juntas vecinales. En definitiva, el Estado –que no contiene a la ciudadanía real, sino a los neocolonizadores– no tenía sentido en esta ciudad.

Después del 12 y 13 de octubre no hay presencia militar ni policial. Entonces se ejerce un autocontrol extendido horizontalmente hacia otros barrios. El sentido de la política ha cambiado, y también el sentido del poder. De lo vertical se pasa a lo horizontal y diagonal. La rotación *muyu* se convierte en el soporte de este poder y evita que la gente se canse o haga grandes esfuerzos individuales o colectivos. La rotación es un hecho práctico porque se convierte en el poder real y fáctico que, en términos más simples, es compartir el poder, dado que todas y todos actúan y se turnan en distintas actividades. Los sistemas de salud ya no funcionan, no existe el registro de nacimientos, la venta de alimentos la organizan los propios barrios, como en Santiago II. Es un poder social de Nosotros, distinto al poder de Ellos. El poder de Nosotros es rotativo y el poder de Ellos es elitista y caudillista. Ahí está el quiebre filosófico e histórico de la lógica liberal y socialista del poder, que se funda en el culto a una persona líder, o de una dictadura que se pretende democrática.

Aquí casi todos son líderes y todos son presidentes. Los presidentes de las juntas vecinales de pronto se difuminan en otros presidentes. Ninguno de estos dos sistemas (liberal y socialista) tiene el sentido de compartir el poder, sino de concentrarlo en un grupo privado y particular (por ende, con intereses privados y particulares). Esta práctica y visión ha sido derrotada. Aunque la misma ha regresado de modo real con un discurso de izquierda y revolución y, en 2019, con la biblia bajo el brazo al viejo Palacio Quemado de La Paz. Es algo patético: la biblia, los rezos, los curas, ideólogos del Estado neocolonial, todos hacen fila para afirmar a grandes voces que se ha “recuperado la democracia” y por ende la “libertad”. Y sin embargo las calles de El Alto, de Senkata específicamente, estaban siendo regadas de sangre humana y de muertos. Al parecer, esto se consideró como la muerte de los no humanos; a lo sumo, de indios “violentos” y “salvajes”.

En este sentido es importante detallar que la forma eurocéntrica moderna liberal y socialista del poder tiene dos grandes matices: la

forma autoritaria, que puede ejercerse desde una dictadura del color que fuere, y la forma democrática ejercida por la vía electoral. Por este motivo los indianistas, e incluso los kataristas (dos grandes corrientes de pensamiento político aymara en Bolivia), sostienen: “para nosotros, la izquierda sigue siendo la misma cosa que la derecha, porque tiene la misma concepción de lo político”. En 2019 esto quedó nuevamente confirmado. La izquierda también hace lo que critica. Incluso sus grupos radicales, por ejemplos, ciertos grupos trotskistas, se alían con los que cometieron la masacre, la tortura y las violaciones de derechos humanos en Senkata. Se alían no en el sentido de ser gobierno, sino de estar en contra de los aymaraquechuas, a quienes consideran procapitalistas o burgueses. Lo hacen a nombre de las ciencias sociales para no ser menos.

A estas alturas se puede sostener que lo que ha pasado en Bolivia es que simplemente se ha tomado el poder de Ellos. Esto se pudo constatar en 2019 y 2003.

Por eso algunos alteños dicen que el siguiente paso “será la toma del poder de Nosotros”. Aunque ese otro lugar no siempre será inmaculado; se trata de relaciones de poder y de disputas históricas. El tema es cómo pensar ese poder. La gente dijo entonces que el poder “viene de las organizaciones de la sociedad civil, desde los pueblos indígenas originarios y desde los pueblos mestizos y negros”. Sin duda que ahí radica el fundamento del otro poder (o de la otra política o concepción del poder). El poder del barrio es la génesis de otro estado de la política, que se puede resumir como diluido y estructurado, fluctuante y real, elástico y a la vez duro, compartido y de uno, rotatorio y disperso. Dado y dándose en la forma diagonal del poder. En otros términos, como la síntesis de lo vertical y horizontal a la vez. Se trata de un tipo de pensamiento social elástico y, a la vez, duro. Parece que no está, pero está. Y al revés: está y, al parecer, luego no está. Por eso los *jilaqatas* (autoridades de los ayllus) dicen: “hay que saber manejar a la gente. No es así nomás”. Hay que ser duro y a la vez ser blando. Ser autoridad y a la vez, comunario.

Pero eso no tiene que ver con el tipo de golpe de Estado blando-duro. Tiene otro sentido porque es ser gente o *jaqi* pero, a la vez, ser el espíritu de la memoria social. En ese sentido, la palabra ‘poder’ tiene un sentido transversal y organizativo de la vida social y económica. Cuando hablamos del otro poder pensamos en otro tipo de orden, que sea justo y del cual todos puedan ser parte productora y crítica, algo totalmente diferente de la concepción eurocéntrica del poder. En los ayllus se lo cumple al pie de la letra. En las circunstancias extraordinarias a que aquí nos referimos, también se lo cumple en los barrios.

Esa relación con las izquierdas antes de que Evo Morales asumiera la presidencia en 2006 era interesante. Era motivo de diálogo y de debate. Pero a partir de las gestiones de Evo-Linera, de Rafael Correa en Ecuador, del ya fallecido Hugo Chávez en Venezuela, de Michelle Bachelet en Chile, de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y de Ortega de Nicaragua, queda claro que la posibilidad de un otro poder se ha convertido en un poder de estos mismos. Obviamente, con sus diferencias con las formas y sentidos de los grupos de las llamadas derechas o las oligarquías criollas.

Posiblemente esta sea la gran derrota del levantamiento aymara o indígena en Bolivia y de otros pueblos en Sudamérica y Centroamérica entre 2006 y 2021. Aunque, por su dimensión cultural, no es un hecho totalmente consumado: sigue vivo.

De modo que la racionalidad de un nuevo tipo de Estado es un hecho que tiene sus propias dimensiones. Tal vez lo más importante fue que aquí nació de otra manera el espíritu de la nación. Esto se observa con mucha más radicalidad en 2019 porque, como se adelantó arriba, se vivió un hondo sentimiento de ser parte de esa nueva nación, especialmente en el mundo aymaraquechua y en otros pueblos y sectores sociales. Aunque esto puede darse en un sentido formal en lo plurinacional; es interesante, a la vez que contradictorio. Porque lo plurinacional fue admitido por la gente como algo propio. Aunque también es posible que en esto exista un ejercicio cultural de lo político como un giro del sentido del Estado, que es la manera de apropiarse y de ser el referente histórico y real desde ese nuevo hecho.

El hecho de ser un nuevo país es posible porque se vivió la amenaza, desde los grupos de poder, de volver al viejo significado del Estado y de la nación de la República boliviana. El gobierno de Añez y los discursos de los políticos perteneciente a estos marcos de referencia histórica reiteran una y otra vez el regreso a la República, como si se tratara de un nuevo logro histórico. Además, este fue otro factor para la lucha social: no permitir ese pretendido y deseado regreso. Este es un dato que habría que estudiar o analizar.

Así, en el marco del levantamiento de 2003 y de la resistencia en 2019, se ha producido este sistema del ayllu como poder compartido y rotatorio, y donde lo político es social, como está inscrito entre los territorios del norte y sur de la ciudad. Se volvió a demostrar que el poder disperso, a la vez articulador (y articulado) entre toda la gente, es un hecho real. A partir de ahí cada actor se hace actor y, a la vez, productor del poder de lo social. El poder, en ese sentido, es la raíz de un árbol que no muere, como el ceibo, que crece en las regiones tropicales de

Sudamérica. Este árbol penetra profundamente dentro de la tierra y se irradia desde allí para, en algunos casos, hacerse visible incluso desde otros lugares. Los barrios, su cultura política y su lenguaje son parte de un tronco común; son parte de este conocimiento social.

En ese nuevo contexto, la gente decía: “¿cómo podemos actuar sin el poder?”. Es posible sostener que el Nosotros es el poder de Nosotros, no de Ellos. En el pensamiento político aymara, el poder o la libertad no se negocian ni se ceden ante nadie. Cada uno, individualmente y en comunidad, mantiene este poder como fuente de la libertad; es lo opuesto a lo que señala Thomas Hobbes. Si una parte tiene el poder y la otra no lo tiene, estamos frente a la muerte civil de la política como concepto y como realidad. Si efectivamente sucede esto, estamos ante la puerta de la dictadura cosmológica y política de una de las partes, lo cual hará que se declare la “guerra de equilibrio” y la “guerra de aplastamiento”. Es la única manera de volver al estado del poder compartido y legítimo. Lo otro es la muerte de la política como sentido positivo.

Así, lo político de los barrios entre 2020 y 2021 (y que viene desde 2003) se ha convertido en cierto modo en acto electoral efectivo. Porque lo político es lo social ampliamente actuado por la misma gente. Y en la práctica y coyunturalmente, esto se ha dado en que, contra todo pronóstico, el MAS obtiene una victoria con un 55,11% a nivel nacional (TSE, 2020); cabe recalcar que en la propia ciudad de El Alto, donde fue duramente criticado, el porcentaje fue del 76%. Le sacó una diferencia del 26% a Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, que ocupó el segundo lugar. Esto habla de las dimensiones políticas de la lucha de los barrios y sus nuevas subjetividades sociales de sentido propio de lo político, social o económico de una Bolivia mayoritariamente aymaraquechua pero, además, de otros pueblos. Esta población vive en las grandes ciudades y en las áreas rurales con diferentes grados de interconexión con otros pueblos, como los guaraní, moxeños y mestizos. Es el cuerpo social que ocupa espacios inmensos de la geografía nacional como una nueva realidad sociológica y demográfica que, finalmente, son parte de la estructura de las relaciones sociales y políticas.

Además, desde lo político, la ciudad de El Alto tiene una elite económica, un movimiento intelectual joven desde la UPEA y un liderazgo social de diferentes niveles. Este es un dato a tomar en cuenta para las posibilidades de creación de nuevas condiciones de ser ciudad y de ser ciudadanos, porque aquí la gente sostiene que “no quiere seguir siendo ciudadana de segunda”. He ahí el detalle de cómo se piensa la política desde lo social.

10.4. Similitudes y diferencias en la unidad reconstituida y en el símbolo

Es decir que la política del barrio y de las juntas vecinales es parte de un proceso de diálogo y de lucha política. Este se ha convertido parte del proceso de unificación –y a la vez de la profundización– de las formas políticas de pensar de sus habitantes. En cierto sentido, lo sucedido en 2003 y en 2019 tiene similitudes, pero también diferencias.

Uno de los hechos que unifica ambos momentos es el de las acciones concertadas, como los turnos y las vigiliias territoriales. En 2003, la circunstancia que unificó a los barrios fue la masacre de Villa Ingenio; en 2019, la de Senkata. Es decir, se repiten los turnos y vigiliias ante los muertos, la nueva violencia estatal sufrida y la dignidad ultrajada.

Para 2019, esto significa:

[...] salir por turnos y al llamado de alerta para defender nuestros bienes. Esa es la consigna... Los que estábamos dentro de nuestros hogares no estábamos tranquilos. Observé entre los diferentes vecinos la solidaridad, ya que muchos traían café, coca, cigarro y pan, para pasar la noche. También durante la noche se socializaba diferentes posiciones a favor del gobierno y en contra de los actos que realizó el anterior gobierno. Este fue un momento en que la población dilucidaba diferentes posiciones y puntos de vista sobre la política (testimonio de Segundino Choque en Mamani Ramírez, 2020c).

Entre el café caliente y el *pixchu* de la hoja de coca se expresa la política del barrio, como lo expone el estudiante de El Alto; esto se da en un complejo proceso de disputas y de diálogos. Son los términos de significación del gobierno del barrio y de las juntas vecinales. Implicó un trabajo hormiga: “entre nosotros mismos”. A esto se sumó la violencia estatal sufrida en forma de masacre en Senkata, junto al discurso de tono racista del gobierno de Áñez, el tema de la pandemia, la postura del Gobierno Municipal de El Alto de Soledad Chapetón, nada proclive a las movilizaciones sociales, y la corrupción. En referencia a las muertes, la gente afirma: “han vuelto a matar a los nuestros como si fueran perros”. Y todo ello crea un sentido de pertenencia específica y autoafirmación propia fundado profusamente en un conjunto de relaciones intensas y prolijas, para convertirse en estructura de la sociedad barrial y de la subjetividad individual. Es un proceso en el nivel colectivo, familiar, individual.

Otro de los grandes factores, además de lo anterior, es la indignación ante la quema de la *wiphala* por afines a los comités cívicos, que

habían protagonizado movilizaciones permanentes ligadas a los grupos tradicionales de poder, como se refiere a continuación:

[Se observó lo que vivieron los pueblos] para movilizarse y levantarse mediante la unificación por la lucha por los símbolos como la *wiphala* y por la discriminación a las señoras de pollera.

Pero vi en ellos que nada les daba miedo: “unidos se puede lograr muchas cosas”, dijeron los compañeros. Todos los vecinos molestos y toda esa multitud de personas gritaban: “Guerra civil, Guerra civil”.

Yo estuve en ese cabildo y decían: “compañeros, nosotros somos de la lucha, jamás nos rendiremos porque venceremos a la autoproclamada y a sus dos lambebotas: Camacho y Pumari” (testimonio de Maribel Pacheco en Mamani Ramírez, 2020c).

La *wiphala*, como se observa y se ha dicho aquí, es parte estructurante de las nuevas acciones colectivas y de la construcción de un imaginario propio y alternativo a los sistemas de significación de los grupos de poder. Los símbolos tienen la cualidad de unificar, consensuar y significar los hechos en cualquier sociedad (Durand, 2000; Turner, 1999). Se puede afirmar que la condensación y significación son un proceso denso y complejo, y que mediante esos mecanismos se reconstruye nuevas subjetividades (aunque estas ya habían sido instaladas desde un tiempo atrás). La diferencia es que en 2019 esto se hizo visible, explosivo y político.

Por el sector donde yo vivo la gente se encontraba muy molesta por la quema de la *wiphala* y por el maltrato hacia a las mujeres de pollera y algunos por la renuncia del expresidente Juan Evo Morales Ayma (testimonio inédito de vecino del Distrito 7, Zona 21 de Octubre, 2020).

De lo así apareció un grupo muy enardecido en trote, alzando la *wiphala* muy alto, en una voz diciendo: “guerra civil, guerra civil”, yendo a otro módulo policial de San Roque (testimonio de Maribel Pacheco en Mamani Ramírez, 2020c).

Según los vecinos movilizados en ese momento, Evo, junto con Felipe Quispe, son hombres capaces de enfrentar los mayores peligros. “Son capaces de morir por sus hermanos”. Esta era una imagen opuesta a la de los medios de comunicación y canales de televisión, que los mostraban violentos y como parte del fraude electoral, especialmente a Morales.

A esto se sumó el temor de que regresaran los tiempos oscuros del colonialismo y una mayor violencia estatal, como en el periodo neoliberal

de los años ochenta y noventa del siglo XX o como las vividas en octubre de 2003. En la memoria de la gente aún está presente cómo en 2003 el Estado ingresó a los barrios para provocar violencia, causando muchos muertos y una gran cantidad de heridos por arma de fuego. Son hechos reales que forman parte de la memoria colectiva porque son experiencias vividas; también son parte de la nueva realidad. En las asambleas de barrios se recuerda aquellos hechos como parte de un imaginario negativo y doloroso.

A este hecho se sumó el lenguaje fuertemente cargado de racismo del gobierno de Ñez, al acusar indistintamente a los alteños de ser “terroristas”, “hordas” o “salvajes”. En 2003 se acusa a la ciudad de El Alto de “perjudicar el desarrollo del país por sus posiciones intransigentes”. En 2003 el mayor acto de intransigencia –el que había perjudicado “el mejor desarrollo del país”– habría sido impedir que el gas boliviano sea exportado a los Estados Unidos vía Chile. Esta acusación es nuevamente percibida y rememorada como un insulto a la ciudad.

Así es el lenguaje estatal y su violencia, que no diferencia entre ciudadanos y salvajes u hordas o la rémora del país, en ese proceso de la no significación humana de los alteños. En un primer momento esto no se expresa públicamente; solo se vive en el fuero interno de cada hombre y mujer o solo se lo habla entre conocidos y en familia. En el lenguaje estatal, esto es público y acusatorio, como la afirmación del ministro de Defensa en sentido de que se habrían “disparado entre ellos mismos”, un dato totalmente ajeno a la realidad. Para la gente, esta afirmación es una mentira infundada. Por esto se dijo que “los políticos son descarados”. En ese sentido, el lenguaje público del poder se hace cada vez más intolerable y se asocia con las memorias de violencia estatal del pasado.

La estigmatización de la ciudad de El Alto y del mundo aymaraquechua con la pandemia de Covid-19 fue otro factor de esta unificación. Sobre este último hecho circuló en redes sociales la idea de que gente de otros lugares “venían a infectar a La Paz”. Lo expresó públicamente Fernando López al referirse a posibles infectados de Covid-19 provenientes del Chapare¹⁸. La gente asoció esa afirmación con los alteños. En este

18 La ciudad de El Alto recibió un conjunto de adjetivaciones, aunque el mundo aymara tiene elementos culturales muy activos para manejar tales hechos con ironía. Por eso se dijo, para las elecciones de octubre de 2020: “el voto salvaje, para el salvaje”, según lo expresado por Felipe Quispe, el Mallku. Esto, en el contexto de lo afirmado por el ministro de Defensa, Fernando López, en agosto de 2020, en sentido de que en las movilizaciones en La Paz había gente del Chapare. Dijo: “de pronto aparece la marcha que viene desde el Chapare con personas con Covid-19,

sentido, la estigmatización funciona como un proceso de desacreditación pública de los Otros con el fin de inferiorizarlos o ubicarlos en el lado no humano. Además, quien se refirió a esto fue la propia expresidenta Áñez en su discurso de inauguración del año judicial en Sucre, cuando habló de que “los salvajes nunca más vuelvan al poder” (Cuiza, 2020). Bajo este sistema de lenguaje instaurado, muchos personeros del gobierno han insistido en que los indios o salvajes son violentos o criminales. Incluso varios medios difunden notas periodísticas sin verificar si realmente existen terroristas en Senkata; se siguió insistiendo en ello en plena pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. En 2003 también circulaban ideas parecidas a las de 2019, específicamente en Calacoto, con el discurso de que los “alteños quieren entrar a nuestras zonas a saquear y no se cree que sean pacíficos”. Es decir, entre estos momentos históricos existen coincidencias, pero también algunas diferencias.

En lo que acabamos de mencionar, las coincidencias ocurren a nivel de los barrios, pero también del discurso del poder. Esto no es una novedad; viene de una larga construcción discursiva y mental de las elites paceñas y del Estado boliviano. Sin duda todo ello influyó en la reunificación y el fortalecimiento de la lucha social y la reactualización de la identidad colectiva, tanto en 2003 como en 2019. Estos hechos y este discurso llevaron a que cierta gente que había apoyado al gobierno de Áñez en noviembre de 2019 lo dejara de apoyar, puesto que:

En estos diez meses, la misma gente que apoyó a este gobierno fascista o transitorio cambió su opinión y su forma de pensar por el mal manejo y la forma tan sinvergüenza de robar. Este cambio se debe a una fuerte decepción y descontento, como que aquí se podría aplicar la conocida frase “más vale diablo conocido que nuevo por conocer”. Parece que esta lucha por recuperar una falsa democracia solo duró nueve meses. Porque la gente que entró a ocupar los distintos cargos en el gobierno rompieron a pedazos las expectativas de la derecha, y a toda esa gente que salió a las calles a pedir la renuncia del gobierno de Evo Morales (Modesto Huanto, en Mamani Ramírez, 2020c).

Efectivamente, si hubo cierta gente que apoyó al gobierno de transición en medio de la confusión o la división de la ciudad de El Alto, dejaron de apoyarlo. Es un dato que es importante considerar, junto con

vienen a infectar a personas de El Alto y La Paz” (*Página Siete*, 27 de julio de 2020a). Y en las redes sociales circularon una infinidad de mensajes e imágenes que son parte de ese relato tóxico.

la corrupción, la violencia verbal y la persecución judicial, que terminaron por quebrar a ese gobierno.

En ese marco de diferencias y similitudes, las conexiones entre el campo y las ciudades son otro factor que produce nuevos sentidos de pertenencia. Lo que ocurrió en 2003 también terminó unificando al mundo urbano con el rural¹⁹, como un efectivo proceso denso de “nosotricación” (Lenkendorf, 2005). Esto es ser Nosotros mismos, o la conjugación de distintas individualidades, pero ahora como formas colectivas de un Nosotros. Un Nosotros alteños o aymaras. O un Nosotros “criminalizados como aymaras”. Se produjo un conjunto de sentidos de autoidentificación de ese Nosotros, que posiblemente se haya iniciado el mismo 10N, cuando cae el gobierno de Morales y García.

En resumen, la ciudad de El Alto es la base sustantiva de esta reunificación social a través de las juntas vecinales, aunque luego se muestra con sus propias contradicciones. No todo se mantiene siempre como se lo vive en determinado momento social; las cosas cambian o se mueven. Eso ocurre en todas las sociedades; todo el tiempo hay nuevos movimientos de subjetividades sociales e individuales. Hay un nosotros social extendido como imágenes mentales en todos los lugares, muy parecido a lo que ocurrió en 2003. O, mejor dicho, aparece como una hermandad ampliada. En octubre de 2003 lo llamamos la “hermandad vecinal”, como un solo cuerpo y movimiento.

19 Unos y otros se mueven entre ambos lugares para proveerse de productos alimenticios. Los productos habían subido de precio en diferentes lugares. En algunos casos, solo había lo que la gente almacena en sus casas como un sistema de *pirwas* (almacenes) urbanas. Aunque algunas tiendas de abarrotes todavía proveían de productos porque funcionaban con el principio de que ciertos productos procesados tienen fecha de caducidad y debían venderse. En varios aspectos, no hubo acuerdos previos, como en octubre de 2003 (caso Santiago II). En ese año la gente se organizó a través de los microgobiernos barriales para la venta y el cuidado de los productos alimenticios, como se describe en la primera parte de este libro. La *pirwa* es parte de un sistema cultural de almacenamiento privado y familiar típicamente andino, para guardar alimentos deshidratados, como el *ch'uñu* y la *tunta* (papas deshidratadas con distintas técnicas), *ch'arki* (carne seca), arroz y otros productos. En esa misma relación, la gente recurrió a traer productos de las provincias para la alimentación de la familia o para preparar refrescos, mates calientes o alguna comida comunal. Los mates calientes eran necesarios para enfrentar el frío de la noche durante las vigiliadas nocturnas. Estos hechos se observaron en el camino a Laja y también al sur, como Senkata y aldeaños. De este modo, la alimentación ha sido parte del proceso de socialización, pero observamos que no fue tan vivo como en octubre de 2003. De todos modos, es un factor en las relaciones sociales de reunificación y de sentires propios.

Por ello, distintas voces reclaman superar la división. Aunque en este caso la palabra ‘división’ no es literal. No había dos polos opuestos, sino un polo mayoritario de Nosotros y un pequeño polo de negación de ese Nosotros. Tampoco ese Nosotros es homogéneo; es una amalgama de actores y de organizaciones sociales de varios tipos. Esto implica una riqueza social, pero también tiene sus límites. Sin duda, es un proceso costoso y de luchas internas que se da, a la vez, como dinámica social o movimiento.

En esto último se parece a octubre de 2003 porque también en ese entonces había pequeños sectores que estaban en contra del paro indefinido de las juntas vecinales o de la FEJUVE, que había decidido rechazar los formularios Maya y Paya (que quieren decir ‘uno’ y ‘dos’ en castellano) de José Luis Paredes, el alcalde en ese momento. Una simple movilización de rechazo a dichos formularios desembocó en el levantamiento de la ciudad de El Alto, que terminó con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En el caso de 2019, menos de un año después termina con la caída de un régimen que parecía que iba quedarse por largo tiempo en el poder. Como se observa, ambos son momentos similares, pero a la vez diferentes.

10.5. 14 de agosto de 2020 y 17 de octubre de 2003

En este contexto, el 14 de agosto de 2020, en la Ceja se lleva adelante un cabildo multitudinario en contra del gobierno transitorio. ¿Qué sentido tiene esa fecha en relación con lo que ocurrió entre 2003 y 2019? Tiene una importancia simbólica. Entre 2020 y 2003 habían pasado 16 años. Un primer dato es que el 17 de octubre el modelo neoliberal fue enfrentado desde la ciudad de El Alto y por todo el país y un 14 de agosto de 2020 se inicia la caída de un gobierno que tenía afinidades con el modelo derribado en 2003. En ambos casos, los hechos se produjeron en la Ceja y la ciudad de El Alto. En otras palabras, en 2020 El Alto vuelve a mostrar su capacidad de veto o impugnación social ante la nueva adversidad, tal como en 2003. Es otro momento de la política de los barrios que, según este trabajo, son como poderes envolventes y difusos, y al mismo tiempo, en abierta y directa disputa con el poder estatal.

Las elecciones nacionales, que en primera instancia debían llevarse a cabo el 3 de mayo de 2020, habían sido postergadas por segunda vez por el gobierno de Áñez con el argumento de la pandemia de Covid-19. Ese 14 de agosto de 2020, en rechazo a esta segunda postergación, se

producen nuevas movilizaciones, incluso en un momento de auge de la pandemia. Intervinieron no solo los barrios alteños, sino también las provincias aymaras, que llegaron multitudinariamente a la Ceja de la ciudad de El Alto. Estos actores actúan conjuntamente y en actitud francamente beligerante.

¿Cómo se produce este hecho o bajo qué mecanismo de acción colectiva y discurso? El 3 de agosto –siguiendo la medida aprobada el 28 de julio en la ciudad de El Alto–, en diferentes lugares del país, y especialmente en la zona andina, se inició un bloqueo de caminos y huelgas de hambre convocados por la COB y el Pacto de Unidad para exigir el cumplimiento de la nueva fecha establecida para las elecciones, esta vez el 6 de septiembre.

El histórico líder aymara Felipe Quispe, el Mallku (+), para estas acciones había sido nombrado en Achacachi “Comandante de bloqueos”. Afirma que las movilizaciones serán fuertes y contundentes. El Mallku vuelve a usar, como en 2001 o en 2003, un lenguaje incisivo y amenazante. “[L]as movilizaciones serán más contundentes y revolucionarias porque el gobierno se hizo la burla. Las elecciones debieron ser el 6 de septiembre, ya se está haciendo la burla con la población. Muy tarde quieren trancar el corral porque el burro ya está muerto dentro. Las cosas eran desde el primer día que estaba llegando el COVID-19” (Ticona, 2020).

Entonces, en ese contexto la gente está dispuesta a ir más allá de sus propias organizaciones matrices. Quispe se había convertido nuevamente, antes de su fallecimiento en enero de 2021, en un termómetro de la lucha aymara. En una entrevista periodística dijo en un tono abiertamente radical: “Una ley mata a otra ley, una hierba liquida a otra, entonces el Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, ¿te das cuenta?” (Mendoza, 2020). Tal frase nos retrotrae a las formas del discurso del Mallku de 2000 y 2003, y está en sintonía con el discurso de la gente movilizada y de sus líderes.

Se puede afirmar que desde esa posición Quispe ayudó a que el gobierno transitorio perdiera más peso y autoridad moral y política. Reclama, como lo hiciera Pablo Zárate Willka en 1899, durante la guerra federal, que nos respetemos unos a otros, entre indios y *q'aras*. “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. *Señores y señoras de raza suprema*, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos” (Richter, 2020) [El resaltado es nuestro].

El contexto de esta frase es el lenguaje cargado de estigmatizaciones para referirse al indio que utilizan los grupos que ejercían el poder criollo en Bolivia. Venía del gobierno transitorio y de la elite cruceña. Son un ejemplo las expresiones de 2020 del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo: “Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamadas ciudadanos; colonos que muerden la mano a esta tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta” (*Página Siete*, 2020a).

En esa misma línea, el exdiputado nacional por Santa Cruz Bernardo Montenegro, a través una carta enviada al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió el uso de la fuerza al gobierno de Áñez: “[Y]a es tiempo de ponerse los pantalones y dejarse de mariconadas” (*Erbol*, 2020a). Por otra parte, dos días después del 14 de agosto, tres analistas invitados por la Agencia de Noticias Fides (ANF), Peña y Lillo, Rafael Puente y Robert Brockmann, sostienen que los bloqueos son criminales. Peña y Lillo afirma: “Tenemos un error gravísimo que se llama bloqueo indiscriminado y salvaje, tenemos que terminar; no tiene que haber nunca más”. Y Robert Brockman se sumó a lo dicho: “Yo creo que este es un punto de inflexión muy importante porque se ha creado la conciencia de que el bloqueo es un instrumento criminal” (*Erbol*, 2020b)²⁰. La amenaza de la indiada para estos sectores sociales o grupos era evidente. Se volvió a repetir el sentido de que el indio en la época republicana y en la colonial era una de las grandes pesadillas para las elites criollas en Bolivia.

En este sentido, los aymaras y alteños de la Ceja, junto con los de K’ara K’ara de Cochabamba, se habían convertido en una amenaza por su predisposición colectiva a una acción beligerante. En la Ceja se expone, o más bien se comunica, sobre una decisión tomada: echar al gobierno transitorio por la vía de la insurrección o por las elecciones urgentes. Los de K’ara K’ara, al sur de Cochabamba, son otro foco de tensión. El gobierno ve ese escenario como una amenaza real y envía aviones de guerra a sobrevolar aquellos lugares. Los del Chapare también se alistan para nuevas movilizaciones, junto con los mineros y otros sectores sociales. En este sentido, agosto será un mes definitorio en la historia de la nueva era de la política de lo social.

El martes 11 de agosto las movilizaciones se inician en Ventilla, al sur de la ciudad de El Alto, mientras que en las provincias se venían

20 Brockmann (2020) publicó un libro referido a estas luchas de los cívicos de Bolivia. Es una narrativa apegada a los movimientos cívicos.

preparando desde el 9 de agosto. Achacachi, Los Andes y El Alto, para nombrar solo tres lugares, son parte de este proceso de articulación entre las formas de organización barrial y de las comunidades de las áreas rurales. Y el viernes 14 de agosto el llamado Cabildo de las 20 provincias y de El Alto decide no levantar el bloqueo de caminos, como habían instruido la COB y el Pacto de Unidad, dos instancias afines al MAS. Desde el Cabildo de la Ceja, las instrucciones de ambas organizaciones son suspender las movilizaciones, por lo que fueron declaradas traidoras a la lucha social. Este es un dato que muestra las verdaderas dimensiones del nuevo momento.

Los movilizados había decidido exigir la renuncia de Jeanine Áñez porque esta abandonó a la población en la lucha contra el Covid-19, por haber clausurado el año escolar y por no tener una política para afrontar la crisis económica. Además, solicitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el arraigo de las autoridades gubernamentales (Gómez, 2020). Este no es un detalle menor. Se busca reiniciar la lucha en base a dos epicentros reales: los microgobiernos barriales de la ciudad de El Alto y las comunidades rurales aymaras de las 20 provincias.

La pregunta es: ¿por qué la gente está nuevamente dispuesta a movilizarse, e incluso de modo radical? Un primer dato es que la gente piensa que existe la grave amenaza de que sean nuevamente invisibles y vuelvan a sufrir discriminación (lo que ya era una realidad) porque los sectores oligárquicos hablaban abiertamente en contra de los aymaraquechuas y del retorno al Estado republicano. La gente no quiere “volver jamás a esos tiempos idos y oscuros”. Una analista social del oriente del país, Talavera (2020), y a pesar suyo, hace notar que estas movilizaciones pueden tener graves consecuencias: “Que los pueblos indígena-originario-campesinos (IOC) estén dispuestos a dar las más duras y destructivas batallas para preservar los avances reales y simbólicos que han logrado durante el gobierno del MAS y que actualmente ven amenazados por el resurgimiento de pulsiones de muy antigua data que laten fuerte en algunos”. En efecto, los aymaras o aymaraquechuas en general no están dispuestos a volver a vivir en la extrema pobreza y a ser nuevamente invisibles. Una condición humana es ser visible ante sí mismo y ante el mundo. Y el gobierno de Áñez no solo era una amenaza en este sentido, sino que ya se vivía en aquellas condiciones por la masacre, por el lenguaje autoritario y violento y por el racismo.

Ante esa realidad, ese 14 de agosto se decide la movilización. Se expone la gran capacidad de asedio al poder y una autoafirmación identitaria para aumentar los profundos miedos de las elites blancas del

país y de la zona sur de la ciudad de La Paz, del norte de la ciudad de Cochabamba y de ciertas zonas de Santa Cruz, como el Urubó²¹, entre otros. Se puede decir que la gente está consciente de que “es posible controlar e inmovilizar” al gobierno transitorio y a sus grupos de acción. En este sentido, agosto se ha convertido en parte de una larga memoria de la lucha social de tiempos republicanos y coloniales.

En nuestro concepto, la Ceja es parte del teatro del Otro poder. Por esto, tal como en octubre de 2003, la Ceja vuelve a ser el lugar para exponer cuerpos y voces desde lo más hondo de la historia mediante el uso de cientos de *wiphalas* y de rostros morenos en actitud de guerra. “Si nos provocan, entraremos en guerra”. Ante esta realidad la pandemia no era óbice, pese a ser peligrosa; se observa una actitud decidida y contundente. Efectivamente, es un asedio al poder.

El 17 de octubre de 2003 renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia del país y luego sale rumbo a Estados Unidos. Como se muestra en este trabajo, la masacre de los días 12 y 13 de octubre en la ciudad de El Alto, en Ovejuyo, al sur de la ciudad de La Paz, y el 21 de septiembre de ese mismo año en Warisata, provincia Omasuyus, son hechos que marcan la crisis neoliberal y de la elite criolla en Bolivia.

Este hecho vino precedido por el intento de cobrar mayores impuestos a los inmuebles de la ciudad de El Alto por el alcalde José Luis Paredes, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esto provocó el inmediato rechazo de las organizaciones sociales vecinales, bajo el argumento de crisis económica y por lo inconsulto de esa medida. El 6 de octubre se declaró paro indefinido en El Alto y el 8 se radicalizaron las medidas, que concluyeron con la masacre de Senkata, Villa Ingenio y Ovejuyo. El gobierno de Sánchez de Lozada había emitido el D.S. No. 27209, que autorizaba el traslado del gas licuado y gasolina por los militares hacia la ciudad de La Paz. El decreto, además, establece que, si hay daños por el traslado de estos elementos, “su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano”. Cumpliendo con este decreto, policías y militares trasladan dichos elementos por la avenida 6 de Marzo, dejando a su paso muchos muertos y heridos hasta la zona Ballivián, al norte de la ciudad, que colinda con La Paz.

21 Comunicación vía WhatsApp del sociólogo y politólogo Juan Pablo Marca el martes 23 de febrero de 2021. Hace notar que las elites cruceñas viven “por la zona de Urubó, en los barrios residenciales de la zona norte, entre el segundo y el cuarto anillo, el barrio España y Urbarí, por el Abasto”.

A este hecho se lo llamó la masacre de octubre. Mueren en este acto 67 personas, jóvenes en su mayoría, y quedan heridas más de 400; más tarde otros fallecen por las heridas.

Este hecho provocó el repudio de la ciudad de El Alto, de las organizaciones sociales del país y de organismos internacionales. Ante esa realidad, la ciudad se levantó y habló, como en 2019, de la “guerra” o de una lucha franca y abierta en contra del régimen y el modelo económico de libre mercado, aunque este modelo haya continuado en su forma social.

Entre los días 15 y 16 se entierra a los muertos en el Cementerio de Villa Ingenio y en otros lugares. Los ataúdes en fila, cubiertos con la bandera boliviana, son imágenes que expresan cómo se muere en la Bolivia neocolonial. La muerte, al igual que la discriminación, no solo son posibilidades; son una realidad inocultable. El Estado se muestra en su sentido real como referente inevitable de la violencia física y de la muerte de sus ciudadanos. Es la historia recurrente en el país. Ante este hecho, las juntas vecinales se convierten en el eje articulador y organizador de la lucha vecinal.

Este episodio termina el 17 de octubre con la renuncia de Sánchez de Lozada, que el Congreso acepta a eso de las 5 de la tarde. Casi al mismo tiempo despegua de Viru Viru, en Santa Cruz, el avión que lo transporta a Estados Unidos, donde vive hasta el día de hoy como asilado político. Hasta el momento Sánchez de Lozada no ha sido condenado, y tampoco su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín.

Con este episodio entra en crisis no solo el modelo económico, sino también el sistema político basado en pactos entre partidos. Los partidos políticos (que representan a las viejas oligarquías bolivianas) caen en descrédito y se produce una desbandada de sus dirigentes. Sin duda, son actores del sistema y de la legalidad del modelo. Así El Alto, sus barrios y algunos movimientos sociales se ubican de pronto en el epicentro de la política boliviana; fue en La Ceja donde se expusieron los desacuerdos con el modelo económico y social.

En ese sentido, el 17 de octubre de 2003 y el 14 de agosto de 2020 se parecen por sus consecuencias. El primero provoca la huida del expresidente, que es considerado “asesino de los bolivianos”, y cuyo gobierno era insostenible, además de que Carlos de Mesa Gisbert sostuvo públicamente su desacuerdo con él afirmando que “no estoy dispuesto a matar”. Aunque la historia tiene paradojas, pues en 2019 también Mesa es un opositor al gobierno de Morales, y en ese contexto se produjo la masacre de Senkata. Aunque expresó su pesar sobre este hecho, no fue contundente como en 2003.

Otro detalle que tiene relación es que en 2003 los mineros cooperativistas, los aymaras de las provincias y los vecinos alteños festejaban ruidosamente la caída de Goni en la Ceja, justo donde el 14 de agosto de 2020 se desarrolló el Cabildo ya mencionado. A la altura del puente Bolivia se observaba otros festejos y las despedidas entre alteños y mineros ese 2003. No era un motivo menor porque, pese a las muertes existentes, había caído el modelo económico-político-cultural neoliberal.

En este sentido, agosto de 2020 y octubre de 2003 se parecen: el 14 de agosto de 2020, tanto en la ciudad de El Alto como en las provincias, se produce el quiebre del gobierno de Jeanine Áñez, catalogado como el “gobierno de la muerte” o gobierno de la vieja oligarquía. Un mes después Áñez retira su candidatura presidencial para las elecciones de 2020: su postulación era insostenible por las críticas, especialmente por las muertes de Senkata y por el manejo inadecuado del Covid-19, entre otros. Incluso hay desacuerdo en los propios grupos del poder blanco-mestizo sobre su candidatura.

En esta situación, después de ser acusados de cometer fraude electoral, el MAS vuelve a ganar las elecciones el 18 de octubre de 2020. El Alto aporta con un alto porcentaje de votos para que el partido de Morales ganara nuevamente, aunque el MAS no reconoce ese hecho, por lo que pierde las elecciones subnacionales en esta ciudad el 7 de marzo de 2021. Eva Copa, expresidenta del Senado por el MAS durante el periodo de Áñez, las gana con una abrumadora mayoría.

Conclusiones

Haremos algunas consideraciones finales a partir de los hechos presentados, específicamente sobre los microgobiernos barriales, sus formas políticas, escenarios de lucha, actores y voces en la ciudad de El Alto. En un primer momento, nos referiremos a 2003, y en un segundo, a 2019.

¿Qué elementos podemos tomar en cuenta para caracterizar a 2003?

La ciudad de El Alto, las provincias del Altiplano y los valles de La Paz, Oruro y otras regiones se convirtieron a partir del año 2000 en los referentes directos de los nuevos levantamientos indígenas-populares que crearon un nuevo ambiente sociopolítico en Bolivia. Son nuevos porque no corresponden exclusivamente a los movimientos sociales de características clasistas, como eran en el pasado los movimientos obreros. Por tanto, su lectura tampoco responde a lecturas clasistas. Responde más bien a referencias, características o clasificaciones étnicas y/o culturales o nacionales definidas por los importantes grados de conflicto étnico, clasista o regional, particularmente entre indígenas o aymaraquechuas y grupos de poder blanco-mestizo y sus elites, aunque con varios clivajes internos y relaciones entre ellos.

Por una parte, el mundo blanco-mestizo define esta relación mediante el sistema de ciudadanía, bajo la ideología de la República y sus instituciones; por otra, el mundo indígena o aymaraquechua se define en sus relaciones políticas y sociales mediante los símbolos del poder, los

sistemas de organización territorial (turnos-parcialidades) y la memoria de los líderes históricos, como Tupak Katari, Bartolina Sisa, Pablo Zárate Willka, los tumpas y otros. Aunque en esas relaciones las condiciones de clase se cruzan bajo la forma de luchas indígenas porque dentro del propio movimiento indígena existen diferencias económicas y regionales y grados de explotación de clase. Esta explotación se da porque hay una importante presencia de obreros asalariados de condición indígena, tanto en las ciudades como en las áreas rurales. Con todo, el eje de articulación de los movimientos sociales se da desde el mundo indígena, tanto urbano como rural; aquí, tal como en la sociedad andino-amazónica (Caranavi, Alto Beni, etcétera), el contexto son los amplios espacios sociales y geográficos donde se establecen sus anclajes, su articulación y sus discursos de impugnación al poder neocolonial.

De modo que se puede hablar de una centralidad indígena o “campesina” porque es esta, desde su condición material y subjetiva, la que define las demandas sociales, la lucha por sus derechos históricos, las acciones colectivas, los sentidos de identidad y la articulación sociopolítica. En ese sentido, el levantamiento alteño está definido o constituido mediante estas relaciones sociales y territoriales, y la lucha indígena o aymara se articula contra el complejo sistema de dominación blanco-mestizo republicano y sus instituciones. También se producen intersticios entre un adentro y un afuera, como frontera y, a la vez, como conexiones con aquel mundo.

Actualmente, estas relaciones se establecen por el sentido común de las cotidianas relaciones sociales de la contradominación, así como de pertenecer a un mismo espacio geográfico urbano, social, cultural o de discurso, para finalmente tejer un profundo sentido de pertenencia histórica. Además, este sentido común hace referencia a las condiciones objetivas y subjetivas de la discriminación racial y social que sufre el mundo indígena-popular. Y a la vez, esto se mueve dentro y como momentos extraordinarios de la sociedad en movimiento. Esto es lo que significan justamente los levantamientos sociales: una extensión amplia, donde toda la comunidad barrial o social se moviliza; las luchas específicas (demandas concretas de algún sector social), y la disputa por el poder con los grupos del poder (el control de la producción de la historia y la narrativa sobre el país). Sin duda, el levantamiento de octubre de 2003 es parte de estas relaciones sociales como respuesta a los grados de violencia estatal-gubernamental y a los discursos racializados (inferiorización y estigmatización), aunque estos vienen de ambos lados.

Entonces, después de hacer una descripción analítica de los hechos ocurridos en octubre de 2003 en base a testimonios personales y a memorias de los actores, concluimos haciendo énfasis en los siguientes puntos que nos parecen importantes. Cada uno debe ser tratado como parte sustancial de todo el trabajo.

El levantamiento de la ciudad de El Alto y las provincias del Altiplano y los valles generó profundos sentidos de interrelación entre la ciudad y el campo. Esto no se había visto desde 1979, cuando la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) lideró el bloqueo de caminos en todo el territorio contra el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch, o cuando hizo lo propio en 1980 contra el golpe de Luis García Meza. En 2003 nuevamente lo indígena (y especialmente lo aymara), junto con lo popular (sectores sociales que no se definen ni son definidos como indígenas), se constituyeron en el factor de unificación entre la ciudad y el campo debido a esos sentidos de pertenencia común a las formas de organización social y territorial.

El Alto, en esas circunstancias, se convirtió en el centro gravitante o geoestratégico y articulador del levantamiento general, porque tejió profundos sentidos de autoorganización social fundados sobre las propias estructuras de la organización barrial. Bajo esas condiciones, cada espacio de la ciudad devino un pequeño centro de poder y movilización social.

Los microgobiernos barriales fueron referentes y centros de la articulación directa del levantamiento general de la ciudad de El Alto. Cada barrio construyó su propia estructura de movilización interna y externa, así como sus propios sistemas de vigilancia a través de la organización de turnos y de sectores. Este mecanismo dio lugar a una especie de nuevo orden de la vida social. O, más bien, es la producción de lo social como poder de modo más propio bajo el marco cultural aymara urbano y rural.

En ese sentido, los microgobiernos barriales fueron los centros de decisión colectiva-individual: en ellos se generó ese conjunto complejo de decisiones construidas a través de los sistemas de acción barrial para contrarrestar las acciones violentas del gobierno o el Estado. Así se organizó cuidadosamente el manejo o el gobierno de los espacios públicos y privados, el uso de las calles y avenidas y los sistemas de articulación interna de los barrios.

También los microgobiernos barriales se convirtieron en actores de la articulación interbarrial o distrital de la ciudad, que generó importantes mecanismos de comunicación, intercambio de información y decisiones colectivamente asumidas. Es así como se cerraron todas las calles y avenidas en función de un levantamiento general de la ciudad.

En 2003 El Alto tenía alrededor de nueve distritos municipales, que son formas más macro de organización territorial de sentido estatal y que ahora pasaban a ser referencia de otra estatalidad.

Desde esta condición se territorializó el levantamiento a todos los rincones de la ciudad (privados y públicos), con la toma física de sus calles, avenidas y plazas. Los microgobiernos barriales son organizaciones territoriales porque corresponden a un espacio geográfico específico. La sumatoria de las 500 juntas vecinales organizadas hizo que cada lugar de la ciudad sea un espacio del poder articulador del levantamiento indígena-popular. Esto fue algo nunca antes visto.

Desde estos pequeños gobiernos se construyeron estrategias de lucha, sistemas de movilización en turnos y vigiliias organizadas por manzanas o cuadras. Como dice Michel de Certeau (1996), las estrategias se construyen desde un lugar específico o desde una posición para, a partir de ahí, tejer relaciones de conflicto con el otro. Este lugar son los microgobiernos barriales. Sus estrategias tienen la misión de cuidar y, en cierto modo, develar las dominaciones neocoloniales o los organismos y sistemas de dominación étnica y de clase.

Además, la vida social de los barrios se organizó bajo este sistema de acción colectiva porque establecieron horarios de venta y compra de productos alimenticios y medicinales. Este es un hecho fundamental que permite alimentar y reproducir las condiciones físicas de sus habitantes para mantener (por el tiempo que sea necesario) el levantamiento de la ciudad. Es decir, se han creado nuevas “normas” de uso comercial y actividad barrial, lo que también es un hecho novedoso.

Esto tuvo como efecto que en dichos lugares se tejieran profundas comunidades emotivas y relaciones interfamiliares que terminaron creando un sentido de pertenencia colectiva a una realidad social. Muchas familias viven dispersas en diferentes barrios y esta condición permitió que, de manera natural, se establecieran dichas relaciones de interfamiliaridad entre uno y otro barrio, con el fin de resguardar la seguridad de todos.

También desde estos lugares se fortalecieron y se pusieron en práctica las identidades culturales urbanas y rurales: en los barrios apareció el manejo de símbolos indígenas, como la *wiphala*, los pututus y el *pixcheo* de hoja de coca. Aunque en ese entonces el uso de la *wiphala* no fue tan profuso como en 2019.

Por otra parte, el hecho de que vecinos alteños procedieran de una misma provincia fortaleció las relaciones de identidad. Además, dio lugar a una familiaridad más extendida hacia adentro y hacia afuera de

cada barrio. Esto también ayudó a crear un gran campo de hermandad indígena y popular.

Dentro de los microgobiernos barriales se hicieron rituales para los muertos. En cada barrio y entre vecinos se establecieron profundas relaciones de hermandad para hacer menos doloroso el entierro de los más de 60 muertos. Este hecho ha marcado profundamente el sentido de la alteñidad y aymararidad.

Y lo fundamental: desde estos lugares se socializaron y legitimaron las marchas multitudinarias para bajar a la ciudad de La Paz y exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Cada asamblea de barrio lo había decidido. Estas asambleas se mostraron como los inmediatos referentes del poder barrial. Y, por tanto, la referencia de otro modo de hacer política.

Respecto a la relación entre la ciudad y el campo, desde estos lugares se propició una compleja articulación entre las comunidades, los ayllus y los mineros de las provincias de La Paz y Oruro, que tuvo un efecto político directo para corroer el poder gubernamental. Este hecho también es algo bastante nuevo.

En este sentido, se puso de manifiesto una extraordinaria capacidad y, al mismo tiempo, una potencialidad social como fuerzas internas de las poblaciones indígenas y los sectores populares. Como es evidente, el factor barrio se convirtió en un hecho sustancial para el devenir político y social de Bolivia. Esta capacidad tiene su base y fundamento en la experiencia de organización y construcción de los barrios y su infraestructura: escuelas, canchas deportivas, avenidas y plazas. Así, cada barrio pasó a ser un espacio-tiempo para gestar y poner en práctica el levantamiento general de la ciudad de El Alto, con efecto directo en otras ciudades del país. Los barrios son lugares del poder indígena y popular en el conflicto entre el Estado y la sociedad donde se devela los grados del conflicto sociopolítico que se extienden al interior de El Alto, La Paz y las provincias del Altiplano y los valles del departamento.

Esta territorialización del levantamiento era en ese entonces parte de un conjunto de acciones colectivas con la finalidad de reconstruir los tejidos y sentidos de organización barrial, ampliamente extendidas en el proceso de las relaciones sociales cotidianas y en la memoria de las luchas indígenas durante la República y la Colonia. El argumento central era la articulación interbarrial mediante los mencionados microgobiernos barriales, que tienen la capacidad de inmovilizar la ciudad en demanda de que no se exportara gas por puertos chilenos a Estados Unidos y México y, más bien, que ese producto se industrializara en el país. El

efecto práctico de la movilización es la caída estrepitosa y dramática del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR y, con él, una coalición compuesta por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Así, se asiste a un proceso de gran deslegitimación de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos 20 años (hasta 2003). El Alto fue el centro de articulación del cuestionamiento a este modelo de libre mercado por sus consiguientes efectos de marginalidad y cruda pobreza.

¿Qué características se puede observar en 2019?

En este año se producen nuevas luchas sociales a las que las denominamos de resistencia. Esto quiere decir que la gente se moviliza para resistir a un gobierno que había surgido la noche del 12 de noviembre de 2019 y que comete otra masacre el 19 de noviembre en Senkata, en el contexto del derrocamiento del binomio Evo-Linera. Aquí se gestó un nuevo sentido o un nuevo espíritu de la nueva nación boliviana. Posiblemente esto sea lo novedoso en estas nuevas luchas. La nación adquiere nuevos sentidos frente a la idea o al hecho de la nación criolla, neocolonial o nación abstracta. La gente se siente parte de esa realidad desde sus propios lugares y sus propios cuerpos, dados como discursos. Ya no es la “nación clandestina”, sino una nación real, una nación plural, por su misma diversidad regional y societal. Se pudo observar y escuchar gritos que decían: “también somos bolivianos y aymaras y nos siguen matando”; esto es, en cierto modo, la continuación de la dinámica de lucha de 2003, con sus diferencias y similitudes.

A pesar de la división que existía en un principio en 2019, se produce una reunificación como acto de sentido propio de lo aymara. Los aymaras son intensos en la política; en muchos momentos han definido la historia del país y de la región norte de Bolivia. Es una particularidad histórica, y por eso se los teme. Es un mundo vivo y en movimiento en todo el país mediante sus sistemas de comercio, su actividad cultural y festiva y, ahora también, intelectual. Ahí se interconecta como el mundo aymaraquechua. Una nueva producción de lo propio y del poder. Y así se produce en la ciudad de El Alto.

Ahora bien, tal vez la novedad en 2019 sea el proceso de adentrarse (hacia adentro de los barrios) para luego salir hacia afuera “como un solo cuerpo”. Ese es un hecho nuevo, con un proceso de socialización e ideologización de la ciudad de una manera más propia, diferente a la de

2003. El hecho central es que nace un nuevo sentimiento de la nación a través de la “wiphalización” de la ciudad y de sus estructuras internas (y, lo fundamental: lo mismo ocurre en los corazones y mentes de mujeres y hombres). Así, la *wiphala* se convierte en multitudes desde el punto de vista fenomenológico. Es la expresión de la nueva subjetividad social: mediante el símbolo se produce la inversión de sentidos; la gente se siente parte de una nueva realidad en abierta y franca disputa con las subjetividades dominantes de lo criollo o lo blanco-mestizo, que siempre han sido la base de la legitimidad del poder y de las acciones sociales y sus sentidos en la ciudad.

En este sentido, después de la confusión y la división que imperaban en la ciudad antes del 10N y hasta el 19 del mismo mes, se produce ese nuevo entrelazamiento al que podemos llamar la producción de nuevos sentidos de un Nosotros, para entonces autoafirmarse nuevamente como sujeto histórico con personalidad histórica. Esto tal vez es importante en sentido de que las percepciones sociales sobre las relaciones sociales y del poder son otras. Ya no hay esa actitud sumisa y obediente a las formas del orden colonial o republicano del discurso y del poder; hay, más bien, una más propia y autónoma. Esto es lo que llamamos el otro poder. Es decir, el poder de Nosotros como algo importante porque también tiene la capacidad de contraponerse al poder del Estado. En términos más teóricos, es el contrapoder porque es alterno a aquel y a la vez está en franca disputa con él. Es un sistema de acción colectiva que se da en las formas de asambleas de barrio y sistemas de rotación de servicios o sistemas de vigilancia social u otras actividades. En ciertos momentos se combinan lo vertical con lo horizontal de las relaciones de poder, es decir, entre la autoridad legítima existente y la participación social dentro de esas relaciones de poder.

Por eso es que surgieron nuevas formas de la política, que llamamos políticas de barrio. Es un sistema de relaciones intermitentes y, a la vez, estructuradas según la forma del barrio y su territorio. En otras palabras, es la posibilidad de disputar la forma de la política del Estado. Parecería ser la referencia de otro Estado en ciernes, dado que funciona como Estado con sus propios mecanismos de control territorial, con sus sistemas de vigilancia y con unas autoridades centralizadas, aunque en movimiento de espacio-tiempo. En 2019 esto se observa de manera más nítida, aunque en 2003 ya se muestran las formas de control por cuadras y los jefes de cuadra. En 2019 se ejerce una autoridad “estatal” porque tiene sus propios mecanismos de cohesión y coerción, junto con una legitimidad social ampliamente aceptada. Es la producción del Otro

poder. Es el poder de Nosotros –a diferencia del poder de Ellos– basado en territorio propio y, a la vez, extendido en todo el país.

Finalmente es importante comparar los microgobiernos barriales de 2003 con los de 2019, por sus similares o distintas dinámicas internas o externas. Esta comparación nos demostró que, efectivamente, las juntas vecinales son verdaderos microgobiernos de barrio; son el centro de acción y lucha de cada zona o lugar para controlar la ciudad y el movimiento del Estado o de agentes “no amigos”. Es aquí donde se produce acciones colectivas, se les otorga sentido, se toman decisiones mediante asambleas y se define el orden interno y externo en la ciudad. Las diferentes juntas vecinales y sus dirigentes, junto con la comunidad vecina, son los actores en el bloqueo de avenidas y calles y en enfrentarse con las fuerzas del Estado. Además, aquí se organizan las rotaciones, las vigilancias de los barrios, el control alimentario y la seguridad interna y externa. Son hechos que suceden en todo espacio-tiempo. En esto consistió el levantamiento de la ciudad en 2003 y la resistencia en 2019; ahí radica su fuerza y su cohesión social.

Es una potencia real de los barrios en la lucha política y social porque es una realidad efectiva y, al mismo tiempo, algo que todavía no se descubre totalmente. Es como visibilidad y, a la vez, como invisibilidad. Se sabe lo que es, pero no se lo sabe del todo. Ciertos hechos son visibles hacia adentro y son invisibles hacia afuera, y a la inversa. Es como que está y a la vez no está. Esto se puede interpretar como estrategia y, a la vez, como una táctica de lucha. Aunque para muchos esto no funciona conscientemente, sino simplemente como algo aprendido en las estrategias de vida social y en las relaciones de contrapoder con los dominantes.

En este sentido, El Alto es una ciudad con importante gravitación política en la región y en Bolivia, aunque al parecer ciertos gobiernos, algunos políticos e intelectuales no la consideran así, no se sabe si voluntaria o inconscientemente. Aunque ese hecho tal vez es lo mejor para que este mundo siga siendo algo que define destinos comunes y la historia del país y de la región.

Así, pues, 2003 y 2019 son dos importantes momentos históricos de la lucha política, social y étnica en Bolivia. Y además, es toda una agenda histórica pendiente en el resto del país y para los propios aymara-quechuas.

Bibliografía

- Albó, Javier
1980 *Khitiptanxa ¿Quiénes somos? Identidad localista, étnica y clasista en los aymaras de boy*. Cuadernos de investigación CIPCA 13. La Paz: CIPCA.
- 2002 *Pueblos indios en la política*. Cuadernos de Investigación CIPCA 55. La Paz: CIPCA y Plural.
- Albó, Xavier; Godofredo Sandoval y Tomas Greaves
1983 *Chukiyawu. La cara aymara de La Paz III. Cabalgando entre dos mundos*. Cuadernos de Investigación CIPCA 24. La Paz: CIPCA.
- Alejo, Guido
2019 “La masacre de Senkata: consideraciones sobre la legitimación estatal de la represión” (Blog de Jichha, 24 de noviembre de 2019). <http://jichha.blogspot.com/2019/11/la-masacre-de-senkata-consideraciones.html>
- Almeida, José y otros
2000 *Sismo étnico en el Ecuador*. Quito: Abya Yala y CEDIME.
- Aliaga A., William Limbert
2020 “Crisis política en Bolivia 2019”, en Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020) (Documento inédito).
- Amas, María Cristina
s/d “Reseña histórica de la FEJUVE”. (Documento inédito).
- Amnistía Internacional
2020 “Para sanar la pandemia de impunidad. 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”. Agosto 20, 2020.

- Index Number: AMR 18/2871/2020. <https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1828712020SPANISH.PDF>
- Anderson, Benedict
1993 *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México. D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Anze O., Rosario
1995 *Construyendo una identidad en las zonas de El Alto Sur*, La Paz: CEBIAE.
- Apaza C. Iván
2020 “La crisis política y la revuelta aymara”, en Carlos Macusaya Cruz y otros, *Wipbala, crisis y memoria. Senkata, no te merecen*. Bolivia: Jichha. pp. 62-66.
- APDHB – Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional - ASOFAMD y Diakonía
2004 *Para que no se olvide. 12, 13 de febrero 2003*. La Paz: APDBH.
- Arguedas, Alcides
1982 *Pueblo enfermo*. La Paz: Juventud.
- Auyero, Javier
2003 “Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea”, en *Iconos*, núm. 15. Quito: FLACSO sede Ecuador, pp. 44-61.
- Auza, Verónica y Claudia Espinoza (eds.)
2004 *Memoria testimonial de la guerra del gas’*. La Paz: Diócesis de El Alto, Comisión de Hermandad, CEPAS-Caritas.
- Barragán, Rossana
1980 *Espacio urbano y dinámica étnica. La Paz en el siglo XIX*. La Paz: Hisbol.
- Barrera, Augusto
2001 *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Quito: OSAL, CIUDAD y Abya Yala.
- Bengoa, José
2000 *La emergencia indígena en América Latina*. México D.F. y Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Bolivia
2019 Decreto Supremo 4078, 14 de noviembre de 2019. La Paz: Gaceta oficial.
- Bourdieu, Pierre
1991 *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Tauro Humanidades.
- Brockmann, Robert
2020 *21 días de resistencia. La caída de Evo Morales*. La Paz: Libros de Bolivia.
- Calderón, Fernando
s/d *Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica*. México: Siglo XXI.

- Calla O., Ricardo
2003 *La caída de Sánchez de Lozada, la cuestión indígena y la historia reciente de Bolivia: algunos apuntes y temas para el debate*. La Paz: Plural.
- Calhoun, Craig
1999 “El problema de la identidad en la acción colectiva”, en Javier Augero y otros, *Caja de Herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 77-114.
- Camacho Azurduy, Carlos
2001 *Las radios populares en la construcción de ciudadanía*. La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Carrillo V., Liliana
2019 “La revolución de las pititas”, en VV. AA., *La revolución de las pititas*. La Paz: Página Siete, pp. 43-50.
- Centro de Profundización de la Democracia - CEPRODE
2004 Memorias del taller “Nosotros los invisibles: juventud y adolescencia de las ciudades de La Paz y El Alto”, Mesa de trabajo por el diálogo intercultural, Huatajata, 17 al 18 de mayo de 2004. La Paz: CEPRODE.
- CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2019 “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019”. comunicado de prensa, 10 de diciembre de 2019. <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.a>
- Claure, Javier
2019 “Golpe de Estado en Bolivia”, en *Bolpress*, 2 de diciembre de 2019. <https://www.bolpress.com/2019/12/02/golpe-de-estado-en->
- Cohen, Jean y otros
1988 *Teoría de los movimientos sociales*. San José: FLACSO-Costa Rica.
- Comité de defensa del gas de Villa Ingenio
2003 “Acta sobre la defensa del gas.” (Documento inédito).
- Condarco, Ramiro
1982 *Zarate, el “Temible” Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 en la república de Bolivia*. La Paz: Renovación Ltda.
- Cruz, Bonifacio
s/d “El rol de mujer rural en las luchas sociales”. (Documento inédito).
- Cuiza, Paulo
2020 “Áñez pide evitar el retorno de los ‘salvajes’ al poder y expresa dudas sobre el caso racismo en Sucre”, en *La Razón*, 03 de enero de 2020.
- Chatterjee, Partha
2007 *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Choque, P., Segundino Ramiro

2020 “Memoria de los hechos de octubre y noviembre”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1)*. (Documento inédito).

Choquehuanca Q., Edgar Santos

2020 “Noviembre del año 2019”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020)*. (Documento inédito).

Inka W. Chukiwanka

2004 *Wiphala guerrera. Contra símbolos coloniales 1492-1892*. La Paz: Fondo Editorial de los Diputados.

De Blas Guerrero, Andrés

1995 *Nacionalismos y naciones en Europa*. Madrid: Alianza editorial.

De Certeau, Michel

1996 *La Invención de lo cotidiano. I Arte de hacer*. México: Universidad Iberoamericana A.C.

Del Valle de Siles, Maria E.

1990 *La historia de la rebelión de Tupac Katari, 1781-1782*. La Paz: Don Bosco.

Días-Barriga, Miguel

2001 “Más allá de lo doméstico y lo público: la participación de las colonas en los movimientos urbanos en Ciudad de México”, en Arturo Escobar y otros, *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus e Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), pp. 297-326.

Defensoría del Pueblo

2020 *Informe Defensorial: Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia*. La Paz: Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Durand, Gilbert

2000 *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Escobar, Arturo

2001 “Introducción: Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos”, en Arturo Escobar y otros, *Política Cultural y Cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus e ICANH, pp. 17-48.

Espinoza, Mario

1982 *Dinámica del Grupo Juvenil*. Buenos Aires: Hermanitas.

Fernández R., Jhonny

1993 *En las manos de la ciudad de El Alto*. La Paz: Centro de reporteros populares y CEBIAE.

Foucault, Michel

2011 *Genealogía del racismo*. Buenos Aires: Altamira.

Floria, Carlos

1998 *Pasiones nacionalistas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fiscalía General del Estado

2020 “Fiscalía imputa por terrorismo a presuntos autores de la destrucción y caída del muro de YPFB en Senkata”. 20 de noviembre de 2019. <https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/2620-fiscalia-imputa-por-terrorismo-a-presuntos-autores-de-la-destruccion-y-caida-del-muro-de-ypfb-en-senkata>.

García Orellana, Alberto, Fernando García Yapur y Luz Quitón Herbas

2003 *La “guerra del agua”. Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia*. La Paz: PIEB.

García Linera, Álvaro

2001 *Indios y q'aras: la reinención de las fronteras internas*. Buenos Aires: Clacso. <http://www.clacso.edu.ar>

2002 “La formación de la identidad nacional en el movimiento indígena-campesino aymara”, en *Fe y pueblo*, núm. 2. La Paz: ISEAT, pp. 31-55.

2003 “Crisis estatal y muchedumbre en acción”, en Omar Guzmán B. (coord.), *Batallas del 12 y 13 de febrero. Seminario realizado el 10 y 11 de abril de 2003*. La Paz: IDIS-UMSA, pp. 43-47.

2004 “La crisis de estado y las sublevaciones indígena-plebeyas”, en Luis Tapia y otros, *Memorias de octubre*. La Paz: Muela del diablo, pp. 29-86.

Galindo, María

2020 “Sedición en la Universidad Católica”. Programa de radio. <http://radiodeseo.com/sedicion-en-la-universidad-catolica/>

GIEI Bolivia

2021 “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. <https://embassyofbolivia.nl/informe-giei-bolivia-sobre-los-hechos-de-violencia-y-vulneracion-de-los-derechos-humanos-ocurridos-entre-1-de-septiembre-y-31-de-diciembre-de-2019/>

Gellner, Enest

2001 *Naciones y nacionalismo*. Madrid: Alianza editorial.

Gómez, Luis A.

2004 *El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia*. Santiago de Chile: NoPatria.

Gómez, Miguel

2020 “Cabildo campesino rechaza levantar bloqueos y pide la renuncia de Ñez”, en *La Razón*, 14 de agosto de 2020. <https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/14/cabildo-campesino-rechaza-levantar-bloqueos-y-pide-la-renuncia-de-anez/>

Gregorio Baierle, Sergio

- 2001 “La explosión de la experiencia: el surgimiento de un nuevo principio ético/político en los movimientos populares en Porto Alegre, Brasil”, en Arturo Escobar y otros, *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus e ICANH.

Guaygua, Germán y otros

- 2000 *Ser joven en El Alto. Rupturas y continuidades en la tradición cultural*. La Paz: PIEB.

Guerrero, Andrés

- 1998 “Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria”, en *Iconos*. Revista de Ciencias Sociales núm.4. Quito: FLACSO, pp. 112-122.

Huanto, T., Mónica

- 2020 “Memoria de noviembre de 2019. La caída de Evo Morales”, en Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).

Huanto, Modesto

- 2020 “Renuncia de Juan Evo Morales Ayma”, en Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).

Humérez, Jesús

- 2020 “Wiphala y discursos del poder y micropoder: El Alto y la masacre de Senkata”, en Pablo Mamani Ramírez (coord.), *Wiphalas, luchas y la nueva nación*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES) y Círculo de Estudios Estratégicos de El Alto (CEEA), pp. 126-147.

Hylton, Forrest

- 2004 “El federalismo insurgente: una aproximación a Juan Lero, los comunarios y la guerra federal”, en *Tinkazos* núm. 16, pp. 99-117.

INE - Instituto Nacional de Estadística

- 2001a *Bolivia: Censo de Población y Vivienda, autoidentificación con pueblos originarios o indígenas de la población de 15 años o más de edad*. La Paz: INE. <http://www.ine.bo/beyond/esn/Table>.

- 2001b *Bolivia: Mapa de pobreza de Bolivia*. La Paz: INE.

- 2002 *Bolivia: Características de la población*. La Paz: INE.

- 2003 *Bolivia: Características Sociodemográficas de la Población Indígena*. La Paz: INE.

- 2020 “El Alto en cifras”. Boletín informativo del INE. Marzo. La Paz: INE.

Irurozqui, Marta

- 1994 *La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Bartolomé de Las Casas.

- 1995 "La amenaza chola. La participación popular en las elecciones bolivianas, 1900-1930", en *Revista Andina*, núm. 2, año 13, diciembre, pp. 357-388.
- ITEI – Instituto de Terapia e Investigación
- 2019 "Informe tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre 2019 en La Paz-Bolivia. Casos atendidos por el ITEI". <https://www.itei.org.bo/post/tortura-y-malos-tratos-en-los-acontecimientos-de-noviembre-2019-en-la-paz-bolivia>
- Jenkins, J. Craig
- 1994 "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales", en *Zona abierta* (Madrid), núm. 69, pp. 5-47.
- Juárez, Ivone
- 2019 "La wiphala y la Biblia, los símbolos del nuevo tiempo en Bolivia", en VV. AA., *La revolución de las pititas*. La Paz: Página Siete, pp. 229-234.
- Kastaya, Kawi
- 2020 "Crónica sobre la 'revolución wiphala'", en Pablo Mamani Ramírez (coord.), *Wiphalas, luchas y la nueva nación*. La Paz: FES y CEEA, pp. 98-110.
- Koonings, Kees y Patricio Silva
- 1999 "Construcciones étnicas en América Latina", en Kees Koonings y Patricio Silva, *Construcciones étnicas y dinámicas socioculturales en América Latina*. Quito: Abya Yala, pp. 5-22.
- Laguna D., Fernanda
- 2018 "Los jóvenes del 21F. La racialización de la socialización política en la élite tradicional paceña", en Rafael Loayza. *Las caras y taras del racismo. Segregación y discriminación en Bolivia*. La Paz: Plural-CIBESS. pp. 167-191.
- Layme, Beatriz
- 2019 "La sorpresiva e inesperada sucesión de Jeanine Áñez", en VV. AA., *La revolución de las pititas*. La Paz: Página Siete, pp. 173-180.
- Lenkersdorf, Carlos
- 2005 *Filosofar en clave tojolabal*. México D.F.: Porrúa.
- Loayza, Rafael
- 2018 "Los rostros, los lastres y la razón del racismo habitual. Tensiones raciales en la interacción pública rutinaria en La Paz", en Rafael Loayza Bueno, *Las caras y taras del racismo. Segregación y discriminación en Bolivia*. La Paz: Plural, 25-105.
- Mamani Ramírez, Pablo
- 2001 "El Alto en pie de guerra", en Suplemento "Ventana", *La Razón*, domingo 11 de marzo.
- 2004a "Territorio y estructuras de acción colectiva. Microgobiernos barriales en El Alto", en *Barataria* (La Paz) núm. 1, año 1, pp. 29-35.

- 2004b *El Rugir de las Multitudes: la fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/Quillasuyu*. La Paz: Aruwiyiri y Yachaywasi.
- 2005a *Geopolíticas indígenas*. El Alto: CADES.
- 2005b *Microgobiernos barriales. Levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre de 2003)*. El Alto: IDIS, UMSA y Centro Andino de Estudios Estratégicos (CADES).
- 2005c “El Poder de las Multitudes Indígenas. Fuerzas internas y violencia estatal en Jach’a Omasuyus, Bolivia (2000-2001)”. Tesis de Maestría por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador (inédita).
- 2012 “Wiphalas y fusiles. Poder comunal y el levantamiento aymara de Achacachi-Omasuyus (2000-2001)”, en Revista *Willka-Sol de Paz Pachakuti*. La Paz: FLACSO.
- 2013 “‘Todos somos presidentes’. El Otro poder (Bolivia: luchas sociales y el estado)”. Tesis de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. (Documento inédito).
- 2017 *El Estado neocolonial Una mirada al proceso de la lucha por el poder y sus contradicciones en Bolivia*. La Paz: Rincón ediciones.
- 2020a “La wiphala que nacionalizó la nación”, en Pablo Mamani Ramírez (coord.), *Wiphalas, luchas y la nueva nación*. La Paz: FES y CEEA, pp. 73-97.
- 2020b “Nuevas subjetividades en la victoria del MAS”, en *La Razón*, miércoles 28 de octubre de 2020, p. A15.
- 2020c Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1). (Documento inédito).
- 2021 “Subjetividades sociales. Ciudad de El Alto y elecciones 2019-2020”, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Democracia en vilo*. Elecciones, pandemia y gobernanza política en Bolivia. La Paz: PNUD, pp. 239-273.
- 2022 “Nuevas subjetividades sociales en el conflicto poselectoral en El Alto, 2019”, en *Yati Amaut’a*, No. 8 (El Alto), pp. 7-27.
- Macusaya Cruz, Carlos; Carlos R. Ríos Aruquipa, Eber Quisbert Quispe, Guido Alejo Mamani, Gustavo A. Calle Laime, Iván Apaza Calle, Jhocelin Caspa Zarsuri, Limber Franco Silva, Magali Vianca Copa, Reyna M. Suñagua Copa, Ronald Quisberth Carrillo, Sharoll Fernández Siñani, Wilmer Machaca Leandro
- 2020 *Wiphala, crisis y memoria. Senkata, no te merecen*. Bolivia: Jichha.
- Mamani H., Luis
- 2020 “Derrocamiento del expresidente Evo Morales”, en Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).

- Mamani C., Ascencio
2020 “Renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias* (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Marca S. Paola Miriam
2020 “Noviembre de 2019. Los hechos ocurridos”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias* (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Márquez C., Patty
2020 “Memoria de los acontecimientos de 20 de octubre”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias* (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Merlo Condori, Hilarión
2020 “Memoria de las elecciones generales del año 2019”, en Pablo Mamani Ramírez, *Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias* (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Massal, Julie y otros
2000 *Los movimientos sociales en las democracias andinas*. Quito: FLACSO-Ecuador e Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).
- McAdam, Doug; John McCarty, y Mayer Zald
1999 “Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales”, en Doug McAdam, John McCarty y Mayer Zald (coord.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo, pp. 21-46.
- Melucci, Alberto
1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta* (Madrid), núm. 69.
- Mendoza, Sergio
2020 “El Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, somos otra nación”, en *Página Siete*, 14 de agosto de 2020. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/14/el-kollasuyo-tiene-que-liquidar-bolivia-somos-otra-nacion-264492.html>
- Morales Ayma, Evo
2020 *Volveremos y seremos millones. El golpe de Estado, el exilio y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse*. Buenos Aires: Paidós.
- Moreno, Gabriel René
1989 [1901] “Nicomedes Antelo”, en Gabriel Rene-Moreno, *Bolivia y Argentina. Notas biográficas y bibliográficas*. La Paz: Fondo Editorial de Cultura del Banco Central de Bolivia, pp. 97-149.

Moreno, Octavio y Carlos Figueroa

2018 “Golpismo y neogolpismo en América Latina. Violencia y conflicto político en el siglo veintiuno”, en *Iberoamérica social*, número especial, vol. 3, pp. 98-122.

Nina G., Franz Fernando

2020 “¿Qué pasó en la ciudad en octubre y noviembre de 2019?, En Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).

OACNUR – Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

2019 “La situación de los Derechos Humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf>

OEA - Organización de Estados Americanos

2019 “Informe Bolivia SP”. <https://redunitas.org/wp-content/uploads/2019/11/OEA.pdf>

Olmedo, Oscar

2006 *Paranoia aymara*. La Paz: Plural.

Paredes, Javier

2003 “Contexto económico del conflicto”, en Omar Guzmán B. (coord.), *Batallas del 12 y 13 de febrero*. Seminario realizado el 10 y 11 de abril de 2003. La Paz: IDIS-UMSA, pp. 4-5.

Patzi, Félix

2003 “Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía: Triunfos y vicisitudes del movimiento indígena desde 2000 a 2003”, en Forrest Hylton y otros, *Ya es otro tiempo el presente*. La Paz: Muela del diablo.

Pacheco Q., Maribel

2020 “Levantamiento por la discriminación que se vivió y golpe de Estado. Sucesos de insurgencia del pueblo”, en Pablo Mamani Ramírez. Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).

Platt, Tristan

1988 “Pensamiento político aymara”, en Xavier Albo (comp.), *Raíces de América: el mundo aymara*. Madrid: Unesco, Alianza editorial y Sociedad Quinto centenario (1492-1992), pp. 365-450.

Prada, Raúl

2004 *Largo octubre*. La Paz: Plural.

Pujadas, J. José

1993 *Etnicidad. La identidad cultural de los pueblos*. Madrid: EUDEMA.

- Quisbert Quispe, Máximo
2003 *FEJUVE El Alto 1990-1998. Dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión*. La Paz: Aruwiyiri.
- Quispe Huanca, Felipe
1990 *Tupak Katari vive y vuelve carajo*. La Paz: Ofensiva rojas.
- Quispe, Marco
2004 *De Ch'usa marka a Jach'a marka*. El Alto: Wayna Tambo y Plural.
- Quispe Q., Juan Atilio
2020 “Los hechos vividos en San Julián, Santa Cruz”, en Pablo Mamani Ramírez. Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Ramos, Ma. Luisa
1997 “La dimensión política de los movimientos sociales: algunos problemas conceptuales”, en *Revista de Investigaciones Sociológicas* núm. 79. España: CIS, Pp. 247-263.
- Rivera Cusicanqui, Silvia
1986 *“Oprimidos pero no vencidos”. Luchas del campesinado aymara y qheswa 1900-1980*. Segunda edición. La Paz: Hisbol.
- Richter Ramírez, Jorge
2020 “El ‘Mallku’, el factor inesperado”. La Razón, 12 de agosto de 2020. <https://www.la-razon.com/voces/2020/08/12/el-mallku-el-factor-inesperado/>
- Robins, Nicholas
1998 *El Mesianismo y la semiótica indígena en El Alto Perú. La gran rebelión de 1780-1781*, La Paz: Hisbol.
- Romero, Daniela
2019 “En 10 días hubo al menos 8 actos terroristas en el país”. *Página Siete*, 21 de noviembre de 2019. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/21/en-10-dias-hubo-al-menos-actos-terroristas-en-el-pais-238042.html> (1/11/2020).
- Renan, Ernest
2006 *¿Qué es una nación?* Madrid: Sequitur.
- Renjifo Choque, Elizabeth
2020 “Octubre y noviembre de 2019”, en Pablo Mamani Ramírez, Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Reinaga, Fausto
1969 *La revolución india*. La Paz: PIB.
- Suñagua, Reyna (Quya Reyna)
2019 “Álvaro, el niño que cautivó con el ‘¡Jallalla las mujeres de pollera!’”. Blog Rutinas del camaleón. <https://rutinasdecamaleon.com>.

- blogspot.com/2019/12/alvaro-el-nino-que-cautivo-con-el.html?spref=fb&m=1
- 2020 “Senkata, no te merecen”, en *Wiphala, crisis y memoria. Senkata, no te merecen*. Bolivia: Jiccha, pp. 82-84.
- Sandoval, Godofredo y Fernanda Sostres
1989 *La ciudad prometida. Pobladores y organizaciones sociales de El Alto*, La Paz: ILDIS.
- Sharp, Gene
2011 *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación*. Boston: Instituto Albert Einstein.
- Slater, David
2001 “Repensar la espacialidad de los movimientos sociales: fronteras, cultura y política en la era global”, en Arturo Escobar y otros, *Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus e ICANH, pp. 411-435.
- Stavenhagen, Rodolfo
2001 “Conflictos étnicos y estado nacional: conclusiones de un análisis comparativo”, en *Estudios sociológicos del Colegio de México*, vol. XIX, núm. 55. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 3-26.
- Steinberg, Marc W.
1999 “El rugir de la multitud: repertorios discursivos y repertorios de acción colectiva de los hiladores de seda de Spitalfields, en el Londres del siglo XIX”, en Javier Auyero, *Caja de herramientas: lugar de la cultura en la sociología norteamericana*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 199-236.
- Suárez, Hugo José
2003 *Una semana fundamental. 10-18 octubre 2003*. La Paz: Muela del Diablo.
- Talavera Simoni, Rosa
2020 “Detrás de los bloqueos, una simple verdad: no perderán lo poco que ganaron”, en Cabildeo Digital, sábado, 22 de agosto de 2020. http://www.cabildeodigital.com/2020/08/detras-de-los-bloqueos-una-simple.html?fbclid=IwAR32w_KftnF66sO_6CIQNGagJuaHFqRFGkpYG1tGyA3XsYHk5cgGRuTpeKs
- Tarqui T., Nicolás
2020 “Noviembre de 2019”, en Pablo Mamani Ramírez. Conflicto político en Bolivia. Memorias de lucha de la ciudad de El Alto y algunas provincias (Informe del Taller de Investigación 1, 2020). (Documento inédito).
- Tarrow, Sydney
1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.

- Ticona, Esteban
2020 “El racismo colonial del Comité Cívico de Santa Cruz”, en *La Razón* del 22 de agosto de 2020. <https://www.la-razon.com/voces/2020/08/22/el-racismo-colonial-del-comite-civico-de-santa-cruz/>
- Tilly, Charles y otros
1997 *El siglo rebelde, 1830-1930*. Colección Ciencias Sociales núm. 33. Zaragoza, España: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
2000 “Acción Colectiva”, en *Apuntes de Investigación* (Buenos Aires), año IV, núm. 6, pp. 9-32.
- Torrez, Rubin
2001 *Los jóvenes en democracia. La cultura política de la juventud*. La Paz: PIEB.
- Troncoso, Antonio
2000 “El Partido del Mallku”, en *Pulso*, núm. 71, pág. 10.
- TSE - Tribunal Supremo Electoral
2020 “Publicación de resultados. Elecciones generales 2020”. https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/Separata_Resultados_EG_2020.pdf
- Turner, Víctor
1999 *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*. Madrid: Siglo XXI.
- Veliz, M. Juan Carlos
2019 “Rehenes del miedo y la furia en Rio Abajo”, en *La revolución de las Pititas* La Paz: Página Siete, pp. 157-164.
- Warren, Kay
2001 “Los movimientos indígenas como reto al paradigma del movimiento social unificado en Guatemala”, en Arturo Escobar y otros, *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus e ICANH, pp. 201-234.
- Wallerstein, Inmanuel
2006 “Introducción. Aimé Césaire: Colonialismo, comunismo y negritud”, en Aimé Césaire. *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Akal. pp.7-12.

Documentales

Pacto de Unidad. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=r7z2JEfdzHQ&feature=youtu.be> (23 de octubre de 2020). El documental fue estrenado 20 de octubre de 2020.

Documental Senkata 2019. Conferencia de prensa del ministro de Defensa <https://www.facebook.com/watch/live/?v=2617198148364613&ref=wat>

ch_permalink (23/10/2020). Se recuperó la frase del informe de Amnistía Internacional (2020).

Anred. Org Internacional. “Ahora sí, guerra civil”. 12/11/2019. El Alto resiste el golpe de Estado en Bolivia. <https://www.anred.org/2019/11/11/ahora-si-guerracivil-el-alto-resiste-el-golpe-de-estado-en-bolivia/> 12/11/2019) Ver: “Ahora sí, guerra civil”: Pueblo sale en masa desde El Alto hasta La Paz en apoyo a Evo. <https://www.youtube.com/watch?v=2vVndz-TpzY> (12/11/2019).

Periódicos

Eventos de 2003

Última Hora, 30 de mayo de 2000.

Última Hora, 31 de mayo de 2000.

Última Hora, 6 de enero de 2001.

El Diario, 13 de febrero de 2003.

El Diario, 14 de octubre de 2003.

El Alteño, 1 de septiembre de 2003.

El Alteño, 3 de octubre de 2003.

El Alteño, 9 de octubre de 2003.

El Alteño, 12 de octubre de 2003.

La Razón, 13 de octubre de 2003.

La Razón, 17 de septiembre de 2003.

La Razón, 7 de octubre de 2003.

La Razón, “Dossier”, 30 de octubre de 2003

La Prensa, 16 de septiembre de 2003.

La Prensa, 8 de septiembre de 2003.

La Prensa, “Octubre en la Memoria”, 17 de octubre de 2004.

La Prensa, Suplemento especial, 7 de diciembre de 2003.

La Prensa, 12 de octubre de 2003.

Eventos de 2019

Correo del Sur Digital

2019 “Gobierno denuncia ‘terrorismo vandálico’ en El Alto. Ministro López lamenta los episodios de hoy Comando en Jefe de las FF.AA.

del Estado Mayor General. 2019. 19 de noviembre de 2019, pp. 23-28.

Correo del Sur

2019 “Informe operativo, 23 de noviembre de 2019” (OGO. Abreviado No. 1/19).

Página Siete

2020a “Cívico que llamó ‘bestias’ a bloqueadores dice que no hay otra forma para referirse a ellos”. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se ratificó sobre sus declaraciones y dijo que los actos que cometen los afines al MAS los hace ‘personas indignas’. Miércoles, 12 de agosto de 2020. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/12/civico-que-llamo-bestias-bloqueadores-dice-que-no-hay-otra-forma-para-referirse-ellos-264280.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook.

2020b “Gobierno denuncia que pobladores de Chapare llegaron «para contagiar» con Covid a alteños y paceños”. lunes, 27 de julio de 2020, 23:20. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/27/gobierno-denuncia-que-pobladores-de-chapare-llegaron-para-contagiar-con-covid-altenos-pacenos-262645.html>

2019a “Expertos: Explosión en Senkata puede provocar una catástrofe”. Jueves, 21 de noviembre de 2019. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/21/expertos-explosion-en-senkata-puede-provocar-una-catastrofe-238033.html>

2019b “Ministro de Defensa: El Ejército no disparó ningún proyectil en Senkata”. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/19/ministro-dedefensa-el-ejercito-no-disparo-ningun-proyectil-en-senkata-237899.html>

Opinión

2020 “Doria Medina anuncia “ya no más empresas públicas”. En: <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/samuel-empresas-publicas-daran-pasoemprendedores/20200211233310750806.html?fbclid=IwR3HaRfCJEbYWvOsFy1VEundDY43Nf7MBjq2Vy3V23FhboX1brQEtkXyWQ> (16/02/2020)

La Razón

2019 “Imágenes muestran a las FF.AA. con armas letales en Senkata y Sacaba”. http://www.larazon.com/nacional/Imagenes-muestran-FFAASenkataSacaba_0_3268473141.html.

2020a “La Fiscalía denuncia que las FFAA se resisten a entregar información sobre los operativos poselectorales”, 30 de septiembre de 2020 / 17:02. <https://www.la-razon.com/nacional/2020/09/30/fiscalia-denuncia-que-las-ffaa-se-resisten-a-entregar-informacion-sobre-operativos-postelectorales/>

2020b “Comisión legislativa: Las muertes en Sacaba y Senkata fueron por armas oficiales”. La Paz / 21 de octubre de 2020 / 09:23. <https://>

- www.la.razon.com/nacional/2020/10/21/comision-muertes-en-sacaba-y-senkata-fueron-por-armas-oficiales/
- Bolpress
2019 “La primera mujer dictadora de las Américas”. La Paz, 17 de noviembre de 2019. <https://www.bolpress.com/2019/11/17/la-primera-mujer-dictadora-de-las-americas/>
- Erbol
2020a “En carta abierta piden a Murillo ponerse los ‘pantalones y dejarse mariconadas’. Conservación del orden público. Ministro Murillo y exdiputado Montenegro”. Domingo, 9 de agosto del 2020. <http://www.erbol.com.bo/nacional/en-carta-abierta-piden-murillo-ponerse-los-%E2%80%9Cpantalones-y-dejarse-mariconadas%E2%80%9D>
- 2020b “Plantean acabar con los bloqueos por ser un instrumento criminal de lucha A raíz del último conflicto social”. Domingo, 16 de agosto del 2020. <https://erbol.com.bo/nacional/plantean-acabar-con-los-bloqueos-por-ser-un-instrumento-criminal-de-lucha>

Entrevistas

- Entrevista a un vecino del sector de Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004.
- Entrevista a un dirigente del sector de Ventila, 9 de julio de 2004.
- Testimonio de José Montecinos, Seminario-Memoria a Un año de la Masacre, 24 de agosto de 2004.
- Entrevista a un dirigente de Villa Ingenio, 22 de agosto de 2004.
- Entrevista a un vecino del sector Norte, 14 de agosto de 2004.
- Entrevista a un vecino del sector de Río Seco, 17 de agosto de 2004.
- Entrevista a un dirigente de familiares de los fallecidos, 17 de agosto de 2004.
- Entrevista a un vecino del sector Norte, 22 de agosto de 2004.
- Entrevista a un vecino del sector Norte, 14 de agosto de 2004.
- Entrevista a un dirigente de la zona Modelo Ventilla, 9 de julio 2004.
- Entrevista a un vecino de Vila Adela, 30 de julio de 2004.
- Entrevista a un vecino de sector Senkata, 24 de agosto de 2004.
- Entrevista al Presidente de Santiago II, 24 de agosto de 2004.
- Entrevista a uno de los Presidentes de Junta de Vecinos del sector Sur, 19 de agosto de 2004.
- Entrevista a un vecino de sector de Río Seco, 27 de junio de 2004.

Entrevista a un dirigente del sector de Ventilla, 9 de julio de 2004.

Entrevista a un dirigente del sector Sur de la Avenida 6 de Marzo, 19 de agosto de 2004.

Entrevista a un vecino de Cruce Villa Adela, 12 de julio de 2004.

Entrevista a una vecina de Ventilla, 9 de julio de 2004.

Entrevista a un vecino del sector de Río Seco, 10 de agosto de 2004.

Entrevista a José Ramos, miembro de FEJUVE, 18 de junio de 2004.

Entrevista a Braulio Rocha, gremialista, 18 de agosto de 2004.

Entrevista a Valentín Valencia, 19 de julio 2004.

Entrevista a un dirigente de la COR, 6 de agosto de 2004.

Entrevista a Juan Meléndrez, Ejecutivo de la COR, 18 de agosto de 2004.

Entrevista a Roberto de la Cruz, COR, 30 de agosto de 2004.

Entrevista a un comerciante de 16 de julio, 3 de agosto de 2004.

Entrevista a un dirigente del sector de Senkata, 22 de agosto de 2004.

Conversación personal con el Presidente de del Comité de Defensa del Gas de Villa Ingenio, agosto de 2004.

Otros documentos inéditos

Documento de las Juntas vecinales. 2003.

Cronología y hechos ocurridos en la zona de Villa Santiago II.

Pronunciamiento del clero de la Diócesis de El Alto. 2003

Resolución del ampliado de Emergencia de Huelga de Hambre en radio San Gabriel, Comité Ejecutivo de CSUTCB/019/2003.

Mensaje al Honorable Congreso Nacional, 17 de octubre de 2003.



Foto: Abad Miranda/Captur-Arte.

En octubre de 2003, durante la “guerra del gas”, la ciudad de El Alto tuvo centralidad y protagonismo en la movilización social que derivó en la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada. Esa acción colectiva se produjo a partir de una amplia y compleja densidad organizativa territorial en cada distrito y zona. Es lo que el autor de este libro, Pablo Mamani, denomina “microgobiernos barriales”, articulados desde una identidad aymara y popular.

Esa acción colectiva tuvo otro momento decisivo en la coyuntura crítica del año 2019. ¿Cómo se produjo el renacimiento de los microgobiernos barriales en El Alto en el contexto del gobierno transitorio de Ñez y la masacre de Senkata? ¿Con qué características? ¿Qué se mantiene y qué ha cambiado respecto a la crisis de 2003? En esa temporalidad comparativa radica la novedad y la relevancia de este libro.

